

**LOS HECHOS
POLITICOS
DEL SIGLO XX**

LOS HECHOS POLITICOS DEL SIGLO XX



HYSPAMERICA

Ficha editorial

Editor Ejecutivo:

Raúl E. Paggi

Consejo de Administración:

Stella M. L. Paggi

Ing.: Alejandro Lorenzo

Dr.: Alcides A. Lorenzo

Director:

Juan Manuel Prado

Dirección editorial:

Virgilio Ortega

y Carlos Gómez

Director de redacción:

Guillermo L. Díaz-Plaja

Realización:

Técnicos Editoriales

Asociados S.A.

Hemerografía:

Fernando Lara

Hemeroteca:

*Hemeroteca Municipal
de Madrid*

Compaginación:

Ferran Cartes

Diseño cubierta:

TIEMPO/BBDO

Colaboradores

de este volumen:

Luis Ignacio López

Miguel Angel Bastenier

Alberto Szpunberg

Alvaro Castillo

Juan Luis Cebrián

Sebastián Serrano

Carlos Enrique Bayo Falcón

Carlos López Matteo

Carlos Tarsitano

Publicado por:

*Hyspamérica Ediciones, S. A.
Madrid - ESPAÑA*

*Hyspamérica Ediciones
Argentina, S. A.
Corrientes 1437, 4.º piso
(1047) Buenos Aires - ARGENTINA
Tels.: 46-4385/4419/4484*

© Ediciones Orbis, S. A. 1982
ISBN (fascículos) 84-7530-009-X
ISBN (obra completa) 84-7530-008-1
ISBN (tomo 10) 84-7530-019-7
D. L. B. 6771-1982

*Fotocomposición, fotomecánica,
impresión y encuadernación:
PRINTER industria gráfica, S. A.
Provenza, 388. Barcelona-25.*



Indice

Artículos

Páginas

La caída de Allende. Golpe militar en Chile	1
Luis Ignacio López	
La guerra del Yom Kippur. Cuarto conflicto árabe-israelí	13
Miguel Angel Bastenier	
La crisis del petróleo. La economía occidental se tambalea	25
Alberto Szpunberg	
La revolución de los claveles. El fin de la dictadura salazarista	37
Alvaro Castillo	
El escándalo Watergate. La caída de un presidente	49
Miguel Angel Bastenier	
El atentado contra Carrero Blanco. La agonía del franquismo	61
Juan Luis Cebrián	
Democracia en España. De Franco al socialismo	73
Sebastián Serrano	
Irán, república islámica. Del Šah al ayatollah	85
Carlos Enrique Bayo Falcón	
La invasión de Afganistán. Otra vez la guerra fría	97
Carlos López Matteo	
Golpe militar en Polonia. Walesa resquebraja el sistema	109
Carlos Enrique Bayo Falcón	
La Guerra de las Malvinas. Norte-Sur frente a frente	121
Luis Ignacio López	
Reagan. Un «halcón» en la Casa Blanca	133
Carlos Tarsitano	

La caída de Allende

Golpe militar en Chile

Luis Ignacio López
periodista

El golpe de Estado que derrocó al gobierno de la Unidad Popular puso trágico fin a las esperanzas de muchos pueblos del continente sudamericano que veían a la «vía chilena al socialismo» como un modelo a imitar en el

intento de alcanzar una mayor justicia social por medios pacíficos. Esta es la última fotografía de Allende, que aparece armado en el balcón de La Moneda dispuesto a morir en la defensa del cargo que el pueblo le confió.

El 11 de septiembre de 1973, tres años y siete días después del triunfo electoral de la Unidad Popular, el presidente chileno Salvador Allende, sitiado en el Palacio de la Moneda por los carros de combate del Ejército sublevado, recibía un ultimátum para abandonar el poder. «Defenderé con mi vida la autoridad que el pueblo me entregó», respondió el presidente, y pocas horas después su cadáver yacía envuelto en una bandera chilena entre las ruinas de la Moneda. Con su derrocamiento y muerte culminaba una conspiración fraguada el mismo día de su triunfo electoral y se iniciaba una feroz represión que costaría la vida a miles de chilenos.



Las fuerzas políticas

Unidad Popular: coalición de izquierda fundada en 1969 e integrada por los partidos socialista (PS), comunista (PC), radical (PR) y las pequeñas organizaciones Acción Popular Independiente (API) y Partido Socialdemócrata (PSD). Posteriormente se sumaron el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Izquierda Cristiana (IC), ambos surgidos de escisiones de la democracia cristiana. En las últimas elecciones, marzo de 1973, la UP logró el 43,4 por ciento de los votos. El partido mayoritario era el PS, con un 22 por ciento de votos.

Partido Demócrata Cristiano: partido mayoritario del país (29 por ciento de votos en 1973). Gobernó en solitario desde 1964 a 1970, con Eduardo Frei como presidente de la República y un programa de reformas moderadas, entre las que destacó la reforma agraria. Partido interclasista, derivó después de 1970 a posturas cercanas a las de los conservadores que se opusieron antes a la reforma agraria.

Partido Nacional: nació de la fusión de los dos partidos tradicionales de la derecha chilena: el liberal y el conservador. Enemigos de la DC hasta 1970 se aliaron a ella para arrastrarla en una oposición despiadada contra el Gobierno de Allende. Su votación máxima fue en 1973 de un 22 por ciento. Su líder, Sergio Onofre Jarpa, fue nombrado ministro del Interior por el general Pinochet.

Partido Radical: partido tradicional de la clase media progresista. Laico e interclasista, gobernó durante varios años en Chile, con programas

diversos. Antes de 1970 se escindió un ala derechista, la Democracia Radical, que apoyó el golpe contra Allende y posteriormente, en 1972, otro sector centrista, el Partido de Izquierda Radical, que se unió a la oposición. La mayoría del radicalismo apoyó a Allende. El líder del PR, Anselo Sule, es vicepresidente de la Internacional Socialista.

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR): nacido en los años sesenta de escisiones del PC y el PS, el MIR correspondió a los diversos movimientos guerrilleros de la época en América Latina. Las condiciones políticas chilenas lo empujaron a una acción de masas en los sectores más atrasados del campo y de la ciudad, donde logró una base de apoyo importante. Apoyó en forma crítica el proceso de Allende, aunque empujó acciones que superaban el delicado marco que se había fijado la UP, provocando serios enfrentamientos en el seno de la izquierda. Su líder, Miguel Enríquez, murió en un enfrentamiento con el Ejército después del golpe de 1973.

Patria y Libertad: organización de carácter fascista, creada en plena campaña electoral por el abogado Pablo Rodríguez. Recibió una generosa ayuda de la extrema derecha brasileña y logró establecer vínculos sólidos con sectores golpistas de las Fuerzas Armadas, dirigentes de la patronal y políticos de la derecha. Tras el golpe de 1973, al que colaboró activamente, participó en interrogatorios y gran parte de sus militantes se convirtieron en agentes de la policía secreta de Pinochet, la DINA.

El triunfo de la Unidad Popular

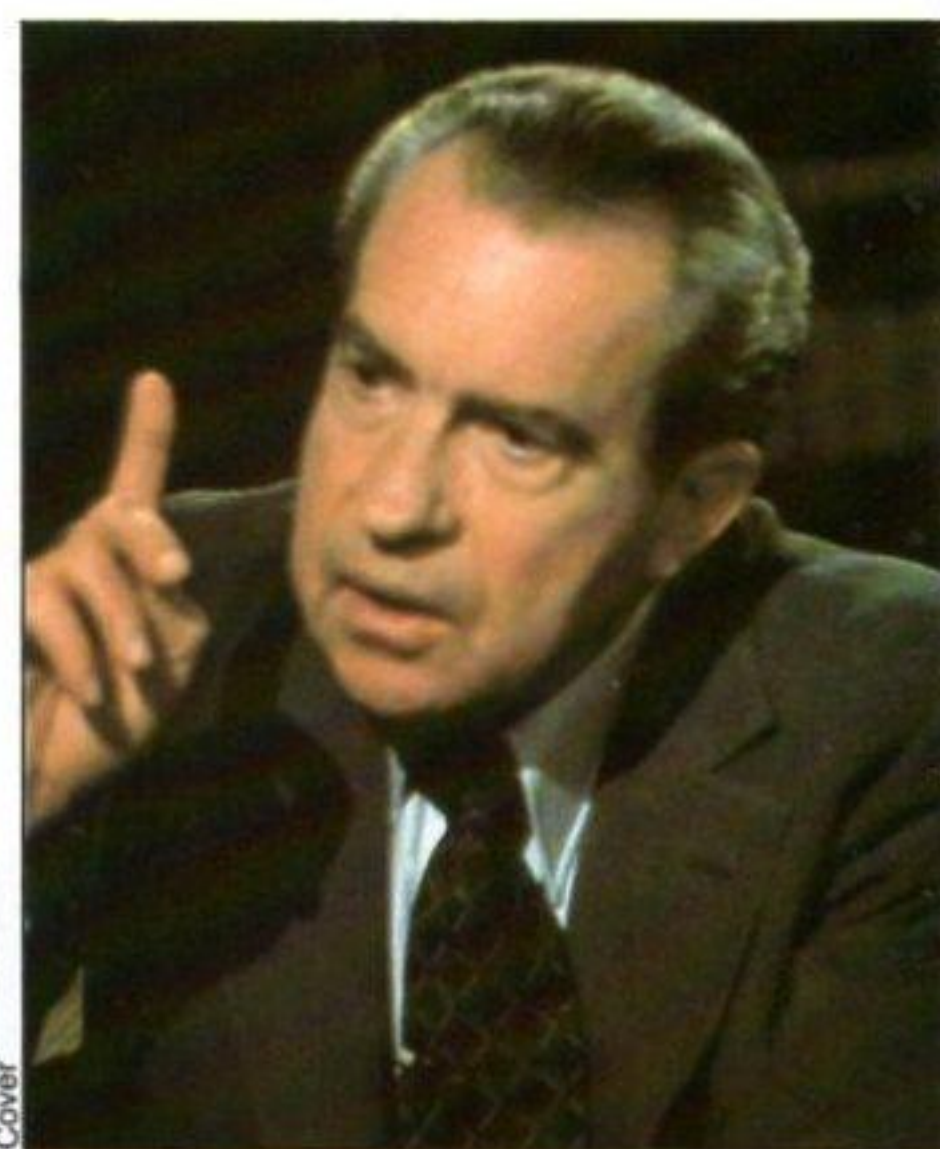
El 4 de septiembre de 1970, las antenas de la diplomacia y el espionaje internacional se concentraban en un remoto punto del planeta, un país perdido en el continente austral de geografía desgarrada e historia sorprendente. Chile era entonces, junto con Uruguay, la democracia más antigua y sólida de la siempre agitada América del Sur y proporcionaba al mundo una sorpresa política de escasos precedentes: el triunfo en las urnas de un candidato presidencial que se proclamaba marxista y que reunía, en la coalición de la Unidad Popular, a comunistas,

socialdemócratas, cristianos, masones y revolucionarios de la extrema izquierda. Salvador Allende, viejo lobo de la institucionalizada izquierda chilena, prometía, aquella noche de la victoria, la consigna clave de su campaña: una revolución dentro de la ley.

Diez días después del triunfo de Allende, el 14 de septiembre, el entonces presidente norteamericano Richard Nixon y su «cerebro gris» de la política exterior, Henry Kissinger, se reunían en la Casa Blanca con el llamado «comité de los cuarenta», el Consejo Nacional de Seguridad, para determinar en secreto la política que debía



Zardoya



Cover

En la parte superior de esta página, Sergio Onofre Jarpa, líder de la fracción más derechista del Partido Nacional, que intentó mediante una «maniobra legal» impedir el acceso de Allende a la presidencia de Chile, siguiendo los dictados del presidente de

Estados Unidos, Richard Nixon (foto de abajo).

En la página siguiente, Salvador Allende, con una bandera chilena en la mano, saluda al pueblo que le aclama tras haber alcanzado la investidura presidencial superando la estrategia planeada por la derecha.

seguir ante la «subversión» legal que habían hecho estallar las urnas chilenas con el triunfo de la Unidad Popular. Las decisiones de ese comité fueron conocidas años después, por filtraciones y denuncias y, más aún, por los trágicos hechos que pusieron fin a la «experiencia chilena» el 11 de septiembre de 1973.

El primer objetivo era impedir, durante el interregno de la transmisión de mando —fijada por la ley chilena el 4 de noviembre, sesenta días después de las elecciones—, que Allende, candidato triunfante, pero con sólo un 36,30 por ciento de los votos, se con-

La táctica de los mariscales rusos

La intervención de la CIA y el propio Gobierno norteamericano en la conspiración para derrocar a Salvador Allende es hoy en día un hecho probado por infinidad de documentos. Desde el boicot económico hasta la financiación de grupos armados, pasando por la inyección económica a las publicaciones de la extrema derecha y el fomento de las huelgas salvajes, la Casa Blanca lo intentó todo para deshacerse de la «experiencia socialista por la vía constitucional» instaurada por Allende. Entre los «agentes» que recibían dinero de Washington estaba el dirigente democristiano Claudio Orrego. Diputado y notable polemista, Orrego formulaba entonces su célebre estrategia de los mariscales rusos, una política que aplicaría la democracia cristiana en los años siguientes y que ayudaría en forma crucial al derrocamiento de Allende. La tesis de Orrego, o de sus patrocinadores, copiaba la táctica mantenida por los rusos durante la invasión napoleónica y durante la Segunda Guerra Mundial que consistía, en síntesis, en dejar que el enemigo avanzase lo más posible hasta que el frío, el «general invierno», lo enterrase en las estepas, lejos de sus líneas de retaguardia y mantenimiento.

Orrego comparaba las instituciones con la dura estepa invernal y confiaba en que Allende quedase atrapado en la propia legalidad que le había permitido llegar a la presidencia de la República. Mientras más lejos llegase en la aplicación de su programa de reformas, más abandonado quedaría por el peso de la ley, el «general invierno» de la batalla de Chile, según la estrategia de Orrego y sus consejeros norteamericanos. Orrego, hombre de confianza de Frei y miembro de la cúpula derechista que entonces controlaba el partido democristiano, aconsejaba simplemente retroceder, dejar el terreno al Gobierno de Allende y esperar el momento en que estuviese empantanado para darle el golpe definitivo. La táctica a seguir sería —y lo fue— quemar los graneros y campos de la ley, desgastar al enemigo, el Gobierno, mediante el bloqueo institucional y llevarlo así a su «Moscú», a la derrota final como la que sufrió Napoleón en las puertas de la capital rusa en 1812.



virtiese en el primer presidente marxista elegido democráticamente en América Latina. El segundo, en caso de fracasar el anterior, frustrar mediante presiones económicas su gestión de gobierno y la aplicación de su programa de nacionalizaciones y reformas sociales. Y tercero, apoyar, por todos los medios, a los sectores civiles y militares opuestos en Chile a la política de la Unidad Popular.

La estrategia del miedo

Los sesenta días transcurridos entre las elecciones y la transmisión oficial del poder (4 de septiembre a 4 de

noviembre) fueron cruciales. La burguesía alta y media que había votado al anciano candidato derechista Jorge Alessandri (34,98 por ciento de votos) hacía cola ante bancos e instituciones de ahorro para retirar sus fondos; las agencias de viajes —escasas en Santiago— estaban abarrotadas. Un clima de miedo irracional se respiraba en la pequeña city de las calles Bandera y Ahumada. El Gobierno democristiano en funciones guardaba un calculado silencio. El ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, «hombre fuerte» del gabinete del presidente Eduardo Frei y del ala derechista de la democracia

Los papeles de la ITT

En 1982, el prestigioso periodista norteamericano Jack Anderson reveló un explosivo documento desde su columna del Washington Post. Era un paquete de memorandums enviados a los altos ejecutivos de la multinacional ITT por agentes desplazados por la empresa a Chile a fin de informar e intervenir en el proceso que se iniciaba con el triunfo electoral de Salvador Allende. Los documentos, fechados en Santiago y Buenos Aires entre septiembre y noviembre de 1970, demostraban los contactos de los agentes Hendrix y Berrelez con la derecha chilena y los planes de acción para impedir la llegada al poder de la Unidad Popular. El segundo hombre de la ITT en Washington, John Mac Cone, ex director de la CIA, mantuvo en esos días reuniones con el entonces jefe de la agencia de espionaje norteamericana, Richard Helms. Ambos reconocieron años después, en el Senado, las operaciones conjuntas de la ITT y la CIA para boicotear a Allende. Este párrafo corresponde a un memorándum enviado el 29 de septiembre de 1970:

«...La idea presentada es aplicar presión económica; siguen las sugerencias.

1.—Los bancos no deben renovar los créditos o deben demorarse en hacerlo.

2.—Las compañías (norteamericanas) deben arrastrar los pies al enviar dinero, hacer entregas, despachar repuestos, etc...

3.—Las compañías de ahorro y préstamo (chilenas) tienen problemas. Si se aplica presión tendrían que cerrar sus puertas, creando así mayor tensión.

4.—Debemos retirar toda ayuda técnica y no prometer ninguna asistencia en el futuro. Las compañías que puedan (sucursales en Chile) deben cerrar sus puertas.»

El texto fue enviado al presidente de la ITT, Harold Gerneen por el vicepresidente de la compañía, E.J. Gerriety, durante una visita especial que hizo a Chile para recabar en directo los informes de los agentes Hendrix y Berrelez.

Otro memorándum de la misma fecha señalaba en su resumen:

«1.—En este momento, parece difícil que se derrote a Allende en el Congreso. El candidato democristiano derrotado, Radomiro Tomic, todavía apoya a Allende y puede llevarse con él un sector importante del voto del PDC.

2.—A pesar del pesimismo, continúan los esfuerzos para mover a Frei y/o los militares a actuar para detener a Allende. También continúan los esfuerzos para provocar a la extrema izquierda a una reacción violenta que produciría el clima requerido para una intervención militar.

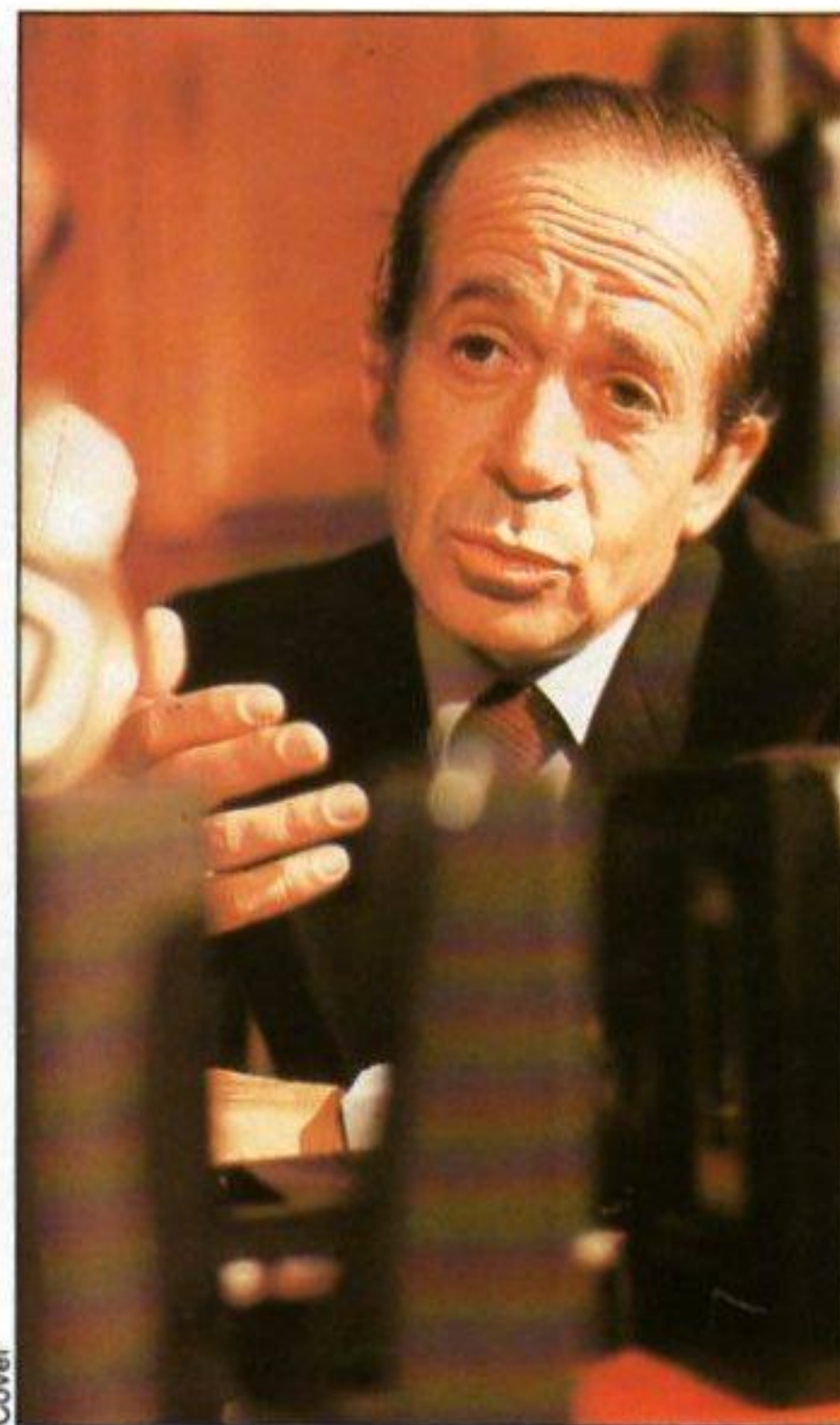
3.—Aunque sus probabilidades de éxito son débiles, no debe desestimarse un bloqueo de la asunción del poder por Allende a través de un colapso económico.»

cristiana, lo rompió una semana después con un discurso alarmista, lleno de cifras que sólo aumentaban el artificio del miedo financiero. Antes aun de llegar Salvador Allende a La Moneda, el país ya estaba, según el catastrofista mensaje del ministro, al borde del caos y la bancarrota.

Gran parte de la derecha chilena sufría entonces —y lo padeció después— el histórico corsé de una legalidad que tradicionalmente le había favorecido, pero que ahora, por paradojas del desarrollo cívico, atentaba contra sus intereses. Desde Washington, el problema se comprendía parcialmente, aunque informes de agentes de la compañía multinacional ITT, trabados entonces en una acción conjunta con la CIA, llamaban la atención sobre esta peculiaridad de la República de Chile. En teoría y en contra de la tradición

institucional, la ley permitía, por ejemplo, que el Congreso Nacional no ratificara la victoria electoral de Allende y diera en cambio, mediante una vergonzante alianza de la derecha (Partido Nacional y Democracia Radical) con la democracia cristiana, la banda presidencial al candidato Jorge Alessandri.

El mejor testimonio de este interregno lo constituyen los llamados «papeles de la ITT», un paquete de memorandums enviado a Washington por los agentes Hendrix y Berrelez, que narran los contactos establecidos con todo tipo de sectores contrarios a Allende, desde los más legalistas hasta aquellos grupos ultraderechistas que habían surgido en plena campaña electoral bajo los sugestivos nombres de «No entregamos a Chile» (NECH), Grupo de acción anticomunista (Gra-



Cover



Zardoya

co) o el más fuerte y mejor financiado de todos, Patria y Libertad. En los «papeles de la ITT» quedaban reflejadas las dudas de Eduardo Frei para apoyar una «maniobra legal» que cerrase el paso de Allende a la presidencia, las omisiones de Alessandri, viejo líder derechista apegado a la ley, y las agresivas inquietudes de sectores menos escrupulosos, como los de Sergio Onofre Jarpa (líder del Partido Nacional y después, en 1982, ministro de Pinochet) y la ultraderecha radical que acariciaba el golpismo y el terrorismo como única alternativa a la Unidad Popular.

El asesinato de un general

La opción terrorista jugó sus por entonces últimos ases el día 22 de octubre. Un comando ultraderechista, con el que tenía relación un general del



Magnum/Zardoya

Ejército, Roberto Viaux, condenado en 1969 por un abortado intento golpista, dio muerte al comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, militar respetuoso de la Constitución y de las tradiciones legalistas de las Fuerzas Armadas chilenas. El atentado conmocionó al país y puso de relieve la profundidad del complot en las filas de la derecha y la ultraderecha. Aunque el Gobierno de Frei, aún en ejercicio, y los altos mandos del Ejército taparon gran parte de las implicaciones de la conspiración, los servicios montados improvisadamente por los partidos de izquierda pudieron detectar contactos que llegaban hasta los escaños de la derecha en el Congreso y hasta la comandancia militar de Santiago.

La muerte de Schneider, sin embargo, sobresaltó a la democracia cristiana y sus líderes abandonaron definiti-

vamente cualquier tentación de cerrar el paso a Allende. El partido en el poder abrió entonces conversaciones con la coalición de Allende y exigió algo también insólito en la tradición institucional, pero que fue acogido por la Unidad Popular en vista del dramatismo que había alcanzado el interregno de la transmisión del Gobierno. Ello fue un cuidadoso estatuto de garantías que apuntaba fundamentalmente a mantener la actual correlación de fuerzas, beneficiosa a la derecha, en los medios de comunicación, en algunas instituciones estatales y, especialmente, a no alterar la composición de las Fuerzas Armadas ni crear organismos paralelos de poder o de milicia.

Aceptado el estatuto, Salvador Allende juró el 4 de noviembre como nuevo presidente de Chile, en presencia del enviado especial norteamerica-

En la página anterior, arriba, Andrés Zaldívar, dirigente del ala conservadora del Partido Demócrata Cristiano, que se convirtió en uno de los principales opositores al gobierno de Allende; abajo, el presidente Allende y Fidel Castro durante la histórica

visita del líder cubano a Chile, a fines de 1971.

En esta página, una manifestación de apoyo a Allende, contra el fascismo y la guerra civil, que refleja la tensa atmósfera que se vivía en la capital chilena a raíz de la campaña contra la UP.

no, el secretario de Estado adjunto Charles Meyer, que manifestó en un voluminoso memorándum que ese día envió a Washington su sorpresa ante el aparente peso de la institucionalidad chilena.

El primer impulso de la Unidad Popular

La primera mitad del año 1971 fue la primavera de la Unidad Popular. El Gobierno definió de inmediato una nueva política exterior, abrió relaciones con el prohibido mundo del Este y en especial con Cuba, el tabú de la diplomacia lationamericana desde 1962. Un sector de la democracia cristiana no ocultaba sus simpatías con el nuevo Gobierno y otro, encabezado por Bernardo Leighton, no despreciaba la posibilidad de un entendimiento mínimo que permitiese mantener el juego político tradicional en Chile por encima de cualquier diferencia. Las primeras medidas de carácter populista y la imagen de cambio social que aseguraba Allende dieron su fruto en las elecciones municipales de abril de 1971; la Unidad Popular logró en ellas aumentar del 36,9 al 50,9 por ciento su representación. La euforia de la UP parecía incontrarrestable: en abril era nacionalizado el hierro; antes lo había sido el carbón, y finalmente, el 11 de julio, mediante un voto unánime arrancado a la oposición, la riqueza clave, el cobre.

El Congreso estaba entonces dominado por la oposición formada por el mayoritario Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional, más algunos diputados de grupúsculos derechistas. Ninguno se había atrevido a oponerse a la nacionalización del cobre, pero su tenaz resistencia a todo tipo de intervención de empresas había empujado al Gobierno a operar a través de los decretos, en medio de un clima creciente de fintas legales que convertían el momento político en una tensa y apasionante partida. La oposición controlaba aún, además del Congreso, otros poderes del sofisticado aparato institucional chileno y apelaría a la Contraloría General de la República, una especie de cuarto poder en el complejo tramado del Estado, para frenar las iniciativas de la Unidad Popular.



Un asesinato oportuno

El propio Allende recordaba en sus discursos de mediados de 1971 que «tenemos el Gobierno pero no el poder», en un llamamiento especialmente dirigido a las bases más radicalizadas de la UP y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) para recordar las posibilidades y limitaciones del momento.

Hasta junio de 1971 el Gobierno parecía apresurarse en cumplir lo más posible de su programa, acudiendo a los referidos resquicios legales para esquivar la oposición del Congreso. En las filas de la DC se producía entonces un doble proceso: por una parte, las bases más progresistas se acercaban a la Unidad Popular a través de un partido, el MAPU, que se había escindido de la democracia cristiana antes de las elecciones; por otra, la cúpula se radicalizaba más a la derecha y robustecía sus contactos con el ultraconservador Partido Nacional y, mediante vías menos abiertas, con los diversos servicios de espionaje norteamericanos que operaban en Chile.

La primavera de la UP tuvo un fin brusco el 9 de junio de 1971, cuando ya en las propias filas de la izquierda se percibía la sensación de que la ley o el proceso dentro de la ley «había tocado techo». En ese momento crucial, en que el Gobierno tenía ante sí el camino de la alianza con parte de la oposición u otra estrategia de corte más radical, un asesinato imprevisto alteró las piezas del delicado juego de ajedrez. Un grupo ultraizquierdista, el más marginal y despolitizado de todos, asesinaba a un ex ministro de Eduardo Frei, Edmundo Pérez Zujovic, responsable en 1969 de una matanza policial en la ciudad sureña de Puerto Montt y hombre clave de la DC en sus relaciones



EFE

con la oligarquía criolla encuadrada en el Partido Nacional. El asesinato tomaba por sorpresa a todos y la izquierda necesitó varios meses para descubrir detrás de la llamada Vanguardia Organizada del Pueblo, autora del atentado, a los agentes panameños de la CIA que operaban en Chile desde hacía dos años como falsos delegados de un supuesto movimiento revolucionario centroamericano.

La muerte de Pérez Zujovic precipitó el fin de la primavera de la UP. Al mes siguiente, la DC y el Partido Nacional se aliaban, por primera vez, para presentar un candidato conjunto en una elección parcial en Valparaíso, y triunfaban. El impulso inicial de la experiencia chilena se había agotado: pronto se notaría el alcance del plan a medio plazo aprobado en noviembre de 1970 por el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos; de momento, los principales órganos de la derecha chilena, especialmente *El Mercurio*, contaban con ayudas financieras que nunca habrían soñado. La derecha comenzaba a reponerse del susto y a preparar los entretejidos de una conspiración contra el Gobierno.

La marcha de las cacerolas

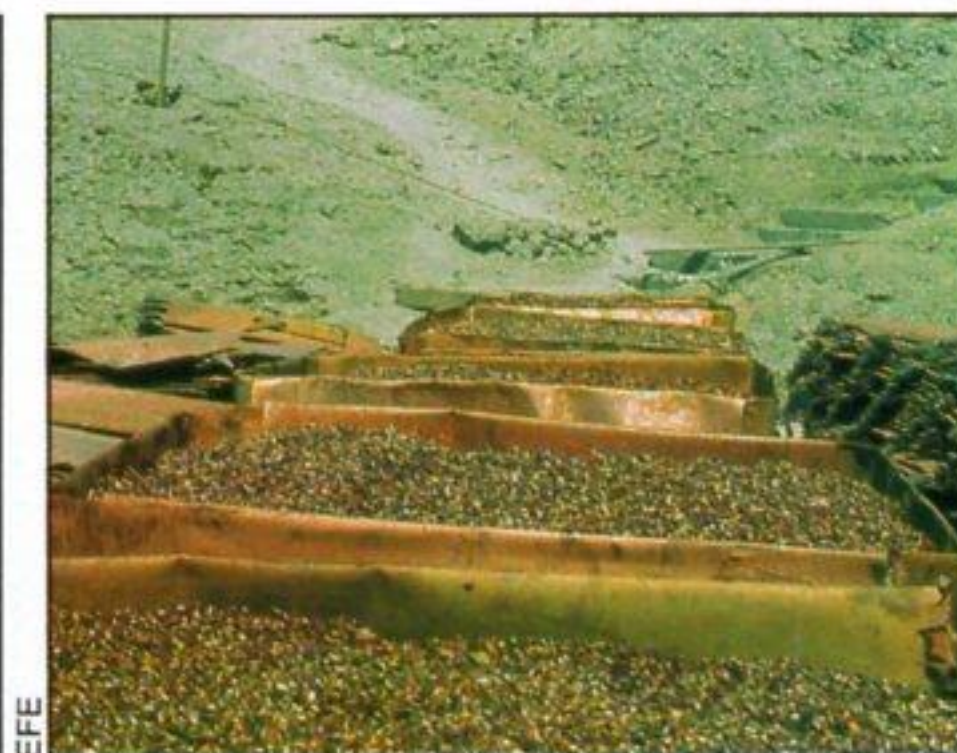
Durante los últimos meses de 1971 y todo el año 1972 pudo apreciarse lo que cabría llamar la «vía chilena de la sedición», en oposición a la «vía chilena al socialismo» elaborada por Salvador Allende y la Unidad Popular. En el tablero podían distinguirse varias áreas de jugadas de un ajedrez múltiple que abarcaba desde los poderes del Estado hasta los medios de comunicación, el amplio e incontrolable campo de la actividad económica, las Fuerzas Armadas, el terrorismo y los frentes de masas.

En julio de 1971, el ex presidente Eduardo Frei volvía de una gira privada por Estados Unidos y rompía un silencio de varios meses para proclamar con voz grave que «la Unidad Popular camina hacia el totalitarismo». El mismo Frei daba entonces la orden de partida: «sustituir por la vía legal a la UP». En otras palabras, estaba dada la luz verde para la sedición legal y ello coincidía con la alianza electoral en Valparaíso entre la DC y el Partido Nacional, que poco antes había sido su enemigo acérrimo debido a la reforma agraria del gobierno democristiano.



El alcance del nuevo clima pudo advertirse el 2 de diciembre de 1971. Durante semanas, la oposición, ya unida en torno a la única consigna de atacar al Gobierno, había lanzado a través de los medios de comunicación que controlaba —superiores en distribución a los del Gobierno— consignas de agitación contra un nuevo problema que había comenzado a suscitarse sin que el Gobierno hubiera tomado ninguna medida al respecto. La cuestión tenía relación con el abastecimiento de bienes de consumo. Misteriosamente habían comenzado a escasear productos como el azúcar, los fósforos, el papel higiénico, el aceite y otros no fundamentales pero singularmente incómodos para la vida cotidiana. En esa fecha no había motivo económico alguno para explicar tan misteriosa escasez. Los grandes centros de distribución estaban controlados por sectores de la burguesía comercial, claramente adscritos al Partido Nacional, y en absoluto amenazados, ni por el programa de la UP, ni por la política económica que aplicaba el Gobierno, dirigida exclusivamente contra grandes monopolios industriales.

El abastecimiento fue sin embargo el estandarte que aprovechó la oposición para organizar una espectacular marcha de «cacerolas vacías». El 2 de diciembre, mientras permanecía en el país Fidel Castro, en una larga visita al Chile de Allende, miles de mujeres del barrio alto de Santiago marcharon desde sus chalets hacia el centro de la capital, con cacerolas y banderas chilenas y escoltadas por jóvenes militantes de Patria y Libertad, provistos de camisas azules, cascos, cadenas y armas ligeras. La manifestación culminó en un enfrentamiento abierto con fuerzas de orden público, sin muertos ni heridos graves como sucedía a menudo en gobiernos anteriores. Pero el tornillo de la oposición apretó aún más. Días después, y por vez primera, la democracia cristiana accedió a apoyar una acusación constitucional contra un ministro, táctica que había empleado sin éxito y desde enero de 1971 el Partido Nacional. La víctima elegida fue el titular del Interior, José Tohá, hombre dialogante y moderado que no suscitaba odios en ningún sector y que tampoco había dedicado a la política sus intereses personales. Su brillante de-



En la página anterior, el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, que fue designado ministro del Interior en noviembre de 1972 con el propósito de neutralizar al sector más radical de las Fuerzas Armadas.

En ambas páginas, el presidente Salvador Allende durante un acto previo a las elecciones parlamentarias de 1973.

En esta página, arriba, el cobre, la principal riqueza de Chile, nacionalizado en 1971.

fensa de hombre de letras, más que de luchas políticas, no sirvió de nada en el Congreso. Tohá fue destituido de su cargo y, mediante un desafiante enroque del presidente Allende, trasladado a la cartera de Defensa. Después del golpe de 1973 fue una víctima del sadismo militar y murió ahorcado, en el hospital castrense de Santiago, tras varios meses de prisión. La versión militar fue «suicidio».

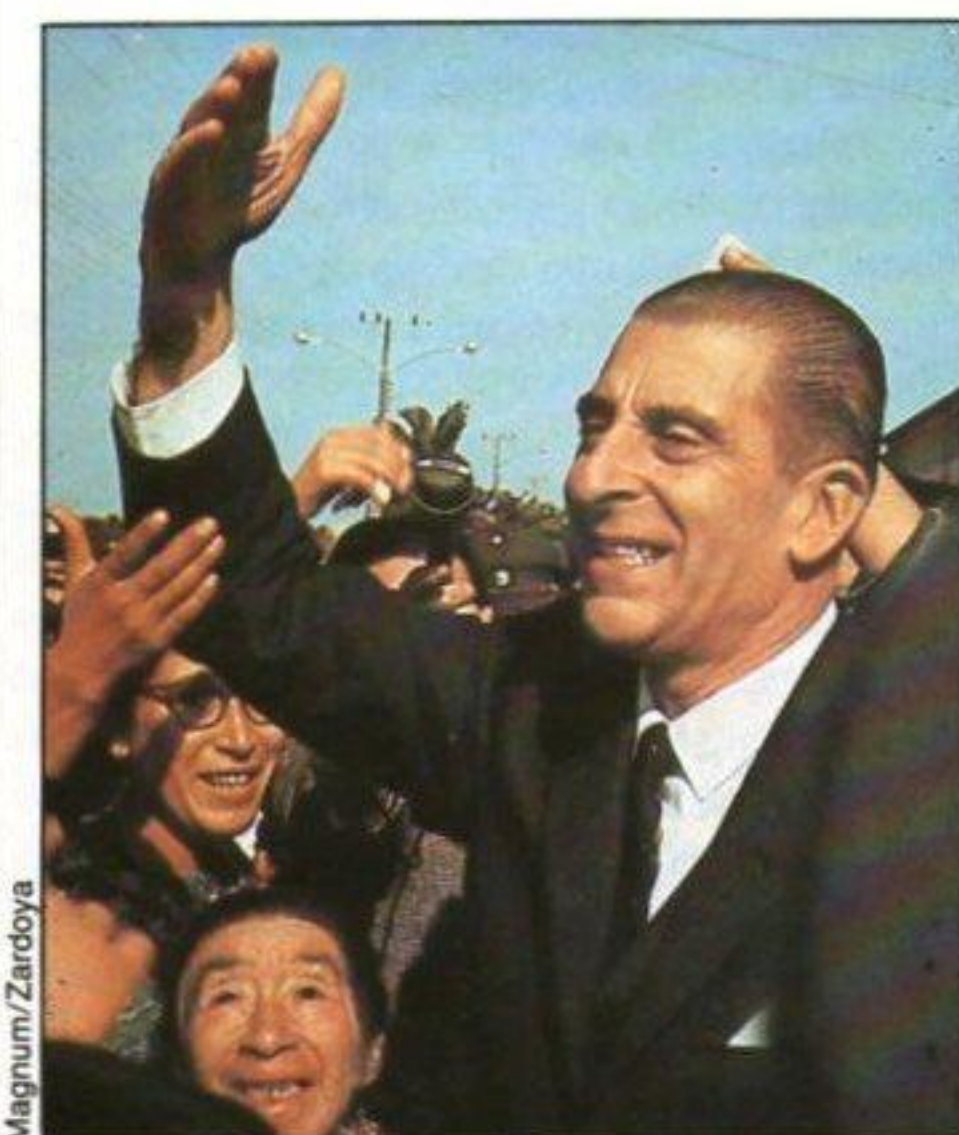
La escalada de la sedición

La derecha chilena puso en acción su dispositivo sedicioso después de la «marcha de las cacerolas». El 6 de marzo de 1972, un almuerzo campestre reunía en una hacienda de las afueras de la capital a los representantes más conspicuos de las patronales de la industria, el comercio y la agricultura, al presidente del Senado, el democristiano Patricio Aylwin, al de la Corte Suprema, el conservador Enrique Urrutia, a dirigentes del Partido Nacional como Jaime Guzmán, vinculado con el grupo Patria y Libertad y posteriormente asesor clave del régimen del general Pinochet, al sacerdote del Opus Dei José Miguel Ibáñez, animador del círculo estudiantil anticomunista Fiducia, al subdirector del diario *El Mercurio* y a otros destacados personajes de la derecha chilena, incluyendo a dirigentes del ala conservadora de la DC como Andrés Zandívar y Rafael Moreno.

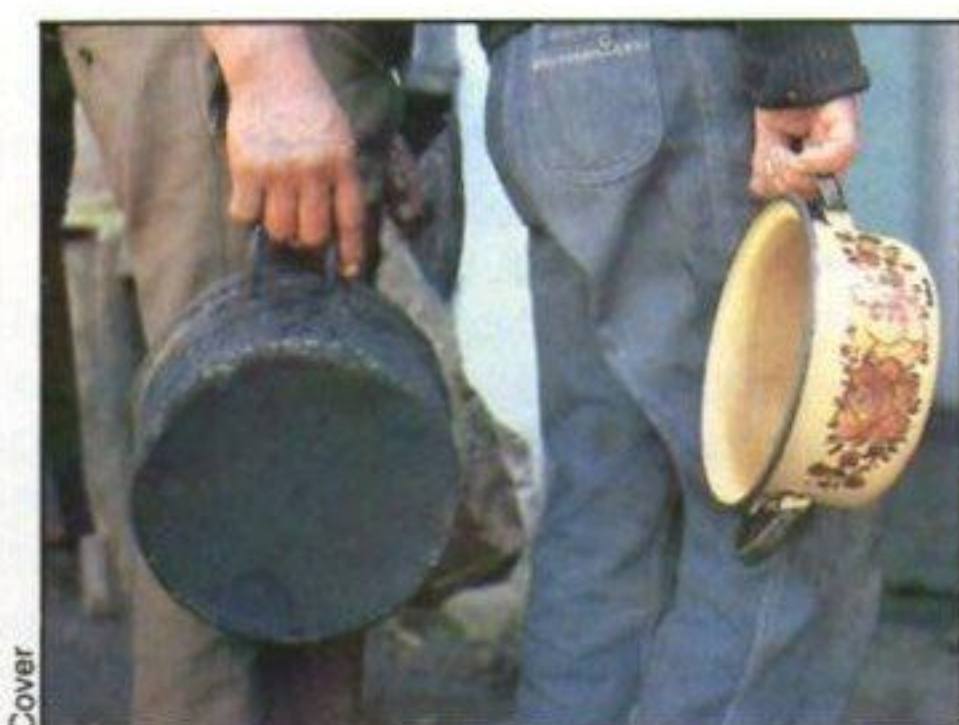
El «almuerzo campestre» culminó en un documento público que convocaba a «las fuerzas vivas de la nación» a afrontar «los peligros con que el marxismo amenaza nuestra convivencia democrática» y daba algunas pautas de la estrategia general acordada por la derecha finalmente unida. Tales pautas pasaban por la formación de frentes



EFE



Magnum/Zardoya



Cover

Arriba, cientos de camiones concentrados en las inmediaciones de Santiago durante la huelga de los transportistas, en octubre del año 1972; en el centro, Eduardo Frei, jefe del Partido Demócrata Cristiano,

que tras fracasar en su intento de derrocar al Gobierno en el Parlamento dejó las puertas abiertas al levantamiento militar; abajo, las «cacerolas vacías» fue uno de los argumentos utilizados contra el Gobierno.

vecinales de «resistencia» y de agrupaciones gremiales que debían ponerse en pie de guerra contra el Gobierno. El caballo de batalla institucional lo constituían, según lo expresaba el documento, el Congreso dominado por la oposición y el Poder Judicial, fundamentalmente conservador.

El ala más radical de la sedición tomaba entre tanto sus medidas prácticas. El poderoso industrial y senador nacional Pedro Ibáñez, financiero y solapado inspirador de Patria y Libertad, tomaba contacto con la llamada Liga de Acción Anticomunista, dirigida por el brasileño Aristóteles Drummond, para conseguir una ayuda que el diario norteamericano *Washington Post* valoró posteriormente en ocho millones de dólares. Miles de armas entraron a Chile en el primer semestre de 1972, camufladas en envíos de maquinaria brasileña a las industrias del grupo de Pedro Ibáñez, y varios centenares de jóvenes de Patria y Libertad viajaron a Brasil para entrenarse con los comandos paramilitares de Drummond, más conocidos como los siniestramente famosos «escuadrones de la muerte».

Otro empresario brasileño, Glycon de Payva, jugó un importante papel en la «conexión carioca» de la subversión contra el Gobierno de Allende. De Payva se entrevistó en julio de 1972 con el presidente de la patronal chilena, Orlando Saenz, para aconsejar, según reconoció más tarde al *Washington Post*, «cómo debían actuar los civiles para preparar las condiciones para el golpe militar. La receta existe y se puede hornear la torta cuando se quiera».

La «receta para civiles» —aplicada en Brasil en 1964 y en Indonesia en 1965— fue aplicada paso a paso. A través de la democracia cristiana (pese a las vacilaciones de algunos de sus sectores) y del Partido Nacional se estructuró entre abril y agosto de 1972 un frente de Juntas de Vecinos que constituyó la primera plataforma de masas de la clase media que se alejaba a paso rápido de la influencia del Gobierno. Patria y Libertad supo infiltrarse en esta estructura —con ayuda del Partido Nacional— y promovió un organismo de Protección de la Comunidad (Proteco), estructurado con disciplina paramilitar como un verdadero poder vecinal armado. Su propaganda y guía de instrucciones comenzaba con la frase «en caso de un asalto de hordas marxistas...».

La huelga de los camiones

Después de varias semanas de presiones y manifestaciones de violencia, el aparato subversivo de la burguesía chilena se dispuso en el mes de octubre de 1972 a librar una batalla decisiva. El día 6 de octubre, el presidente del Senado, Patricio Aylwin, en nombre de la institución y de su partido, el Demócrata Cristiano, proclamaba que «Allende ha violado todos los compromisos contraídos», al mismo tiempo que la Cámara Alta calificaba al Gobierno como «fuera de la ley».

El ambiente estaba suficientemente caldeado en las calles con una larga huelga de los estudiantes secundarios controlados por la democracia cristiana y con las consignas subversivas lanzadas desde las emisoras de radio y la



prensa, mayoritariamente en manos de la derecha, que predicaban la «desobediencia civil». Cada noche sonaban cañerías en los barrios altos de Santiago, santuario de la alta y media burguesía, mientras se sucedían las provocaciones a las Fuerzas Armadas, invitándolas a intervenir contra el Gobierno.

La situación económica se había deteriorado entretanto hasta extremos insostenibles para el funcionamiento del país. Desde hacía varios meses desaparecían de los mercados y almacenes diversas mercaderías básicas que reaparecían en puestos clandestinos de venta a precios donde se centuplicaba su valor oficial. Las Juntas de Abastecimiento (JAP) promovidas por el Gobierno no lograban resolver el problema; la distribución, como la mayor parte de la producción, continuaba, pese a las intervenciones de industrias, en manos de propietarios que actuaban abiertamente en el dispositivo sedicioso de la oposición. Desde el exterior, los bancos norteamericanos bloqueaban créditos indispensables para la compra de recambios y ello acentuaba la parálisis productiva, al mismo tiempo que la especulación del mercado negro disparaba la inflación.

El 8 de octubre, un tribunal de París decretaba el embargo de una carga de cobre chileno, en virtud del proceso iniciado por la compañía Kennecott contra el Gobierno de Chile por la nacionalización de sus yacimientos cupríferos. Dos días después, la red de gremios patronales, estructurada desde marzo de 1972, ordenó un paro total e indefinido del transporte y del comercio. El país quedó paralizado.

La huelga de camioneros, financiada desde Estados Unidos, duró hasta fines de octubre y provocó pérdidas de alrededor de un millón de dólares. La respuesta del Gobierno y de los partidos de izquierda se apoyó en una movilización masiva de sus bases para mantener, dentro de lo posible, el abastecimiento mínimo en las ciudades. Gran parte de las provincias fueron declaradas en estado de emergencia y puestas bajo control de las autoridades militares, que intervenían por primera vez en el proceso, paradójicamente en favor del régimen constitucional.

La huelga no logró derrumbar al Gobierno de Allende y robusteció en cambio la capacidad de acción de los partidos de izquierda, que reforzaron sus dispositivos de seguridad y sus precarios aparatos paramilitares. Un número importante de industrias fueron ocupadas por sus trabajadores de forma espontánea y éstos organizaron «cordones industriales» en las barriadas obreras, dando así origen a nuevos organismos de masas no previstos en el esquema inicial del programa de la Unidad Popular.

A fines de octubre, la oposición advirtió que había llegado hasta el techo de sus posibilidades en esa brutal prueba de fuerza y abrió, una vez más, la posibilidad del diálogo a través de los sectores más moderados y democráticos de la DC. Allende puso punto final a la crisis con una medida audaz. El 2 de noviembre, nombró ministro del Interior al comandante en jefe del Ejército, el general Carlos Prats, un militar decididamente institucional que se comprometía a «asegurar la paz

La muerte de Víctor Jara

El cantante Víctor Jara, figura popular y entrañable entre los artistas chilenos, fue en las horas siguientes al golpe de Estado una de las víctimas torturadas con más saña. Víctor Jara fue detenido al mediodía del día 11 en la Universidad Técnica de Santiago junto con un gran número de estudiantes y profesores de izquierda. Los soldados los condujeron a todos al Estadio Chile, un pequeño centro deportivo donde había una cancha de baloncesto y algunos graderíos. El Estadio fue convertido esa tarde en campo de concentración. Unas 20.000 personas fueron apretadas en la cancha y los graderíos, bajo el cuidado de soldados nerviosos y de dedo rápido.

Cada momento eran sacados del recinto grupos de personas elegidos al azar por el hombre que dirigía el campo: el comandante Souper, el mismo que encabezó el 29 de junio de 1973 el primer intento de golpe contra Allende. Fue él personalmente quien hizo llamar a Víctor Jara, mientras éste cantaba con algunos prisioneros. Delante de todos fue golpeado brutalmente y un soldado le destrozó las manos con la culata del fusil. Víctor Jara, narró un testigo, siguió cantando y el propio Souper ordenó arrastrarlo fuera del Estadio. Al día siguiente, su cadáver apareció tirado en una barriada, con las manos destrozadas y el cuerpo acribillado.

El 26 de septiembre, el golpe militar cobraba otra víctima indirecta: el poeta Pablo Neruda. Aunque el premio Nobel padecía ya una enfermedad grave, el drama del 11 de septiembre aceleró su proceso. Su viuda, Matilde Urrutia, ha recordado que los militares se negaron entonces a facilitar una ambulancia para conducirlo al hospital. Neruda murió sin atención médica y horas después su casa fue saqueada por la soldadesca que días antes había quemado sus libros en las fogatas donde ardieron, durante varios días, todas las obras que la Junta consideró «subversivas».

Un tanque rebelde en las inmediaciones del Palacio de la Moneda durante el «tanquetazo» del 29 de junio de 1973; la audaz maniobra encabezada por el comandante Souper fue un claro ensayo con vistas al «verdadero»

golpe militar que tendría lugar tres meses después y que acabaría con las libertades de un país que se enorgullecía por su larga tradición de respeto a la legalidad institucional y a la voluntad popular.

A la derecha, elocuente imagen del Ejército de Chile que tras derrocar al presidente Allende desató una feroz represión contra gran parte del pueblo andino.

En la página siguiente, el Palacio de la Moneda

envuelto en humo durante el ataque de la artillería y la aviación, en la mañana del 11 de septiembre de 1973; al comenzar la tarde cesó la resistencia en la que habían muerto Allende y su reducida escolta.

social del país y garantizar las elecciones» que debían celebrarse en marzo de 1973 para renovar a los miembros del Congreso.

Las últimas elecciones

Las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 no rompieron el peligroso empate político que dividía al país en dos fracciones enconadas y cada vez más dispuestas a buscar una salida violenta. La Unidad Popular, aunque subió su porcentaje electoral, en relación a las presidenciales de 1970, de 36,30 a 43,4 por ciento, no logró la mayoría indispensable para empujar sus proyectos de ley y la reforma constitucional con que pretendía acelerar los cambios estructurales anunciados en su programa. La oposición, a su vez, reunida en una Confederación para la Democracia, estructurada en base a democristianos y conservadores, obtuvo un 54,7 por ciento que le permitía bloquear leyes, pero no exigir un plebiscito o acusar constitucionalmente al presidente de la República, para lo que según la ley se precisaba un quórum de dos tercios del Congreso. La imposibilidad de un «derrocamiento legal» del Gobierno —como pretendía el líder de la DC, Eduardo Frei— dio pie a reforzar el peso de la ultraderecha en las filas de la oposición. Desde ese momento, la radicalización del proceso —tanto en la izquierda como en la derecha— era inevitable.

Las revelaciones posteriores al golpe de Estado de 1973 pusieron de manifiesto que precisamente en marzo se habían iniciado los contactos entre los sectores progolpistas de la oposición y círculos de las Fuerzas Armadas, entre los que se contaba al general Pinochet, entonces segundo hombre del Ejército y supuestamente leal al régimen constitucional. El llamamiento a las Fuerzas Armadas era cada vez más público por parte de la derecha, especialmente el ala «dura» del Partido Nacional y Patria y Libertad, que proclamaba la necesidad de «acabar con el «Estado liberal»».

El empate social acentuaba también las diferencias en las filas de la Unidad Popular y de toda la izquierda. Dentro de la coalición del Gobierno, sectores del PS, del partido MAPU y de la



Cover

Izquierda Cristiana coincidían con el MIR en la necesidad de «avanzar» rápidamente en el proceso para decantar definitivamente la situación en favor de un cambio revolucionario radical. Allende, otro sector del PS, radicales y el poderoso PC defendían en cambio la cautela de «consolidar» lo logrado y establecer cuanto antes un acuerdo con los sectores moderados de la DC, tal como se había intentado sin éxito en 1971 y en 1972. El Gobierno, sin embargo, era consciente de que aún faltaba por entrar en el juego el factor decisivo de cualquier enfrentamiento definitivo: las Fuerzas Armadas. La propaganda creciente de la derecha en los cuarteles no pasaba inadvertida.

El ensayo del golpe

El 29 de junio, el factor militar tuvo su primera entrada en el juego. A las ocho de la mañana, un grupo de ocho tanques del regimiento de Blindados Número 2, de Santiago, irrumpió en el Barrio Cívico y cercaba el Palacio de la Moneda. El autor del audaz golpe era el comandante Souper, estrechamente

vinculado a Patria y Libertad. Su acción duró sin embargo pocas horas y se rindió, después de un activo intercambio de disparos, al general Prats que acudió personalmente a desautorizar la rebelión. De todos modos, las cartas militares ya estaban echadas con el «tanquetazo» de junio. Pese a las presiones de las bases de la UP, que exigían una «limpieza» de las Fuerzas Armadas, el Gobierno reaccionó con cautela y mantuvo abiertas las puertas del diálogo, al mismo tiempo que nombraba un nuevo gabinete de corte claramente moderado.

Durante varias semanas, el diálogo con la DC mantuvo en *suspense* a los grupos protagonistas de la verdadera guerra civil política que vivía el país. Finalmente, el 27 de julio, la DC rompía la baraja —pese a los esfuerzos de su ala moderada— y exigía a Allende la formación de un Gobierno Militar. El mismo día, Patria y Libertad llamó, a través de los micrófonos de Radio Agricultura, a «la unidad de Chile para derrocar a Allende». El camino del golpe estaba abierto.



El golpe de Estado

Los acontecimientos se precipitaron en las semanas siguientes. Nuevamente los «gremios» controlados por la derecha y asistidos militarmente por las «centurias» armadas de Patria y Libertad decretaron una huelga. Los trabajadores de la mina de El Teniente mantenían a su vez una larga huelga que había polarizado la actividad de masas de la oposición, en combinación con las federaciones estudiantiles controladas por la DC o el Partido Nacional. Las calles de la capital se convirtieron en escenario cotidiano de enfrentamientos entre Patria y Libertad, MIR y la Policía, al mismo tiempo que la organización de Pablo Rodríguez realizaba atentados contra instalaciones eléctricas que dejaron a oscuras a varias ciudades.

La decantación del Ejército ya era visible desde los primeros días de agosto. En Punta Arenas, primero, y luego en Santiago y Concepción, los jefes militares de plaza ponían en vigor una ley de control de armas que sólo fue efectiva para incautar los arsenales de

los partidos de izquierda y de los sindicatos. Los sondeos que hacía discretamente el Gobierno revelaban ya que el número de generales leales al régimen estaban en minoría. Carlos Prats, comandante en jefe y cabeza visible del sector institucional, se convirtió en el blanco de ataques públicos de la oposición. Finalmente, una marcha de esposas de oficiales, que desfilaron ante su casa insultándole y pidiendo su dimisión, le obligó, el 23 de agosto, a dejar su cargo y pasar a retiro. El último obstáculo para el golpe había desaparecido. A la izquierda, desangrada en sus propias luchas intestinas, sólo le quedaba esperar el desenlace.

Éste llegó la madrugada del 11 de septiembre. Tropas de Infantería de Marina, que realizaban maniobras con las naves norteamericanas del proyecto UNITAS, ocuparon a primeras horas el puerto de Valparaíso. Al mismo tiempo, a las 4 de la madrugada, un regimiento de infantería se dirigía hacia la capital desde la vecina ciudad de los Andes, mientras un comando detenía en su domicilio al general Prats, ya

retirado, pero aún con influencia suficiente en las Fuerzas Armadas. A las siete, el presidente Allende recibía información en su residencia de la calle Tomás Moro y una hora después salía con su escolta hacia el Palacio de la Moneda. A las ocho de la mañana, la casa de Gobierno estaba ya rodeada de tanques y se escuchaban los primeros disparos. A través de la radio, los tres comandantes en jefe de Ejército, Marina y Aviación anunciaban que el Gobierno legal había sido derrocado.

A esa hora, las escasas fuerzas leales al Gobierno habían sido neutralizadas en los propios cuarteles; el presidente sólo disponía de su escolta y algunos miembros de la policía civil. A través de las emisoras que aún permanecían en manos de la izquierda leyó su último y dramático mensaje, anunciando inequívocamente que «no saldré de la Moneda, no renunciaré a mi cargo y defenderé con mi vida la autoridad que el pueblo me entregó».

Los generales conjurados replicaron con un ultimátum, mientras aviones *Hawker-Hunter* de la Fuerza Aérea



El dictador Pinochet y sus colaboradores en el aniversario del golpe.

realizaban amenazadores vuelos rasantes sobre el palacio. Por las ventanas del edificio, los jóvenes de la escolta presidencial asomaron las bocas de sus metralletas y de dos ametralladoras punto cincuenta. Los tanques ya habían disparado sobre la enorme puerta colonial del palacio y se sucedían las ráfagas de fusiles automáticos.

A las 11 y 3 minutos de la mañana, comenzó el bombardeo aéreo. En esos momentos, los golpistas controlaban todas las ciudades del país y se registraban sólo combates esporádicos en los «cordones industriales» de la capital y en puntos dispersos. La izquierda no disponía de hecho de ninguna fuerza armada suficiente para enfrentarse a un ejército profesional.

A las trece horas, las paredes de la Moneda humeaban a través de los agujeros provocados por los cohetes de la Fuerza Aérea y los proyectiles de los tanques *Sherman*. Allende, protegido con un casco y armado con un fusil *Kalachnikov* que le había regalado Fidel Castro durante su visita a Chile en 1971, recorría el palacio en busca de municiones y armas y organizaba una defensa desesperada. Su asesor de prensa, Augusto Olivares, herido por una bala, había muerto debido a un segundo impacto. Sólo quedaban vivos algunos jóvenes de la escolta que fueron testigos del último combate del «compañero presidente».

Allende cayó herido mortalmente a las 14.15 horas. Quince minutos después, las tropas asaltantes encontraron su cuerpo en un sofá de su despacho, envuelto en la bandera chilena. A su lado estaba el fusil con que defendió hasta el último minuto el cargo que «el pueblo me ha dado».

El reino del terror

La primera promesa de la Junta de comandantes que asumió el poder el día 11 de septiembre fue, en palabras del general Gustavo Leigh, jefe de la Fuerza Aérea, «que el marxismo será extirpado hasta las últimas consecuencias». En ese momento, a las 9 de la noche del día 11 de septiembre, Santiago permanecía bajo un aterrador toque de queda; una desesperada resistencia continuaba aún en algunas fábricas y barriadas del cinturón industrial de la capital. El Estadio Nacional y otros campos deportivos se habían transformado en improvisados campos de concentración donde se demostraba en qué consistían las «últimas consecuencias» del general Leigh.

Unas 125.000 personas pasaron en los tres meses siguientes al golpe militar por el Estadio Nacional, el Estadio Chile y diversos centros del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea convertidos en campos de tortura. El número de muertos en esos primeros meses del terror llegó, según estimaciones moderadas, a unos 15.000 y desaparecieron entonces y en la represión que siguió después unas 1.500 personas. Es decir, el 1,25 por ciento de los chilenos conocieron de primera mano la represión del nuevo régimen.

En los meses siguientes al golpe militar, el general Pinochet, transformado ya en el hombre fuerte de la dictadura, organizó con ayuda norteamericana y la asesoría del criminal

nazi Walter Rauch una versión criolla de la Gestapo, la DINA, llamada años después CNI e integrada inicialmente por militantes de Patria y Libertad preparados por la policía brasileña. La DINA o CNI, controlada directamente por el general Pinochet, consolidó un régimen de terror que paralizó durante años a la sociedad civil y a los propios mandos del Ejército, severamente vigilados por el celoso jefe de Estado del régimen.

Los métodos de la DINA, conocidos en diversos informes de organismos defensores de los Derechos Humanos, repitieron las tácticas de la Gestapo. Miles de personas fueron secuestradas y conducidas a casas habilitadas como centros secretos de tortura. Muchos de ellos desaparecieron y otros fueron conducidos a campos de concentración situados en puntos remotos del país. Isla Dawson, Chacabuco y Tejas Verdes fueron algunos de estos centros de los primeros días. Después prevalecieron las «casas clandestinas» como Villa Grimaldi, donde se practicó la represión y el tormento selectivo a quienes se mantenían en el país organizando alguna resistencia al nuevo régimen.

La dictadura de Pinochet ha significado para Chile el éxodo de cerca de un millón de personas; es decir, el diez por ciento de la población en un país de diez millones de habitantes.

La guerra del Yom Kippur

Cuarto conflicto árabe-israelí

Miguel Ángel Bastenier,
periodista

Considerado como la primera guerra electrónica de la historia, el conflicto del Yom Kippur supuso la rehabilitación del combatiente árabe, cuyo prestigio había quedado muy debilitado tras el enfrentamiento de 1967,

y cumplió su objetivo de obligar a los israelíes a aceptar el reinicio de las negociaciones de paz en Oriente Medio. En la fotografía, una batería israelí dispara sobre las posiciones sirias en el Golán.

A las dos de la tarde del 6 de octubre de 1973, mientras el pueblo israelí se hallaba recogido en el ayuno y la meditación en celebración del Yom Kippur (Día de la Expiación), varios miles de soldados egipcios, provistos de artillería, misiles y morteros, atravesaban el Canal de Suez e iniciaban un violento ataque contra las defensas israelíes. Al mismo tiempo, las fuerzas sirias, apoyadas por más de 800 tanques, copaban el Monte Hermon y cargaban contra las posiciones judías en el Golán. Se iniciaba así la guerra del Yom Kippur, que se prolongaría durante casi tres semanas y que sería considerada como la primera guerra electrónica de la historia.



Fuerzas en presencia

El total de las fuerzas armadas de Egipto y Siria en estado de alerta el 6 de octubre de 1973 era de unos 750.000 hombres, aproximadamente el triple de los efectivos israelíes, reservistas incluidos. Sin embargo, eso no significa que en una guerra limitada como la del Yom Kippur, una y otra parte llegaran a emplear más que una fracción de sus recursos.

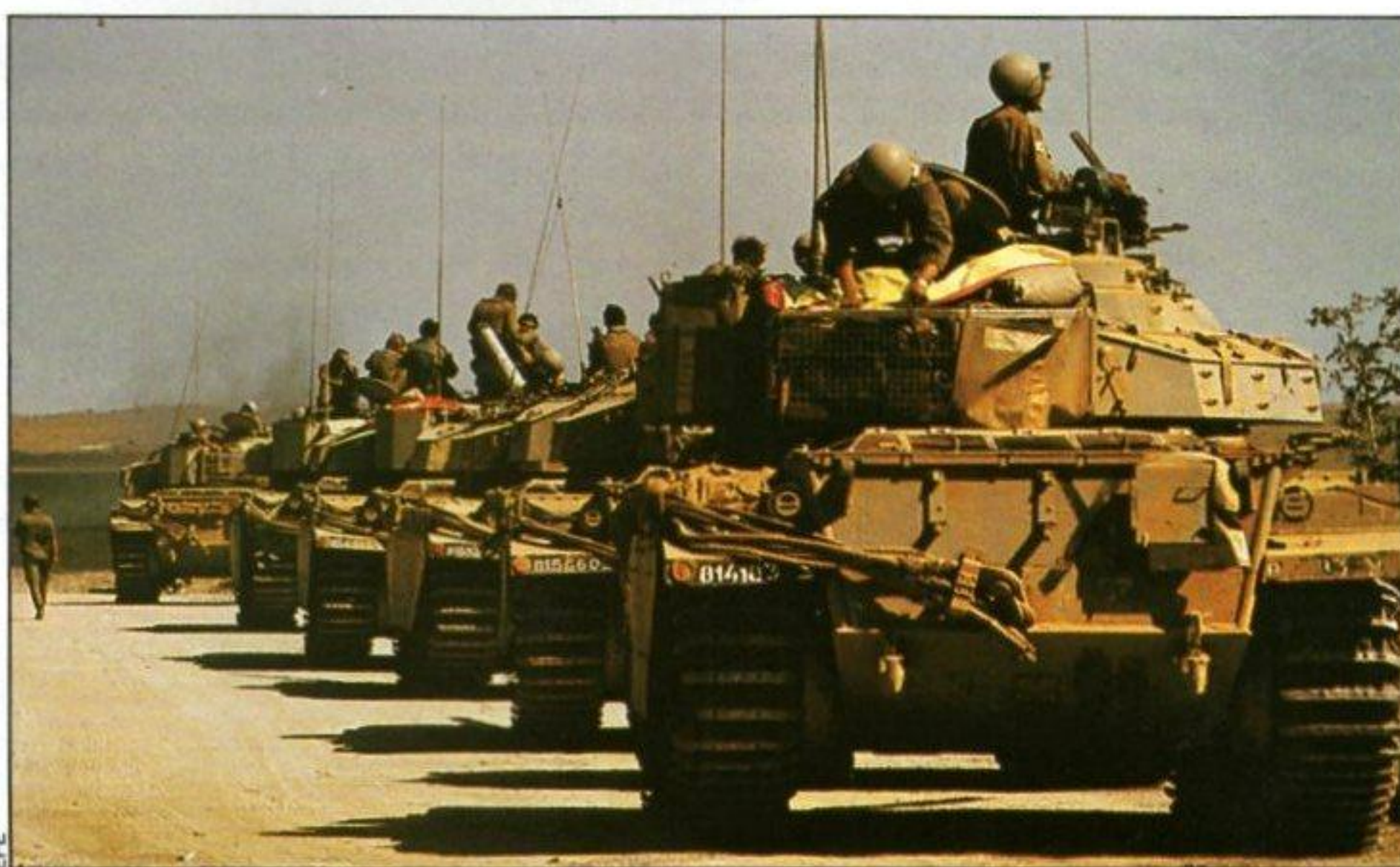
Egipto sostuvo la guerra del Sinaí con un máximo de 80.000 hombres, incluyendo la aviación y las reservas en el lado africano del canal. El Cairo tenía desplegadas frente a la vía de agua cinco divisiones de infantería, tres mixtas de blindados e infantes y 22 brigadas de artillería, comandos y paracaidistas. La aviación de combate estaba formada por 550 aparatos de primera línea, en su mayoría Mig-21 soviéticos y Mirage franceses, más unos 2.000 blindados, entre ellos los T-54 y T-62 suministrados por Moscú, 2.300 piezas de artillería de todos los calibres y 160 baterías de Sam-2 y Sam-3.

Siria movilizó un contingente similar de tropas, con una punta de lanza en el Golán de dos divisiones acorazadas y tres de infantería en la reserva. Damasco contaba con 380 aparatos, todos ellos Mig y Sukhoi soviéticos, 1.200 blindados también rusos, más de mil piezas artilleras y de 40 a 50 baterías de los Sam en torno a la propia capital.

Israel llegó a emplear unos 100.000 soldados repartidos en proporciones similares en los dos frentes, Suez y el Golán, con un apoyo de 450 aviones de caza y bombardeo, cuya espina dorsal la constituían los Phantom norteamericanos, 1.700 tanques y 600 piezas de artillería. Inicialmente, Israel tenía en el Sinaí tan sólo una quincena de bunkers con una dotación de apenas unas docenas de hombres cada uno de ellos, un puñado de tanques y siete brigadas de artillería como primer apoyo a espaldas de los defensores de la llamada línea Bar-Lev. En el centro de la península, apostada en los pasos de Mitla y Gidi, se hallaba una división blindada con 200 tanques. En el Golán los israelíes tenían otra división acorazada tras la primera línea de 17 bunkers, apoyados por una dotación de blindados, dos batallones de infantería y tres baterías de artillería.



Magnum/Zardoya



EFE

Los árabes desencadenan el ataque

Las dos grandes religiones mono-teístas del Oriente Medio se habían recogido sobre sí mismas en ayuno y meditación. Para una, la israelí, era el Día de la Expiación, para la otra, la musulmana, una más de las largas jornadas en las que el fiel olvida todas las querellas terrenales a la espera de que caiga el sol. Los soldados israelíes restringían al mínimo el servicio, seguros de su fuerza, con ignorante desprecio del enemigo, acantonados en la arena y protegidos por el agua; los soldados egipcios observaban sus deberes religiosos con el vago presentimiento de que aquel no era un día como los demás. Pero, nadie sabía con certeza que la guerra del Ramadán islámico, el combate del Yom Kippur israelí, comenzaría aquel 6 de octubre de 1973 cuando a las dos de la tarde la primera oleada de soldados egipcios se lanzara a través del Canal de Suez y las fuerzas sirias irrumpieran en la altiplanicie del Golán.

La diáfana monotonía de un cielo radiante estalló en mil partículas rasgadas por el estampido de 4.000 piezas de artillería, lanzacohetes y morteros, mientras más de 300 aviones de guerra bombardeaban las posiciones enemigas Sinaí adentro. Quince minutos más tarde, 8.000 soldados habían cruzado en balsas de goma la estrecha cinta de agua y tomaban posiciones en la orilla asiática del Canal. A las tres de la tarde, elementos del Segundo Ejército egipcio tomaban la primera de las posiciones israelíes en la llamada línea Bar-Lev, al tiempo que las fuerzas de ingenieros enfilaban sus poderosos cañones contra la muralla de arena que los judíos habían erigido en su lado del Canal, abriendo anchos senderos por los que se adentraría la infantería egipcia.

Sorpresa y desconcierto israelí

La sorpresa había sido total. A las 19.30, las primeras formaciones de dos ejércitos árabes se habían estable-

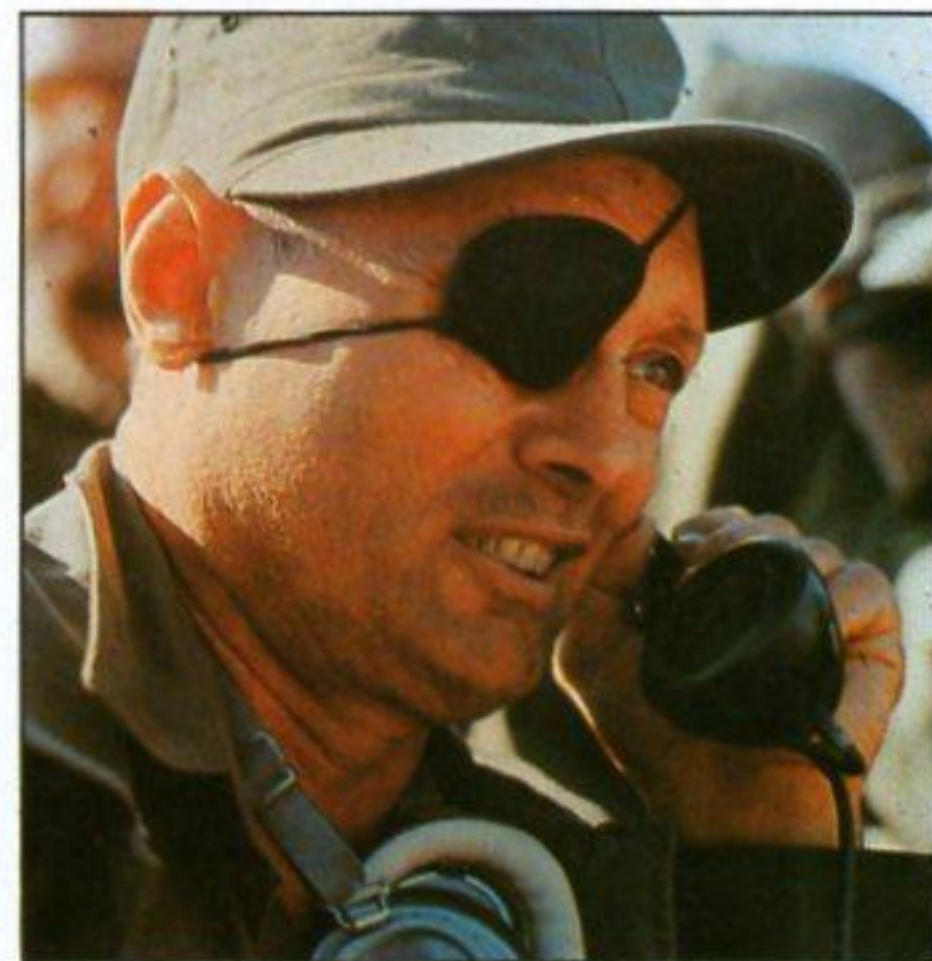


Topham - Piro Foto

cido en la orilla oriental de la cinta de Suez a lo largo de un frente de 170 kilómetros, y en las horas siguientes 80.000 hombres habían penetrado en doce oleadas hasta una profundidad de 3 a 4 kilómetros en tierra ocupada, dejando atrás la orgullosa e inútil línea de defensa de los blocaos israelíes. Pero, antes de que concluyera el día otras sorpresas no menos desagradables iban a caer sobre los estupefactos soldados israelíes. Ante el desencadenamiento de la ofensiva egipcia, la aviación de Tel-Aviv, segura de su superioridad aérea, se había lanzado contra puentes y blindados para encontrarse con que una formidable barrera de misiles soviéticos *Sam-2* y *Sam-3* ponía altísimo precio en aparatos derribados al ataque sobre las posiciones enemigas. Al mismo tiempo, el primer contrataque de los blindados israelíes hallaba ante sí una barrera no menos formidable de nuevas armas antitanque que los infantes egipcios manejaban con una destreza que sólo podía deberse al más concienzudo entrena-

miento. Los cohetes *Sagger* y *Strella*, disparados manualmente por los soldados árabes, detenían la contraofensiva a unos cientos de metros de la primera línea egipcia. Israel ya sabía al caer la noche lo que era una retirada.

Al mismo tiempo, en el norte, tropas sirias transportadas en helicóptero tomaban en sólo minutos la posición hebrea del Monte Hermón, que oteaba la altiplanicie del Golán, sin que sus defensores pudieran hacer otra cosa que encerrarse en sus bunkers supuestamente inexpugnables y rendirse o perecer en ellos cuando los árabes volaron las únicas vías de escape. Mientras un formidable *barrage* de artillería ablandaba las posiciones enemigas a lo largo de toda la línea, 800 tanques sirios iniciaban una cabalgada que se movía con el estruendo de un terremoto. El frente israelí se rompía en dos sectores: en el norte, donde una fuerza de 200 blindados irrumpía hacia Quneitra, la capital de la zona, y en el centro-sur hacia Rafi, donde fuerzas sirias con 600 tanques abrían una bre-



En la página anterior, arriba, un misil egipcio del tipo Sam, capturado por los israelíes en el Sinaí; abajo, una compañía de blindados israelíes se dirige al frente de guerra en el Golán, donde se desarrolló la batalla de tanques más violenta de la historia.

En esta página, arriba, tropas egipcias cruzan un puente sobre el Canal de Suez, el 8 de octubre de 1973, dos días después de haberse iniciado la guerra; abajo, el ministro de Defensa israelí Moshe Dayan, que se vio sorprendido por el ataque del 6 de octubre.

Anwar al-Sadat, el hombre del 6 de octubre

Anwar al-Sadat, el hijo de campesinos del bajo Nilo que a la muerte del presidente Gamal Abdel Nasser de Egipto (28 de septiembre de 1970) era la insignificancia hecha vicepresidente, ha sido uno de los grandes «tapados» de la historia, hasta su gran revelación al mundo el 6 de octubre de 1973, cuando las tropas egipcias, bajo su inmediata dirección política y militar, destrozaron las defensas israelíes en el canal de Suez: la vía de agua que el ministro de Defensa israelí del momento, el formidable Moshe Dayan, había calificado, antes de la travesía egipcia, como «el mejor foso antitanque del mundo».

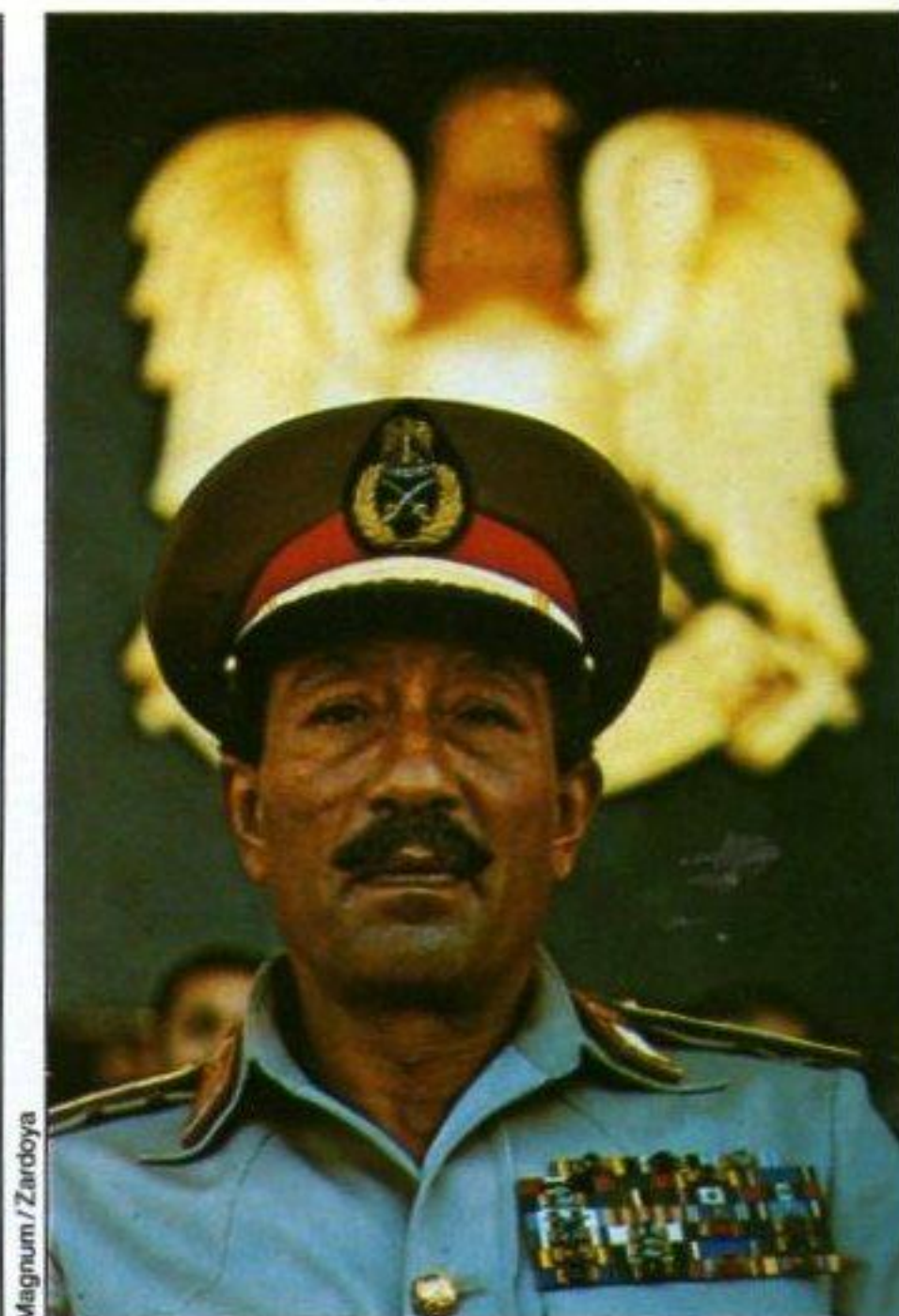
Sadat fue ratificado en la presidencia, que había asumido interinamente a la muerte de Nasser, como una figura de compromiso entre las facciones herederas del nasserismo, en la creencia de que al no poder prevalecer una u otra lo mejor era que «no hubiera» presidente hasta tanto se resolviera la pugna. Ese Sadat, astuto, con alma de fellagha, que a edad adulta había descubierto la golosa concupiscencia del poder, fue el que sorprendió a todos con la desarticulación de un supuesto complot radical encabezado por Ali Sabri en 1971 y a partir de entonces comenzó a situar a sus hombres en el organigrama de la gran apertura de Egipto al Occidente. El presidente Sadat había llegado a la conclusión solitaria de que la guerra de Oriente Medio sólo se podía ganar en Washington; de que únicamente una solución patrocinada por Estados Unidos podía obligar a Israel a una paz que no fuera desventajosa para los árabes. Por ello hacía un primer guiño inadvertido a Washington con la expulsión de los asesores soviéticos en 1971, poco después de haber firmado un tratado de amistad con Moscú, que al decir de los estrategas occidentales del momento había convertido a Egipto poco menos que en un satélite del Kremlin.

Ante la pasividad de Estados Unidos, presidido por un Nixon al término de su primer mandato y poco deseoso de complicarse la reelección metiendo la mano en el avispero de Oriente Medio, Sadat, tras anunciar de un año para otro la inevitable guerra de reconquista contra Israel, y granjearse la reputación del pastor que anuncia sin verosimilitud la ine-

xorable llegada del lobo, decidió que lo único que podía obligar a Washington a la intervención era una guerra limitada en la que quedara claro que Egipto no aspiraba a lo imposible: derrotar a Israel en toda línea, sino simplemente arrojarle de la vía de agua de Suez. Tras el susto breve de la guerra y demostrada la imposibilidad israelí de arrojar a los egipcios del lado oriental del canal, se impondría la negociación en la que Estados Unidos tendría el acicate para presionar a Israel del futuro alineamiento de El Cairo con el mundo occidental. Esta gran visión se cumpliría en lo esencial, aunque la miopía de los dirigentes israelíes dejara en simple paz bilateral lo que hubiera podido ser un principio de solución negociada en la zona.

A este fin Sadat dio al mundo su segunda gran sorpresa con el viaje a Jerusalén en 1977, donde inició con el primer ministro israelí Menájem Beguin el proceso negociador que conduciría a la firma de los acuerdos de Camp David dos años más tarde, bajo los auspicios del presidente norteamericano James Carter. El presidente egipcio, de quien Nasser dijo equivocadamente un día que no le constaba que hubiera tenido jamás una sola idea, fue un hombre de grandes y ambiciosos esquemas, que nunca resultaron plenamente conseguidos, pero que revelaban una concepción mundial de la política y de la posición de Egipto en el mundo. Aunque no parece cierto que Sadat llevara a su país deliberadamente hacia un nacionalismo egipcio en contraposición a su bandera de líder del mundo árabe, lo cierto es que la paz con Israel reforzó la identidad nacional del pueblo del Nilo, alejándolo, por fuerza sólo momentáneamente, de su rol histórico. Decir que Sadat traicionó al pueblo palestino desligando a Egipto de su lucha por sus derechos nacionales tampoco sería exacto, si entendemos que la gran visión de Sadat de un Israel que compartiera el arco de su salto parabólico al futuro fracasó por falta de interlocutor válido en Tel-Aviv.

El 6 de octubre de 1981, día en que se conmemoraba el octavo aniversario de la guerra del Yom Kippur, Sadat fue asesinado por un comando extremista musulmán durante un desfile militar.



Sobre estas líneas, el presidente egipcio Anwar al-Sadat, que el 6 de octubre de 1973 se reveló al mundo como un hábil político y mejor estratega militar, al desencadenar una guerra en la que nadie creía.

En la página siguiente, un camión israelí avanza entre las ruinas de dos tanques en el frente del Golán, cuando las tropas sirias ya habían comenzado a perder posiciones tras el contrataque judío.

cha hacia el puente de las Hijas de Jacob, sobre el Jordán, llave del territorio nacional judío. Una única división de blindados israelíes se hallaba en posición para detener la marea árabe y, al caer la noche, diezmada de norte a sur, reagrupaba fuerzas mientras el mando decidía que había que utilizar toda la aviación disponible en el frente sirio, para ocuparse más tarde del contrataque por Suez.

El domingo 7 de octubre, las fuerzas egipcias consolidaban sus posiciones a lo largo de la vía de agua formando una muralla de fuego, protegida en lo alto por la barrera de misiles en la orilla africana del país, que impedía a la aviación israelí que destruyera sus fortificaciones. Una comunicación del jefe de la fuerza aérea judía, general Peled, indicando a sus pilotos que no se acercaran a menos de 30 kilómetros del canal, era correctamente interpretada en El Cairo como la señal de que su estrategia estaba dando resultado. El lunes, se producía el primer contrataque terrestre israelí con unos 150 blindados que había podido reunir el general Mendler, jefe de la fuerza acorazada apostada en el Sinaí, pero una vez más los cohetes de fabricación soviética detenían al enemigo y, el martes 9, la 190 brigada mandada por el coronel Yaguri era totalmente aniquilada. Al anochecer, las fuerzas egipcias dominaban toda la orilla oriental hasta



una profundidad de entre 10 y 15 kilómetros e Israel llegaba a la incómoda conclusión de que ya no podía, como en guerras anteriores, librar dos o tres batallas a la vez contra los ejércitos árabes.

La batalla del Golán

En la parte más septentrional del Golán, en la ruta de Quneitra, la batalla estaba todavía indecisa. La séptima brigada acorazada israelí, que mandaba el coronel Avigdor Janos, se retiraba con apenas una fuerza de 40 blindados, mientras en la noche del día 8 los sirios lanzaban otros 600 tanques a la lucha, la mayoría de ellos los T-62 soviéticos, superiores a los *Sherman* israelíes. El día 9, la mayor parte de las reservas de Tel-Aviv se encaminaba hacia el Golán, al tiempo que el general Peled lanzaba una gran ofensiva aérea sobre territorio sirio. Objetivos civiles y militares en Damasco, las centrales eléctricas de Homs, los depósitos de combustible, la terminal petrolera de Baniyas y toda la infraestructura militar e industrial del país fueron sometidos a la destrucción desde el aire. Aunque las pérdidas en aviones y pilotos fueron graves, la ofensiva sirvió, por añadidura, para que el cinturón de misiles sirio fuera retirado de primera línea para reforzar las defensas de Damasco, abriendo nuevas posibilidades a la aviación israelí de dar apoyo aéreo a su

contrataque en la altiplanicie. En la madrugada del 10, una nueva división blindada hebrea se había incorporado a la lucha y expulsaba a los sirios de las cercanías de Rafi, repelió la vanguardia enemiga que había llegado a luchar en los suburbios de Quneitra y, al atardecer, a los cuatro días de que se desencadenara la ofensiva siria, ni uno sólo de los blindados árabes se hallaba al oeste de la «línea púrpura», la demarcación establecida al oriente del Golán como nueva frontera militar con Siria en la guerra de 1967. Según fuentes israelíes, más de 800 blindados árabes habían sido destruidos en los combates al costo de algo más de 200 tanques propios. Damasco iniciaba entonces una áspera batalla defensiva con la esperanza de que, si no reconquistaba territorio, las pérdidas que infligiera a las fuerzas atacantes resultarían suficiente castigo para no dar la guerra por saldada.

Suministros bélicos y mediación internacional

Aun sin dar pleno crédito al balance de pérdidas ocasionado y sufrido, según fuentes de ambos contendientes, era cierto que la destrucción de material había sido formidable, que ninguna batalla de tanques anterior, como la histórica de El Alamein en la Segunda Guerra Mundial, con su modesta con-

gratificación, había visto nada parecido a la destrucción que sembraba las arenas del Sinaí y, sobre todo, la tierra enjuta del Golán. A este ritmo la guerra concluiría en unos días por simple extenuamiento de reservas a uno y otro lado. Pero los respectivos patronos de los contendientes, Estados Unidos, para Israel, y la Unión Soviética, para los árabes, se encargarían de que el fuego mortal no pudiera extinguirse.

El 9 de octubre, los soviéticos habían dado comienzo a un puente aéreo de suministros bélicos que, aunque siempre inferior a las peticiones árabes, llevaba en los gigantescos *Antonov-12* tanques, cañones y aviones en piezas a la base siria de Palmira, cerca de Damasco, mientras los *Antonov-22* de mayor alcance volaban hasta El Cairo. El día 12, el tránsito llegaba a su punto máximo con una frecuencia de aterrizaje de 18 aparatos a la hora. El promedio de vuelos soviéticos sería de 30 al día entre el 9 y el 22 de octubre.

Por parte norteamericana, el presidente Nixon había autorizado desde el día 8 que los aviones comerciales israelíes de *El Al* recogieran munición y piezas de repuesto en las bases americanas de Europa y de Estados Unidos, y el día 11 decidía compensar y aun sobrepasar las necesidades del arsenal israelí con otro puente aéreo no menos formidable. Así, los gigantescos transportes C-130 y C-5 empeza-



Sobre estas líneas, la
primer ministro de
Israel, Golda Meir;
en ambas páginas,

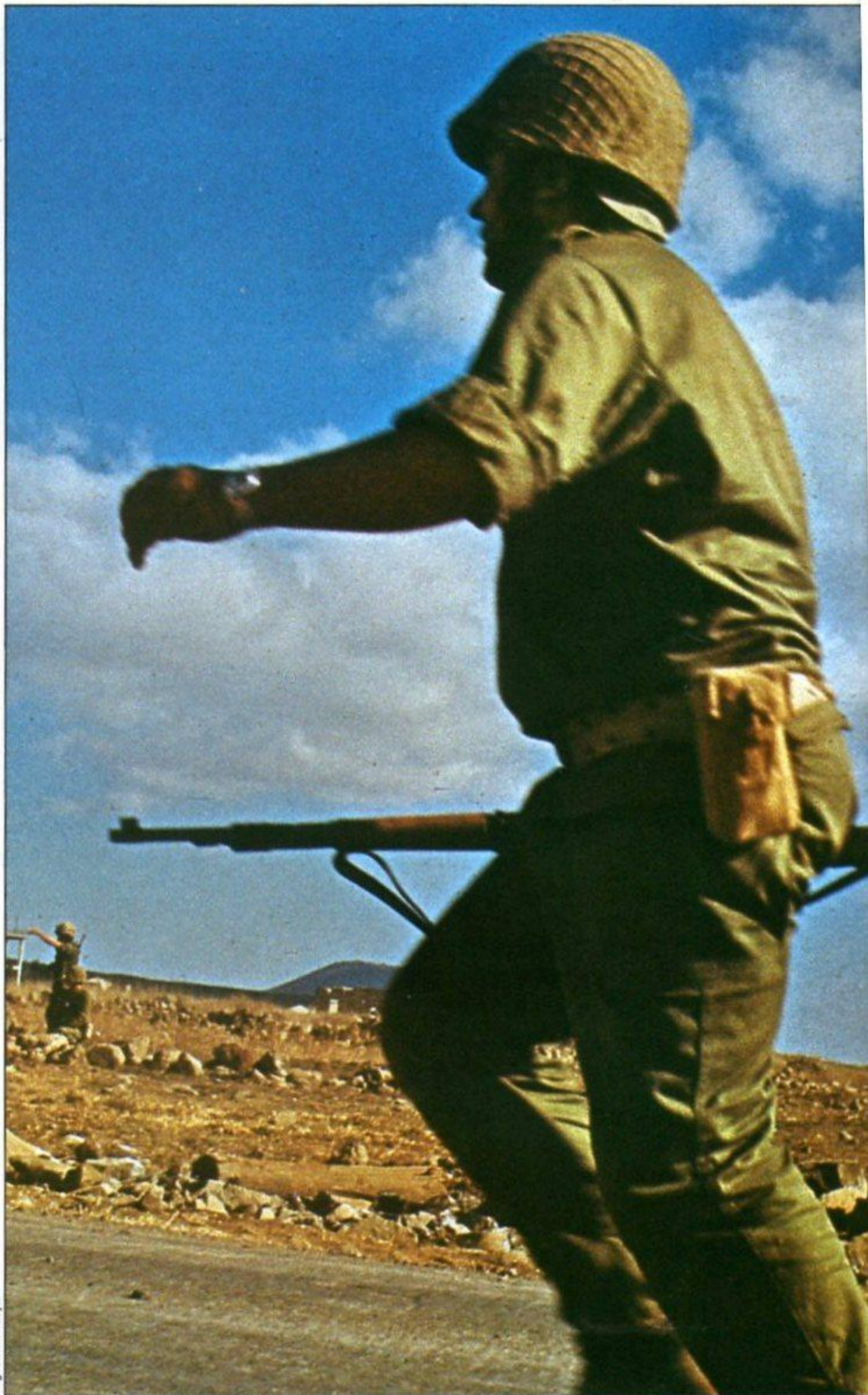
soldados israelíes en
los Altos del Golán;
en la página siguiente,
el general David Elazar.

ron a despegar en grandes bandadas desde aeropuertos norteamericanos, para hacer escala en las islas Azores, por cortesía portuguesa, y en España, sin conocimiento de las autoridades españolas, suministrando a Israel un volumen de 22.000 toneladas de equipo, valorado en 856 millones de dólares, sin contar remesas posteriores, que llegarían por vía marítima, cuando ya no había temor de colapso militar en Tel-Aviv.

La guerra en el frente político apenas le iba a la zaga a la conflagración militar. Los días 8 y 9 de octubre, se había reunido el Consejo de Seguridad en brevísimas sesiones, en las que Washington había solicitado fútilmente el cese el fuego y la retirada de los contendientes a las líneas anteriores al día 6, mientras que franceses y británicos, más próximos a los árabes, pedían el alto el fuego *in situ*. Pero ni sirios ni egipcios podían aceptar la interrupción de una lucha que entendían como la de la reconquista de su honor militar. El delegado soviético, Jacob Malik, más contundente que ninguno, aderezaba la petición de cese de hostilidades con la exigencia de que Israel se retirara a las líneas anteriores a 1967, en idéntico ejercicio de formulismo sin esperanzas. Paralizado por el *impasse* soviético-norteamericano, el Consejo no volvería a reunirse para nada práctico hasta el 22 de octubre, cuando las modalidades del armisticio ya se entrevieran por las respectivas posiciones de los ejércitos en lucha.

Las fuerzas israelíes amenazan Damasco

Los días que mediaron entre el 10 y el 14 de octubre registraron los primeros y graves roces entre los mandos de Egipto y de Siria. Durante esas



Magnum/Zardoya

jornadas las fuerzas egipcias se limitaron a rechazar los ataques de los israelíes, en lo que se denominaba en El Cairo «una pausa operacional», mientras que los sirios pedían cada vez con mayor insistencia una ofensiva decidida para aliviar la presión creciente que sentían sus fuerzas en el eje Quneitra-Damasco. Será siempre un tema a debatir qué habría pasado si los dos ejércitos egipcios del Sinaí hubieran atacado hacia los pasos de Mitla y Giddi, en el centro de la península, cuando Israel cargaba el peso de su acción en el

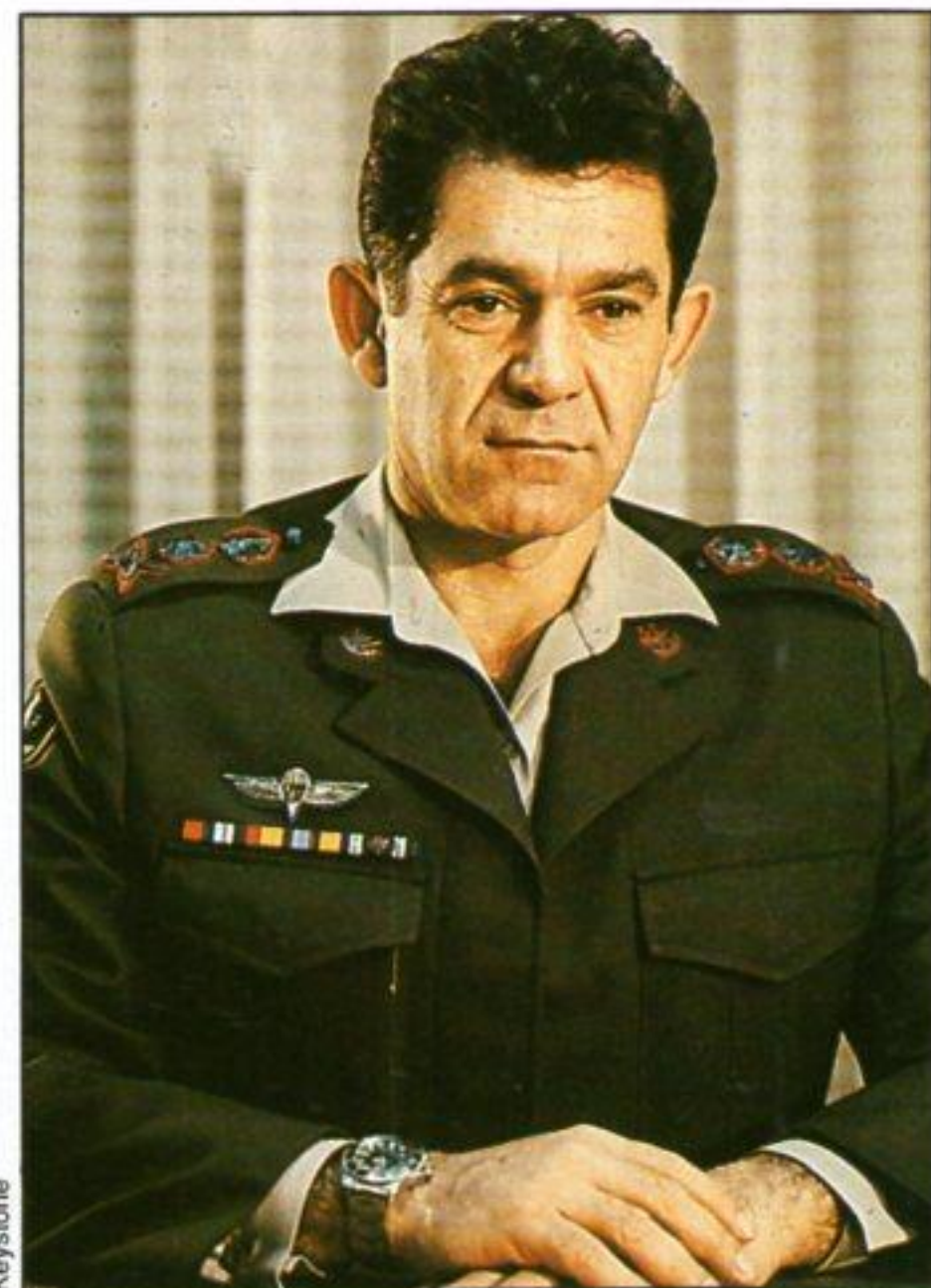
Golán y casi toda su fuerza aérea machacaba a los sirios. Lo cierto es que El Cairo no osó aventurarse más allá de su cortina protectora de misiles por el temor, quizá justificado, de que en campo abierto ni siquiera con la amplia superioridad del número sus fuerzas tenían grandes probabilidades frente a los israelíes.

Desde el día 11 la presión israelí había roto las líneas sirias en dirección a su capital y, aunque las tropas de Damasco se replegaban en buen orden, luchando por cada palmo de terreno, la



situación se deterioraba rápidamente. Las peticiones de apoyo a Irak habían obtenido la promesa de cuatro escuadrones de cazabombarderos, pero éstos aún no habían llegado y, mientras Marruecos enviaba en días siguientes una brigada acorazada a la zona sur de los enfrentamientos, el rey Hussein de Jordania alegaba que no podía abrir un nuevo frente en el Jordán, porque carecía de adecuada defensa aérea y se exponía a una masacre. El día 13, las imprecaciones sirias resonaban en todo el mundo árabe, bajo los efectos del

reiterado bombardeo aéreo de sus ciudades, y el 14, los blindados egipcios, sin demasiada convicción, lanzaban su ofensiva dejando a la infantería para que custodiara la extensa pero delgada cabeza de puente a sus espaldas. Ese día, por fin, llegaban las brigadas acorazadas iraquíes al frente sur del Golán y el monarca jordano resolvía el dilema de la no intervención, cuando ya Damasco se hallaba en peligro, enviando una brigada de tanques a la zona norte, por la que avanzaban con mayor profundidad los blindados israelíes.



Keystone

El ataque egipcio se disponía en cuatro líneas de penetración en la tentativa de avanzar unos 30 kilómetros hasta las desembocaduras occidentales de los pasos y conquistar una carretera lateral, construida por los israelíes, que cerraría el camino a los refuerzos apostados en el Sinaí profundo. Pero una vez que los tanques árabes abandonaron su refugio antiaéreo, la aviación israelí, que ya había hecho lo esencial de su labor en el Golán, pudo triturar a la avanzada egipcia. Por añadidura, para reforzar la ofensiva la 21 división acorazada, que se hallaba en la retaguardia del Segundo Ejército, y parte de la cuarta división, que desempeñaba idéntico papel tras el Tercer Ejército, cruzaban el Canal dejando a Egipto sin reserva estratégica a espaldas de sus posiciones en el Sinaí. Tras un avance máximo de unos 15 kilómetros, los dos ejércitos egipcios volvían a sus puntos de partida al anochecer, después de haber sufrido devastadoras pérdidas. Ya sólo quedaba sentarse a esperar que Israel se cansara de jugar al frontón con el muro árabe rápidamente reconstituido.

El día 18, las fuerzas israelíes dominaban la llanura que se extendía hasta Damasco, a unos 35 kilómetros de la primera línea hebrea. La penetración de los blindados había dibujado un saliente en la zona norte del Golán, como si la «línea púrpura» hubiera quedado súbitamente «embarazada» por el ardor de los atacantes. El día 21, finalmente, tropas transportadas por helicóptero —como las sirias en las primeras horas de la guerra— recobraban el Monte Hermon, con lo que las líneas tendían a estabilizarse, manteniéndose tan sólo a partir de entonces duelos de artillería, actividad aérea decreciente y algunos contrataques cada

Sorpresa en el bando israelí

A las 4 de la madrugada del día 6, la actividad de la radio enemiga no dejaba duda de que el ataque era sólo cuestión de horas, suponiéndose que se produciría a las 6 de la tarde. A las 8 de la mañana, Golda Meir convocaba a los miembros más importantes del gabinete, en cuya reunión el jefe de Estado Mayor, general David Elazar, pedía la movilización general, a lo que se negaba el ministro de Defensa, Moshe Dayan, argumentando que la inferioridad aérea de los árabes excluía cualquier sorpresa desagradable. La primera ministra Golda Meir tampoco autorizaba una salida preventiva de la aviación, como pedía Elazar, porque quería que los árabes atacaran los primeros por razones de efecto político. Ante la presión de los generales, Meir y Dayan finalmente accedían a que las unidades blindadas se dirigieran sin demora a primera línea, pero rechazaban la necesidad de llamar a filas a los reservistas. Los blindados no deberían desplegarse en sus posiciones avanzadas antes de las 4 de la tarde, mientras la infantería se preparaba para hacer frente a lo que se suponía que serían intentos aislados de cruzar el canal.

A las 2 de la tarde, comenzaba una reunión de emergencia del gabinete para seguir con anticipación los últimos preparativos egipcios, si éstos efectivamente llegaban a la ruptura de hostilidades, como aún se dudaba. Mientras estaban llegando los ministros de Golda Meir, un ayuda de campo entró en la sala para susurrar un urgente mensaje a la señora Meir. La travesía del canal había comenzado.

La primera noción de que los árabes preparaban una acción militar en el Sinaí y en menor medida en el Golán la tuvieron los israelíes el 5 de octubre, en la víspera de la batalla. El Estado Mayor, incapaz de dar crédito a lo que se le venía encima consintió tan sólo que se declarara el estado de alerta C, que advertía a las fuerzas en presencia que se prepararan para el combate, pero no contemplaba la movilización general.

En esta página, armas francesas llegan a Arabia Saudita, el 17 de octubre de 1973.

En la página siguiente, arriba, Sharon y Dayan

cruzan el Canal de Suez, el 15 de octubre de 1973; abajo, fuerzas israelíes se distraen a la espera de órdenes para continuar el avance en dirección a Damasco.



vez menos virulentos por parte siria. Es materia de especulación qué habría ocurrido de continuar el avance israelí. Los medios políticos y militares de Tel-Aviv dan por descontado que la conquista de Damasco era más que posible, aunque no se niega que el costo humano habría sido mucho mayor que el experimentado hasta el momento. Los árabes, por el contrario, argumentaban que la tenaz defensa siria había detenido el avance enemigo, añadiendo observadores privilegiados como el ex-confidente de los presidentes egipcios Nasser y Sadat, Mohamed Heikal, que la conquista de una gran ciudad árabe habría sido un funesto error tanto político como militar. Es difícil determinar la reacción soviética ante esa circunstancia, pero la primera ministra israelí, Golda Meir, no pudo ignorar el riesgo de intervención exterior al no jugárselo todo en su particular «camino de Damasco».

Jugada maestra de Sharon

Desde la finalización de la guerra de 1967, Israel había hecho planes para cruzar el Canal en la eventualidad de una nueva conflagración. El general Ariel «Arik» Sharon, que mandaba una división en la zona sur del Sinaí en la llamada «guerra de los seis días», había seleccionado ya en 1968 una estrecha franja de terreno entre la vía de agua y la parte norte del Gran Lago Amargo, que interrumpía abreviando el trazado del canal, como lugar idóneo para llevar la guerra al corazón de la tierra egipcia. Para facilitar las cosas, el Ejército había aplanado dos caminos paralelos a la vía de Suez y establecido

una especie de «aparcamiento» de blindados de varias hectáreas de extensión protegido por un muro de arena. Apenas producida la travesía del Canal el 6 de octubre, Sharon había solicitado permiso para contratacar por aquel punto, pero las fuertes reservas de blindados egipcios en la orilla oeste habían disuadido al mando israelí de correr el riesgo de atacar sin protección aérea y sufrir graves pérdidas. En esas circunstancias, la batalla de carros del día 14, con la retirada de casi dos divisiones egipcias de sus posiciones al oeste del canal, y la fortuita observación realizada por los propios hombres de Sharon de que había un «agujero» en el encaje del Segundo y el Tercer ejército enemigo, precisamente a la altura anteriormente prevista por el general israelí para lanzar el contrataque, pusieron fin a las reservas del jefe de Estado Mayor, David Elazar.

La fuerza con la que Sharon pensaba cruzar el canal era de varios miles de hombres y una dotación de tanques, pero un súbito ataque egipcio a la avanzadilla israelí obligó en la tarde del 15 a distraer una parte del contingente para replicar al asalto de los blindados enemigos, con lo que, sin esperar a la colocación de un puente flotante, el general se decidió a cruzar el lago al frente de 400 hombres, mientras el resto de la fuerza se libraba como podía del acoso egipcio.

En las horas y días siguientes se produciría una de las hazañas bélicas más notables del siglo XX. Las primeras unidades israelíes que cruzaron el Canal sin cobertura aérea pillaron con insuficiente defensa terrestre a las ba-



terías de misiles antiaéreos, que impedían acercarse a la aviación propia, de manera que a medida que iban destruyendo esas baterías agrandaban un «agujero» cada vez mayor en las defensas egipcias para que su fuerza aérea penetrara por la «costura», permitiendo un refuerzo constante de la primera y diminuta cabeza de puente israelí. La magia de la operación consistía en que la infantería abría el camino a la aviación para que ésta, a su vez, cubriera el camino al sucesivo aumento de los efectivos terrestres.

El presidente egipcio, Anwar al-Sadat, informado inicialmente de que un comando israelí sin significado estratégico operaba a «este» lado del canal, se mostró conforme con la creencia de sus generales de que las fuerzas locales

podrían dominar en su momento a los asaltantes y, así, únicamente en la mañana del 17, cuando Israel usaba todo lo que podía flotar para pasar tropas por el Gran Lago Amargo, el mando árabe comprendió que aquello era la contrainvasión. Aún entonces Sadat rechazaba una petición de su jefe de Estado Mayor, general Shazli, de que le autorizara a trasladar 200 blindados de la orilla oriental a la occidental para cerrar la «costura», argumentando que cualquier amago de retirada tendría un pésimo efecto psicológico sobre las tropas que ocupaban el Sinaí. Cuando en la madrugada del día 18 los dos ejércitos egipcios de la península trataban de cerrar aquel «punto suspensivo», la aviación tenía ya un enorme «siete» a su disposición en la línea de misiles

enemiga y su solo peso inclinaba la batalla en favor de Sharon. Ese mismo día, las fuerzas israelíes aceleraban motores en dos puntas de lanza dirigidas simultáneamente hacia el norte, con El Cairo en el horizonte, y el sur, con la ciudad de Suez como punto de destino.

La ONU decreta el «alto el fuego»

La definición de la batalla que uno y otro esperaban, soviéticos y norteamericanos, se dibujaba ya con tal claridad, que la urgencia de reactivar la diplomacia vía ONU acometía por un igual a las dos potencias tutelares. En el caso de Washington, se trataba de moderar la victoria israelí para que Egipto siguiera contando con Estados Unidos a la hora de hablar de paz, y en el de Moscú, para impedir una nueva debacle árabe.

El día 22, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba una resolución, patrocinada conjuntamente por soviéticos y norteamericanos, en la que se pedía la observancia de un alto el fuego *in situ* con carácter inmediato que permitiera aplicar una resolución anterior, la 242, que establecía la necesidad de la retirada israelí de los territorios ocupados en 1967, aunque sin determinar con toda claridad si total o parcialmente. Por añadidura, la resolución 338, emitida ese día, solicitaba de Egipto e Israel el comienzo de negociaciones para el establecimiento de la paz entre ambos Estados.

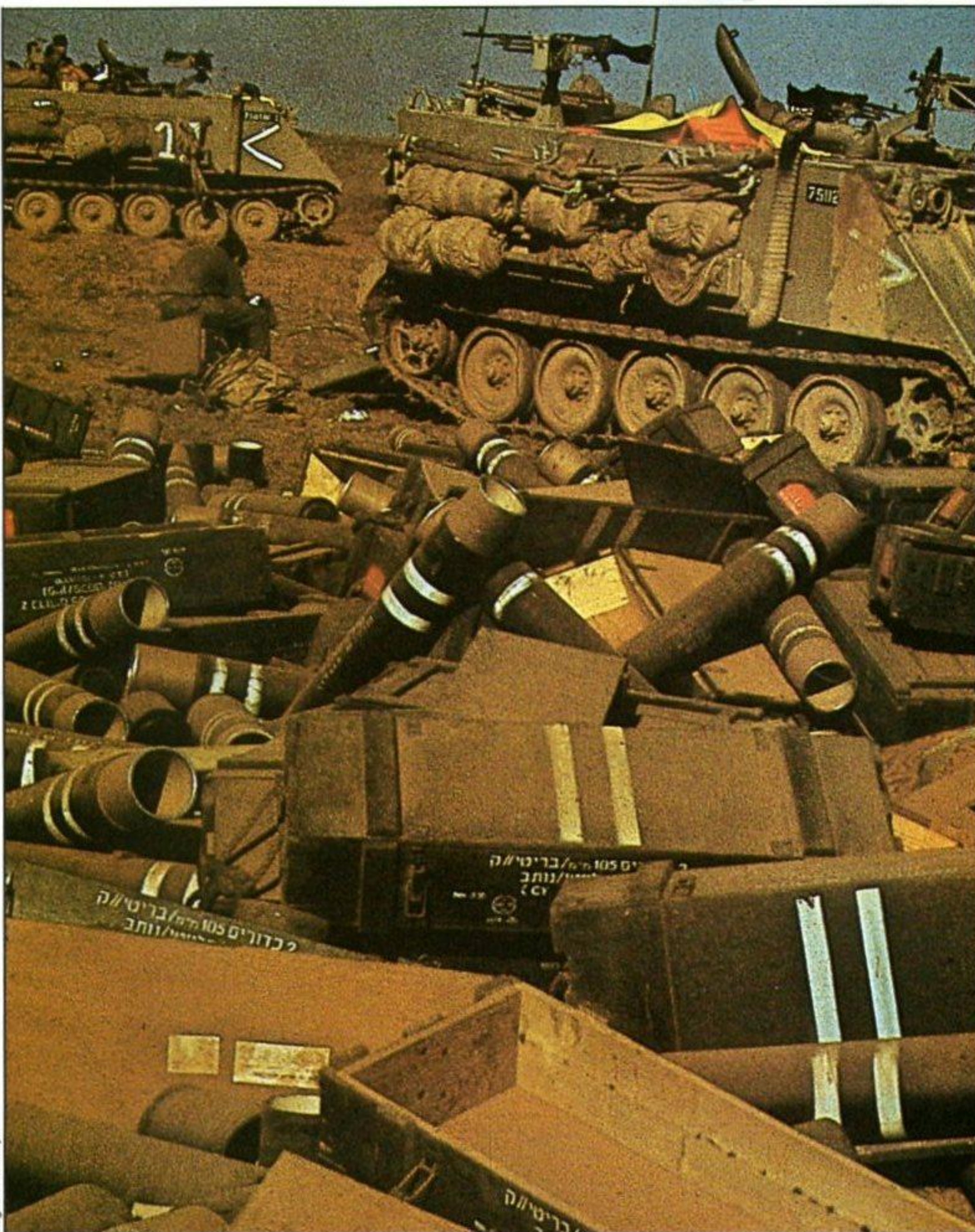
El cumplimiento de las decisiones de la ONU habría detenido la ofensiva israelí hacia el sur apenas a unos kiló-

Las pérdidas

Las pérdidas humanas de la guerra aun siendo mayores para Israel que en ninguna otra confrontación anterior con los árabes y relativamente inferiores en el caso de Egipto y Siria a las del desastre de 1967, fueron inmensamente mayores para una y otra parte, árabes e israelíes, en el apartado del material.

Israel perdió unos 125 aviones, de los cuales unos 20 en combate aéreo y el resto ante las baterías de Sam enemigas. A ello hay que sumar más de 800 blindados, la mayor parte destruidos por los cohetes individuales de la infantería egipcia y siria. En los 18 días de la guerra, los judíos tuvieron cerca de 3.000 muertos y más de 10.000 heridos, contra menos de 700 muertos en la guerra de 1967, mientras que tenían que ceder algo más de 400 prisioneros en el Sinaí y 128 en el Golán, todos ellos tomados en los primeros días de la guerra.

Egipto y Siria perdieron unos 500 aviones, 450 de los cuales en combate aéreo y el resto ante la artillería israelí, a lo que hay que sumar 2.000 blindados. Siria tuvo 6.000 muertos y Egipto cerca de 10.000, con un número muy superior de heridos. Israel tomó más de 8.000 prisioneros egipcios, la mayor parte entre los cercados del Tercer Ejército en la zona sur del canal. Los sirios cedieron unos 1.500 prisioneros. Por añadidura, Siria perdió tres lanchas de protección costera en el único encuentro naval de la guerra.



Magnum / Zardoya



EFE

Arriba, el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger.

En ambas páginas, material utilizado por los israelíes en los Altos del Golán.

En la página siguiente, arriba, el rey Hussein; en el medio, el líder soviético Breznev; abajo, a la izquierda, camiones israelíes avanzan entre el fuego de la artillería siria.

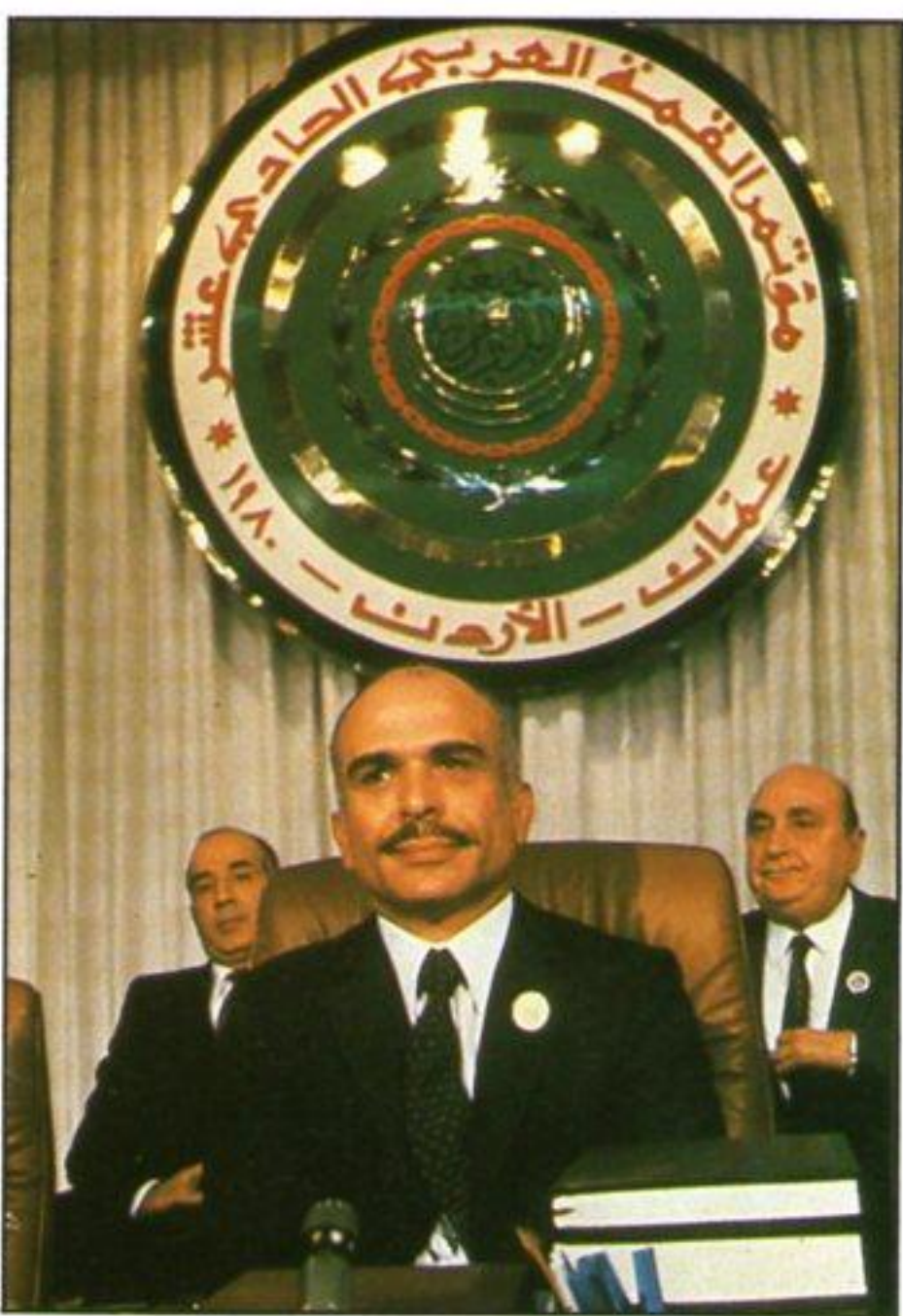
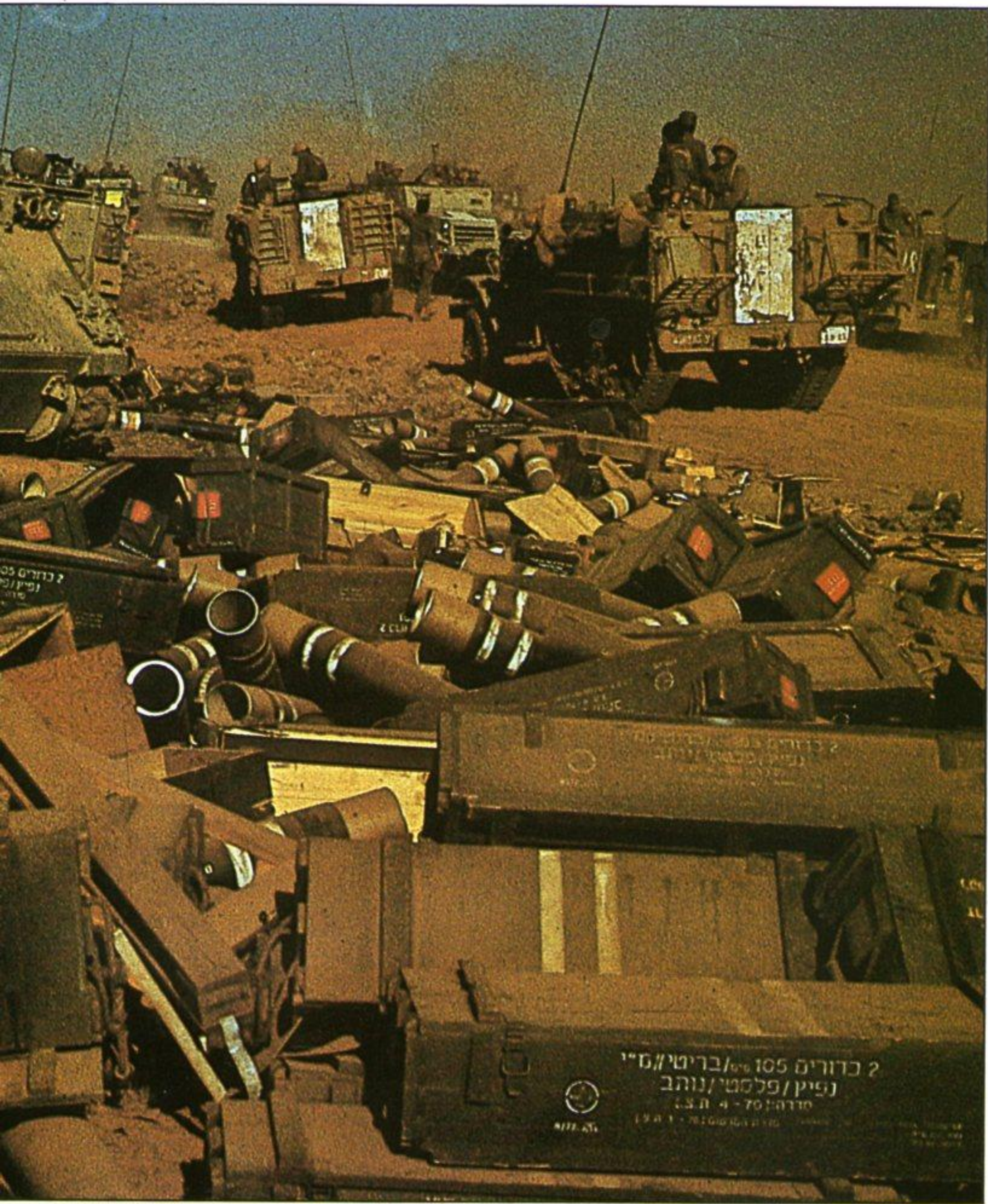
metros del estrangulamiento total de las líneas de suministro de los 25.000 hombres del Tercer Ejército egipcio, entre el Gran Lago Amargo y Suez. Por esa razón los generales israelíes, con la más que probable complicidad de su Gobierno, hicieron caso omiso de la resolución y, mientras los tanques de Sharon apenas progresaban debido a la fuerte resistencia egipcia en la carretera de Suez a Ismailia por el norte, la razzia meridional lo barría todo a su paso hasta llegar ante la base naval de Abadiyeh, en el extremo sur de la orilla occidental del canal, cuya guarnición se rendía en la tarde del 23. A esas horas la trampa en torno al Tercer Ejército estaba cerrada.

Durante todo el día 24, los esfuerzos egipcios por abrir vías de comunicación con los sitiados y el hostigamiento de los emplazamientos israelíes sirvieron de pretexto para que las fuerzas he-

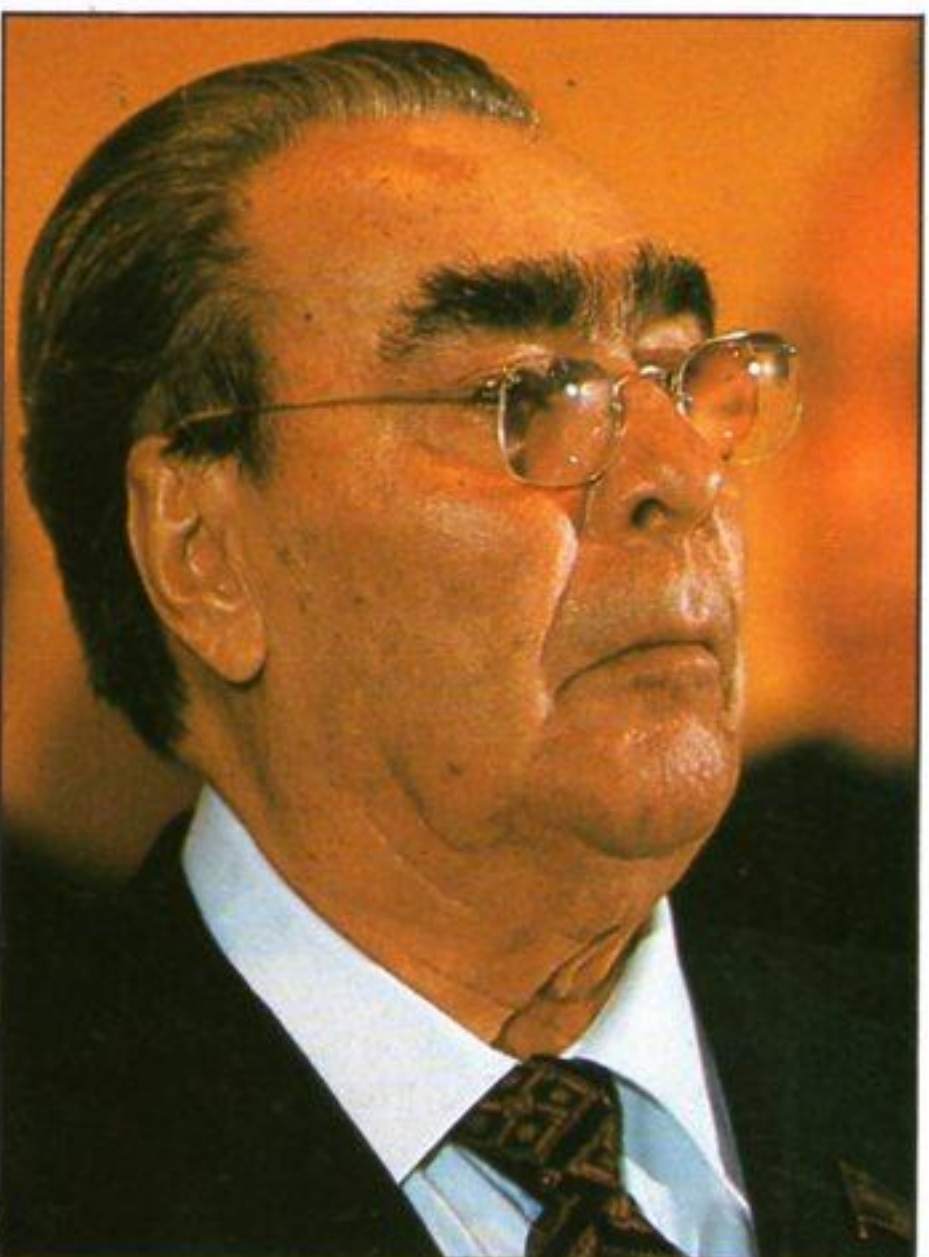
breas continuaran su acción eliminando bolsas de resistencia y culpando al enemigo del incumplimiento del alto el fuego. Una nueva resolución de las Naciones Unidas aprobada en la madrugada del día 24 reiteraba la petición de alto el fuego en las líneas del 22 de octubre, añadiendo la provisión del urgente envío de observadores del alto organismo internacional para supervisar el cumplimiento de una tregua que, si bien todos habían aceptado, unos no querían y otros no podían cumplir.

Tensión mundial: Nixon decreta Defcom-B

El presidente Sadat exigía desesperadamente al líder soviético Leonid Breznev que actuara para contener a los israelíes, y el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger veía en la contumacia de Tel-Aviv el peligro de una confrontación con la Unión



EFE



EFE



EFE

Soviética. El mismo día 24, una carta de Breznev a Nixon anunciaba en tonos durísimos que Moscú haría lo que fuera necesario para someter a razón a los israelíes, lo que era vastamente interpretado como una amenaza de aprovisionar al Tercer Ejército por la fuerza soviética si era necesario. Como alternativa Moscú sugería el envío de una fuerza conjunta de las dos potencias para hacer cumplir la tregua. Nixon no podía aceptar porque ello habría significado entregar la «mitad» de una paz futura a la diplomacia del Kremlin. La respuesta norteamericana en el mejor estilo espectacular de Kissinger sería la declaración, poco antes de la medianoche del 24, de una alerta del grado *Defcom-B*, un peldaño por debajo de la alerta máxima, que afectaba a las unidades norteamericanas en el mundo entero, trasladaba bombarderos de Guam a Estados Unidos, despa-

*Soldados egipcios
pertenecientes al
Tercer ejército son*

*conducidos a prisión en
los últimos días de la
guerra del Yom Kippur.*



chaba a un nuevo portaaviones al Mediterráneo y ponía con el pie en la escalerilla del avión a una fuerza de intervención inmediata, la 82 División aerotransportada, destacada en Fort Bragg, Carolina del Norte.

La diplomacia norteamericana ha visto siempre esa muestra de energía como la causa de que pocas horas después Moscú renunciara a su plan de enviar tropas a la zona, contentándose con lo dispuesto en la resolución 338, que sólo mencionaba a fuerzas de la ONU, pero también puede argumentarse que, conseguidos sus propósitos, el Ejército israelí se conformaba también con lo que tenía en la tarde del 24 de octubre. Una penetración de unos 40 kilómetros en profundidad más allá del canal, que dominaba la orilla occidental desde Ismailia hasta las puertas de Suez en el golfo de este nombre, con no menos de 25.000 hombres y ocho brigadas. Egipto controlaba la orilla oriental hasta el Gran Lago Amargo con unos 30.000 hombres en una profundidad máxima de 7 u 8 kilómetros, mientras que más de 20.000 quedaban atrapados al sur, a merced de un corredor de aprovisionamiento que los israelíes habían abierto por gentileza de las Naciones Unidas.

El día 25, cesaba la alarma norteamericana coincidiendo con el primer día de paz en el Sinaí y en el Golán.

Balance de la guerra

La guerra árabe-israelí de 1973 ha sido considerada justamente como la de la rehabilitación del combatiente árabe, que llevó a cabo con la travesía del canal una brillante acción técnica, supo luchar de manera competente contra la arremetida israelí, y sólo comenzó a llevar la peor parte cuando la genialidad de Sharon y la superioridad aplastante del arma aérea enemiga se hizo sentir en la penetración del Gran Lago Amargo. Las fuerzas sirias, por su parte, combatieron insuperablemente en unas condiciones defensivas mucho peores que las egipcias, y cerraron el camino a Damasco a uno de los mejores ejércitos del mundo. Al mismo tiempo, la guerra de octubre, planeada por el presidente Sadat y el presidente sirio Hafez el Asad desde el mes de marzo anterior, con una capacidad logística y de disciplina, tanto política como militar, formidables, demostró que la infantería debidamente equipada con lanzacohetes podía hacer frente a los blindados en igualdad o superioridad de condiciones.

Una guerra, que en lo tecnológico hay que calificar como la primera contienda electrónica de la historia, suponía una destrucción de material tan fabulosa que las dos superpotencias tenían que alimentarla constantemente para que no cesara y, al mismo tiempo, tenían que imponer un alto el fuego cuando las líneas de la batalla estuvieran dibujadas de manera indeleble, a la manera de esos encuentros del Renacimiento en los que el ejército que quedaba en peor posición se rendía tras la maniobra inicial, para que no se les fuera de las manos.

Finalmente, la de 1973 fue una guerra limitada en la que el campo de batalla apenas sobrepasó unos cientos de kilómetros cuadrados y ninguno de los contendientes usó sus misiles de alcance medio, que podían devastar el corazón de la nación enemiga; fue, en suma, una contienda en la que se luchaba por parte árabe, como brillantemente concibió Sadat, para obligar a los israelíes a negociar más que para expulsarles territorialmente de sus conquistas. En estas condiciones sí que la pugna árabe-israelí de 1973 fue, antes que nada, una continuación de la política por otros medios. Los más sangrientos, sin duda.

La crisis del petróleo

La economía occidental se tambalea

Alberto Szpunberg,
periodista

La crisis del petróleo, que estalló en 1973 como consecuencia de las medidas adoptadas por los productores árabes en respuesta a la guerra del Yom Kippur, hizo tambalear

la economía de los países industrializados. En la fotografía, un jeque árabe observa el fuego y el humo que se desprenden de un yacimiento petrolífero en medio del desierto.

El 8 de octubre de 1973, dos días después de iniciada la cuarta guerra árabe-israelí, los países miembros de la OPAEP (Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo), reunidos en Kuwait, resolvieron unilateralmente un espectacular incremento en el precio del petróleo. Una semana después, el 16 de octubre, iniciaban un gradual embargo en las exportaciones. Ambas medidas significaban un duro golpe para los países industrializados de Occidente que, a partir de este momento, comenzaban a sufrir la mayor crisis de la economía capitalista desde la Gran Depresión de los años treinta.



El viejo sueño de un venezolano

A pesar de ser considerada por muchos como una herramienta de los países árabes, el inventor de la OPEP no fue un seguidor de Alá, sino un venezolano: el abogado Juan Pablo Pérez Alfonso. Como jurista, éste ya había ensayado algunos pasos anti-monopólicos redactando la Ley de Hidrocarburos de Venezuela, en 1943, a raíz de la cual, por primera vez en la historia, una compañía petrolera accedió a compartir con el Gobierno de un país productor el 50% de los beneficios.

Por supuesto, cuando Pérez Jiménez, con el auxilio y beneplácito de la Standard Oil, instauró su brutal dictadura, Pérez Alfonso debió abandonar Venezuela. Durante diez años de exilio en México, siguió dándole vueltas a la misma idea: unir a los países productores para hacer frente a la voracidad de los monopolios petroleros. Curiosamente, le sirvió de modelo una empresa estatal norteamericana, la Texas Railroad Commission. Aunque nacida a finales del siglo pasado para el trazado de los ferrocarriles de Texas, esta compañía pasó a ocuparse del gas y del petróleo en 1919. Y a partir de 1930, para regular el mercado, la Texas Railroad Commission se encargó de mantener los precios suficientemente altos para que los pequeños productores marginales ganaran dinero, lo cual por supuesto hacía la fortuna de los grandes.

En 1959, en el Nilo Hilton, Pérez Alfonso conoció a Abdula Tariki, ministro de Asuntos Petroleros de Arabia Saudí, y le contó su viejo sueño. El saudita, que entonces se devanaba los sesos pensando en cómo recortarle las alas a la compañía Aramco que hacía y deshacía en su país, se entusiasmó. A Tariki, el lema de la Texas Railroad Commission le pareció estupendo: «si quieres más dinero no vendas más petróleo, vende menos». A partir de allí, todos los pasos de Abdula Tariki se encaminaron a concretar la vieja ilusión del venezolano Pérez Alfonso.

En esta página, el coronel venezolano Marcos Pérez Jiménez, que en los años 50 instauró una férrea dictadura con el apoyo y beneplácito de los grandes trusts petroleros norteamericanos.

En la página siguiente, arriba, construcción de uno de los primeros pozos petrolíferos en Baku, hacia el 1900; abajo, el primer ministro Mosaddeq, quien nacionalizó el petróleo de Irán.



Contratos leoninos

Cuando en 1901 el entonces Šah de Persia Muzzafar al-Din concedió al inefable William Knox d'Arcy la concesión de exploración y explotación de petróleo en territorio iraní no sólo nació la Anglo-Iranian sino también un modelo de sojuzgamiento que terminaría imponiéndose a todos los países productores de oro negro. En efecto, el contrato establecía para la compañía inglesa «un privilegio especial y exclusivo para investigar, obtener, explotar y vender gas natural, petróleo y asfalto a lo largo de todo el Imperio Persa por un período de sesenta años...».

Este esquema de dominación fue una fórmula que los grandes trusts petroleros siguieron aplicando hasta la Segunda Guerra Mundial, o sea hasta que las grandes compañías terminaron el relevamiento de las zonas de reserva y producción en todo el mundo, y consumaron el reparto.

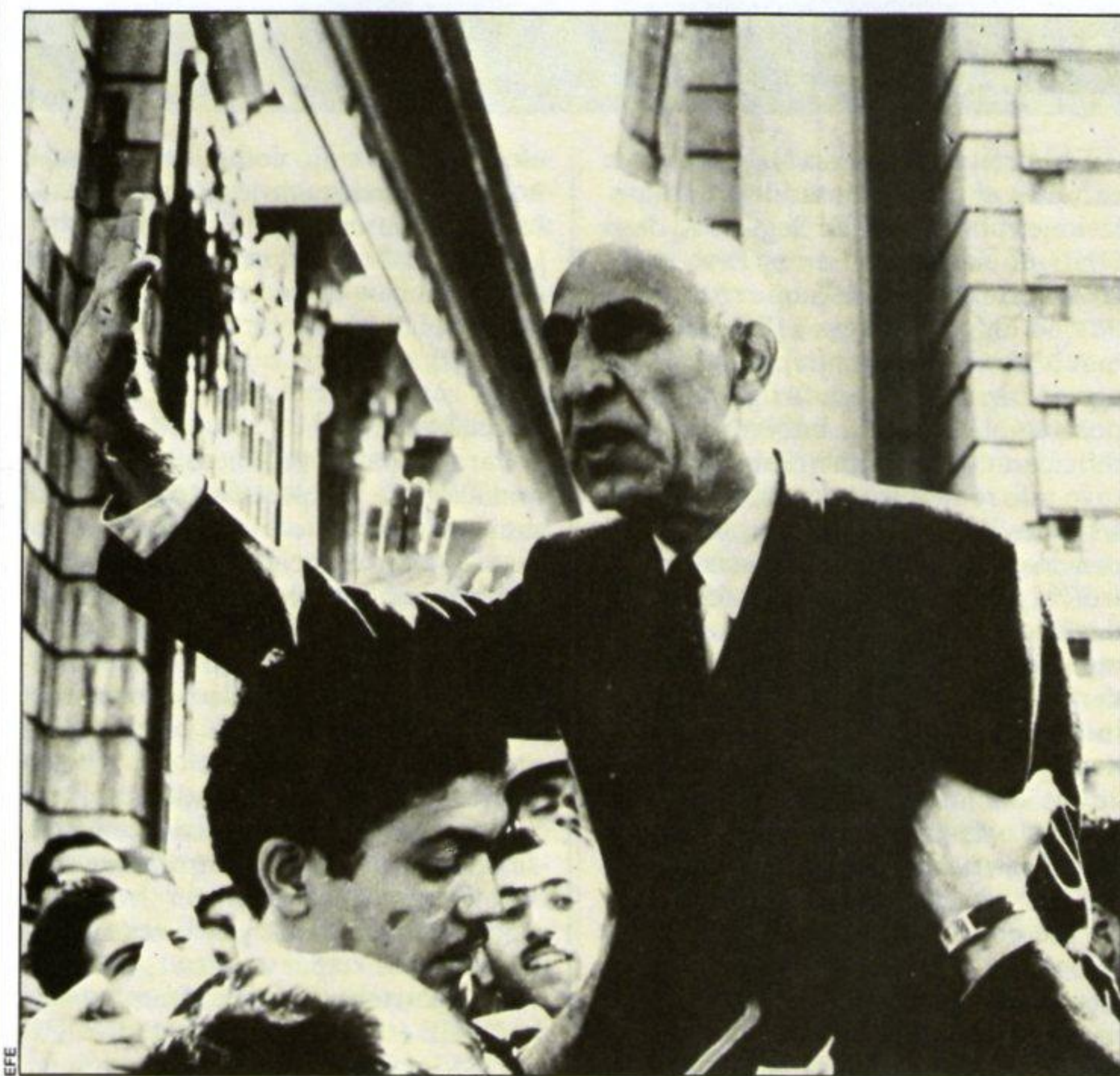
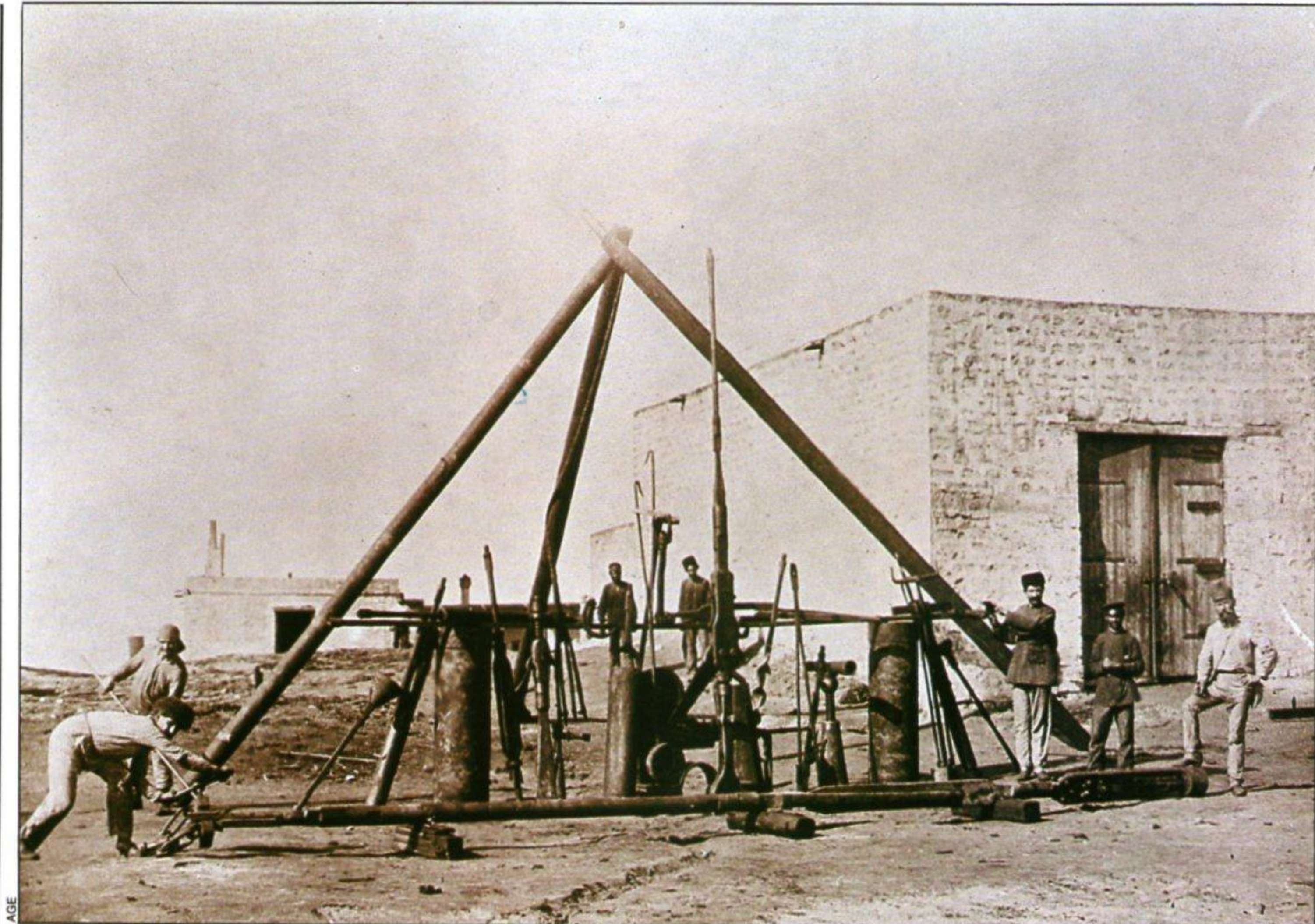
La concesión general, a cambio del pago inicial de una cierta suma en divisas, más una cantidad por tonelada producida en caso de descubrimiento de nuevos pozos, ofició en manos de los trusts como los espejos y las cuentas de colores de Cristóbal Colón para seducir a los pueblos indígenas del Nuevo

Mundo. Y del mismo modo, lo que se inició como un engaño fue culminado por la espada.

En todo Oriente Medio, magnates como d'Arcy sólo tuvieron que enfrentarse a corrompidos monarcas y reyezuelos para los cuales su país, sumido en el feudalismo y la dependencia más atroces, no era más que la prolongación del propio palacio. Las concesiones generales culminaban siempre en verdaderas cláusulas de extraterritorialidad, con leyes y normas ajenas a las que imperaban localmente. De este modo, los prohombres del petróleo y todos sus bienes gozaban de una inmunidad más que diplomática, como procónsules al frente de un Estado dentro de otro.

Los sumisos intentan rebelarse

En Venezuela, hasta la Ley de Hidrocarburos de 1943, las grandes compañías también supieron pescar incontables beneficios en las aguas revueltas de un país que salía de la anarquía y la guerra civil para entrar en la «paz» de la dictadura militar. La ley minera impuesta por los trusts al gobierno de turno establecía tan sólo un *royalty* del 10% del valor total de la producción obtenida.



Este «orden mundial» se mantuvo sin problemas hasta fines de los años 40, en que la situación comenzó a volverse insostenible. En 1948, después de que las primeras elecciones libres en Venezuela llevaran al poder al grupo de Acción Democrática, las compañías petroleras que operaban en dicho país debieron aceptar una partición del 50/50%. Aunque a las dos semanas del nuevo acuerdo las botas volvieran al poder, este efímero contrato sirvió para indicar que otros aires comenzaban a soplar en el mundo.

En 1951, en Irán, Mohammad Mossaddeq se convirtió en primer ministro y expulsó tanto al Šah como a los ingleses, nacionalizando la industria petrolífera. Las compañías norteamericanas, deseosas de desplazar a las británicas, ofrecieron a Arabia Saudí un acuerdo similar al firmado con la Acción Democrática de Venezuela: 50/50% de los beneficios. De cualquier manera, esas compañías no perdían nada, ya que la legislación de Estados Unidos permitía restar los impuestos pagados en los países productores del montante a pagar al fisco norteamericano. Inglaterra y Holanda no tuvieron más remedio que seguir el mismo camino.

Es oro negro todo lo que reluce

«El petróleo es un producto conocido desde las más tempranas épocas de la civilización, sin embargo, su utilización industrial no comenzó hasta mediados del siglo XIX. Inicialmente dicha utilización se centraba esencialmente en su empleo como keroseno para la iluminación, pero a finales del siglo con el descubrimiento del motor de explosión, el petróleo iba a conocer una expansión sin precedentes, al mismo tiempo que introducía una nueva revolución en el dominio del transporte por tierra, mar y aire. Sus productos derivados iban a aportar también una contribución decisiva al desarrollo de las industrias, proporcionándoles por un lado energía y calor, y por otro aceites lubricantes que facilitaban la rotación de toda clase de piezas y engranajes, a lo que se añadió después su papel fundamental como materia prima para la industria química.

»La importancia del petróleo en la vida moderna ha crecido de tal forma, que en la actualidad no hay ningún otro producto del que dependa tanto cualquier economía medianamente desarrollada. Casi 3.000 productos diferentes se sacan hoy del petróleo. (...) La catástrofe que produciría hoy la falta de petróleo en cualquier sociedad organizada sería inimaginable.

»Pero si la contribución del petróleo es indispensable en tiempo de paz, lo es mucho más aún en tiempos de guerra. Toda la estructura y movilidad de un ejército moderno dependen de él, por lo que el control de las fuentes de petróleo, tan necesaria en tiempos de paz, es vital en tiempos de guerra, razón por la cual dicho control constituye un motivo permanente de conflictos y rivalidades entre las grandes potencias, y ello en una medida mucho más importante de lo que pueda suponerse. Sin petróleo, la independencia de una nación no es hoy más que una palabra.»

(FUENTE: Roberto Centeno,
El petróleo y la crisis mundial,
Madrid, 1982)

En esta página, una mujer iraní arenga a las masas durante una demostración contra Mosaddeq, quien fue depuesto en 1953 por obra de la CIA y las compañías petroleras.

En la página siguiente, un barco petrolero de la compañía Exxon, la mayor de las «siete hermanas» que dominaban —y dominan aún hoy— el mercado mundial del petróleo.



Tophom/Foto Foto

El Foreign Office y la Royal Navy le cerraron el paso a Mosaddeq. Sus apelaciones al Consejo de Seguridad de la ONU de nada le valieron. Pero fue la CIA norteamericana la que se encargó de que el Šah volviera a Teherán y de que Mosaddeq fuera depuesto (19 de agosto de 1953). La Anglo-Iranian, por más que intentó cambiar su imagen rebautizándose British Petroleum, no tuvo más remedio que pagar los buenos servicios de Washington compartiendo con los trusts norteamericanos el petróleo persa. El Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, en su memorándum 8753, se apresuró a ordenar «una solución que proteja los intereses del mundo libre en el Próximo Oriente».

La fallida nacionalización de Mosaddeq más las crisis de Suez de 1956 indujeron a las compañías a intensificar la extracción de petróleo en Oriente Medio, a fin de obtener mayores beneficios en el menor tiempo posible. Los trusts se habían dado cuenta de que ya no corrían una carrera contra el tiempo, sino contra la historia. Esta

oleada negra trajo como consecuencia una caída oficiosa de los precios bajo la forma de descuentos. Este «bajón» se generalizó después con una baja oficial de los precios de referencia del crudo del orden del 10% en 1959 y del 15% en 1960.

Nace la OPEP

Para los países productores, esta disminución de los precios fue una total catástrofe, pues, en la mayoría de los casos, veían reducida su única fuente de ingresos. En julio de 1960, Monroe Rathbone, presidente de la Exxon, desbordó la situación. Su decisión unilateral de bajar los precios sin consultar a los productores ni a la competencia precipitó los acontecimientos. Abdula Tariki, con total respaldo del rey Saud, convocó a una reunión en Bagdad para el 9 de septiembre de ese año. Asistieron Venezuela, Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudí, y esta vez el lema fue unívoco: «crear un cártel para combatir al cártel». De esta fórmula nació la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo).



«Hemos fundado un club muy exclusivo —afirmó el venezolano Pérez Alfonso, viejo inspirador de la nueva organización—, entre nosotros controlamos el 90% de las exportaciones de crudo a los mercados mundiales, y ahora estamos unidos. Estamos haciendo historia». Su único error, quizás, fue su excesivo optimismo. Las «siete hermanas» —Exxon, Mobil Oil, Texaco, Gulf, British Petroleum, Socal/Chevron y Shell— aún darían y siguen dando mucho que hablar.

La gran prensa del mundo arrinconó en sus columnas de segunda el nacimiento de la OPEP. Sin embargo, al poco tiempo de la reunión fundacional, la flamante OPEP volvió a celebrar un nuevo cónclave, esta vez en Caracas. Y allí fueron precisados los verdaderos objetivos: «Definir conjuntamente la cantidad de petróleo a producir y decidir sobre esa base un precio justo para el mismo». Las «siete hermanas» consideraron entonces que su honor ya estaba en juego e impulsaron de inmediato represalias financieras contra los miembros de la organización. Esta pri-

mera respuesta de las grandes corporaciones sirvió también, entre otras cosas, para que la OPEP mostrara su talón de Aquiles: las rivalidades internas de los países productores y sus distintas disposiciones a dar batalla. Las familias feudales que controlan el poder en Arabia Saudí juzgaron que Tariki había ido demasiado lejos y forzaron su reemplazo por Ahmed Zaki Yamani, un «moderado».

Este paso atrás de la OPEP se tradujo en una estabilización del precio de referencia del crudo, que hasta 1970 se mantuvo a 1,80 dólar por barril. Sólo la toma del poder en Libia por parte del coronel Mohamar al-Gaddafi el 1 de septiembre de 1969 y su inmediata incorporación a la OPEP le imprimió a la organización nuevos aires de radicalismo. La llamada «guerra del Yom Kippur» le daría la oportunidad de demostrarlo.

Solidaridad árabe

La cuarta guerra árabe-israelí sobrevino en el preciso momento en que las demandas de mayores beneficios por

parte de los países productores comenzaban a oírse de nuevo, y también en el momento en que los acuerdos establecidos entre las grandes corporaciones y los países del Golfo Pérsico estaban a un paso de ser revisados.

Cuando el 6 de octubre de 1973, poco antes del mediodía, el Segundo y Tercer Ejército de Egipto atacaron por sorpresa la línea Bar-Lev que defendía la orilla norte del Canal de Suez, en manos israelíes desde 1967, las torres de petróleo se estremecieron. Una de las primeras consecuencias fue la pérdida de una gran parte del crudo que se cargaba en las terminales del Líbano y Siria, en el Mediterráneo Oriental, ya que el 7 de octubre, sin esperar que el conflicto bélico avanzara mucho más, las corporaciones petroleras declararon zona de guerra a estas terminales y suspendieron de inmediato las operaciones de extracción. Cuatro días más tarde, los *Mirages* israelíes destruían en un 50% la terminal iraquí de Banias, al igual que la terminal siria de Tartos y la única refinería del país en Homs. Los suministros de petróleo

Estados Unidos, siempre ganador

Entre 1949 y 1966, las inversiones de la industria norteamericana fuera del territorio de Estados Unidos arrojaron ganancias superiores a las de las inversiones en el propio país. Pero a partir de 1966 y hasta la guerra del Yom Kippur, la situación comenzó a invertirse: los demás países capitalistas obtuvieron una ventaja comparativa frente a Estados Unidos. El proteccionismo instaurado hacia finales de la década del 60 les permitió conseguir una fuente de energía mucho más barata que la ofrecida por Washington. Pero he ahí que Sadat, cuya afinidad con Estados Unidos ya era más que evidente, desencadenó la guerra contra Israel, y he ahí también que el Gobierno de Israel, cuya dependencia de Norteamérica es más que obvia, contuvo el ataque y llevó su contraofensiva dentro de los «límites más razonables», contradiciendo incluso sus propios intereses y posibilidades militares. Es que en el futuro ya se perfilaba Camp David...

Para más inri, cabe comprobar que a partir de la guerra del Yom Kippur y la crisis del petróleo, Estados Unidos recuperó su cuestionada preeminencia sobre los demás países capitalistas. Como lo demuestra Roberto Centeno en *El petróleo y la crisis mundial*, Estados Unidos no sólo desplazó la influencia soviética en el Cercano Oriente situándose en su lugar, sino que, además: «Cambió de signo la ventaja comparativa de los costes energéticos de sus competidores industriales de Europa y Asia (Japón fundamentalmente). El petróleo norteamericano revaluado gradualmente (...) constituyó un incentivo notable a incrementar la exploración interna y como consecuencia las reservas, como efectivamente sucedió. Estados Unidos se permitió rentabilizar ampliamente los descubrimientos en zonas difíciles, Mar del Norte y Alaska particularmente, donde las compañías norteamericanas tenían la parte del león.»

Como puede verse, para el gran Imperio del Norte, la Guerra del Yom Kippur no fue una puntada sin hilo...

En ambas páginas, cola de automóviles en una gasolinera de Estados Unidos durante una de las crisis del petróleo; sobreimpreso, talonario de racionamiento.

En la página siguiente, arriba, una muestra de humorismo en medio de la crisis: «lo siento, estamos secos», reza el cartel de la gasolinera; abajo, el rey Faysal.



AGE

a Occidente se vieron reducidos de golpe alrededor de un 8%, vacío que sólo pudo ser llenado por el pánico.

Por otro lado, la guerra desató una oleada de solidaridad entre los países árabes, mucho mayor y contundente que la que diecisiete años atrás había despertado la nacionalización del Canal de Suez por parte de Gamal Abdel Nasser. Hasta los conservadores gobiernos de Arabia Saudí y Kuwait hicieron causa común con el «hermano» Sadat. El 16 de octubre, en Kuwait, se reunió la OPAEP, grupo de naciones árabes en el seno de la OPEP. En este cónclave, los países exportadores recordaron viejas banderas de la Guerra

Santa y se comprometieron a cortar la producción en un mínimo del 5% en cada mes subsiguiente, «hasta que se complete la retirada de Israel de todos los territorios árabes ocupados en junio de 1967 y hasta que los derechos legales del pueblo palestino se hayan restablecido».

Sin embargo, el rey Faysal de Arabia Saudí decidió ir más lejos y reducir la producción no en un 5%, sino en un 10. Otros países árabes no tardaron en seguir el ejemplo, y hasta muchos de ellos decidieron cortar toda exportación a Estados Unidos y Holanda, señalados como aliados incondicionales de Israel.



Gracias a estas reducciones y a la destrucción de terminales y refinerías a causa de la guerra, Occidente vio reducida su afluencia de oro negro en más de un 15% en menos de dos semanas. Ya no sólo temblaron los grandes ejecutivos por el futuro de sus sedientos automóviles, sino también sus secretarías por sus intimidades de nylon. «Ahorre energía» se convirtió más que en consejo, en una rogativa. Como si esto fuera poco, a principios de noviembre, la OPAEP volvió a reunirse en Kuwait y acordó una reducción general del 25% respecto del nivel anterior a la guerra, obligando a casi todos los países consumidores

a adoptar drásticas medidas de urgencia. Las inefables «siete hermanas» se mostraban de pronto incapaces de calmar tanta sed de petróleo. Era un hecho tan alucinante como real: el preciado grifo estaba en manos de otros...

Una bofetada bien devuelta

Junto con los recortes en las exportaciones, sobrevinieron los aumentos de precios. Los países del Golfo Pérsico convocaron a las «siete hermanas» y demás parientes para plantearles la elevación de los precios de referencia de 3,01 dólares a 5,12 dólares por barril. Desconcertados, los represen-



EFE



Camera Press/Zardoya

tantes de las multinacionales pidieron unos días de receso para consultar con sus oficinas centrales. Pero los países de la OPAEP, con total decisión, no esperaron la respuesta y resolvieron elevar los precios unilateralmente. Trece años después, se daban el gusto de devolverle la bofetada al ínclito Rathbone de la Exxon. Y esta vez las «siete hermanas» no tuvieron más remedio que morderse los labios. Los aumentos acordados por los miembros de la OPAEP, vigentes desde el 16 de octubre, eran de una magnitud sin precedentes en el pasado: el 70% o más.

Pero no todo era pánico ni zozobra en los estados mayores de Occidente.

Dos rounds de un mismo combate

Primera crisis

1973

Octubre: el día 6, Egipto ataca a las posiciones israelíes en el Sinaí y comienza la Guerra del Yom Kippur. El 8, la OPAEP se reúne en Kuwait y decide alzas del 70 al 100% en los precios de referencia del crudo. Comienza la «Primera Gran Crisis». El 16, otra vez en Kuwait, la OPAEP inicia su gradual embargo petrolero con reducciones del 5% en sus exportaciones. Entre el 16 y el 23, Israel contraataca y derrota a Egipto y Siria.

Noviembre: el día 3, la OPAEP se reúne en Kuwait y decide acentuar su embargo con reducciones del 25%. Entre el 14 y el 17, Kissinger visita Israel y Egipto y logra que ambas partes acepten el plan norteamericano de extender el alto el fuego.

Diciembre: en Teherán, la OPAEP vuelve a reunirse y decidir aumentos en los precios de referencia. Arabia Saudí se opone a los fuertes incrementos. A lo largo de todo este mes, los países árabes no se ponen de acuerdo sobre los nuevos precios de referencia.

1974

Enero: la OPAEP, con total respaldo de la OPEP, acuerda un aumento del precio de referencia del crudo, que pasa de 5,119 dólares/barril a 11,651 dólares/barril. Se estabiliza la situación y la «Primera Gran Crisis» se diluye.

Segunda crisis

1978

Noviembre: la industria petrolera iraní es paralizada por una huelga convocada por Jomeini contra el Šah.

Esto ocasiona un fuerte déficit en el aprovisionamiento de las grandes compañías petroleras.

Diciembre: el día 17, en Abu Dhabi, la OPEP decide alzas escalonadas para 1979 por un monto total del 14,3%.

1979

Enero: incremento del 3% en los precios del crudo.

Marzo: en Ginebra, la OPEP decide incrementar el precio del crudo de 13,335 dólares/barril a 14,542 dólares/barril. Los países miembros de la OPEP quedan en libertad para hacer incrementos adicionales en función del mercado.

Junio: en Ginebra, la OPEP decide un nuevo aumento: el crudo pasa a costar 18 dólares/barril.

Diciembre: en la reunión de Caracas de la OPEP, Arabia Saudí anuncia unilateralmente que ha aumentado el precio del crudo a 24 dólares/barril. Se rompe la disciplina de la OPEP y se producen alzas incontroladas en los precios del petróleo.

1980

Junio: reunida en Argel, la OPEP fija un precio arbitrario de 32 dólares/barril y acuerda limitar la producción petrolera.

Septiembre: estalla la guerra entre Irán e Irak. La producción del Cercano Oriente se ve amenazada por una eventual extensión de este conflicto. Caos total en los precios del crudo.

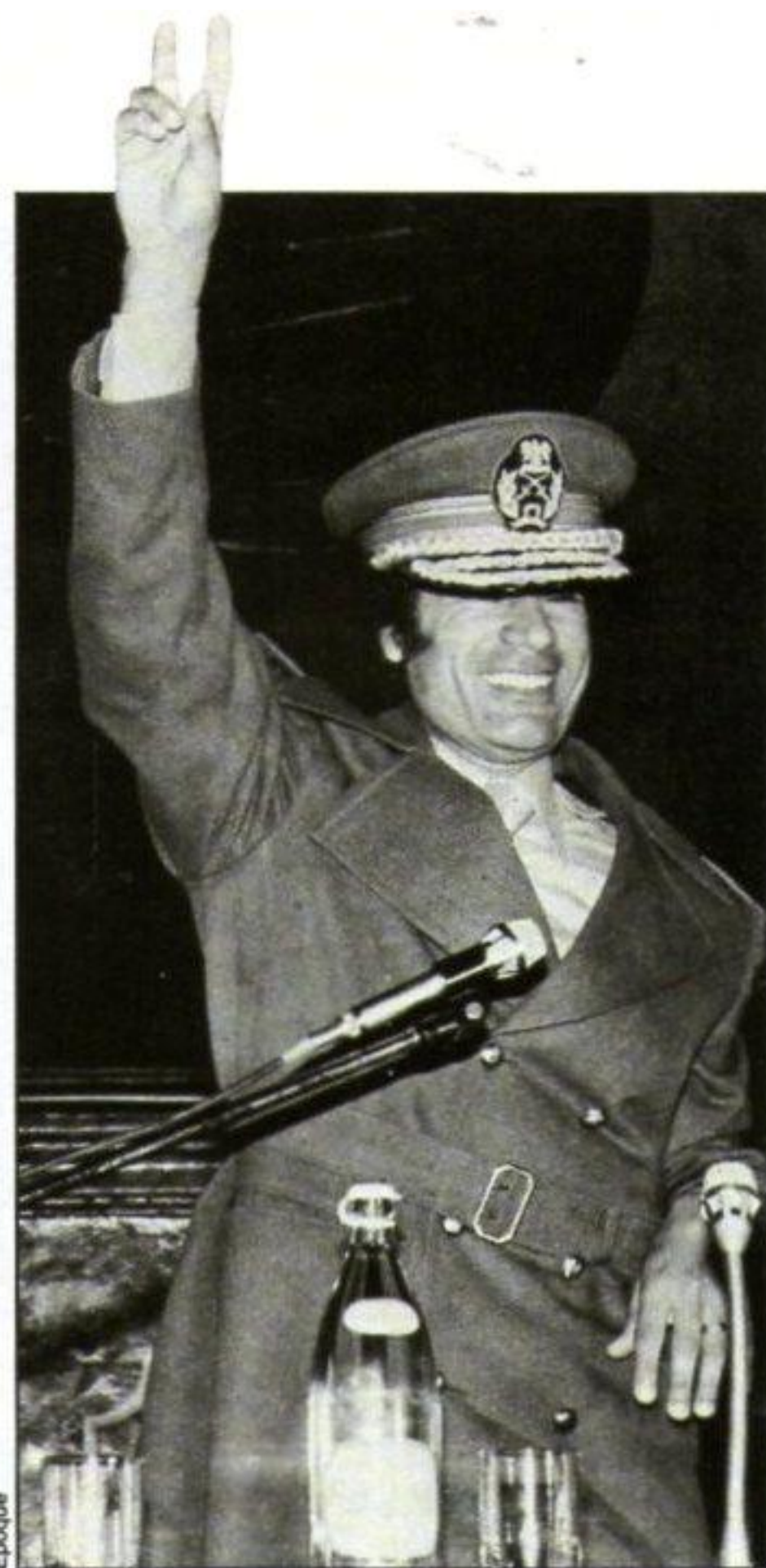
1981

Octubre: reunida en Ginebra, la OPEP decide estabilizar los precios de referencia del crudo en 34 dólares/barril. La crisis se disipa.

Algo estaba cambiando en la estructura económica mundial. La reacción de los países consumidores, sobre todo los pertenecientes al área de la OCDE, que sí hubieran podido tener cierta capacidad de respuesta, fue nula. Y esto fue sorprendente porque la crisis del petróleo venía a marcar el techo implacable del auge económico que habían disfrutado, en especial desde la devaluación del dólar provocada «de facto» en diciembre de 1971, con crecimiento de la producción industrial del 6,3% en 1972, y de nada menos que del 10% entre junio de 1972 y junio de 1973, llevando prácticamente al mundo occidental al máximo de su capacidad pro-

ductiva. De buenas a primeras, los tiros del Yom Kippur parecían apuntar al corazón del consumismo de Occidente.

La falta de respuesta durante todo el mes de noviembre llenó de temor a algunos países árabes, pero en conjunto optaron por golpear de nuevo y más fuerte. Duplicaron los precios del crudo con efectos de primero de enero de 1974. Sin embargo, para hacer buena letra, en vez de cumplir con la decisión de reducir la producción del 75 al 70%, la aumentaron al 85%. La referencia de la nueva estructura de precios era el crudo más común, el «Arabia ligero». Para éste se fijó un precio de 11,651 dólares/barril, desde los 5,119 dólares/

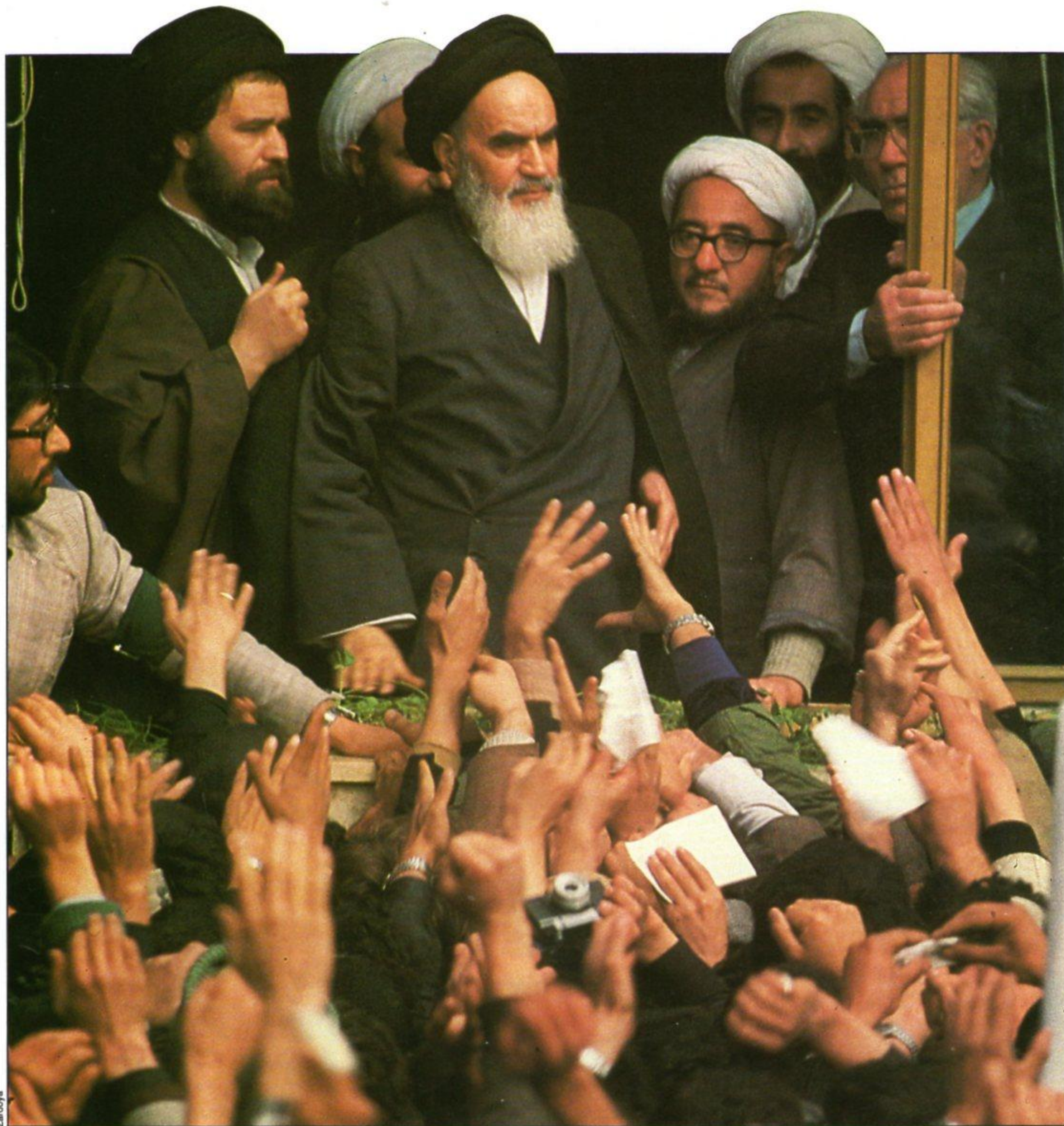


Sobre estas líneas el jefe de Estado libio, Moamar al-Gaddafi, uno de los radicales en el seno de la OPEP, a la que se adhirió en 1969.

En la página siguiente, el ayatollah Jomeini, quien manifestó que no vendería ni una gota de petróleo a los países que ayudaron al Šah.

barril fijados el 16 de octubre, y los 3,011 dólares/barril que habían regido en septiembre de 1973. Las subidas del precio echaron por tierra todos los acuerdos establecidos previamente. Pero el aumento de la producción de petróleo era un riesgo. La tentación de vender más venía de la mano de la posibilidad de vender más caro. Y esto se introdujo como una cuña entre los países árabes. Los productores menores comenzaron a murmurar acerca de la «traición» de los productores más fuertes. También en este bando la «hermandad» era muy particular y podía hacer agua en cualquier momento, cosa de la cual el pueblo palestino, el más afectado por ésta y todas las crisis del Oriente Medio, tenía —y tiene— mucho que decir.

El entonces Šah de Irán, al anunciar el incremento de los precios, los justificó basándose en «el cambio de las condiciones en el mercado libre» y por el hecho de que los nuevos precios estaban en relación con el coste mínimo estimado para las fuentes alternativas de energía, como el crudo sintético extraído del carbón o el oro negro procedente de pizarras bituminosas. Arabia Saudí, cuyos jeques siempre habían mantenido con Estados Unidos una amistad proverbial, jugó el papel



Zaróya

de «moderado» e intentó limitar el alza a un 50%. Finalmente se llegó a una solución de compromiso: entre los saudíes y los iraníes, salió un aumento final del 130%.

Se cierra la primera crisis

Con esta nueva alza en el precio del crudo, la crisis quedaba prácticamente cerrada. Entre el uno de octubre de 1973 y el uno de enero de 1974 los precios de referencia del crudo se multiplicaron por cuatro, y por ocho si se los coteja con los precios de enero de 1970. En cambio, el resto de las materias primas apenas si se multiplicó por dos en el mismo período de tiempo.

Por su parte, los bienes manufacturados de exportación sólo se multiplicaron por 1,8. Al mismo tiempo, la fijación de precios mediante negociación quedó sustituida por la decisión unilateral de los países exportadores en sus reuniones habituales. El bendito tema de la participación sufrió un acelerón espectacular a través de sucesivos acuerdos o nuevas decisiones unilaterales que se traducirían aún en nuevos aumentos de los precios reales del crudo, pero ya dentro de «los cauces del sentido común».

El 8 de septiembre de 1978, después de largos meses de convulsión política y social, el Ejército del Šah Reza Pah-

lavi reprimió en Teherán a la más grande movilización de masas contra su régimen. Hacia finales de octubre siguiente, desde París, el *ayatollah* Ruhollah Jomeini pidió vengar a los cientos de muertos y heridos con una huelga general y masiva. Como un solo hombre, los 37.000 trabajadores de la industria petrolera iraní cesaron su actividad. De este modo, de la noche a la mañana, de una producción de crudo de seis millones de barriles diarios, Irán pasó a 1,2 millones en los primeros días de noviembre, de los cuales sólo fue exportado el 50%. Occidente volvió a temblar: acababa de estallar una nueva crisis petrolera.

El negocio antes que nada

El juego de la Unión Soviética con las contradicciones del mundo capitalista no es nada nuevo. Ya en 1917, cuando el Ejército Rojo ocupó los pozos petrolíferos de Bakú, el flamante Gobierno soviético siguió adelante sus negociaciones con la Standard Oil, que hasta ese momento habían sido llevadas por los hermanos Nobel, a la vez que mantenía jugosas relaciones con la Shell. Para construir el socialismo, hacían falta divisas.

Durante el embargo de 1973, la Unión Soviética volvió a jugar. Apoyó y predicó dicha medida, pero no la cumplió. Y como si esto no fuera suficiente, tanto la Unión Soviética como Rumania importaron grandes cantidades de crudo árabe que luego revendieron al mercado occidental a un precio tres o cuatro veces superior al pagado. Gran parte de las divisas ganadas fueron destinadas a comprar tecnología para acelerar la explotación de sus grandes reservas de oro negro en Siberia. Y para rematar este juego, a poco de iniciado el embargo la Unión Soviética terminó las obras de conexión del gran gasoducto que une a su red con Alemania Occidental. Como último detalle, Moscú obtuvo de Bonn que el precio del gas fuera mayor al establecido en las negociaciones iniciales, dado que el mundo estaba trastocado por la crisis energética...

El alza de los precios del petróleo y el embargo constituyeron para los soviéticos un maravilloso negocio. En 1974, la URSS dobló su cifra de ingresos en relación con el año anterior, llegando a constituir las divisas provenientes del crudo un 50% de sus ingresos globales. Rumania, con sus amagos de autonomía, buscó su propio negocio, y por el lado más escandaloso: se dedicó a incrementar sus ventas de petróleo a Israel, que en esos momentos cruciales estaba sosteniendo una situación de guerra con un pie en el vacío. Tampoco Rumania dejó en ningún momento de predicar su solidaridad con los pueblos árabes y con el embargo...

Cabe agregar que la mayor parte del petróleo soviético fue vendido a Estados Unidos y Holanda, dos naciones que estaban marcadas a fuego por los árabes a raíz de su respaldo incondicional a Israel. En el trimestre último de 1973, la Unión Soviética suministró petróleo a Estados Unidos por un valor de 40 millones de dólares, a precios de hasta 42 dólares por tonelada de crudo, frente a los 13 dólares que se facturaba en 1972. Es decir, a un precio cuatro veces superior. No importa, los finlandeses, con importaciones de crudo menos diversificadas, llegaron a pagar el petróleo soviético a 120 dólares por tonelada... Negocios son negocios.



EFE



Camera Press/Zardoya



Magnum/Zardoya

A la izquierda, el ministro de Petróleo de Arabia Saudí, Zaki Yamani (a la derecha, con gafas) dialoga con el rey Faysal (en el centro) y otros jeques árabes en diciembre de 1978, cuando acababa de estallar la segunda crisis del petróleo.

En la parte superior de esta página, dos policías de Alemania Federal en bicicleta durante la crisis.

Sobre estas líneas, el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Abdurrahman Khene imparte una conferencia sobre «Petróleo y dinero internacional», en Gran Bretaña; la OPEP sufrió grandes tensiones internas a finales de los setenta.

En la página siguiente, reparación de un pozo petrolífero en Noruega.



AGE

Jomeini deja oír su voz y estalla la segunda crisis

El 17 de diciembre de 1978 se reunió en Abu Dhabi la 52ª Conferencia de la OPEP. La situación en el mundo era tensa, pero también lo era en el seno de la organización. Mientras países como Arabia Saudí o Kuwait mantenían todavía fuertes excedentes en sus balanzas por cuenta corriente, otras naciones, como Argelia, Irak o el propio Irán, habían pasado a una situación deficitaria en 1978. A la salida de la conferencia, el ministro de Petróleo saudita Yamani declaró: «desde el alza de precios de 1973, nosotros hemos aprendido que no hay tan poca elasticidad en la demanda, y que no podemos incrementar el precio del petróleo como queramos. Y ustedes, los países consumidores, han aprendido que la era de la energía barata se ha ido para siempre».

Este planteo dialoguista y moderado de Yamani se vio pronto desbordado

por los acontecimientos. Depuesto el Šah, sólo se oyó la voz de Jomeini que tronaba: «los gobiernos extranjeros que sostuvieron al Šah deben saber que este gobierno islámico impedirá que una sola gota de petróleo iraní llegue a sus manos». Y no sólo lo dijo, sino que comenzó a practicarlo. La suspensión de las exportaciones iraníes borrraron del mercado más de 5 millones de barriles diarios. En un primer momento, Arabia Saudí incrementó su producción a fin de cubrir el vacío dejado por Irán, pero a principios de febrero de 1979, la tentación fue demasiado grande: ¿por qué no aprovechar la coyuntura para empezar a replantear los precios y los convenios vigentes? Es así como el rey Khaled decidió cambiar de política e imponer un tope máximo a su producción, lo que se tradujo en un millón de barriles menos por día en todo el mundo. Las puertas para el incremento de los precios ya estaban abiertas...

Fuerte especulación

Las grandes corporaciones comenzaron a anunciar a sus clientes determinados recortes en sus suministros. En el fondo, las multinacionales algo habían aprendido de la crisis del 73 y ahora estaban jugando con la escasez. Preferían enviar sus producciones al «mercado libre» donde los precios subían aceleradamente. Las alzas habían elevado el precio del barril a 23 dólares, o sea, un 65% por encima de los precios de venta oficiales que la OPEP solía practicar en sus contratos con las corporaciones.

La especulación se volvió tan fuerte y jugosa que todos quisieron participar. Irán, después de romper lanzas con las «siete hermanas», se lanzó a vender petróleo en el mercado libre mediante un sistema de subastas. Así fue como un lunes 14 de mayo de 1979, Jomeini llegó a vender cada barril a 23 dólares cuando el precio de venta oficial era de 13,3 dólares. Pescando en

Durante la guerra entre Irán e Irak los pozos petrolíferos fueron blanco de las bombas.



río revuelto, las propias compañías norteamericanas llegaron a vender barriles de crudo a 42 dólares cada uno. Una vez más, la ley de la libre competencia se convirtió en ley de la selva. Los alemanes, dependientes totalmente en materia del petróleo, se enfrentaron duramente con Estados Unidos y empezaron a mirar hacia el Este. En medio del torbellino, los precios quedaron sin control y durante 20 meses, hasta octubre de 1981, la OPEP sólo funcionó como una sigla más. Sus integrantes, acicateados por la avaricia, se habían lanzado a su propio negocio, atendiendo cada cual su propio juego.

Nuevo conflicto y fin de la crisis

Pero aún faltaba un ingrediente más: hacia fines de septiembre de 1980 estalló la guerra entre Irán e Irak y nuevamente los pozos petrolíferos fueron blanco de las bombas. Un ataque iraní contra la decisiva base de bombeo K1 del campo de Kirkuk interrumpió por completo las exportaciones iraquíes por vía del Mediterráneo. Al mismo tiempo que Irak comunicaba el cese total de sus exportaciones, la producción de Irán descendía a 500.000 barri-

les diarios, cantidad inferior a las propias necesidades del país, lo cual implicaba en los hechos el cierre de otra fuente de crudo. Por otra parte, el conflicto irano-irakí había caído en la región como un chispazo en la santa-bárbara del mundo.

Tras sucesivas reuniones fracasadas antes de comenzar, el 29 de octubre de 1981 la OPEP volvió a congregarse, esta vez en Ginebra. Y una vez más Arabia Saudí jugó el papel del «moderado». Decidió reducir su producción en un millón de barriles diarios a cambio de que sus cofrades aceptaran fijar en 34 dólares el precio del barril del «Arabia ligero», más el compromiso de mantener este precio hasta finales de 1983 y otras prerrogativas. Occidente volvió a respirar hondo...

Estos acuerdos de octubre de 1981 dieron a entender que este segundo «round» de la crisis petrolera había terminado. De cualquier forma, en esta segunda crisis el incremento medio de precios ascendió al 168%, ya que, debido a la fuerte apreciación del dólar desde fines de 1978 hasta fines de 1981, el incremento de coste real para la mayor parte de las economías occi-

dentales se acercó a 3,5 veces. A partir de la 61.ª Conferencia de la OPEP en Ginebra, el mercado entró en una etapa depresiva, tal como, al decir de Freud, suele suceder después de todo estallido psicótico. Sin embargo, como una conciencia oscura, el petróleo sigue ahí, agazapado a la espera de nuevos arrebatos de esa misma y vieja locura. De producirse, la próxima crisis será la tercera. Y, como suele afirmarse, bien puede ser la vencida.

A todo esto, la OPEP se ha transformado en un cártel fabuloso, algo así como una inesperada «oveja negra» (y, una vez más, nunca mejor dicho) para la exquisita familia de las «siete hermanas». Tras 20 años de existencia, sus ingresos actuales multiplican por 50 los que percibía en 1960. Pero, claro, estos beneficios cada vez están más lejos de ponerse al servicio de la humanidad necesitada, tal como lo había soñado el venezolano Pérez Alfonso. Éste, que murió en 1979, declaró en una de las últimas reuniones a la que asistió: «Puede que yo sea el padre de la OPEP, pero ahora algunas veces yo quisiera renegar de mi paternidad». De cualquier modo, de nada serviría.

La revolución de los claveles

El fin de la dictadura salazarista

Álvaro Castillo,
escritor y periodista

El 25 de abril de 1974, algo más de un mes después de la fracasada sublevación de Caldas de Rainha, los sorprendidos portugueses pudieron escuchar a través de la radio las estrofas de la popular canción *Grandola, vila morena*, sin saber que lo que estaban escuchando en realidad era la contraseña que daría lugar al levantamiento militar que puso fin a más de cuarenta años de dictadura derechista. Se iniciaba así la llamada revolución de los claveles que condujo a Portugal hacia la democracia.

La revolución de los claveles fue la culminación de un largo proceso de degradación de la dictadura portuguesa, agravado por más de trece años de sangrientas guerras

ultramarinas en las colonias africanas. En la fotografía, un soldado portugués con un clavel en el cañón de su fusil, símbolo de la revolución del 25 de abril de 1974.



EFE

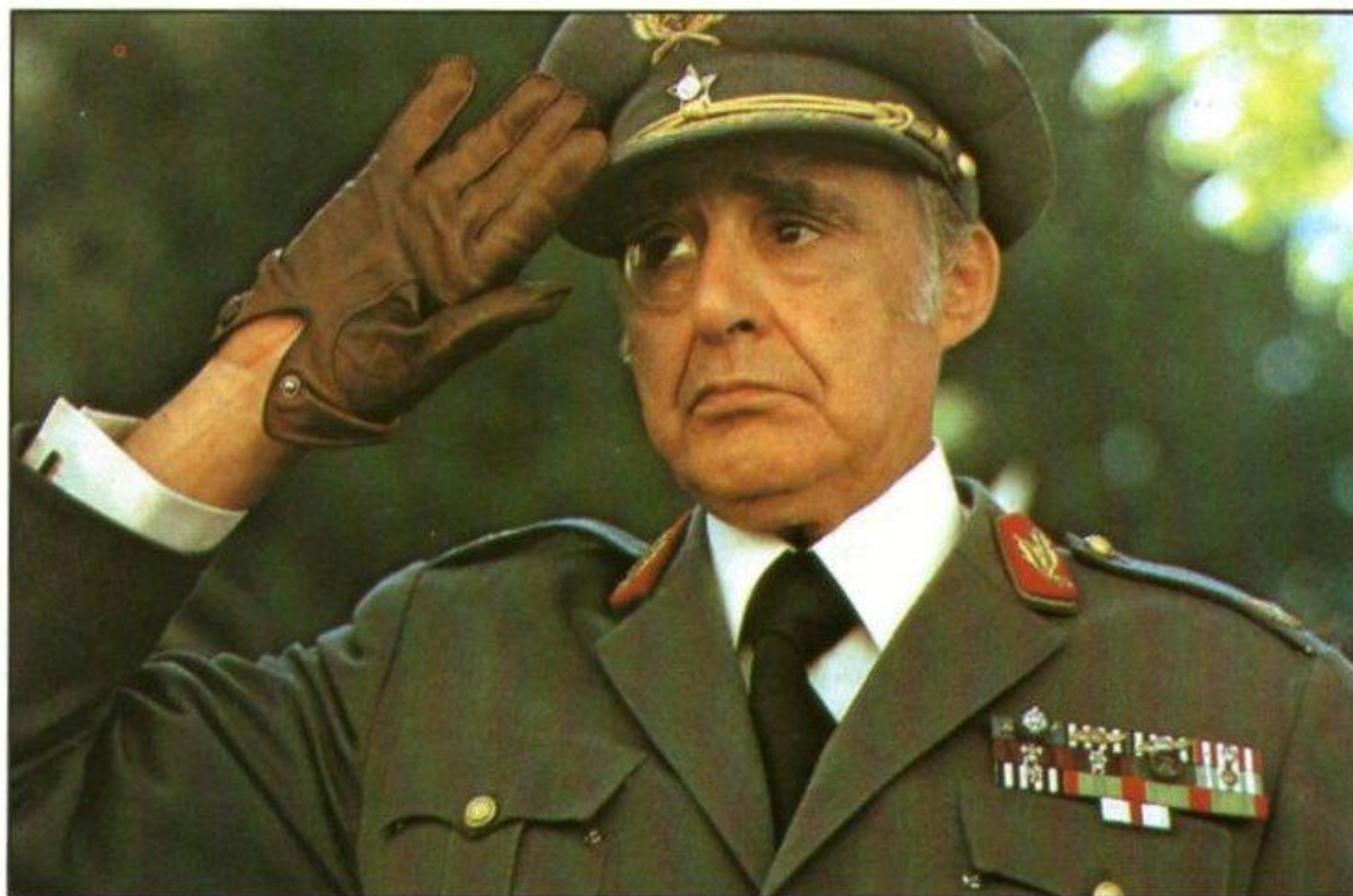
Spínola

El hombre del monóculo, el general Antonio Sebastião Ribeiro de Spínola tenía 64 años y había llegado a lo más alto a lo que podía aspirar un militar portugués de carrera cuando publicó su libro Portugal y el futuro, que le ganó la inmediata desconfianza cuando no la abierta inquina de los representantes del agonizante y agobiante régimen salazarista.

Siendo un joven oficial, Spínola luchó en la Guerra Civil española, junto con las tropas nacionales del Generalísimo Franco. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo como observador en el frente ruso, ante las tropas del Tercer Reich. El golpe militar lo pilló desprevenido. No tomó parte en la conjura libertadora y no simpatizaba con el movimiento de jóvenes oficiales. Igual aceptó y accedió a la Presidencia de la República, desde la cual intentó dar un golpe de timón que devolviera a Portugal al ya transitado camino del despotismo (aunque en su caso matizado de democracia). La vigilancia de los jóvenes oficiales lo llevó a dimitir apenas unos meses después de haber asumido el cargo. Más tarde trataría de dar un golpe de Estado contra Vasco Gonçalves, en marzo de 1975, que se frustró. Enredado en una maraña conspirativa cada vez más turbia y ominosa, su prestigio declinó rápidamente y su monóculo se empañó ya para siempre.

Perdurará sin duda en la memoria popular la imagen de una muchacha morena, sonriente, que coloca un clavel en la boca de un fusil que sostiene un soldado uniformado, igualmente sonriente. Tal vez esa sola imagen memorable, en esta época en que la imagen lo domina todo, valga y sobre con su sobria alegría para justificar con todos sus defectos, con todos sus errores y con todas sus desilusiones y contradicciones el vacilante desarrollo de la democracia portuguesa que nació como consecuencia del golpe de Estado del 25 de abril de 1974, que terminó con más de cuarenta años de dictadura derechista.

El golpe de Estado, prácticamente incruento, que no sorprendió ni a los portugueses ni a nadie, fue más que el desencadenante quizá el momento culminante de un complicado proceso al que muy pronto se bautizó con un nombre simbólico, simpático: la revolución de los claveles.



Sobre estas líneas, el general Spínola, un militar adicto al régimen, que con la publicación de su libro Portugal y el futuro se convirtió, casi sin quererlo, en uno de los promotores de la revolución de abril.

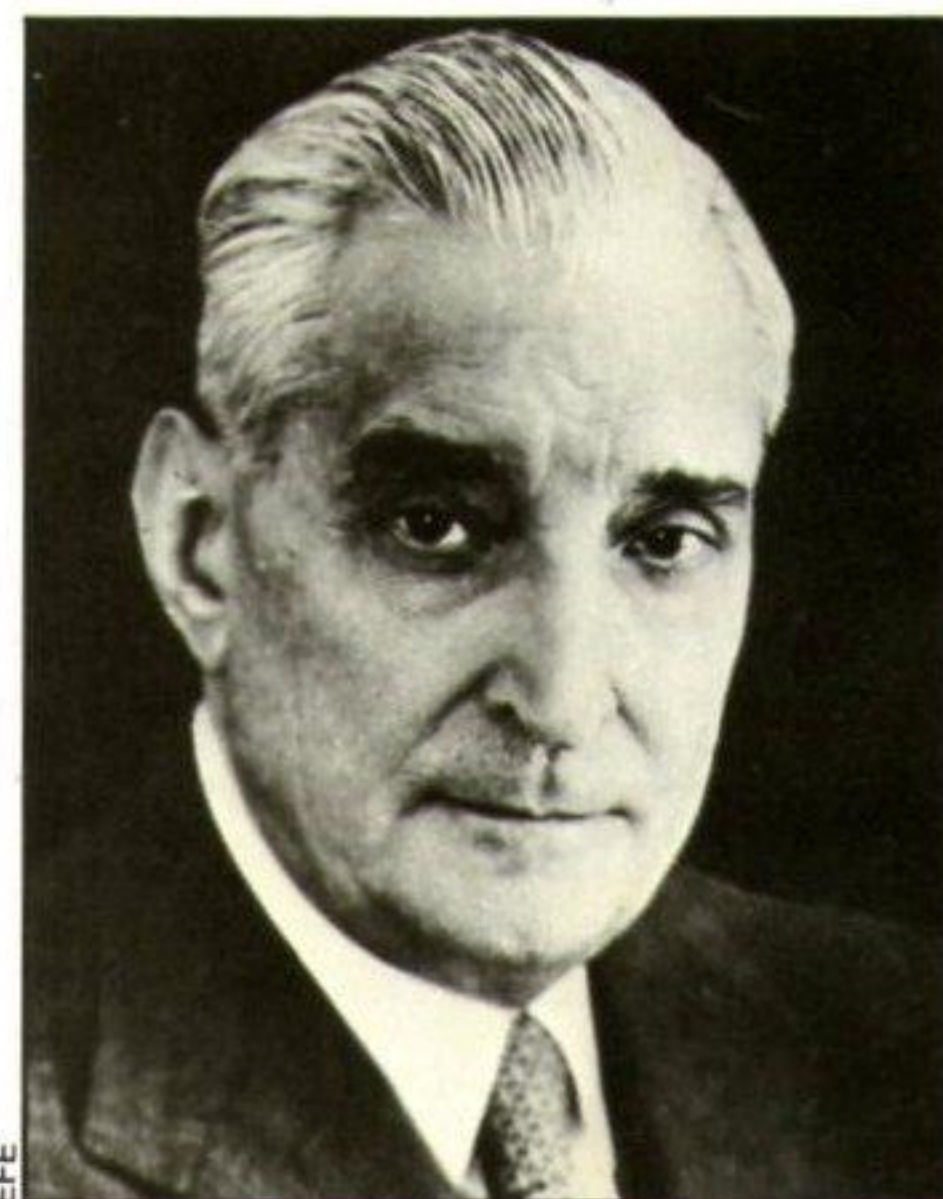
A la derecha, el dictador Oliveira Salazar, cuya muerte en 1970 aceleró la caída del régimen.

En la página siguiente, manifestación celebrada en Lisboa contra la guerra de ultramar.

La situación colonial y la crisis del sistema

Para entender el origen de este proceso habría que remontarse unos años atrás, a los inicios de la década anterior y, más concretamente, a 1961, un año clave en la historia colonial de Portugal. Ese año tropas indias ocuparon los enclaves portugueses en las colonias de Goa, Damão y Diu, que fueron definitivamente perdidas pese a las reclamaciones portuguesas en las Naciones Unidas. También en 1961 se había iniciado la guerrilla en varias colonias de África, dando lugar a la llamada guerra de ultramar, que enfrentaría a lo largo de trece años sangrientos al Ejército de ocupación portugués con los tenaces movimientos de liberación de Angola, Mozambique y la antigua Guinea Portuguesa, hoy llamada Guinea-Bissau por el nombre de su antigua capital y para distinguirla de las otras dos repúblicas de Guinea que hay en África. La posición inflexible del Gobierno portugués de considerar a las colonias como provincias ultramarinas no sólo provocó el incremento de las acciones guerrilleras, sino que motivó la condena de la ONU.

A medida que avanzaba la década de los sesenta la guerra colonial se hacía más costosa por el recrudecimiento de las actividades guerrilleras, promoviendo una serie de cambios cada vez más acelerados en las Fuerzas Armadas portuguesas. Hasta esas fechas, la



EFE

oficialidad del Ejército estaba copada prácticamente por las clases altas y, fundamentalmente, por la vieja, rancia y conservadora aristocracia lusitana. Los otrora fecundos aristócratas aventureros, descendientes al menos colaterales de los descubridores, servían como fieles soldados dormidos a la plutocracia, a la rapaz oligarquía colonialista que gobernaba Portugal con Salazar. Gobernaban Portugal, hambreados portugueses, saqueaban las riquezas de las colonias africanas y ponían a buen recaudo su dinero en bancos suizos. Pero, a mediados de la década de los sesenta, la intensificación de las actividades bélicas en África obligó al Gobierno a reestructurar su vigilancia en las colonias, reforzando sus tropas de ultramar. Fue así como, al ampliar sus mandos, el Ejército dio entrada a jóvenes oficiales, pertenecientes en su mayoría a la clase media, que serían, pocos años después, los promotores de la revolución.



Zardoya

La nueva savia burguesa que nutrió los cuadros de oficiales y que corroyó por dentro sus cadavéricos aires aristocratizantes comprendió rápidamente cuál era el mal de Portugal y dónde estaba. El lastre de Portugal era su imperio ultramarino y el enemigo a combatir la estructura semifeudal que aún imperaba en el país.

Oposición interior y creación del MFA

Mientras en el plano colonial resultaba cada vez más evidente la imposibilidad de ganar la guerra contra las guerrillas nativas, en el orden interno el régimen intentaba sobrevivir a la enfermedad de su dictador, Oliveira Salazar. Alejado del poder en septiembre de 1968 a causa de una trombosis cerebral, fue sustituido por uno de sus más cercanos colaboradores, Marcelo Caetano. El nuevo primer ministro portugués mantuvo las directrices esenciales del salazarismo, al tiempo

que intentó una tímida apertura política que no tuvo la menor eficacia. A la muerte de Salazar (1970), la oposición interior, centrada fundamentalmente en los ilegales Partido Socialista y Partido Comunista y en el legal Acción Democrática y Social, se fortalecía cada vez más contra la política continuista de Caetano y el empobrecimiento acuciante de las capas medias y bajas del país.

En los medios militares el descontento de los oficiales jóvenes, tenientes, capitanes y comandantes fundamentalmente, era cada vez más acusado. Con unos salarios cuyo valor real se debilitaba día a día —unas veinte mil pesetas de 1974—, se sentían forzados a continuar una guerra que consideraban inútil, injusta e interminable. Como fruto de ese descontento los jóvenes oficiales, capitaneados por el teniente coronel Ataíde Banazol, crearon el Movimiento de los Capitanes, llamado posteriormente Movimiento

de las Fuerzas Armadas (MFA). Ese mismo año, la Guinea Portuguesa declaró unilateralmente su independencia con el nombre de Guinea-Bissau, mientras la guerrilla en Angola y Mozambique ganaba terreno a pasos agigantados.

Un libro polémico y un golpe frustrado

Tras la declaración de la independencia guineana, el general Spínola, comandante en jefe y gobernador de dicha colonia, regresó a Portugal. Militar de derechas —había participado como voluntario en el Ejército franquista durante la Guerra Civil española y, posteriormente, había asistido como observador al frente alemán en la URSS durante la Segunda Guerra Mundial— y de ideología claramente conservadora, tenía, sin embargo, una visión liberal con respecto al tema colonial. Hombre práctico y realista, había vivido de cerca el derrumbamiento



Programa del MFA

El 26 de abril de 1974, al otro día del triunfante golpe de Estado, el MFA dio a conocer públicamente su programa para el futuro de la nación portuguesa. Se puede decir de dicho programa que es el arranque verdadero de la revolución de los claveles, que entonces estaba todavía en embrión (y que al parecer nunca pasó de estarlo después).

Este es un extracto de los puntos más destacados del mencionado programa:

«Considerando que después de 13 años de lucha en tierras de ultramar el régimen hasta ahora vigente no ha conseguido definir de forma concreta y objetiva una política ultramarina que lleve a la paz entre los portugueses de todas las razas y credos;

»considerando que la definición de esta política sólo es posible si se sana la política interna y a sus instituciones, para transformarlas en representantes genuinos y por vía democrática del pueblo portugués;

»considerando también que el recambio de régimen político tendrá que hacerse sin convulsiones internas que afecten a la paz, al progreso y al bienestar de la nación;

»con la profunda convicción de que interpreta las aspiraciones y los intereses de la aplastante mayoría del pueblo portugués y de que su acción se justifica plenamente en aras de la salvación de la patria, el MFA, haciendo uso de la fuerza que le ha sido conferida por la nación a través de sus soldados, proclama y se compromete a garantizar la adopción de las medidas necesarias que sirvan de plataforma para resolver la gran crisis que atraviesa Portugal.»

Entre las medidas inmediatas a adoptar destacaban:

La extinción inmediata de la DGS (Dirección de Seguridad, organismo en el que se integraba la tenebrosa PIDE), de la Legión Portuguesa y de las organizaciones políticas de la juventud.

La amnistía inmediata de todos los presos políticos así como la reintegración voluntaria de todos los servidores del Estado que hayan sido cesados por motivos políticos.

La abolición de la censura.

La adopción de medidas que conduzcan a combatir eficazmente la corrupción.

Entre las medidas a medio plazo se señala la puesta a punto de: «Una nueva política económica, puesta al servicio del pueblo portugués y en particular de las capas de la población que han sido hasta ahora las más desfavorecidas, teniendo como preocupación inmediata la lucha contra la inflación y contra el alza del coste de la vida, lo que implica necesariamente una estrategia antimonopolista.»

Otro apartado señala: «Plantear una nueva política social que tendrá como objetivo la defensa de los intereses de las clases trabajadoras y el aumento progresivo de la calidad de vida de los portugueses todos».



EFE

de los restos del imperio de África y se había visto obligado a sostener una guerra tan larga como costosa e inútil. Nombrado subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en enero de 1974, Spínola publicó al mes siguiente su libro *Portugal y el futuro*, en el que exponía su pensamiento con respecto a la guerra ultramarina. El libro, en el que Spínola preconizaba una solución política para las guerras coloniales, sentó como una bomba en el seno del Gobierno que decidió destituirlo.

Pero el libro de Spínola no sólo tuvo repercusiones en el Gobierno. La oficialidad joven, agrupada en el Movimiento de las Fuerzas Armadas, creyó haber encontrado en Spínola el líder que buscaba. Fue así como, el 16 de marzo de 1974, apenas unos días después de la destitución de Spínola, un destacamento militar adicto al MFA se sublevó en Caldas da Rainha. El golpe fue inmediatamente abortado y sus promotores encarcelados. Sin embargo, el verdadero golpe ya se estaba gestando.

El 25 de abril

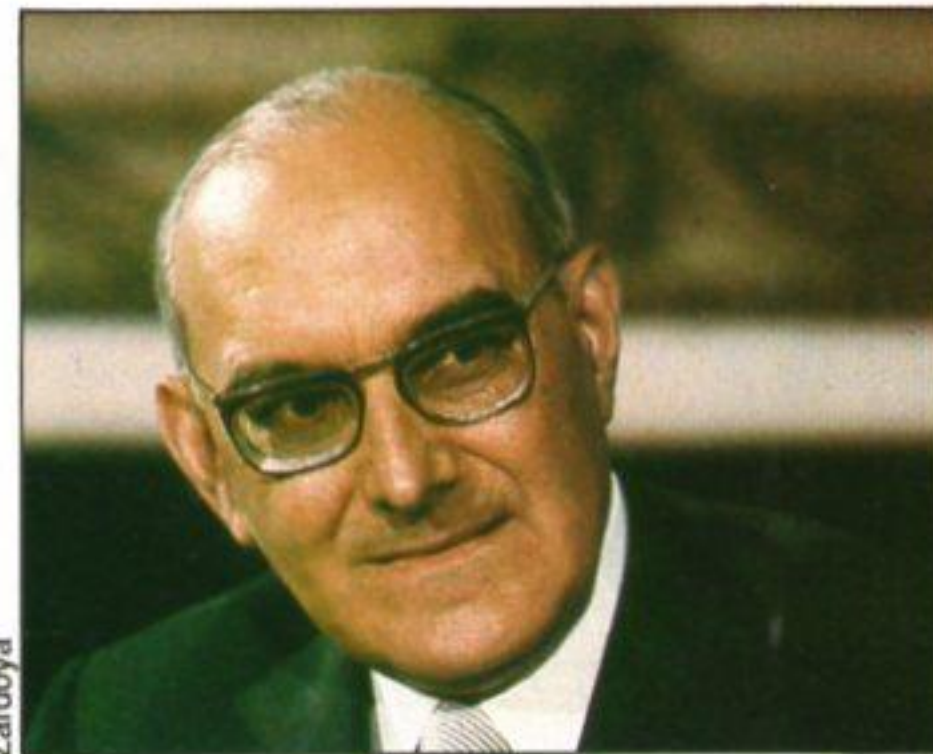
El sofocamiento del levantamiento de Caldas da Rainha no acabó con los verdaderos problemas que lo motiva-

ron. Seguía latente el malestar causado por la sangría de hombres y dinero que representaba la guerra colonial y por la brutal represión interior encarnada por los hombres de la PIDE (Policía del Interior y Defensa del Estado) que practicaban sistemáticamente la tortura contra los detenidos políticos.

Pese a que el Gobierno levantó a fines de marzo el estado de excepción, que había decretado el mes anterior ante el clima de violencia que se vivía en Lisboa y que había desembocado en violentos choques entre la policía y los integrantes del Movimiento Reorganizador del Partido del Proletariado, los cabecillas del Movimiento de las Fuerzas Armadas pusieron en marcha una conspiración destinada a hacerse con el poder mediante la ocupación de los puntos neurálgicos de la capital.

El 25 de abril de 1974, cuando en la radio se escucharon los primeros compases de *Grandola, vila morena*, varios destacamentos del Ejército salieron de sus cuarteles y ocuparon en pocos minutos los medios de comunicación, haciendo un llamamiento al resto del Ejército para que se sublevase.

Tomado por sorpresa, el Gobierno no logró reaccionar y a medida que pasaban las horas se sumaban las adhe-



Zardoya



Keystone

En la página anterior, un grupo de marinos desfila por las calles de la capital portuguesa con claveles en la solapa, tras el atípico levantamiento del 25 de abril de 1974.

En esta página, a la izquierda, soldados aclamados por el pueblo, el 25 de abril; a la derecha, Marcelo Caetano (arriba) y Americo Thomas (abajo), derrocados por el MFA.

siones al levantamiento. Al finalizar la jornada los rebeldes controlaban todo el país, mientras el pueblo, que se había volcado a la calle a poco de iniciarse la sublevación, les aclamaba como nuevos libertadores.

Al caer la noche, el presidente de la República, Américo Tomas y el primer ministro, Marcelo Caetano, se encontraban cercados en el edificio de la Guardia Nacional Republicana, donde se habían refugiado. Desde allí habían intentado sin éxito recabar adhesiones para la resistencia. Pero sus más cercanos colaboradores habían emprendido la huida o, simplemente, les habían vuelto la espalda ante la certidumbre de la derrota. Cuando ya nada quedaba por hacer más que entregarse, Caetano y Tomas se rindieron y traspasaron sus poderes a la Junta de Salvación Nacional presidida por Spínola; luego fueron trasladados a Funchal en calidad de desterrados.

Los principios de la revolución

La primera Junta de Salvación Nacional, instaurada tras el triunfo del levantamiento, estaba presidida por el general Spínola. Éste se había convertido tras la publicación de su libro en la figura más prestigiosa de las Fuerzas

El primer gabinete de Spínola

En el primer gabinete ministerial del general Spínola se intentó dar cabida a todas las opciones políticas que pugnaban por ganarse un espacio dentro del nuevo Portugal surgido de la revolución.

Para dar una idea de lo heterogéneo que era aquel gabinete, basta con repasar alguno de los nombres más significativos, y lo que representaban.

Entre los que en política ya han pasado a mejor vida, sigan vivos o estén muertos, destacan:

1) El primer ministro Adelino da Palma Carlos, que era profesor y catedrático de derecho de la muy elitista Universidad de Lisboa.

Con casi 70 años cuando asumió el cargo, Palma Carlos tenía como mejor atributo un pasado limpio de cualquier connotación salazarista. Políticamente moderado, representaba de algún modo los intereses de las neutrales y no muy inquietas clases medias de profesionales y de intelectuales. Hombre honrado a carta cabal, como era considerado por sus rivales tanto de izquierda como de derecha, Palma Carlos, a pesar de lo elevado de su cargo tuvo un peso bastante nulo en el desarrollo de los acontecimientos posteriores.

Se fue ya en silencio, ya olvidado y su lugar lo ocupó como era de esperar, por mera necesidad del empuje de las circunstancias, un hombre con más carácter, con una mayor determinación y con ideas si no más honestas sin duda más claras: el general Vasco Gonçalves.

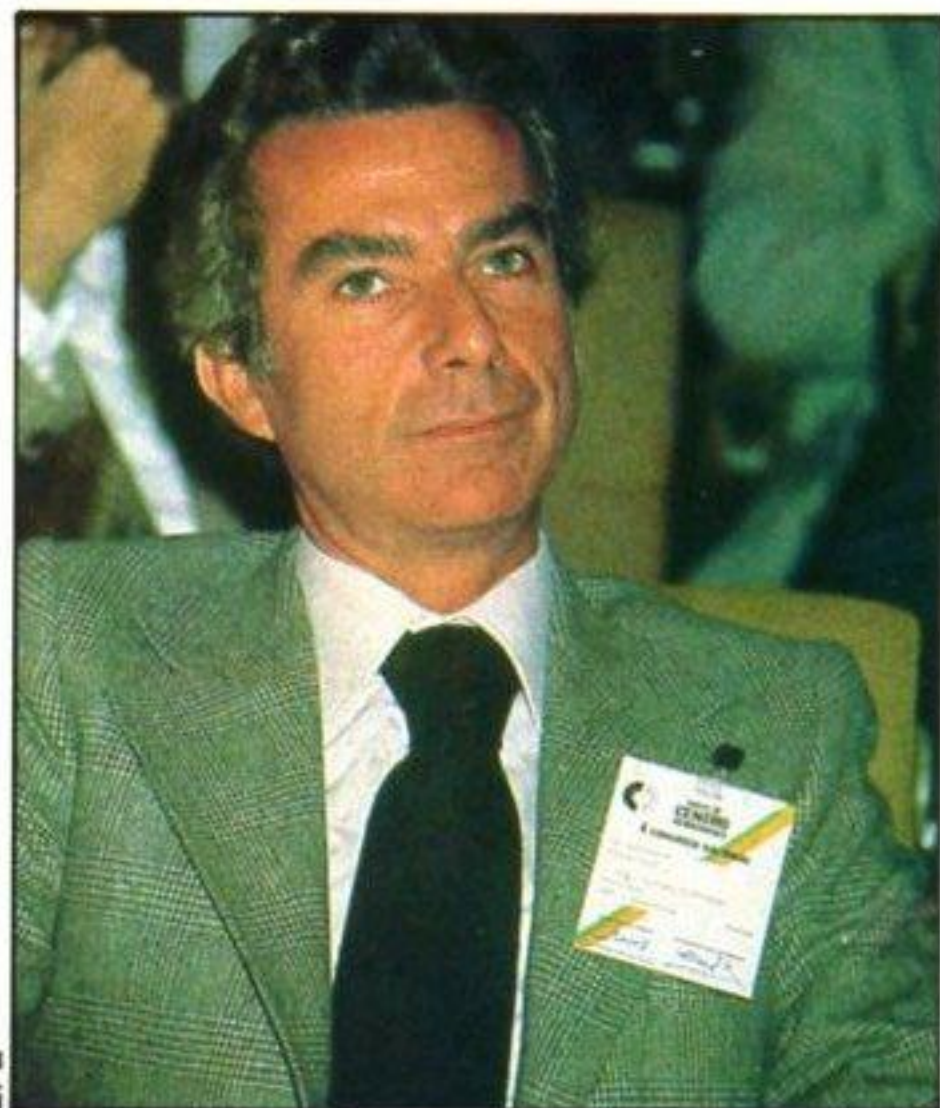
2) Teniente coronel Firmino Miguel, ministro de Defensa. Único representante del movimiento de jóvenes oficiales dentro del gabinete.

3) Francisco Sá Carneiro, fundador del PPD (Partido Popular Democrático), de tendencia derechista moderada. Era el único líder carismático y con ideas claras que tenía la derecha portuguesa. Ganador de las elecciones de 1978, formaría gabinete en alianza con la derechista democracia cristiana. Falleció en accidente de aviación cuando estaba probablemente a punto de acceder por elecciones a la máxima magistratura de la República, en confrontación directa con el general Ramalho Eanes. Su muerte le permitió a Eanes obtener fácilmente la reelección. Para el PPD fue un golpe que lo afectó severamente.

De los que siguen vigentes y vivos destacan dos:

1) Álvaro Cunhal, que fue ministro sin cartera con Spínola. Es el secretario general del intransigente Partido Comunista portugués, de tendencia abiertamente prosoviética.

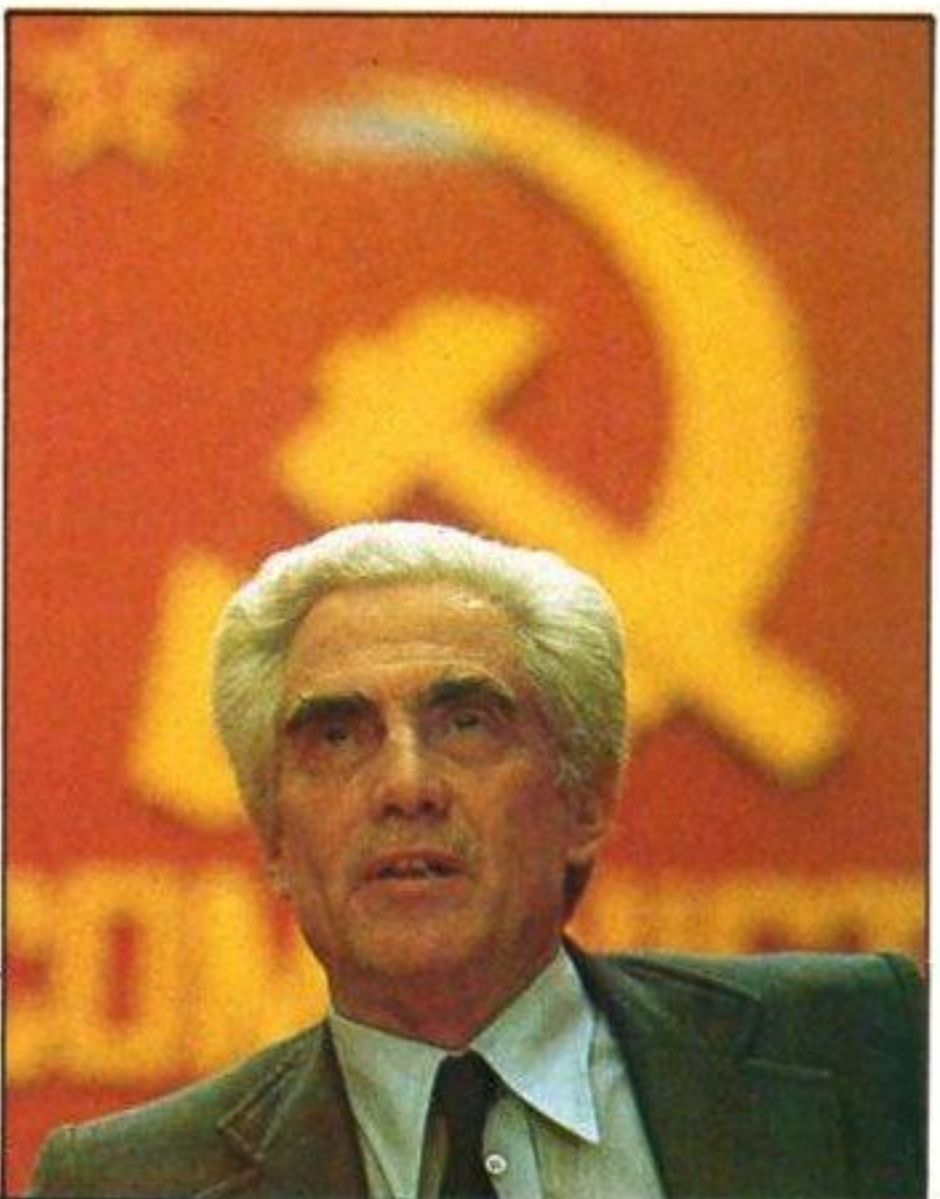
2) Mario Soares, fundador en 1973 del PSP (Partido Socialista portugués), que desde el principio contó con el aval no sólo de la socialdemocracia alemana sino también del Departamento de Estado de Estados Unidos. De su filiación socialista muchos dicen que es un adorno, como una corbata o como un anillo. También dicen que es una fina broma: una fina demostración del fino humor portugués.



EFE



EFE



Magnun/Zardoya



Camera Press/Zardoya

En la parte superior de esta página, el fundador y líder del PPD Francisco Sá Carneiro; en el centro, Mario Soares, fundador del Partido Socialista; abajo, Álvaro Cunhal, secretario general del Partido Comunista.

A la izquierda, la Junta de Salvación Nacional: Spínola (centro), Costa Gomes (izquierda) y Pinheiro de Azevedo (derecha).

En la página siguiente, el pueblo festeja la caída de la dictadura.



Magnun/Zardoya

Armadas. Fue este prestigio y no su adhesión al levantamiento, del que al parecer no estaba ni enterado, lo que motivó su elección para presidir la junta. De esta forma, y casi sin quererlo, el general del monóculo se hizo con el poder sin haber estado nunca ligado al Movimiento de las Fuerzas Armadas.

Además de Spínola, en la Junta de Salvación Nacional se encontraban militares tan conservadores como Silverio Marques, hombre que había tenido una activa participación en la represión colonial; oficiales de prestigio como Diogo Neto o Galvao de Melo; independientes como Costa Gomes, llamado popularmente «el corcho», porque fue capaz de flotar en las más diversas situaciones; e izquierdistas como Rosa Coutinho, más conocido como el «almirante rojo» por sus posturas radica-

les. En definitiva, una junta compuesta por militares de las más diversas ideologías que hacía presagiar futuros enfrentamientos.

Como primeras medidas, la Junta de Salvación Nacional decretó la libertad de los presos políticos que no hubiesen cometido delitos comunes, suprimió la censura de prensa, decretó la disolución de la policía política, la Legión portuguesa y las Mocidades Portuguesas —juventudes salazaristas organizadas al estilo nazi—, legalizó todos los partidos políticos incluido el comunista, concedió el indulto a los prófugos y desertores, decretó la libertad de reunión y asociación y, por último, anunció que en un plazo de tres semanas se formaría un Gobierno provisional exclusivamente civil en el que estarían representadas las principales for-

maciones políticas. Al mismo tiempo se creaba una comisión especial encargada de redactar la nueva Constitución, que debería ser estudiada y aprobada por una Asamblea Constituyente, elegida en el plazo de un año por sufragio universal y directo y en la que tendrían cabida todas las ideologías existentes en el país.

Estas primeras medidas, tendentes a normalizar la situación política y social de un país que había vivido más de cuarenta años sometido a una brutal dictadura, provocaron una ola de entusiasmo entre el pueblo que salió a la calle armado con sus rojos claveles y dispuesto a acelerar el motor del cambio. Un cambio que muchos de los integrantes de la Junta de Salvación Nacional parecían no estar dispuestos a conceder.

Formación del Gobierno provisional

Legalizados los partidos políticos proscritos y levantada la prohibición de entrar a Portugal que pesaba sobre sus jefes, el 30 de abril llegó a Lisboa el secretario general del Partido Comunista, Álvaro Cunhal, que fue recibido en olor de multitud; otro tanto sucedió con el líder del Partido Socialista, Mário Soares, que regresó a Portugal también en esos días de euforia.

El 15 de mayo, la Junta de Salvación Nacional nombró a Spínola presidente provisional. Este nombramiento, que pretendía erigir a Spínola en el hombre de la revolución, fue largamente debatido en el seno del Movimiento de las Fuerzas Armadas, cuyos elementos más radicales veían en él una traba a los impulsos verdaderamente revolucionarios del proceso iniciado el 25 de abril. Incluso en ese entonces ya se habían producido las primeras desavenencias a consecuencia de la «nueva» postura de Spínola con respecto al problema colonial. En efecto, en su primera rueda de prensa como presidente de la Junta, y después de haber leído una proclama auténticamente revolucionaria que no había escrito él sino que había salido del seno del MFA, el general de monóculo había dicho, entre otras cosas, que «la autodeterminación es un derecho que tienen los pueblos para escoger su destino. Pero para poder llegar a eso, un pueblo debe estar preparado, debe poseer un nivel cultural mínimo. Por lo tanto, la independencia inmediata de nuestras colonias respondería al ejercicio de una voluntad que no sería la voluntad de un pueblo». Dicho esto se reafirmaba en las tesis federalistas que había expuesto en su libro. Este planteamiento no sentó bien entre los sectores más radi-



EFE

cales del MFA y menos aún entre los guerrilleros de las colonias que hicieron saber al general que no luchaban para convertirse en portugueses de color, sino para adquirir una completa independencia.

Pese a estas primeras divergencias, los partidarios de Spínola consiguieron imponerse y arrancaron su nombramiento como presidente. Al día siguiente, el 16 de mayo, Spínola nombró el primer Gobierno provisional, tal como se había prometido el 25 de abril. El nuevo gobierno estaba integrado por miembros del Partido Comunista, del Partido Socialista y del Partido Popular Democrático, bajo la presidencia de Adelino da Palma Carlos, un abogado de derechas, hombre de confianza de Spínola y que había sido acusado por los comunistas de ser «un conservador ligado a la masonería».

Caída de Spínola

La colocación de Palma Carlos al frente del Gobierno provisional tenía para Spínola una gran importancia es-

tratégica. Con la ayuda de su jefe del Gobierno, Spínola intentaba que se le fuesen traspasando todos los poderes, en un claro intento de marginar a las fuerzas de izquierda que cada vez presionaban más para acelerar el proceso revolucionario.

Pero la estrategia fracasó. La propuesta de Palma Carlos para adelantar la elección del presidente de la República mediante sufragio directo fue rechazada por el Consejo de Estado el 8 de julio. Al día siguiente, Palma Carlos presentó la dimisión junto a la de su vicepresidente Sá Carneiro y a la de los ministros del Interior, Magalhães, de Defensa, Firmino Miguel y de Economía, Vieira de Almeida, que constituían el ala derecha del gabinete.

Los días siguientes fueron un verdadero pulso entre los spinolistas y la izquierda del MFA. Aquéllos querían nombrar a otra persona de la confianza del presidente, siendo su candidato el teniente coronel Mario Firmino Miguel, que había dimitido a su cargo de ministro de Defensa y que era conser-

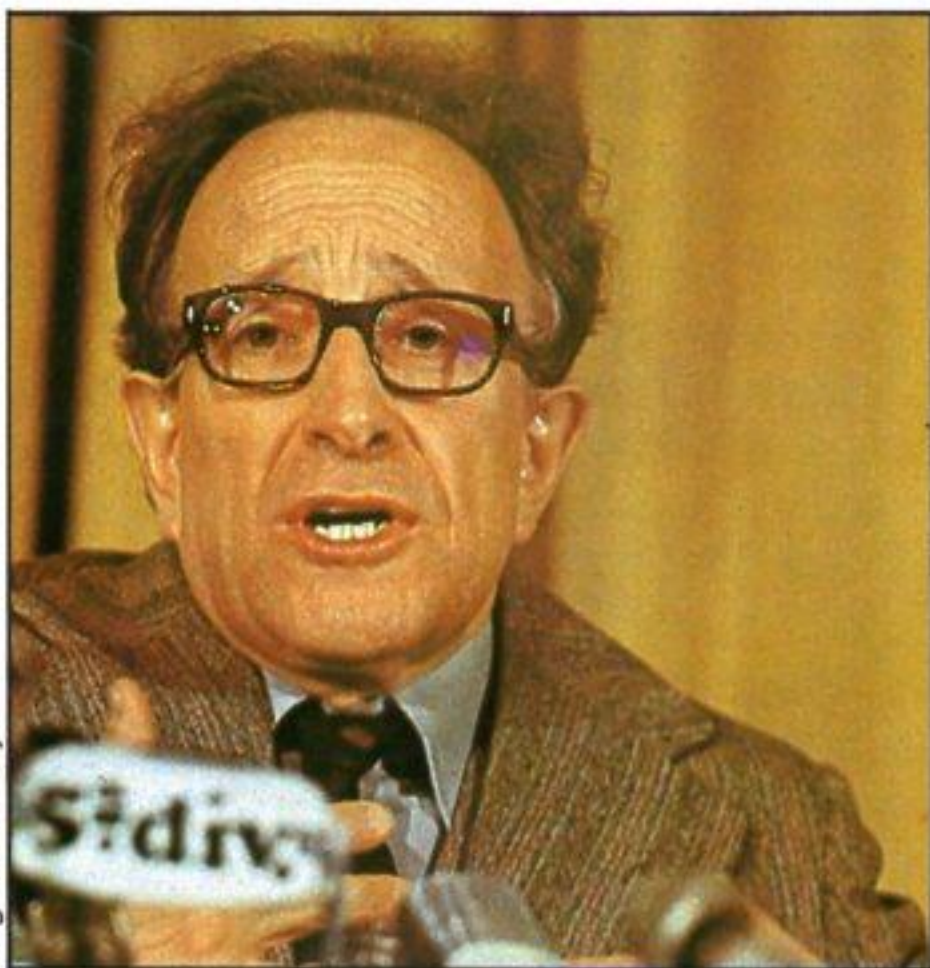
vador y fiel a Spínola. La izquierda, en cambio, proponía a militares ideológicamente cercanos al Partido Comunista o al Socialista.

Finalmente, y tras cinco días de intensos debates, se impuso el sector de izquierdas que un día antes de la elección del nuevo primer ministro ya había dado una muestra de su poder nombrando al mayor Otelo Saraiva de Carvalho, perteneciente al sector más radical del MFA, como jefe de la región militar de Lisboa y vicese del Copcon, organismo militar encargado del mantenimiento del orden público. Fue así como el 13 de julio, los portugueses recibían con sorpresa el nombramiento de un militar prácticamente desconocido para el cargo de primer ministro. Se trataba del coronel Vasco dos Santos Gonçalves, considerado como uno de los pocos técnicos que poseía el Ejército y ligado estrechamente al Partido Comunista. Acompañaban a Gonçalves en el gabinete el propio secretario del Partido Comunista, Álvaro Cunhal como ministro sin cartera,

Vasco Gonçalves

Prestigioso táctico militar, que ganó ascensos y condecoraciones en los turbios, casi invisibles campos de batalla de las colonias portuguesas de África, al entonces comandante Vasco Gonçalves no se le conocían simpatías políticas cuando nació el MFA, al que pronto se adhirió y del que pronto se convirtió, con Melo Antunes y con Saraiva de Carvalho en una de las verdaderas «eminencias grises».

Promotor directo y estratega del límpido golpe de Estado de 1974, Vasco Gonçalves permaneció en un calculado segundo plano durante el breve interregno ambiguo de Spínola presidente y Da Palma Carlos primer ministro. Pronto pasaría a ocupar el cargo de este último. Apoyándose principalmente en el PC de Cunhal, prosoviético y stalinista, aunque con el apoyo también del todavía activo y combativo MFA, Vasco Gonçalves intentó radicalizar la revolución y hacerla converger quizá a saltos demasiado grandes con el verdadero socialismo. Después de sofocar un torpe golpe de Estado, cada vez más ensañadamente combatido por el socialismo de Soares y el PPD de Sá Carneiro, Vasco Gonçalves presentó su dimisión un año después de haberse hecho cargo del poder. Luego fue desposeído de todos sus rangos militares.



Magnun/Zardoya

En la página anterior, fervoroso recibimiento del pueblo portugués a los líderes políticos que regresan del exilio tras el triunfo de la sublevación militar.

En esta página, arriba, las calles de Lisboa empapeladas por la propaganda electoral en

visperas de las primeras elecciones democráticas, que se celebraron el 25 de abril de 1975.

En esta página, abajo, Vasco Gonçalves, primer ministro de Portugal durante el período más fecundo de la revolución de abril.



AGE

el socialista Mario Soares como ministro de Relaciones Exteriores, mientras que en Defensa reasumía el teniente coronel Firmino Miguel.

Desde el primer momento, la convivencia entre Spínola y Gonçalves se hizo verdaderamente difícil. Máxime si se tiene en cuenta la posición de Spínola con respecto al tema colonial, en el que se mostraba cada vez menos dispuesto a conceder las independencias prometidas. Pese a que el 27 de julio Spínola se dirigió a la nación para anunciar el inicio del proceso descolonizador mediante la promulgación de una enmienda constitucional que le diese base legal, el presidente intentaba obstaculizar, o al menos demorar al máximo, la puesta en marcha de dicho proceso. En este marco hay que considerar la entrevista que el general sostuvo con Mobutu —considerado como el hombre de la CIA en África— con respecto al tema de Angola.

El 27 de septiembre, la tensión entre el presidente y el primer ministro alcanzó su punto máximo cuando,

al asistir ambos a una corrida de toros en Lisboa, una multitud de derechas aplaudió al general Spínola al tiempo que insultaba al primer ministro. Simultáneamente se anunciaba una manifestación de la «mayoría silenciosa» para apoyar al presidente.

La manifestación no llegó a celebrarse, pero militares próximos a Spínola fueron arrestados y acusados de un posible complot. Acorralado por sus enemigos políticos, Spínola presentó su dimisión el 30 de septiembre, en un patético discurso televisado a todo el país en el que el presidente afirmó que el espíritu del 25 de abril estaba ahora comprometido, al tiempo que denunciaba que el caos y la anarquía reinaban en el país. Ese mismo día asumió como nuevo presidente el general Francisco Costa Gomes.

Nuevo intento golpista

Tras la sustitución de Spínola en la presidencia de la República se produjo un aceleramiento en el controvertido tema de la descolonización. Se inicia-

Otelo

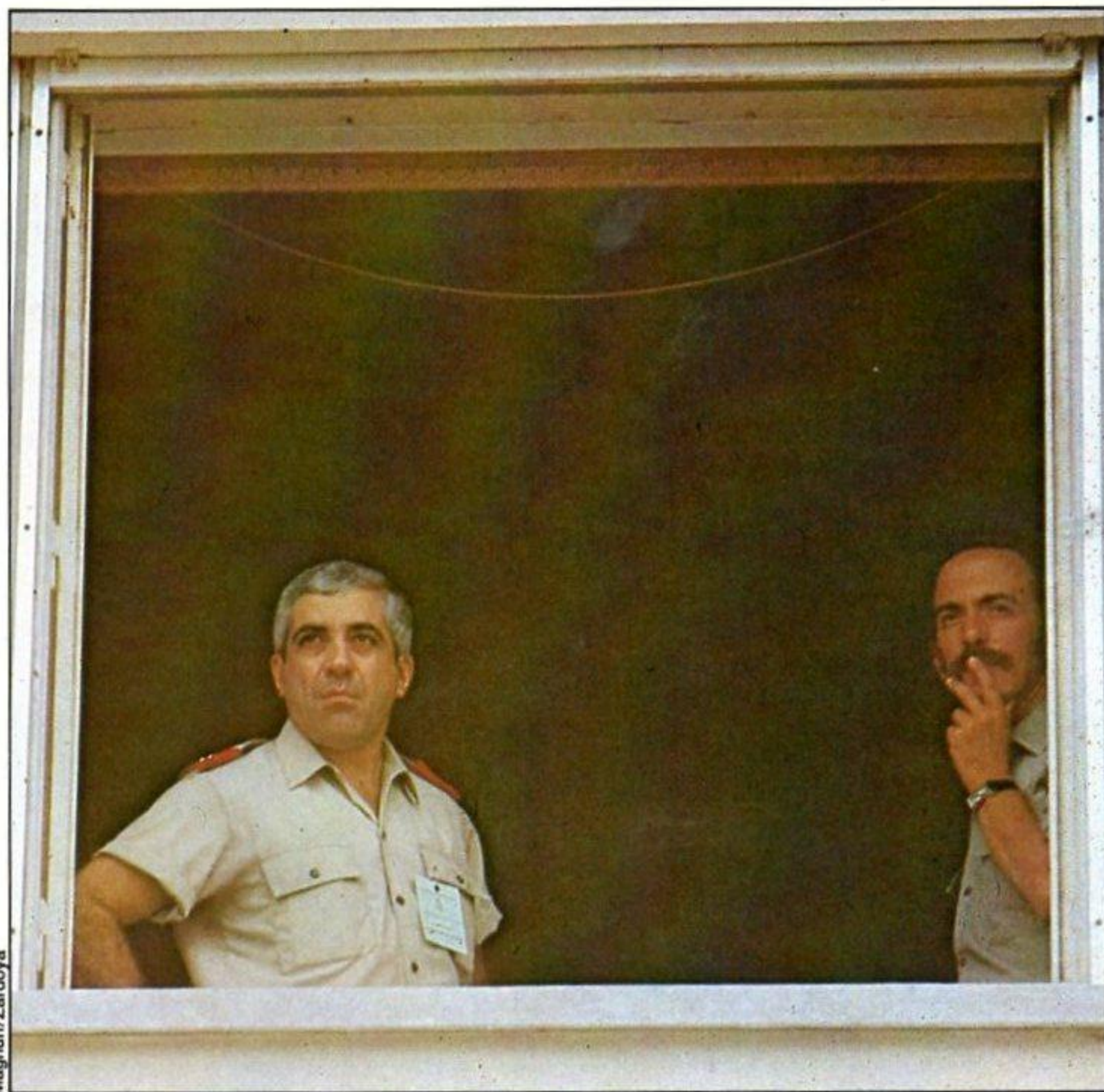
Otelo Saraiva de Carvalho tenía 37 años cuando se produjo el alzamiento que desembocó en el golpe de Estado del 25 de abril de 1974 y en la llamada revolución de los claveles. Hombre con un indudable carisma y con un profundo arraigo entre las masas populares, fue vertiginosamente ascendido al generalato desde el cargo de simple capitán y por un tiempo formó parte del triunvirato que con Costa Gomes y con Vasco Gonçalves rigió los destinos de Portugal. Si bien su duración fue efímera, la labor de los triunviros fue fecunda, por lo menos en lo que se refiere a la independencia de las antiguas colonias.

Considerado, temido por un tiempo como un Fidel Castro europeo en potencia, zancadilleado por derecha y por izquierda, inhábil para el ejercicio retorcido de la política, Saraiva perdió rápidamente su poder y se eclipsó, tras un torpe intento de rebelión, el 25 de noviembre de 1975. En las elecciones de junio de 1976 hizo su última y todavía resonante aparición pública. Erigido como candidato a la presidencia con el apoyo de partidos y grupúsculos de extrema izquierda y a pesar de la sistemática campaña que fraguaron en su contra todos los que todavía le temían (que iban desde la derecha más reaccionaria hasta el propio Partido Comunista de Álvaro Cunhal), obtuvo sin embargo la no desdeñable cantidad de más del 16 % de los votos. Aquél fue el último gran susto que les dio a los poderes fácticos (todo es poderío fáctico menos el pueblo vapuleado) este hombre que pudo ser grande y que no lo fue, por debilidades propias sin duda y por mezquindades y cobardías ajenas también.

En esta página, Otelo Saraiva de Carvalho, uno de los principales inspiradores de la revolución de los claveles y máximo exponente de la línea radical del Movimiento de las Fuerzas Armadas; fue sin duda la figura más carismática de la revolución y hubo quien lo consideró como un Fidel Castro europeo, hasta que su estrella se eclipsó al fracasar al frente de una sublevación izquierdista en noviembre de 1975.

En la página siguiente, arriba, Mario Soares saluda a sus seguidores en un mitin celebrado en Lisboa durante la campaña previa a las elecciones legislativas de abril de 1976.

En la página siguiente, abajo, Ramalho Eanes, que con el apoyo del Partido Socialista se impuso en las elecciones a la presidencia de la República de junio de 1976, siendo reelegido en diciembre de 1980.



ron rápidamente negociaciones con los movimientos emancipadores de las colonias que, poco después, culminaron con la independencia de las mismas.

Sin embargo, las divergencias no se habían eliminado por completo en el seno del Gobierno. Esta vez el enfrentamiento tendría lugar entre socialistas y comunistas. El 14 de enero, los comunistas organizaron en Lisboa una gran manifestación a favor de la central sindical única, a lo que respondieron los socialistas dos días después con otra manifestación solicitando el pluralismo sindical.

El 20 de enero, el Gobierno zanjó la cuestión aprobando, por mayoría, el proyecto de ley que sancionaba el principio de la central sindical única. Una semana después, el Partido Socialista se retiró del Gobierno en desacuerdo con esta medida.

Pero el enfrentamiento entre comunistas y socialistas sufrió un brusco aplazamiento en el mes de marzo a consecuencia de una nueva intentona golpista que puso en peligro los logros de la revolución. El 11 de ese mes, unidades de las Fuerzas Aéreas y de paracaidistas atacaron el Regimiento de Artillería Ligera número 1 de Lisboa (RALIS), donde se encontraba un destacamento bajo el mando de los oficiales más radicales del MFA. Tras el ataque, los rebeldes tomaron

el aeropuerto e intentaron la ocupación de otros puntos estratégicos pero fueron detenidos por la enérgica actitud de los oficiales revolucionarios que contaron con el apoyo del pueblo. El general Spínola, que como cabeza visible de este nuevo intento se encontraba dirigiendo las operaciones en la base de Tancos, huyó a España acompañado de su mujer y quince oficiales que le habían secundado en la frustrada intentona. Se acababa así la fugaz carrera política del general del monóculo quien, ligado al poderoso grupo de Champalimaud —que controlaba cerca de un centenar de empresas— jamás había estado de acuerdo con los postulados radicales de la revolución.

El 11 de marzo supuso la muerte definitiva del salazarismo y de las antiguas estructuras portuguesas. Los hombres más influyentes de la derecha involucionista fueron detenidos o huyeron del país en la noche del 11 al 12 de marzo. Asimismo, el 11 de marzo consagró el ascenso fulminante de los militares más radicales, situados a la izquierda del Partido Comunista, aglutinados en torno a su líder Otelo Saraiva de Carvalho.

El proceso se radicaliza

Fracasada la intentona golpista se produjo una importante radicalización del proceso revolucionario. Los meses



que le siguieron fueron quizá los más intensos y fructíferos en medidas políticas y económicas desde el 25 de abril.

El 12 de marzo, se creó el Consejo de la Revolución, compuesto por 28 militares que, al día siguiente de su constitución, decretaba la nacionalización de la banca y las compañías de seguros.

Entretanto, en el plano político, se constituía el nuevo gobierno que debería llevar al país hacia la democratización. Como el anterior, estaba presidido por Vasco Gonçalves y contaba con ministros comunistas, socialdemócratas y socialistas. De esta forma, los socialistas de Soares regresaban al Gobierno, tras la retirada producida a causa de las discusiones sobre la central sindical.

Mientras el Consejo de la Revolución seguía adelante con sus planes de nacionalizaciones e iniciaba una tímida reforma agraria, los partidos políticos se lanzaban a la campaña electoral para las elecciones a la Asamblea Constituyente. Como paso previo a dichas elecciones, los partidos y el Movimiento de las Fuerzas Armadas firmaron un acuerdo por el cual aquéllos se comprometían a seguir «la dirección socialista de la revolución portuguesa».

El 21 de abril, cuatro días antes de los comicios, la Iglesia Católica portuguesa a través de sus obispos reunidos

en Fátima, advertía a sus fieles sobre la prohibición de votar a partidos «cuyo credo sea incompatible con la doctrina cristiana del hombre y la sociedad».

Pese a las advertencias de la Iglesia, el 25 de abril de 1975 los comicios indicaron un claro predominio de la izquierda, al menos de la izquierda moderada, sobre la derecha. El Partido Socialista obtuvo más de dos millones de votos, lo que significaba un 37,87 % del electorado. Le siguió el Partido Popular Democrático con casi un millón y medio de sufragios y un 26,38 % del electorado. Como tercera fuerza quedaba el Partido Comunista con más de 700.000 votos y un 12,53 % del electorado. La derecha, representada por el Centro Democrático Social (CDS), cosechaba un rotundo fracaso con menos de medio millón de votos y un 7,65 % del electorado. El resto de los votos quedaba repartido entre partidos de nula significación política.

Crisis de Gobierno y caída de Gonçalves

El resultado de las elecciones a la Asamblea Constituyente provocó un recrudecimiento en los enfrentamientos entre el Partido Comunista y el Socialista. Enfrentamiento al que se sumaba la pugna cada vez más evidente entre las tres líneas más importantes del Movimiento de las Fuerzas Arma-



Zardoya

das: la de Vasco Gonçalves apoyada por el PC, la del Grupo de los Nueve capitaneado por Melo Antunes y apoyado por el PS, y, por último, la radical de izquierda liderada por Saraiva.

En medio de este clima de tensión política y militar, la crisis estalló en el mes de mayo como consecuencia de la clausura del periódico *República*, órgano de prensa del Partido Socialista. La medida estuvo motivada por una «insurrección» de los tipógrafos, en su mayoría de tendencia comunista, que ocuparon el periódico y destituyeron a su director Raul Rego. Al día siguiente, el 21 de mayo, los ministros socialis-

Al igual que los claveles que la simbolizaron, la revolución portuguesa

se fue marchitando poco a poco hasta perder todo el empuje de sus primeros tiempos.

tas decidieron no participar en las reuniones del Gobierno hasta la reapertura del periódico, al tiempo que convocaban a una manifestación de repudio contra la medida.

Entretanto, en el seno del MFA la línea radical ganaba cada vez más fuerza. A comienzos del verano, el 21 de junio, el Consejo de la Revolución aprobó, tras una larga discusión, un documento en el que se reafirmaba que el «objetivo de una sociedad socialista sin clases» debe ser perseguido por encima del libre pluralismo de los partidos. La radicalización del Consejo de la Revolución, dominado entonces por los sectores izquierdistas del MFA, provocó la reacción del Partido Socialista y el Partido Popular Democrático que en el mes de julio abandonaron el Gobierno.

Sin embargo, las divergencias entre las líneas del MFA y la presión internacional a cargo de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea derivaron en la renuncia de Vasco Gonçalves (10 de agosto), quien no encontró respaldo entre los sectores radicales de Otelio Saraiva de Carvalho.

La caída de Gonçalves fue aprovechada por el sector más moderado del MFA, liderado por Melo Antunes, para marginar a los sectores de izquierda. Medida que fue complementada por el nuevo gobierno presidido por Pinheiro de Azevedo.

La intentona izquierdista de Otelio Saraiva de Carvalho, el 25 de noviembre de 1975, culminó con un rotundo fracaso y significó el definitivo desplazamiento de los elementos verdaderamente revolucionarios.

Con la tardía y fracasada sublevación de Otelio se estancaba definitivamente el proceso revolucionario. La derecha retomó la iniciativa y pasó a controlar el proceso mediante el desplazamiento de las facciones más radicales del Movimiento de las Fuerzas Armadas. Se disolvió el Copcon y se paralizaron las nacionalizaciones y la reforma agraria, poniendo freno a todas las iniciativas que habían surgido en el fecundo período anterior.

Los claveles se marchitan

Promulgada la nueva Constitución se registraron sucesivas elecciones en las que triunfaron los socialistas: en abril de 1976 se impusieron en las legislativas, en junio en las presidenciales y en noviembre en las municipales. Con el respaldo de los votos el



nuevo primer ministro, Mario Soares, invalidó las medidas tomadas durante el auge revolucionario, llegándose incluso a la rehabilitación de los políticos salazaristas y de los miembros del PIDE. Los cambios posteriores de Gobierno —gabinete de transición de María de Lurdes Pimassilgo, triunfo electoral y Gobierno de Sá Carneiro y nueva victoria de Soares en 1983— no hicieron más que confirmar la muerte de la revolución.

Hoy ya no florecen claveles en Portugal. Ni siquiera en los fusiles. Los empecinados burgueses uniformados que derrumbaron la dictadura, que eliminaron a la feroz policía política del salazarismo (la antes tristemente célebre y hoy ya notoriamente olvidada

PIDE), que emprendieron con entusiasmo la vía del socialismo hasta que les cambiaron las agujas con subrepticias maniobras, los que empuñaron con claveles sus fusiles para darles la independencia a las viejas colonias, para tratar de independizar realmente y de liberar a su propia patria, están todos archivados, polvorientos. La verdadera cara del verdadero socialismo (una utopía que existió un día: lo que tarda en marchitarse un clavel) es la cara ya borrosa en la memoria de Saraiva, de Melo Antunes, de Vasco Gonçalves, de otros más también todavía más borrosos y perdidos. Los que perdieron su propia buena fe, su ilusión, su entusiasmo, su esperanza: la vieja virtud, virgen, burguesa, de la inocencia.

El escándalo Watergate

La caída de un presidente

Miguel Ángel Bastenier,
periodista

El caso Watergate fue un terrible golpe para el ya castigado orgullo norteamericano, puesto que todo el sistema político y moral en el que se creía parecía venirse al suelo.

Estupefacta, la opinión pública veía el fin de muchos y viejos mitos. En la fotografía, Nixon presenta su renuncia, rodeado por su familia, ante las cámaras de la televisión.

Jamás un presidente de Estados Unidos había dimitido de su cargo; jamás había abandonado la Casa Blanca antes del término de su mandato, salvo por circunstancias tan ajenas a la voluntad humana como el fallecimiento; jamás, con anterioridad a la dimisión de Richard Milhous Nixon, ocurrida el 9 de agosto de 1974, cuando faltaban todavía más de dos años para concluir su segundo período presidencial. Con la dimisión del presidente Nixon dos palabras quedaban incorporadas al folklore político de nuestro tiempo: «Watergate» e «impeachment».



Doctor Nixon y Mister Hyde

Richard Milhous Nixon nació en 1913 en la localidad californiana de Yorba Linda. Su padre era un conductor de tranvías de Ohio que había emigrado a la Costa Oeste para hacer fortuna sin una especial aptitud para ello. Estudió derecho en la universidad de Duke, doctorándose con excelentes calificaciones y, tras una fallida experiencia como comerciante de naranjas, comenzó en los años cuarenta una carrera que por la práctica de la abogacía le llevó a una intensa actividad política.

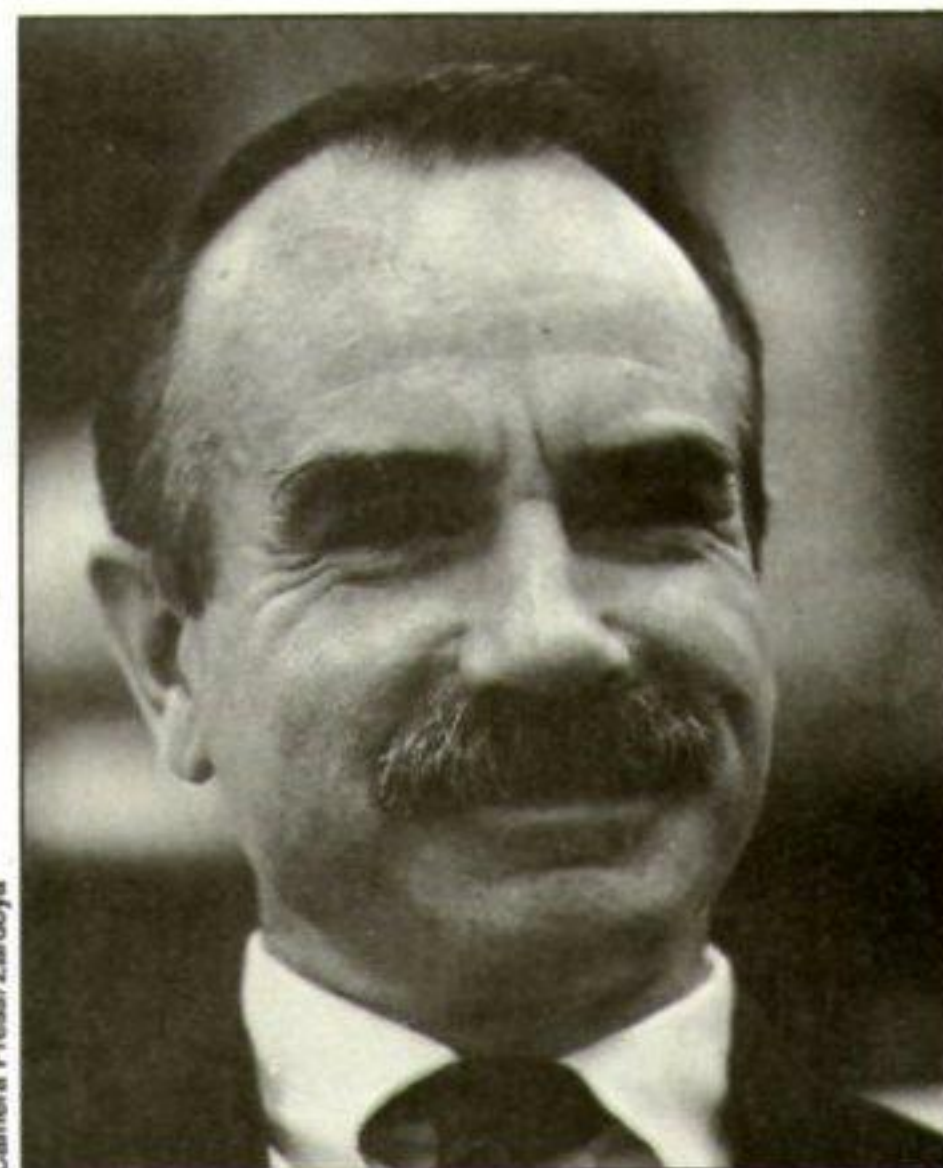
Elegido miembro de la Cámara de Representantes (1947) y luego senador (1951), tuvo la fortuna de ser recomendado al candidato republicano Dwight Eisenhower como compañero de viaje en las elecciones presidenciales de 1952. El joven Richard era todo lo contrario que el general. Si la figura casi patriarcal de Eisenhower tranquilizaba, Nixon advertía con su sola presencia que la Administración era una carrera de obstáculos. Su forma política se había hecho sobre una reputación conservadora, dramáticamente anticomunista en un país en el que no había comunistas, y a la que no repugnaba la jugada política de dudosa moralidad. Los watergates de sus primeros años sólo escaparon a la atención pública porque Nixon era uno más de los practicantes del juego sucio político.

El Nixon que fue derrotado por John Kennedy en las elecciones presidenciales de 1960, y en 1962 por Edmund Brown en la competición para ser gobernador de California, era un hombre que anunciaba que se retiraría definitivamente de la política, y lo hacía con todo el resentimiento del parvenu que no ha logrado su propósito. Por eso, al resurgir en la cresta de la ola del Partido Republicano en las elecciones de 1968, en las que derrotó a Hubert Humphrey, era un presidente que odiaba y se sentía odiado. Un hombre tímido hasta la enfermedad, incapaz de la menor conversación sostenida a corta distancia y mirando a los ojos del interlocutor, que pugnaba desesperadamente por el reconocimiento de sus pares, pero que ante el temor de una negativa se cerraba increíblemente en sí mismo, por lo que era capaz de trenzar los más complicados mecanismos de evasión en sus relaciones, incluso con sus más íntimos colaboradores.

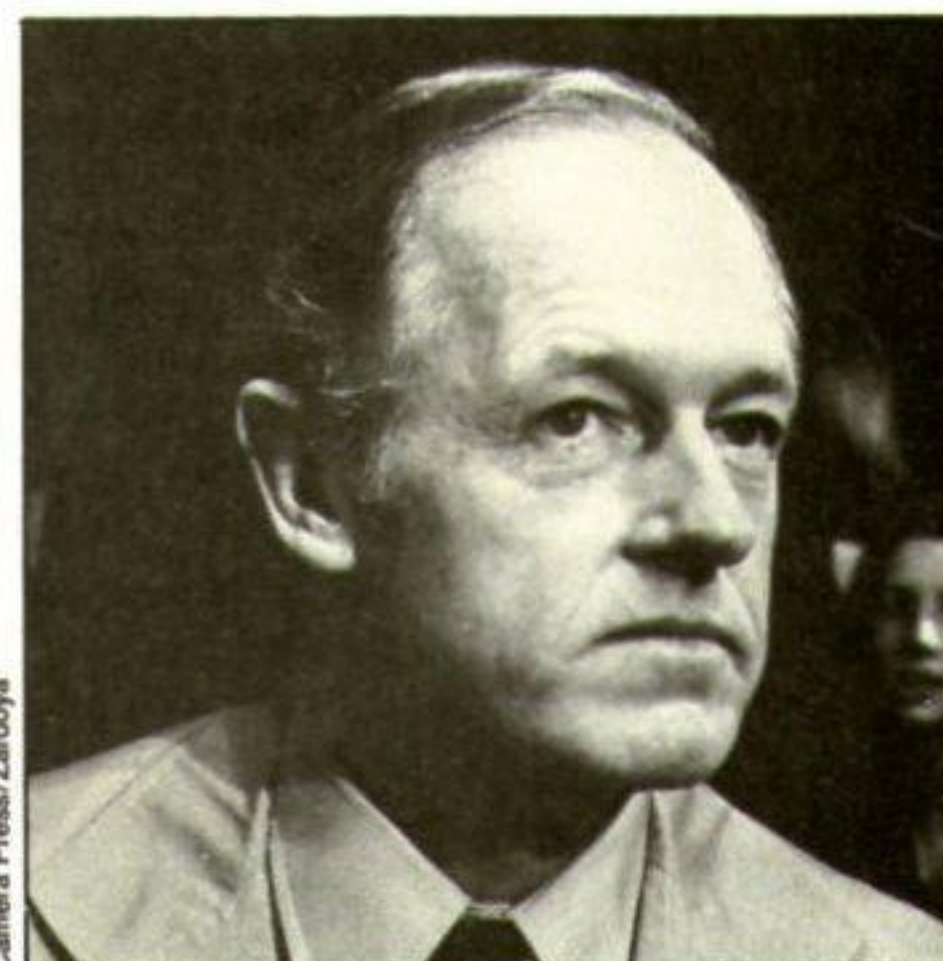
El presidente Nixon vivió Watergate en una comprensible incredulidad. La campaña electoral era un torneo de habituales bajezas en el que los demócratas no le iban a la zaga a los republicanos. ¿Por qué entonces él hubo de ser elegido para pagar por los pecados de toda la humanidad? Nixon sabía que el ejército de sus enemigos hallaría en su persona la coartada de su propia honradez, no perdonándole lo que habría merecido una irritada indiferencia en otro presidente.

El error de Nixon no fue Watergate, sino haber sabido que sus colaboradores habían urdido el espionaje del cuartel demócrata y haber participado luego en la operación de encubrimiento. ¿Por qué, entonces, Nixon no arrojó por la borda a los que estaban manchados en el caso? Nixon no podía hacer limpieza en su entourage, aun en el caso de que no hubiera tenido conocimiento previo del asalto, porque sabía que era imposible atajar la gangrena sin tener que separarse de todo su círculo más próximo de colaboradores. Porque sabía que no había mal que atajar sino que todo su estilo de trabajo era el mal. O mejor dicho, no el mal sino la forma habitual de llevar adelante esos menesteres. A mayor abundamiento, ese estilo contaminado de proceder hacía que, inevitablemente, la confesión de uno de los implicados en este u otro watergate llevara, como la cereza atrae al racimo, a la siguiente confesión y de esta manera, en un reguero de pólvora quemada, hasta la propia presidencia. No. Una vez cometido el error de Watergate, el final era ineludible. Nixon tenía que mentir y encubrir. Primero porque era inimaginable que sus enemigos se atrevieran a lo que se atrevieron, y, después, porque había que proteger hasta sus últimas consecuencias la confidencialidad de la trampa.

Este hombre, destruido pero no psicológicamente acabado, quiso ser el Jekyll de la política exterior de su país; el que abrió la puerta de China y comenzó a cerrar la vietnamita; el que odiaba al comunismo pero sabía tratar a los soviéticos; pero también el que se vio obligado a retirarse como un Hyde perseguido por sí mismo, en un mundo en el que había vivido convencido de que sólo comportándose de esa manera habría podido llegar hasta donde lo hizo.



Camera Press/Zardoya



Camera Press/Zardoya



Camera Press/Zardoya

En esta página, arriba y en el centro, Gordon Liddy y Howard Hunt. Ambos supervisaron la operación desde una suite ubicada en un hotel del mismo edificio. El primero, frustrado candidato al Congreso, cumplía funciones de seguridad en la Casa Blanca. Hunt, a su vez, era consejero sobre estos temas, tras

haber sido un alto funcionario de la CIA. En la última fotografía, Frank Wills, vigilante nocturno que sospechó que ocurría algo raro y llamó a la policía.

En la página siguiente, desfile triunfal de Nixon durante la campaña electoral de 1972. Entonces estaba en la cumbre de su prestigio.



Allanamiento del cuartel demócrata

Todo había dado comienzo en la primavera de 1972. Nixon iba a presentarse a la reelección en noviembre de aquel año y el estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra de Vietnam agigantaba a los ojos del presidente republicano la figura de su presumible oponente, el demócrata Edmund Muskie. Un comité designado entre los allegados a Nixon había sido creado para asegurar su mejor reelección. Mejor y fraudulenta, si era necesario. El grupo de asesores, dirigido por el ex secretario de Justicia, John Mitchell, preparaba ambiciosos planes para desestabilizar el esfuerzo electoral del Partido Demócrata, que no excluían el recurrir a ciertas tretas, nunca llevadas a término, como la importación de un cargamento de prostitutas mexicanas con el que procurarse sabroso material fotográfico de sus rivales, reunidos en la vecina California para elegir al que debía ser su candidato. Una de las operaciones previstas, que sí llegó a realizarse, sería el allanamiento del cuartel general «enemigo», situado en el edificio Watergate de Washington, en el que se pensaba lle-

var a cabo una prometedora requisita de información sobre la campaña demócrata.

Tras un primer intento infructuoso, el 17 de junio de 1972, cinco hombres, que en uno u otro momento habían estado relacionados con la CIA, entraban en la sede del partido rival en lo que creían lo más seguro de la noche, mientras dos enlaces, Howard Hunt y Gordon Liddy, supervisaban la operación desde una suite próxima, en un hotel situado en el mismo inmueble. El encargado de seguridad del edificio, un joven negro llamado Frank Wills, se hallaba en esos momentos tomando un café en un bar al otro lado de la calle. En su primera ronda, Wills había descubierto cinta adhesiva en alguna de las cerraduras de las puertas de acceso a las oficinas y, sin dar mayor importancia al hecho, había quitado el adhesivo. Al regresar del bar volvió a encontrar las cintas en su sitio, repuestas por los torpes asaltantes en un segundo recorrido por las escaleras y pasadizos interiores. El vigilante pensó entonces que tanta coincidencia era sospechosa y avisó a la policía. Pocos minutos después, los cinco merodeadores descuidados eran detenidos y más tarde

sus confesiones permitían sumar a la redada a los dos supervisores, que inicialmente se habían escabullido del hotel.

Dos periodistas avisados

El *Washington Post* dio la noticia en primera página, pero el resto de la prensa norteamericana apenas reparó en el incidente. El *New York Times* lo relegó a páginas interiores titulado «Robo en el cuartel general demócrata». Dos jóvenes periodistas del *Post*, Bob Woodward y Carl Bernstein, decidieron, sin embargo, que allí había material para tirar del hilo e iniciaron una larga investigación que contribuiría, tras semanas y meses de tenaces indagaciones, a alertar al público de que Watergate era una enfermedad del poder más que un anónimo delito de tercer orden. Con todo, en la víspera electoral menos de la mitad de los votantes había oído hablar de Watergate, prácticamente ninguno lo creía motivo para cambiar de voto de republicano a demócrata, y ni se soñaba que Nixon pudiera estar implicado en aquel modesto escándalo. En consecuencia, el candidato republicano era elegido el 7 de noviembre con la mayoría más

Los hombres del presidente

Harold Robbins Haldeman, de 45 años, dimitió como jefe de la oficina presidencial el 30 de abril de 1973. Abstemio, miembro de la secta protestante de la Ciencia Cristiana y graduado en derecho por la Universidad de Los Angeles en 1948, fue vicepresidente de una agencia de publicidad en esta última ciudad. Empezó a trabajar para Nixon en la campaña para la reelección a la vicepresidencia en 1956 y fue censurado públicamente junto con su jefe por ciertas irregularidades cometidas en la campaña para la gobernación de California en 1962. Fue director de la campaña presidencial en 1968 y al ser nombrado jefe de la oficina del jefe de Estado resumió su misión diciendo: «todos los presidentes han de tener un hijo de perra, y yo soy el de Nixon».

John Daniel Ehrlichman, abogado, de 39 años, fue también miembro de la iglesia de la Ciencia Cristiana. Dimitió como principal asesor para la política nacional de Nixon el 30 de abril de 1973. Ejerció la carrera de leyes en Seattle y trabajó para la campaña presidencial del líder republicano en 1960 en misión de «espionaje» en el campo de su rival, Nelson Rockefeller. Fue censurado en 1962 en California junto a Nixon y Haldeman. En 1968, fue jefe de itinerario en la campaña. Nombrado asesor del presidente en el primer período, fue ascendido en 1970 al principal puesto en la política interior.

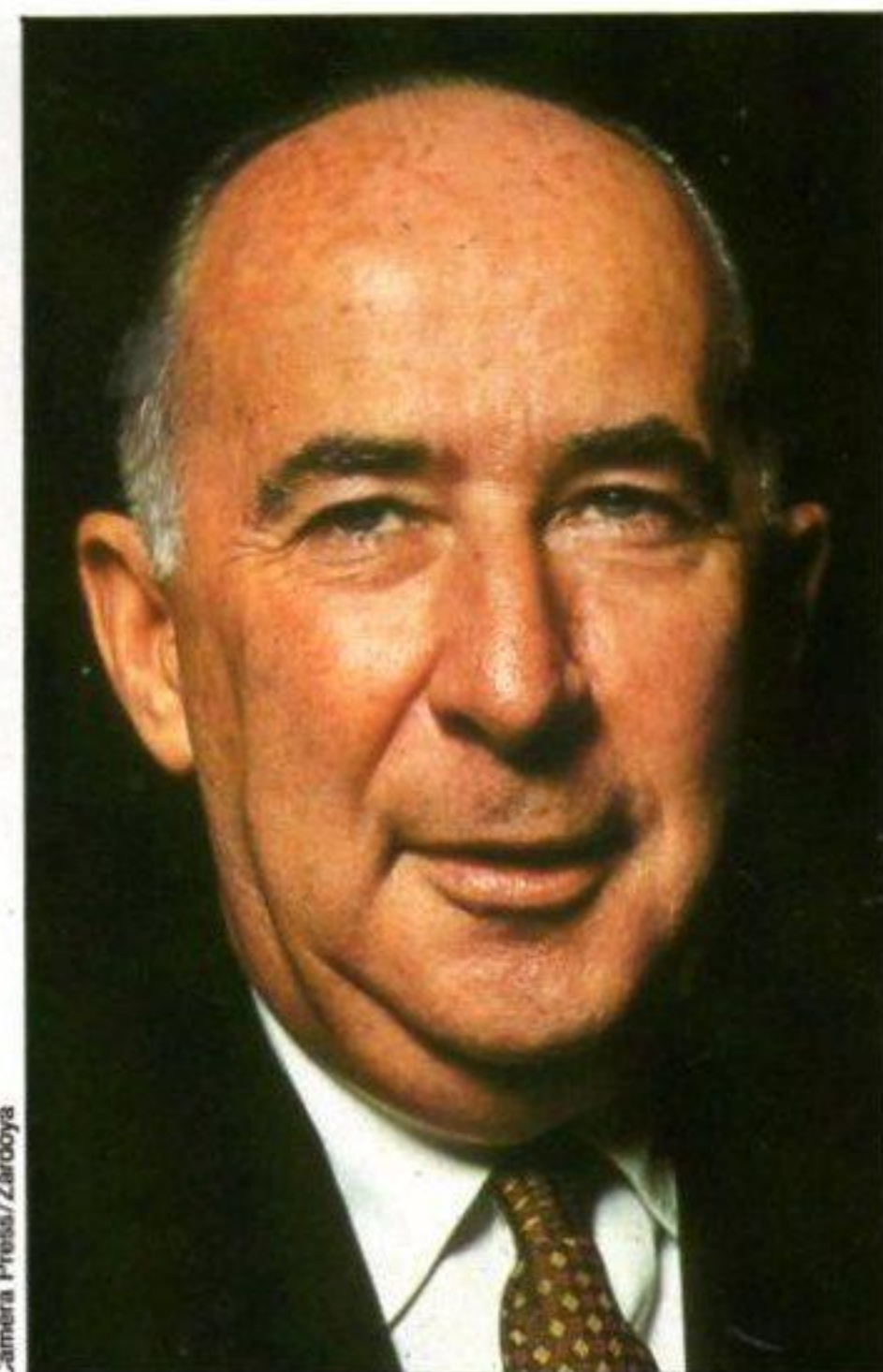
John Newton Mitchell, abogado, de 58 años, fue el máximo responsable de la campaña de Nixon en 1968, con quien había trabajado en una firma de Nueva York cuando el líder republicano abandonó la política, en 1962, para dedicarse a su profesión de abogado. Fue secretario de Justicia en el primer período presidencial y al tomar posesión comentó que con la elección de Nixon «el país se estaba tirando tanto a la derecha, que dentro de unos años ya no habría quien lo conociera». Dejó la secretaría de Justicia para dirigir el comité de reelección en 1972, cargo del que dimitió dos semanas después de producirse los arrestos de Watergate, pese a lo que siguió moviendo los hilos hasta la reelección.

John Wesley Dean, abogado de 33 años; dimitió de su cargo de asesor jurídico del presidente el 30 de abril de 1973. Estudió en la universidad de Georgetown, Washington, y trabajó durante seis meses en una firma de abogados de la capital norteamericana, de donde fue despedido por «comportamiento no ético». Fue contratado por Mitchell para el Departamento de Justicia, de donde pasó a suceder a Ehrlichman como asesor del presidente en junio de 1971.

James Walter McCord, de 53 años, sirvió en el FBI de 1948 a 1951, de donde pasó a la CIA. En varios momentos de su carrera ha sido agente responsable de red de la Agencia en Europa, llegando a desempeñar el cargo de jefe de seguridad en el cuartel general de la organización en Langley, Virginia. McCord y su gente, actuando como una empresa particular, fueron contratados para garantizar la seguridad de la convención republicana de 1968 en Miami, y para proteger las operaciones del comité de reelección del presidente.

Everett Howard Hunt, trabajó durante 21 años para la CIA; contaba 53 años y había llegado a ser subjefe de la organización en el hemisferio occidental. Autor de novelas baratas en las que defendía el trabajo de la Agencia con seudónimos como Robert Dietrich, Gordon Baxter y otros. Fue consejero del Departamento de Defensa en la frustrada invasión de Cuba en 1961, y agente de la CIA destacado en el Extremo Oriente, Europa y América Latina. Entró a trabajar para la Casa Blanca en 1969 como consejero de seguridad con un contrato de 100 dólares diarios.

Gordon Liddy, abogado, de 41 años. Candidato sin éxito al Congreso, hacía su campaña electoral con un poster en el que se leía: «Gordon Liddy no concederá fianzas a los criminales. Los meterá en la cárcel.» Trabajó varios años para el FBI y fue reclutado para hacer trabajos de seguridad para la Casa Blanca en 1971. Hombre de una extraordinaria resistencia física, solía quemarse los dedos con cerillas para acostumbrar su organismo al dolor.



Camera Press/Zardoya

dilatada de la historia de las elecciones presidenciales sobre su rival, el demócrata George McGovern.

Aparentemente, la Casa Blanca había logrado atajar la gangrena. Los procesados eran sólo los siete hombres que habían sido atrapados con las manos en la masa: cuatro cubanos y su jefe James McCord, más Hunt y Liddy. Con la promesa de ocuparse de sus familias y taparles la boca con dinero el comité había convencido a los siete acusados de que callaran y fueran a la cárcel. El juicio no se iniciaría hasta enero de 1973 ante un desconocido magistrado de distrito, John J. Sirica, mientras el presidente vivía dedicado a sus correrías desde China a Oriente Medio, cuidadosamente desinteresado de groserías menores y otras delincuencias. Pero de todos los acusados, uno, James McCord, ex agente de la CIA, había llegado a conclusiones muy diferentes. Adivinando que, si llegaba el caso, la Casa Blanca presentaría la operación como un exceso de celo de grupos relacionados con la Agencia Central de Inteligencia, el ex agente empezó a desenredar el ovillo.

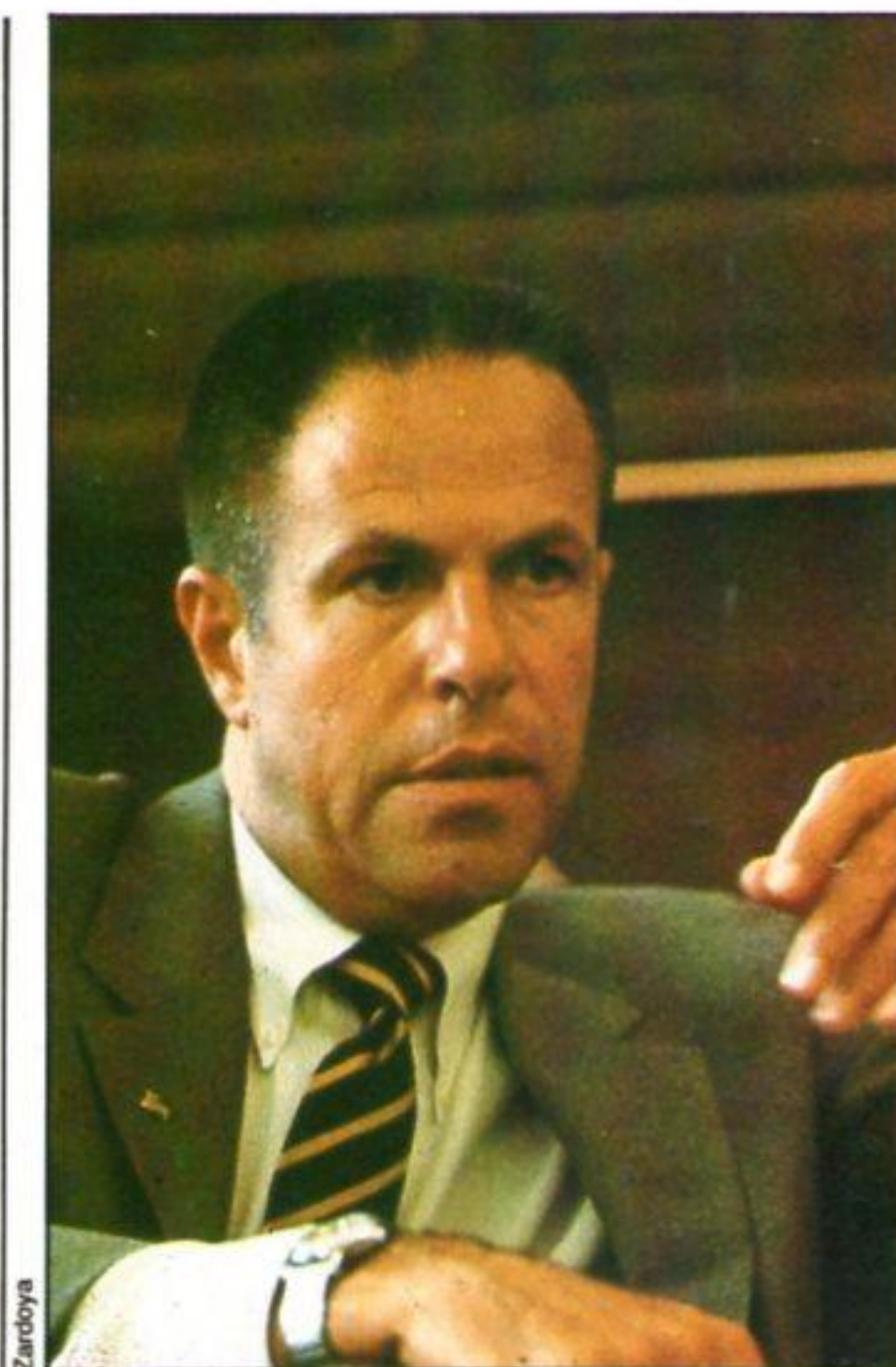
El 30 de enero de 1973, los cuatro cubanos eran sentenciados a 15 años de cárcel cada uno, Liddy a 20 con una multa de 400.000 dólares y Hunt a 35 años. Sirica había prometido medidas atenuantes a los condenados si cooperaban con la Justicia, y McCord, que ya había anunciado en el proceso que los acusados habían cometido perjurio y no faltaban implicados de mayor categoría cuyos nombres no se habían pronunciado, obtenía la libertad bajo fianza a cambio de asistir a la continuación de las investigaciones. El 7 de

En esta página, John Mitchell, jefe del comité de reelección en la campaña de 1972.

En la siguiente, a la izquierda, C. Bernstein y R. Woodward, del Washington Post. Con sus

revelaciones provocaron la caída de Nixon. A la derecha, Haldeman, uno de los colaboradores

más allegados al jefe de Estado, especializado en tareas «sucias» y de difícil realización.



febrero, el caso tenía la suficiente entidad como para que el Senado votara, sin murmullos en contra, la creación de una comisión investigadora presidida por el representante demócrata de Carolina del Norte, Sam Ervin.

La madeja comienza a deshilvanarse

Los primeros nombres citados por McCord fueron los de John Mitchell y John Dean, asesor jurídico del presidente, hombre joven y ambicioso que en aquellos momentos tenía a su cargo lo que ya cabía llamar el *cover-up*, la operación dirigida desde la Casa Blanca para que la investigación no se ramificara hasta el lugar de donde había partido la orden de allanar el Watergate. Con toda seguridad, Mitchell; con más que probabilidad, John Ehrlichman, primer asesor de política interior de Nixon, y H. R. Haldeman, jefe de la oficina presidencial, estaban implicados en el asunto, además de otras muchas figuras de segunda fila. ¿Y el propio presidente? De momento sólo estaba claro que altos personajes trataban a la vez de encubrir el escándalo de Watergate y, sobre todo, la misma operación de encubrimiento.

El primero en venirse abajo sería el joven Dean, un hombre que agradaba a Nixon por su deferencia, seguridad, maneras y conocimientos profesionales. El 2 de abril, el asesor de Nixon iniciaba las negociaciones con el Departamento de Justicia para obtener la inmunidad a cambio de sus declaraciones. Iniciadas éstas inmediatamente, en la segunda semana de abril Dean declaraba que había registrado la caja fuerte de Hunt, hallando material que

revelaba lo extenso de sus operaciones de espionaje político por cuenta de la Casa Blanca, y que el grupo de los cubanos ya había intervenido anteriormente en otras fechorías como el registro de la casa de Daniel J. Ellsberg, un psiquiatra que había trabajado para el Pentágono y hacía denodada campaña contra la política vietnamita de Nixon. El contenido de la caja fuerte de Hunt, que en la hora de Watergate era el único de los implicados que tenía un cargo en la oficina presidencial, se había entregado en presencia de Ehrlichman al director interino del FBI, Patrick L. Gray, para que lo destruyera. El 27 de abril éste tenía que renunciar iniciando una cadena de dimisiones de cargos relativamente menores en la Administración, con lo que todavía Nixon podía atajar, quizá, el mal donde no doliera demasiado. La pieza mayor que cabía conceder era la cabeza del propio Dean.

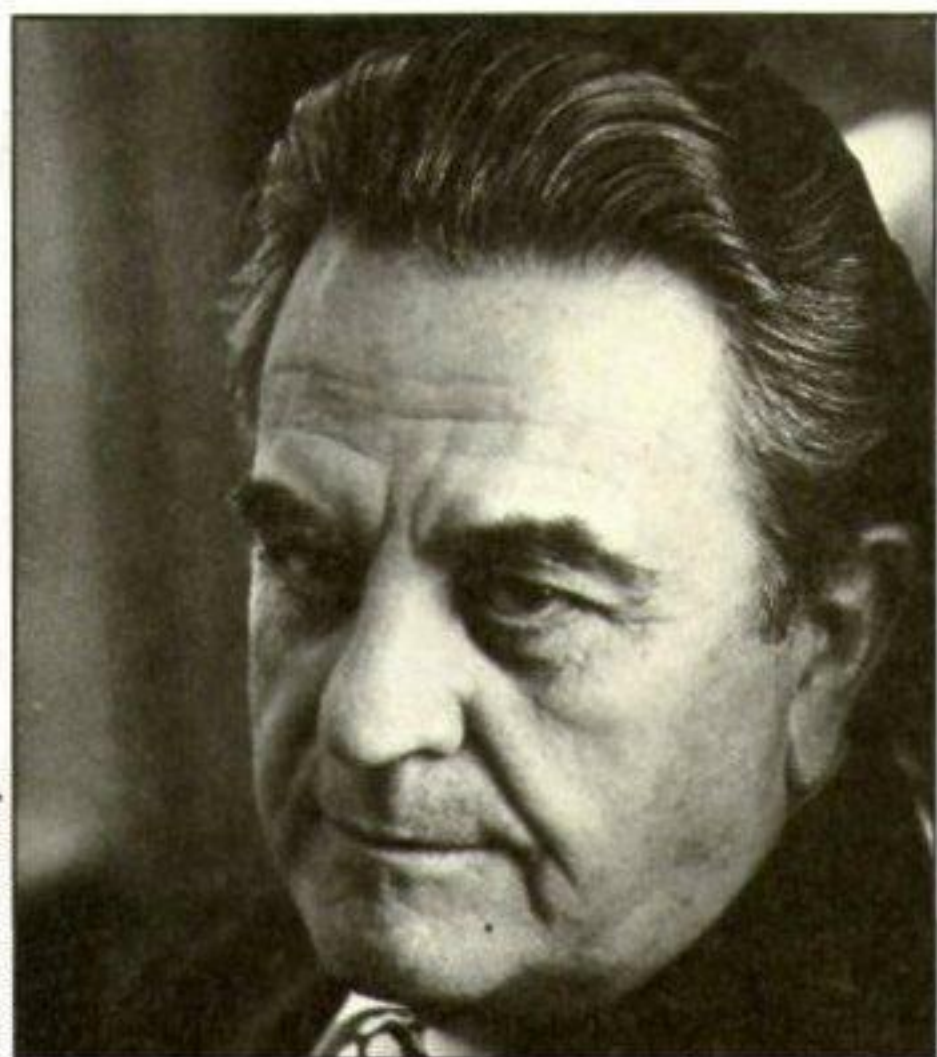
Primeras dimisiones

A mediados de mes, cuando Gray todavía luchaba por escurrir el bulto, Nixon había ordenado preparar dos cartas en las que Dean solicitaba permiso indefinido para dejar el cargo o presentaba frontalmente su dimisión. En ambas hacía una virtual confesión de que el encubrimiento había sido cosa suya y sólo suya. A la vista de lo que se le pedía que firmara, Dean repuso en una declaración pública que «si alguien cree o espera que me convierta en el chivo expiatorio del caso Watergate, no me conoce, no conoce la verdad de los hechos o ignora cómo funciona nuestro sistema de Justicia». Ese «alguien» todo el mundo entendía

que se trataba del propio Nixon. Ante este *impasse* el presidente sugirió a Dean que redactara él mismo su carta de dimisión. Horas después el asesor presentaba un texto en el que pedía «permiso indefinido», al igual que hacían Haldeman y Ehrlichman. Si los dos más íntimos colaboradores de Nixon no se iban con Dean, éste decía bien claro que se quedaba y seguía hablando hasta el final.

Tras unos días de tensión de puertas adentro y el anuncio de Nixon de que la Casa Blanca investigaba el caso y cooperaría plenamente con la Justicia para descubrir toda la verdad, en una alocución televisada el presidente daba a conocer el 30 de abril que había aceptado la dimisión de Haldeman y Ehrlichman, «dos de los más excelentes colaboradores con los que he tenido el privilegio de trabajar». Al final, como en una postdata sin importancia, anunciaba también la dimisión del «asesor presidencial, John Dean».

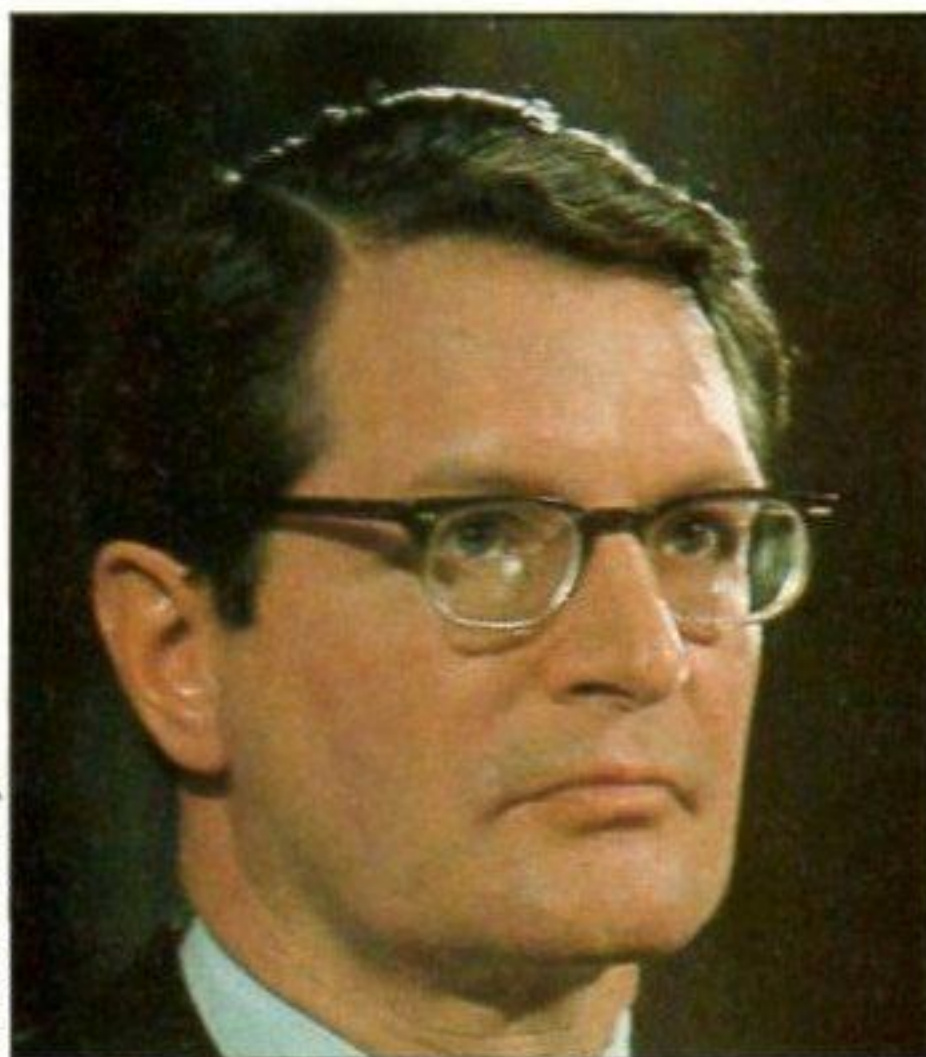
Las sesiones de la comisión investigadora del Senado comenzaron el 17 de mayo con una declaración de su presidente, Sam Ervin, en la que éste señalaba que «con la profusión de posibles acusaciones y dimisiones en perspectiva, el ciudadano no sabe a quién creer y puede legítimamente haber llegado a la conclusión de que la mecánica de gobierno esté tan implicada en todo el proceso, que sea imposible el ejercicio responsable de la autoridad». Aquel mes de mayo iba a ser crucial en lo que ya se perfilaba como una ofensiva de la legión de enemigos históricos de Nixon, que, generalizando, podían calificarse de «clase política liberal», para derribar al presidente, atacándole



desde todos los puntos cardinales. El propio mandatario llegó a comentar con su esposa e hijas a comienzos de mayo la posibilidad de dimitir, no tanto por que se sintiera culpable como por las dificultades que iba a experimentar una presidencia juzgada a diario en la prensa y en los foros políticos a la vista de la opinión pública. Respecto a su «culpabilidad», Nixon hacía, en cambio, una primera declaración el día 22 reconociendo la existencia de errores propios y delitos ajenos. En ella negaba que hubiera tenido conocimiento previo de la operación Watergate, pero reconocía que el comité de Mitchell había cometido «ilegalidades»; de la misma forma negaba tener nada que ver con las ofertas de dinero a los inculpadados o el intento de encubrir lo sucedido. «Debía haber sido más precavido, pero ni autoricé ni alenté a mis subordinados a cometer ilegalidades o impropiedades en la campaña electoral». Sus palabras contenían un mensaje a la clase política que ésta entendió perfectamente: el presidente no pensaba dimitir. Aplicando una de sus expresiones preferidas («cuando las cosas se ponen duras, sólo los duros tiran adelante»), Nixon iba a llevar la pelea hasta el final.

El cerco se estrecha

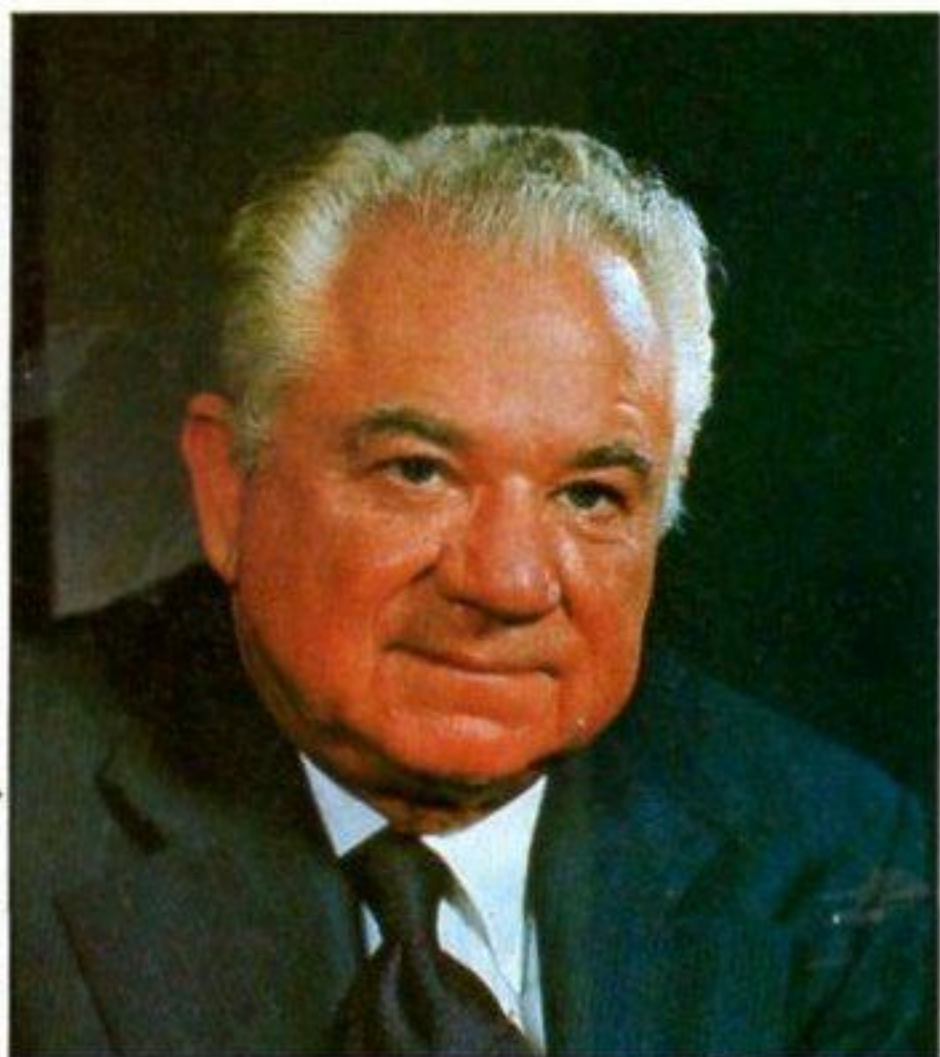
Pero el cerco no dejaba de estrecharse. Un republicano impecable, Elliot Richardson, de credenciales nada nixonianas, había sido nombrado secretario de Justicia, el 30 de abril, con la misión de dirigir la propia investigación del Departamento en todo el embrollo Watergate. La primera decisión de Richardson le hizo comprender a Nixon que no habría piedad. El 18 de mayo, era nombrado fiscal especial para el caso el demócrata Archibald Cox, ex-fiscal general en la Administración Kennedy, profesor de leyes en Harvard, donde había tenido como alumno al propio Richardson, y encarnación de



todo lo que Nixon odiaba en Washington y de todo lo que en Washington odiaba a Nixon. En su confirmación ante el Senado, Cox dejó bien claro a donde apuntaba la investigación. Si era preciso, dijo, «llevaré mis pesquisas hasta la misma mesa presidencial».

Las investigaciones del comité senatorial se habían centrado, por otra parte, en obtener acceso a los archivos de la Casa Blanca, en particular para revisar memorándums de las conversaciones entre Nixon y Dean celebradas de enero a abril de aquel año, que, según publicó el *New York Times*, habían sido alrededor de 40. El 8 de julio, el presidente respondía por escrito a Ervin negándose a testificar ante el comité o a facilitar la transcripción de sus conversaciones con sus subordinados, alegando que las comunicaciones interiores de la Casa Blanca eran confidenciales para proteger el funcionamiento de toda la maquinaria de gobierno.

Ante el comité Ervin comenzaba a desfilarse una impresionante nómina de testigos. A falta de Nixon, Dean había iniciado su deposición el 25 de junio con una formidable declaración que por sí sola llenaba 245 páginas, en la que el presidente aparecía, al menos, como conocedor del encubrimiento. Pero, de momento todo se reducía a la palabra de un dimisionario, perjuró y culpable de obstrucción a la justicia, contra la de un presidente. Sin embargo, la declaración de un oscuro funcionario de la Casa Blanca, Alexander Butterfield, efectuada el 16 de julio siguiente, cambiaría radicalmente el panorama de la batalla, temporalmente atascada en un match nulo. Nixon tenía instalado un sistema de grabación que se activaba con la sola emisión de la voz humana o cualquier otro ruido para registrar todo lo que se dijera en la oficina presidencial. Nixon, pensando en la posteridad de una presidencia histórica, no había tenido en cuenta el presente de una presidencia delictiva.



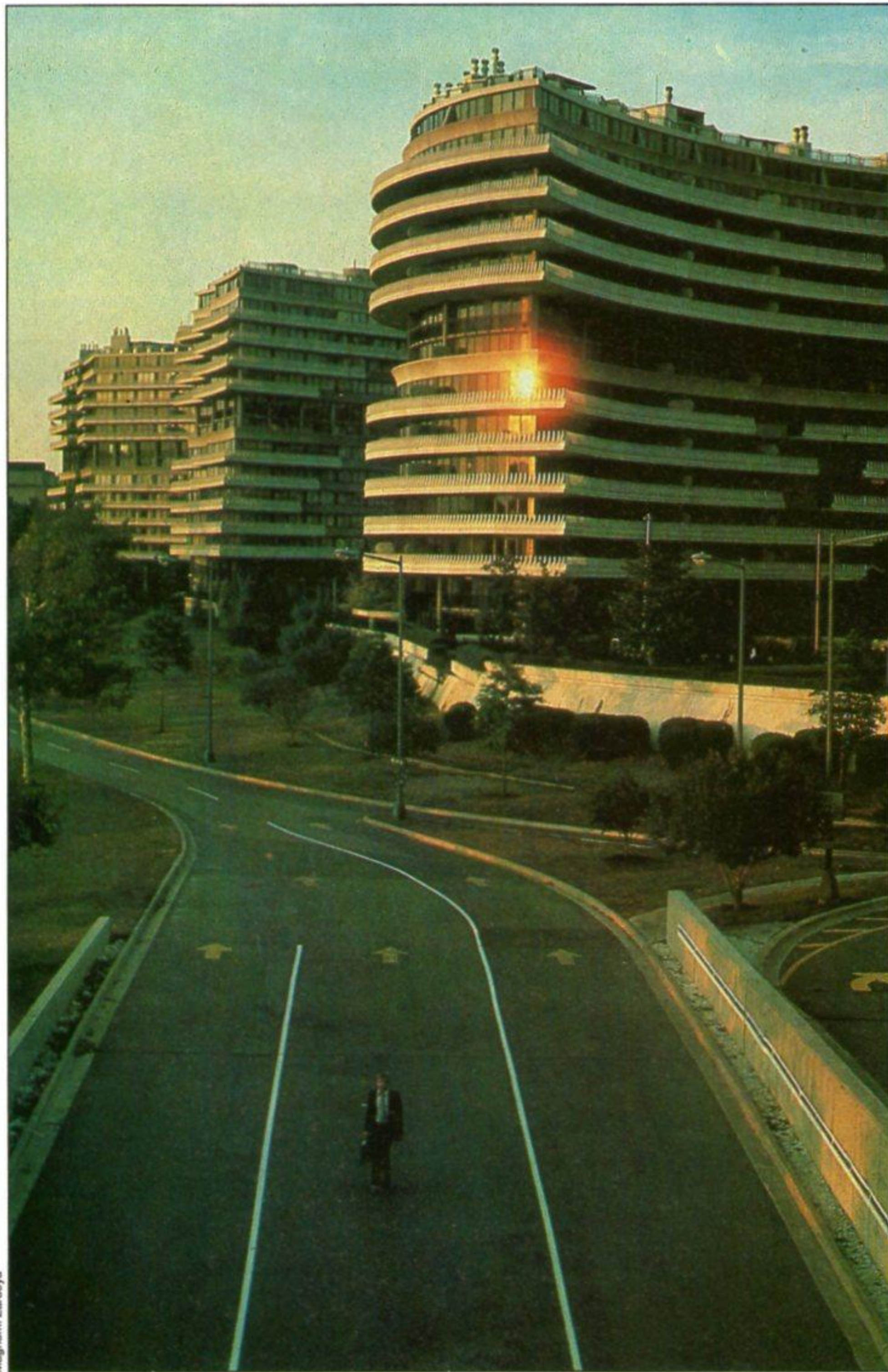
Ya no hacía falta perder el tiempo en la guerra de trincheras. Ervin, Cox y el juez Sirica podrían echar mano de las cintas para que todo se aclarara. Comenzaba una nueva fase de la lucha: la guerra de movimiento.

La «operación Agnew»

Como era de prever, Nixon, que no había querido entregar los memorándums de las conversaciones con sus subordinados, menos estaba dispuesto a permitir el acceso a las cintas y, así, el 23 de julio afirmaba: «Las cintas no dan respuesta a las preguntas que se formula el comité senatorial, puesto que, como cualquier transcripción de conversaciones informales, contienen comentarios que personas con perspectivas distintas interpretarían inevitablemente también de forma diferente». Ervin y Cox no dudarían en solicitar judicialmente ese mismo día la entrega de las cintas por medio del mandamiento debidamente requerido a la Justicia.

A comienzos de agosto, una curiosa pausa se iba a producir en la batalla de Watergate. Una pausa llena, a su vez, de una escaramuza paralela, un inciso supuestamente desligado de la conflagración general, pero íntimamente vinculado a ella: la «operación Agnew». La prensa publicaba el 6 de agosto lo que se presentaba como fruto de las investigaciones del Departamento de Justicia durante los últimos meses. El vicepresidente Spiro Agnew, una insignificancia política elegido por Nixon para acompañarle en 1968 y 1972, había recibido sobornos de hasta 50.000 dólares, unos años antes, cuando era gobernador del Estado de Maryland, al tiempo que los contribuyentes a su campaña habían recibido sustanciosos contratos federales a cambio de su generosidad.

Todo parece indicar que la «operación Agnew» había sido iniciada por la propia Administración con el fin de



Magnum/Zardoya

arrojar a los leones una víctima propiciatoria, de soltar lastre del globo que empezaba a desinflarse. La intención era la de arrojar una dimisión como pasto a los que pedían sangre, en la idea de que continuar entonces la ofensiva hasta obtener la renuncia del presidente sería demasiado escándalo, incluso para el «club de enemigos de Richard Nixon». Pero, al mismo tiempo, las fuerzas que se habían concitado contra el líder republicano eran conscientes de que la permanencia de Agnew en el cargo era casi un seguro para Nixon, puesto que nadie en la clase política deseaba ver a aquel hijo de un emigrante griego en la Casa Blanca,

completando el mandato del presidente cesado. Si, por el contrario, se obtenía primero la renuncia de Agnew, el camino hacia el gangrenado corazón de las tinieblas quedaría expedito.

Tras un período de ardorosos mentís del vicepresidente a todo lo que se le imputaba, y vigorosos contrataques en los que acusaba a Henry Peterson, vicesecretario de Justicia y encargado de la investigación contra Agnew, de «fracasar en su intento de llegar hasta el fondo del caso Watergate», por lo que «trataba de obtener la cabeza vicepresidencial» como premio de consolación, Nixon se veía obligado a intervenir para que la larga agonía de su

En la página anterior, a la izquierda, el juez John Sirica. Tenía a su cargo sólo la pesquisa del asalto al cuartel general demócrata, pero sus investigaciones influían en la campaña contra el presidente. Al centro E. Richardson, secretario de Justicia nada complaciente con Nixon, que dirigió la investigación de su Departamento y nombró como fiscal especial para el caso a Archibald Cox, un demócrata que estaba dispuesto a llegar hasta el fin para descubrir la verdad. A la derecha, el fiscal

León Jaworski, sucesor de Cox y tan implacable como éste en su afán por aclarar la delicada situación planteada. Su actitud fue decisiva para lograr la entrega de las cintas grabadas con las conversaciones entre Nixon y sus más cercanos colaboradores.

En esta página, el edificio Watergate, sede electoral del Partido Demócrata en 1972. El sol comienza a bajar, y pronto caerá la noche. Una noche igual a la que aprovecharon los hombres de Nixon para intentar su frustrado asalto.

segundo no dañara aún más la maltrecha presidencia. Lo que en todo caso deseaba el mandatario republicano era un *harakiri* limpio y silencioso, no la degollina de un marrano. En septiembre, Nixon ordenaba secretamente que Justicia negociara con Agnew su dimisión a cambio de una reducción en las acusaciones, y el 7 de octubre se llegaba finalmente a un acuerdo. Tres días después, Agnew entraba por la puerta trasera de un juzgado federal de Baltimore, capital del Estado de Maryland, para declararse culpable de un cargo de evasión de impuestos que databa de 1967, por lo que se le multaba con 10.000 dólares y quedaba en libertad vigilada durante tres años. Simultáneamente se anunciaba en Washington su dimisión. La batalla de Watergate podía reanudarse.

«La masacre del sábado noche»

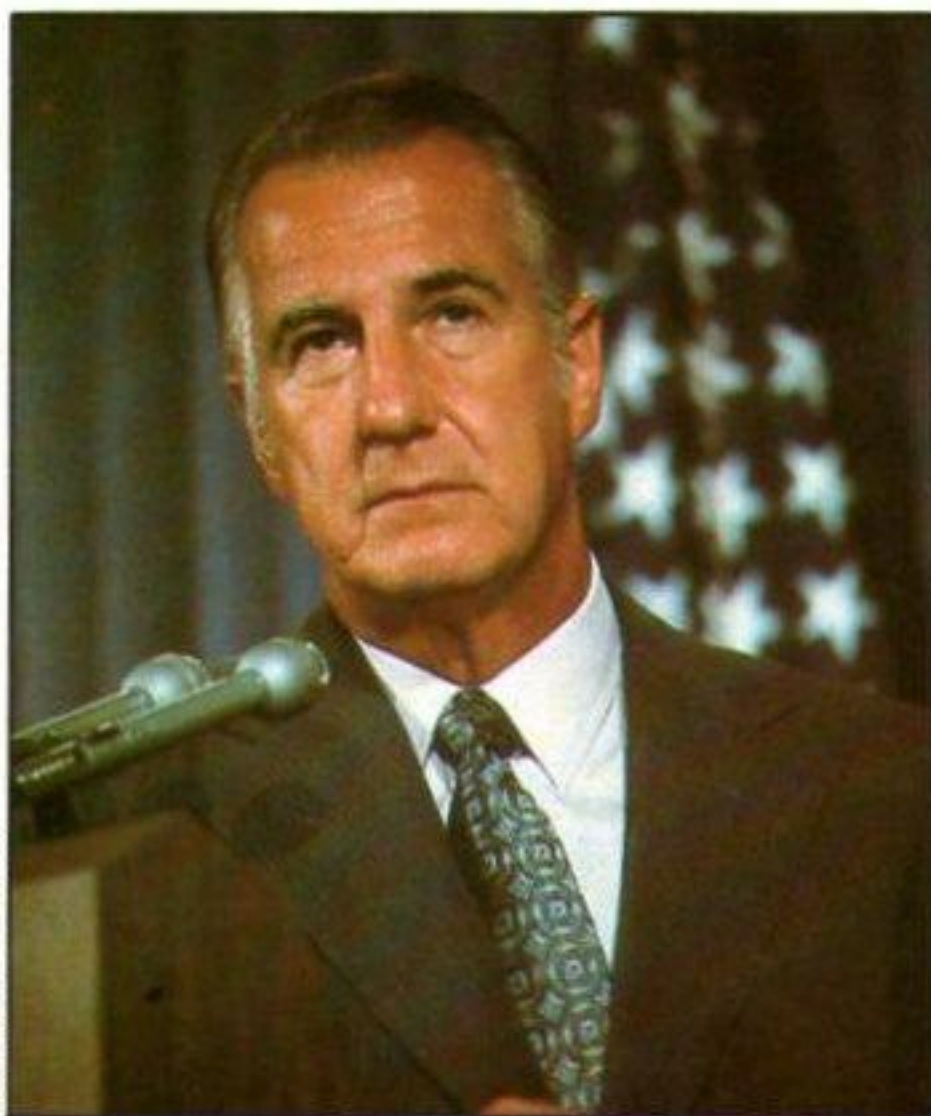
Ante la negativa de Nixon a entregar las cintas, pese a la presentación de un mandamiento solicitado tanto por el Senado como por Cox, el juez Sirica ordenaba el 29 de agosto que se le entregaran a él los documentos orales para una audición privada. La decisión del magistrado era ratificada, ante el recurso de Nixon, por un tribunal de apelación el 12 de octubre siguiente, con la formulación adicional de un plazo de siete días para que el presidente se sometiera o, en su defecto, acudiera al Supremo. Si Nixon recurría de nuevo y el alto tribunal fallaba en contra, cualquier ulterior negativa produciría un consenso en la cámara para iniciar los trámites de *impeachment*. Los asesores de Nixon y el propio presidente no se podían llamar a engaño. Por ello, al expirar el plazo, el obstinado inquilino de la Casa Blanca urdía un medio para escurrir el bulto. En vez de entregar las cintas, la oficina presidencial haría una compilación de su contenido y dejaría escuchar los originales al senador demócrata, John

El Watergate de Agnew

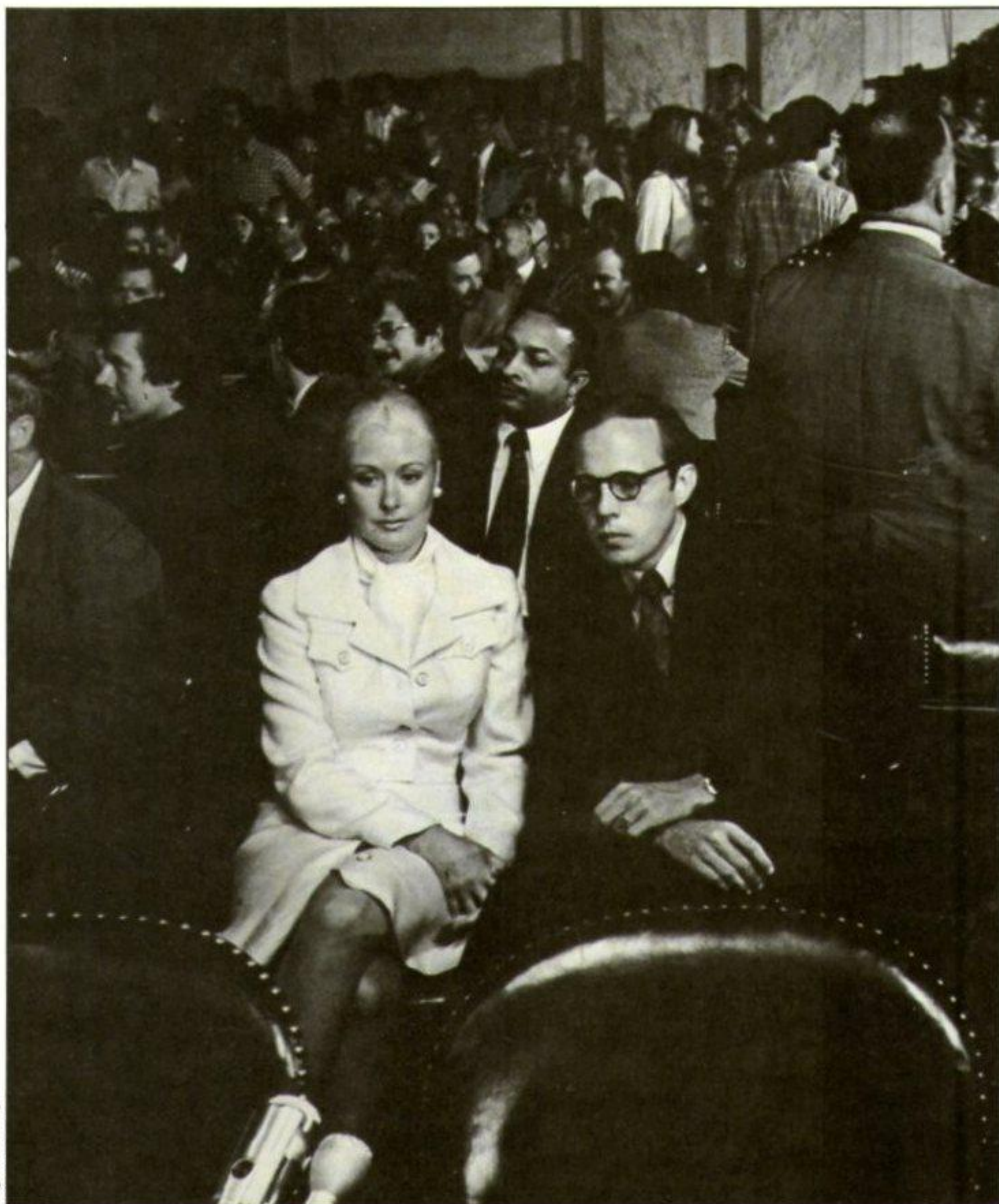
Spiro Ted Agnew era un desconocido cuando fue elegido por Nixon para cubrir la vicepresidencia en las elecciones de 1968. Más que un político era un compromiso; el único nombre en el que podían ponerse de acuerdo las diversas alas del partido. La conservadora porque era uno de los suyos; la liberal porque era insignificante. Su elección era sintomática de las pésimas relaciones de Nixon con los «barones» republicanos del Este.

Agnew ya fue un tormento para Nixon en el primer periodo presidencial con sus continuas «gaffes» como sendos comentarios despectivos contra las minorías polaca y japonesa; sus ataques al establishment, al que calificó de elite de «maharajas chochearles del nihilismo»; o su insensibilidad por los menos favorecidos como cuando afirmó que «cuando se ha visto un barrio pobre se han visto todos».

Por eso fue reconducido para un segundo mandato únicamente con la condición de que mantuviera la boca cerrada durante los próximos cuatro años. El asesinato político de Agnew es un watergate dentro del watergate. De la misma forma que los enemigos de Nixon le fabricaron la espesa tela de araña con los hilos de sus errores, el presidente decretó la liquidación de Agnew, como quien hace un sacrificio a los dioses, eligiendo de entre el repleto baúl de impropiedades que adornaban la carrera política de su compañero de campaña. Los hechos demostraron, sin embargo, que a los enemigos de Nixon no les bastaba con un suceso.



Camera Press/Zardoya



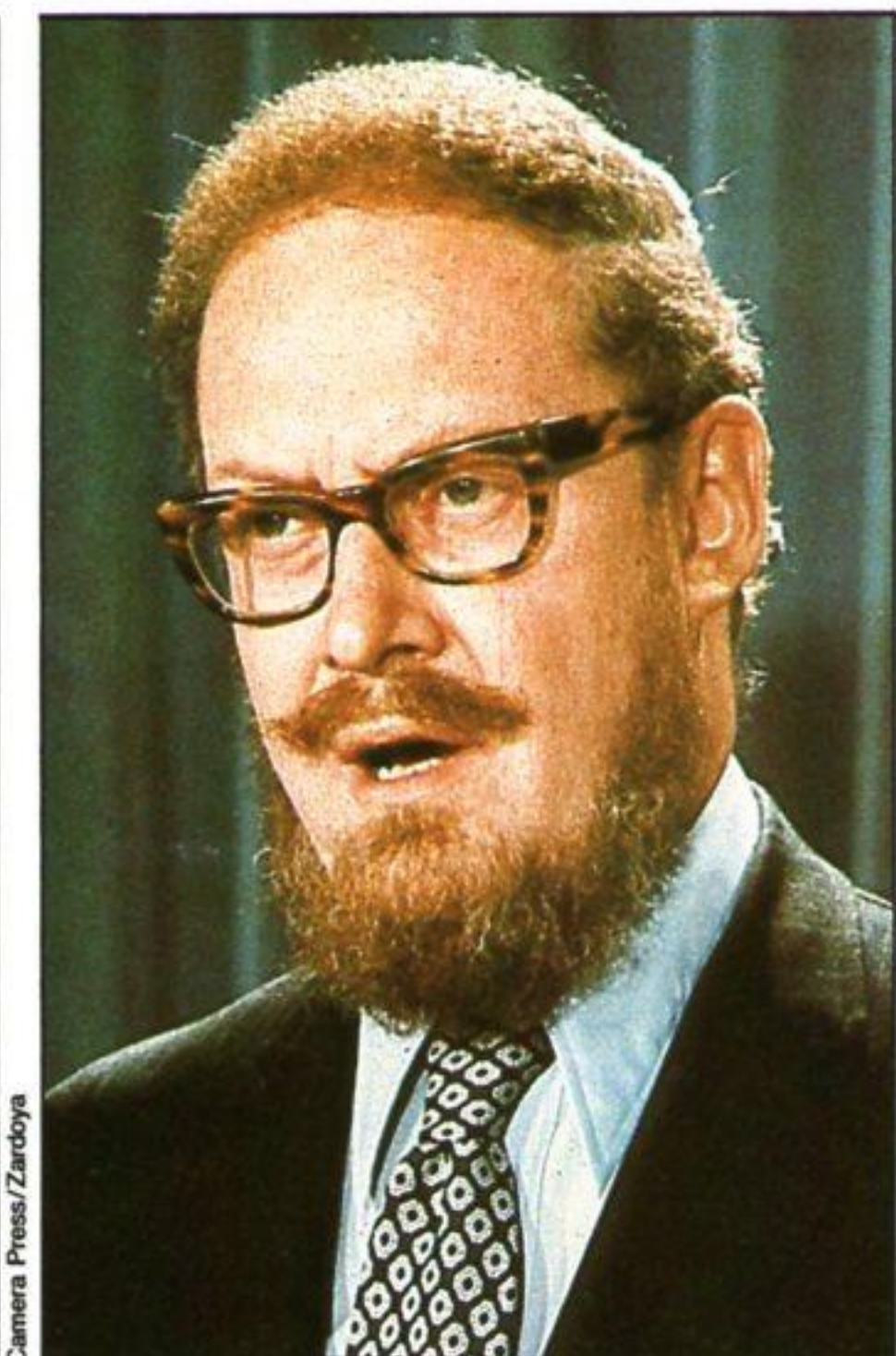
Magnum/Zardoya

Stennis, no sólo conocido ultra del Sur, sino, para mayor garantía, positivamente duro de oído. Ante la oferta, el frente anti-Nixon se escindió.

Mientras Cox se mantenía firme en sus exigencias, los senadores, ablandados por el presidente en una conversación privada en la que se había dado mucho juego a la «tensa situación internacional» provocada por la última guerra árabe-israelí, accedían a lo que se les había propuesto. Con Cox aislado, sólo faltaba darle a éste el golpe de gracia para encarrilar todo el asunto sin que los investigadores pudieran llegar hasta el final. El 20 de octubre, Nixon ordenó a Richardson que cesara a Cox, pero el secretario de Justicia prefirió dimitir antes que hacerlo. Inmediatamente fue convocado el segundo de Richardson, William Ruckelshaus, al que también se le exigió que procediera contra el fiscal especial, pero también éste prefirió dimitir. Minutos después, Nixon nombraba secretario interino del departamento a Robert Bork y repetía su orden por tercera vez, logrando sólo entonces su propósito.

Antes de que concluyera el día 20, que sería bautizado por la prensa como el «de la masacre del sábado noche», Cox había sido cesado y abolida la oficina del fiscal especial, con lo que, de momento, la investigación sobre Watergate pasaba a depender directamente del obsequioso Bork.

Sin embargo, la opinión pública y la clase política en general no necesitaban mejor provocación para hacerle saber al presidente lo que pensaban de él. Por primera vez desde el comienzo del caso, las encuestas daban una mayoría de americanos en favor del *impeachment*, el 48 % pedía directamente la dimisión del presidente y sólo un 9 % seguía otorgándole su confianza. Por último, los líderes de la Cámara anunciaban el día 22 su decisión de estudiar el inicio de los trámites judiciales contra Nixon y, aunque éste declaraba el día 23 que estaba dispuesto a entregar finalmente las cintas, el 30 de octubre el Comité Judicial de la Cámara, bajo la presidencia del republicano Peter Rodino, daba comienzo a los trabajos para decidir si habría o no *impeach-*



Camera Press/Zardoya

En la página anterior, abajo, el impresentable Spiro Agnew, a quien el presidente Nixon sacrificó con la vana esperanza de calmar a sus enconados enemigos. Arriba, en primer plano y con gafas, John Dean. Sus declaraciones, tras la impunidad, fueron la primera punta del hilo para desenrollar la complicada madeja.

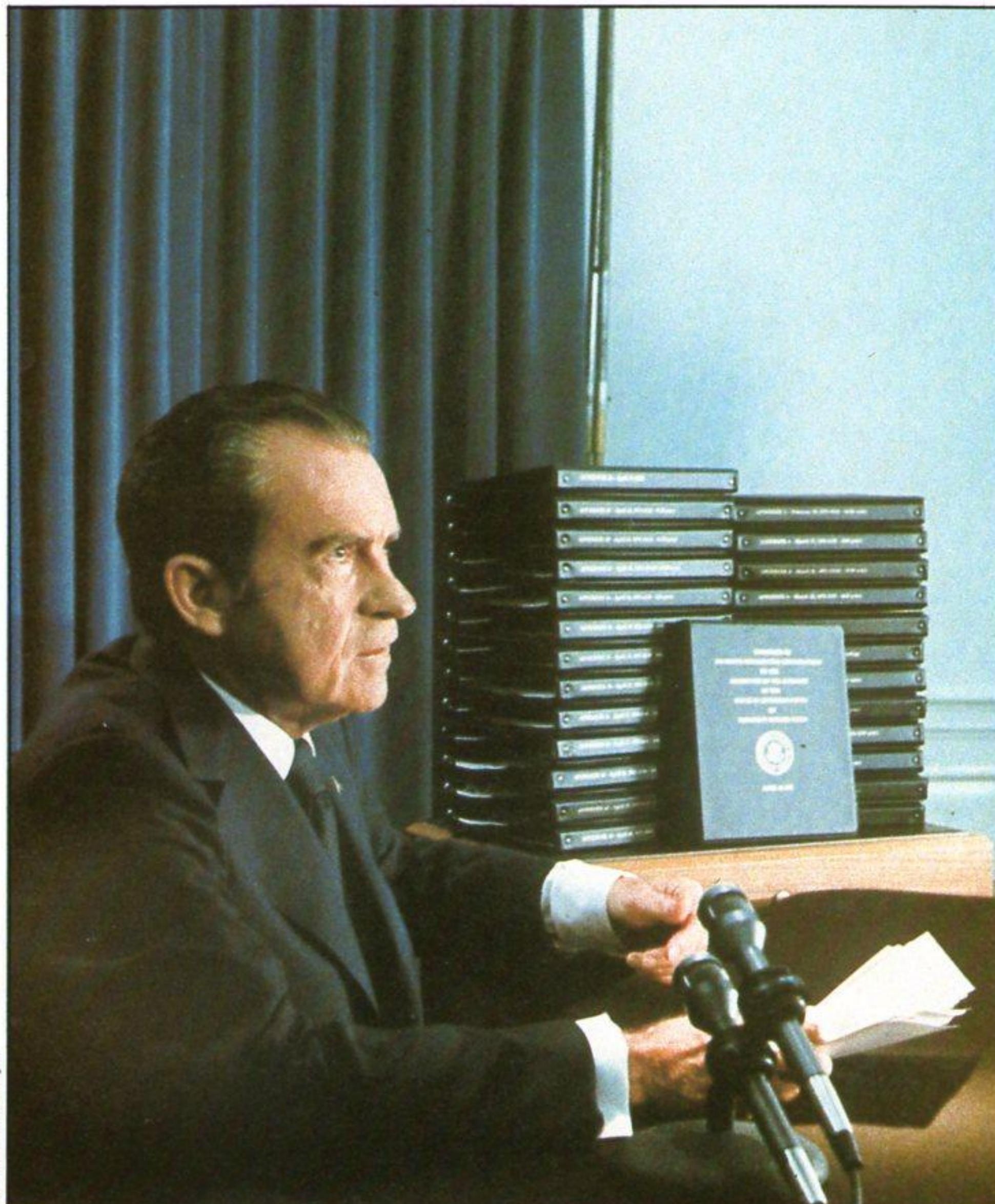
En esta página, arriba, Robert Bork. Nixon lo

nombró secretario de Justicia, tras provocar la dimisión del severo Richardson, con la orden expresa de destituir a Cox. La maniobra sólo postergó la definición, puesto que el nuevo fiscal también fue diligente e implacable. A la derecha, Nixon en su despacho. El poder presidencial se dirigió a ocultar las pruebas, pero todo fue inútil. El jefe de Estado ya había perdido la partida.

ment. Era la segunda vez en la historia, y la primera desde 1868, en que el Congreso consideraba esta posibilidad. Comenzaba entonces la interminable farsa de las cintas halladas, perdidas, borradas y vueltas a encontrar que retrasaría aún durante unos meses un fin que ya nadie creía inverosímil.

El affaire de las cintas

Pese al anuncio de que iba a entregar las cintas, la Casa Blanca no parecía tener demasiada prisa en hacerlo, lo que avivaba los rumores de que las bandas magnéticas podían estar siendo manipuladas. Nada de eso. Dos de las nueve, tal como anunciaba la Casa Blanca a las dos semanas de haber accedido a desprenderse de ellas, habían desaparecido. Una de las cintas perdidas, sobre un total de nueve inicialmente reclamadas, era de una conversación entre Nixon y Mitchell tres días después del escalo de Watergate, y la otra de un encuentro entre el presidente y Dean, del 15 de abril de 1973, en el que, según el asesor dimitido, Nixon había reconocido su partici-



Camera Press/Zardoya

pación en el plan de ofrecer dinero a algunos de los siete acusados para que no azuzaran demasiado la memoria.

En declaraciones formuladas con anterioridad al 26 de noviembre, en que la Casa Blanca se resignaba a entregar sus siete cintas a Sirica, los colaboradores del presidente iban preparando a la opinión para la sucesión de desgracias casi bíblicas que se había abatido sobre las bandas magnéticas. De una de ellas se había borrado accidentalmente un lapso de 18 minutos, otras tenían tan poca calidad que eran casi imposibles de descifrar; y en casi todas había pasajes en blanco que dificultaban la ilación de las conversaciones. Pero aunque no fueran precisamente en estereofonía, siete cintas llegaban a manos de Sirica, cuando ya había asumido Leon Jaworski, un conocido abogado de Texas, que había sido nombrado sucesor de Cox ante el griterío formado por la pretensión presidencial de dejar en suspenso la función. Jaworski no sería mejor para la fortuna de Nixon que su antecesor.

La gran batalla, lo que se adivinaba como el gran encuentro final sobre la propiedad y audición de unas y otras cintas, se iniciaba el 19 de diciembre de 1973, cuando Jaworski, Ervin y Rodino, este último en nombre del comité de la Cámara de Representantes, solicitaban conjuntamente la entrega de más de 500 grabaciones y documentos relacionados con el caso. Se trataba, indudablemente, de escrutar hasta el último pliego y doblez de Watergate para decidir de qué se había de acusar al presidente republicano.

Ante la avalancha de exigencias, la táctica de Nixon era la de invocar repetidamente el *executive privilege*, un supuesto privilegio de la presidencia de no facilitar aquella información que pudiera resultar perjudicial a los intereses del Estado, lo que, teniendo en cuenta que los intereses que más sufrirían por una política de «cintas abiertas» serían los del propio Nixon, equivalía a confundir su persona con la del Estado, como en tiempos de la monarquía absoluta. Así, el 19 de enero, Nixon rechazaba la petición de nuevos

El impeachment

Únicamente una vez un presidente de Estados Unidos ha sido sometido a impeachment. Andrew Jackson, el sucesor de Lincoln, sobrevivió a todo el proceso en 1868 siendo, finalmente, considerado no culpable por falta de quorum en contra.

El presidente Nixon no llegó a ser sometido formalmente a impeachment, puesto que dimitió cuando aún no se había votado el procedimiento en la Cámara de Representantes. Para que haya impeachment, palabra que podría traducirse por impugnación, es preciso que la Cámara de Representantes o cámara baja vote por mayoría en favor del procedimiento, después de lo cual el trámite lo sigue el Senado, o cámara alta, que es el que formalmente juzga al presidente. Para que se produzca su destitución es preciso que dos tercios de los cien senadores que hay en la actualidad, dos por Estado, voten en contra del mandatario. De haberse procedido al juicio de Nixon se calcula que las sesiones en las que el presidente habría debido ser interrogado habrían comenzado en noviembre y que la «causa» se habría retrasado hasta enero, cuando menos, imponiendo un tributo de parálisis y escándalo al ejecutivo, que difícilmente la opinión habría tolerado, por lo que hay que deducir que Nixon no tenía otra salida que dimitir.

La dimisión del presidente no resolvía totalmente la cuestión de si, posteriormente, las acusaciones contra su persona eran susceptibles de llevarle ante los tribunales ordinarios de justicia, problema resuelto por el presidente Ford con la concesión de un perdón presidencial por todos los desajustes de Watergate, hecho público apenas inaugurado su mandato. En el momento de máxima «persecución» contra el presidente, se alineaban contra él el comité del Senado, con poderes sólo informativos y consultivos; el tribunal ordinario del juez Sirica, que juzgaba a los que violaron la sede demócrata y no directamente a Nixon, pero cuyas resoluciones tenían la influencia inmediata sobre la defensa presidencial; la oficina del fiscal especial, primero Cox y luego Jaworski, que tenía el poder para convocar un Gran Jurado, ante el que eventualmente podría haber comparecido el presidente; y, por último, la Cámara y el Senado, que no llegaron a dar término al procedimiento.

WANTED



JAMES MCCORD



DWIGHT CHAPIN



H. R. HALDEMAN



JOHN MITCHELL



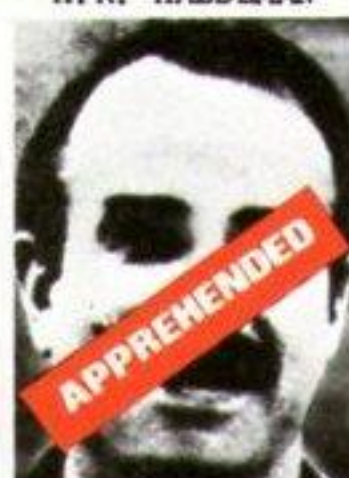
JOHN ERLICHMAN



MAURICE STANS



EUGENIO MARTINEZ



G. GORDON LIDDY



CHARLES COLSON



HERBERT KALMBACH



JOHN DEAN



ROBERT MARDIAN



JEB MAGRUDER



RICHARD M. NIXON



BERNARD L. BARKER



VIRGILIO GONZALEZ



DONALD SEGRETTI



FRANK A. STURGIS



E. HOWARD HUNT JR.



HUGH SLOAN JR.

Magnum/Zardoya

documentos, después de que la audición de los entregados revelara únicamente que el presidente era muy mal hablado en la intimidad y que su desprecio por el mundo en general no tenía límites. El 19 de febrero, el comité senatorial decidía concluir sus vistas públicas y pasar todas las pruebas amasadas al comité de la Cámara. El día 22, Jaworski hacía lo propio con más de 600 páginas de documentación que había acumulado, aunque a diferencia de Ervin seguiría pidiendo cintas que pudieran ser de interés. El comité de Rodino pediría a comienzos de marzo 42 cintas más y a mediados de abril Jaworski solicitaría otras 64 bandas a un Nixon que casi literalmente estaba siendo estrangulado por el largo kilometraje de grabaciones exigidas.

Paralelamente, hacía crisis otro de los flancos expuestos del presidente: Archibald Cox había investigado en los meses anteriores las declaraciones de la renta presidenciales llegando a la conclusión de que Richard Nixon no sólo era un delincuente político sino

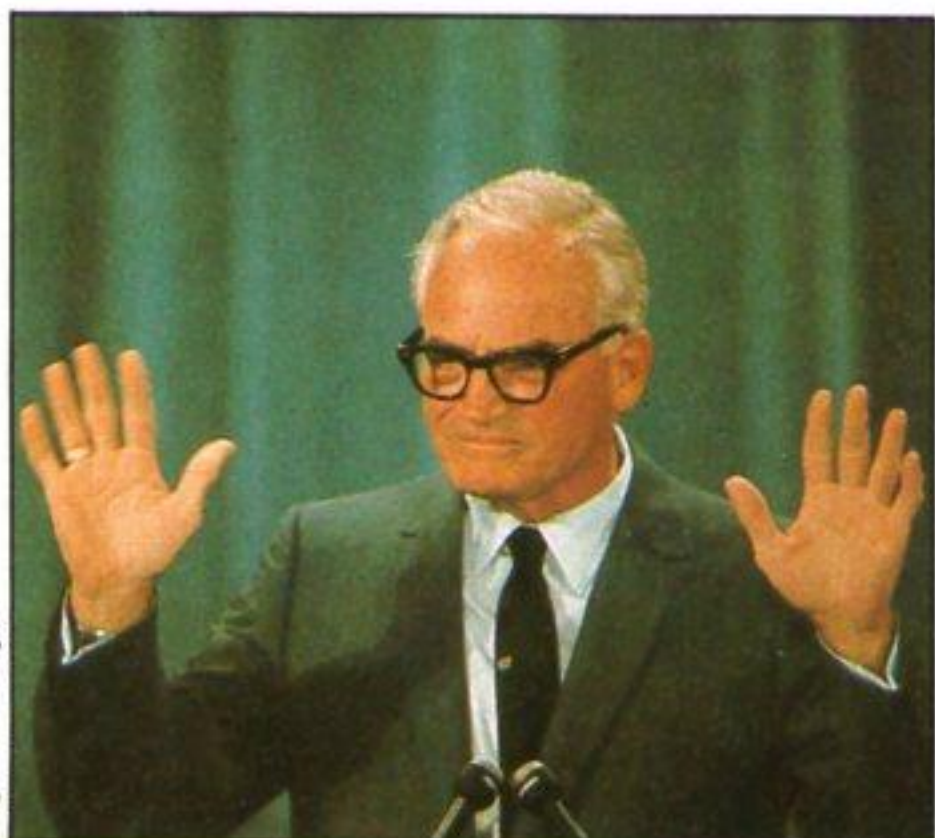
posiblemente también financiero. La inevitable investigación llevada a cabo por el IRS (*Internal Revenue Service*) obligaba a la presidencia a declarar, el 3 de abril de 1974, que su titular abonaría 432.787 dólares con 13 centavos en impuestos atrasados, que se deducirían de una lectura de las declaraciones de la renta distinta de la que había hecho Nixon, acogiéndose a numerosas deducciones de evidente ilegalidad. Pero, pese a todo, el presidente seguía obstinándose en que no había motivo para dimitir. La palabra la tenía ya sólo el comité de la Cámara. Si ésta decidía por mayoría que había lugar a juicio, el presidente sería juzgado por el Senado, donde una mayoría de dos tercios había de encontrarle culpable para que se produjera su destitución.

Nixon al borde del KO

El 29 de abril de 1974, Nixon celebraba la conferencia de prensa más importante hasta la fecha relacionada con el caso. En ella aparecía en televisión sobre un fondo de gruesos tomos



Camera Press/Zardoya



Magnum/Zardoya

En la página anterior, una muestra de la ferocidad de la campaña contra Nixon: bajo el clásico «se busca», sus hombres más allegados con la indicación de que ya han sido arrestados. Sólo el presidente no ha caído... todavía.

En esta página, arriba, 1.300 folios con las transcripciones de las

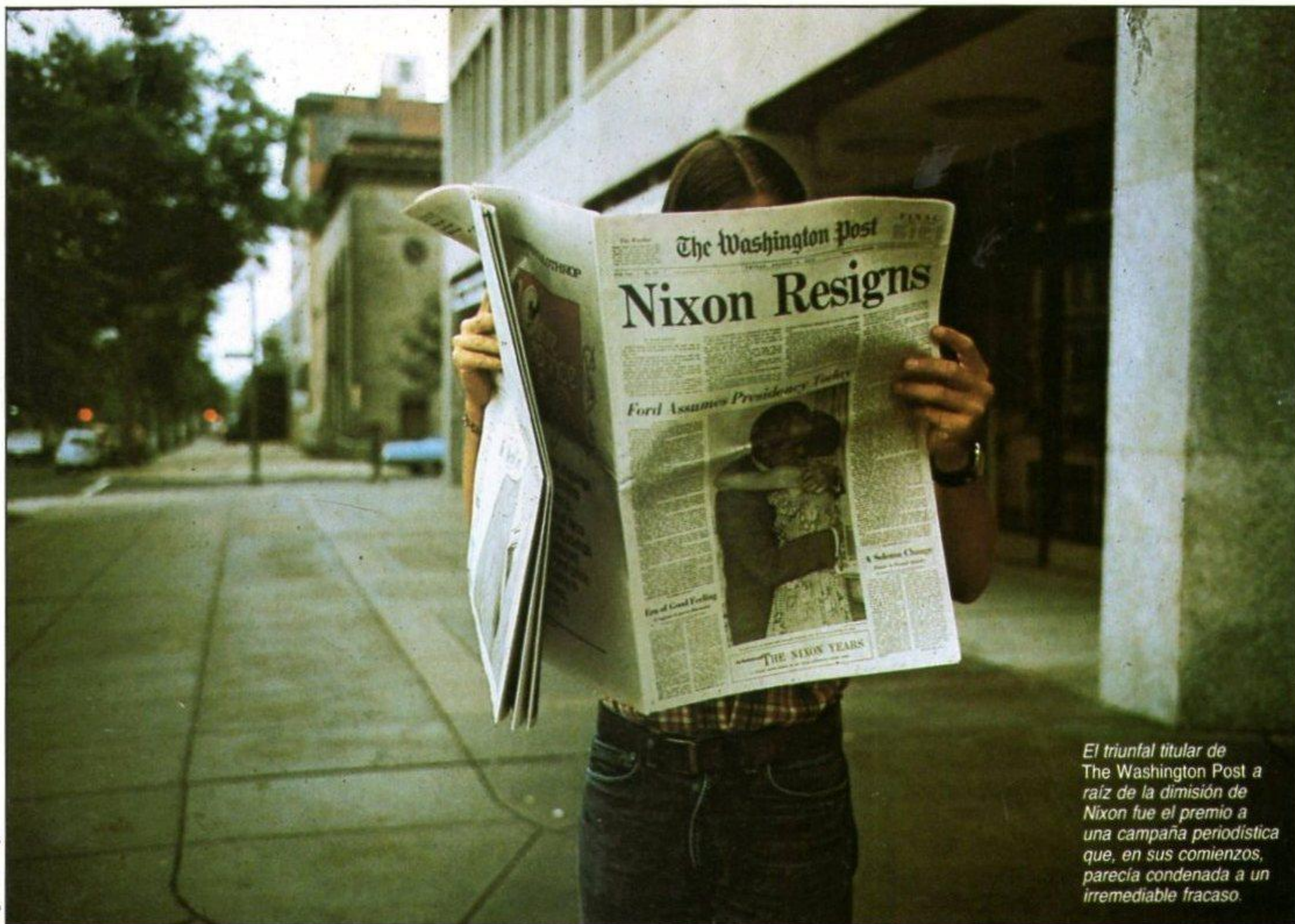
cintas son sacados de la Casa Blanca, rumbo al comité senatorial que estudia el caso. Abajo, el senador Barry Goldwater, un político cuya actitud fue decisiva para que el presidente Nixon dimitiese: le dijo que en el Senado ya estaban todos los votos necesarios para su destitución.

apilados en un mueble. Eran las transcripciones, depuradas de todo lo presuntamente irrelevante al tema, de las cintas aún no entregadas. Un total de 1.300 páginas de diálogo muy poco escénico pero bastante teatral que no sólo se facilitaría a la Cámara sino al público en general. Con ese gesto Nixon esperaba que quedaría ratificada tanto su inocencia como su buen juicio y concluiría la pesadilla de Watergate. El 1 de mayo, el comité judicial rechazaba, sin embargo, la interesada oferta, aduciendo que Nixon tendría que recurrir al Supremo para demorar, al menos, la entrega del material.

El 24 de julio, finalmente, el Supremo fallaba por unanimidad que el *executive privilege* en ningún caso podía servir para obstruir la normal acción de la Justicia, por lo que Nixon debería entregar las 64 cintas en cuestión, reclamadas tanto por Jaworski como por Sirica, éste para usarlas en el juicio de los principales colaboradores de Nixon como Mitchell, Ehrlichman y Haldeman. El abogado del presidente, James

St. Clair, anunciaba de inmediato la entrega de las bandas. Paralelamente, el comité de la Cámara aprobaba el 27 de julio el primer cargo de *impeachment* por 27 votos a 11. La acusación era la de obstrucción a la Justicia; dos días después caía el segundo cargo por abuso de poder, esta vez con resultado de 28 a 10; el día 30 se votaba el tercero por 21 a 17, en el que se acusaba al presidente de proceder inconstitucionalmente. Los artículos de *impeachment* no eran sino las acusaciones sobre las que tendría que decidir el pleno de la Cámara para mandar al «reo» a juicio ante el Senado.

El mismo día 31 de julio, la Casa Blanca había concluido la revisión de las 64 cintas y una de ellas parecía más que concluyente. Se trataba de una conversación entre Nixon y Haldeman del 23 de junio de 1972, apenas una semana después del allanamiento de Watergate, en la que no cabía duda de que el presidente ordenaba que se paralizara la investigación del caso para proteger a los inmediatos responsa-



El triunfal titular de The Washington Post a raíz de la dimisión de Nixon fue el premio a una campaña periodística que, en sus comienzos, parecía condenada a un irremediable fracaso.

bles. La cinta era muy peligrosa porque de las palabras de Nixon podía inferirse que hubiera dado incluso personalmente la orden de asalto al cuartel general demócrata. La misma se daría a conocer el siguiente 5 de agosto, acompañada de un «comentario de texto» en el que el presidente reconocía sus errores, pero insistía en que cuando se había percatado de todo lo que sucedía había ordenado que se castigara a los culpables, añadiendo que «las pruebas en toda su extensión no justificaban el paso extremo del *impeachment* y la destitución del presidente. Espero que el proceso constitucional siga su camino y esta perspectiva prevalezca». No podía prevalecer. Los indecisos dejaban de serlo.

El vicepresidente Ford, nombrado para suceder al felón Agnew, que hasta entonces había defendido con lealtad al presidente, explícitamente afirmaba que no volvería a proclamar la inocencia de Nixon. Todo el mundo en la Casa Blanca sabía que la mayoría para enviar al presidente a juicio estaba más que clara en la Cámara, y se contaba ansiosamente el número de senadores que podían seguir fieles al líder republicano. La puntilla se la daría a Nixon el ultraconservador Barry Goldwater,

al visitar al presidente para comunicarle que dudaba mucho que hubiera todavía 35 senadores que votaran en contra de la destitución. Él mismo, republicano, votaría contra Nixon y estaba convencido de que los 66 votos necesarios de los 100 componentes de la cámara alta estaban ya claramente en el campo adverso al presidente. Debía dimitir, fueron sus palabras.

Nixon dimite

El día 6, Nixon reunía a su gabinete y aún barajaba la posibilidad de resistir argumentando que no sabía qué era mejor para el país, si aceptar la presión exterior con el presunto daño que ello pudiera causar a la institución presidencial y dimitir, o aguantar para que la prerrogativa del presidente no dependiera, como dijo, de «una moción de confianza». La comparación con el sistema parlamentario de otras democracias occidentales era evidentemente fruto de la desesperación, puesto que allí no se discutía el futuro de la forma de gobierno norteamericana, sino si el sistema podía soportar meses de juicio en el Senado con la correspondiente parálisis del poder debida a la permanente comparecencia de un presidente ante sus jueces.

Posiblemente no se sabrá nunca qué fue lo que inclinó finalmente la balanza en favor de la dimisión. Se asegura que en el último momento sólo la hija menor, Julie, la preferida de Nixon, urgía a la resistencia numantina. El 7 de agosto, el presidente comunicaba a sus colaboradores que al día siguiente hablaría a la nación anunciando el fin de su batalla. La dimisión sería efectiva al mediodía del 9.

El discurso de despedida televisado a todo el país era el de un hombre derrotado que seguía sin reconocer su culpabilidad, pero sorprendentemente dueño de sí mismo pese al enorme drama personal que se resolvía aquella noche. La tensión acumulada de tantos meses no estallaría hasta la mañana siguiente, en la que el presidente se despidió de sus subordinados con una alocución pronunciada en el *East Room*, en un estilo incoherente, con una presentación balbuceante y una sintaxis no siempre comprensible. Apropiadamente guarecido en unas gafas oscuras, un Nixon vacilante, que se conducía como si quisiera ocultarse hasta de sí mismo, dejaba Washington en un helicóptero que le aguardaba posado en el césped de la Casa Blanca. Era el comienzo del viaje final.

El atentado contra Carrero Blanco

La agonía del franquismo

Juan Luis Cebrián,
director de El País

El atentado sufrido por Carrero Blanco fue un duro golpe contra las posibilidades de que el régimen franquista se perpetuase en el poder tras la muerte de su fundador, ya previsible

en esos momentos por la avanzada edad del jefe del Estado. Para muchas personas ese día empezó la transición. Abajo, el entierro del militar y político asesinado por ETA.

A las 9 y 28 minutos de la mañana del 20 de diciembre de 1973, cuando el Dodge Dart del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco avanzaba por la calle Claudio Coello de Madrid, un integrante del comando «Txiquia» de ETA activó el detonador de una potente carga explosiva situada bajo el pavimento. La explosión hizo saltar el coche por los aires provocando la muerte casi instantánea del «delfín» de Franco. Con él moría la más clara amenaza de continuismo de la dictadura.



Parón a la reforma militar

En el período comprendido entre el atentado contra Carrero y la muerte de Franco, al tiempo que se produjo un progresivo abandono de los planteamientos inicialmente aperturistas hubo una política de vuelta atrás en el ámbito militar. El caso más notorio en ese sentido fue el cese del jefe del Alto Estado Mayor, teniente general Manuel Díez Alegría, que se produjo el 14 de junio de 1974.

Díez Alegría había accedido a ese cargo en 1970 y desde él, ayudado por hombres como Manuel Gutiérrez Mellado y José Gabeiras Montero, había preparado un plan de reforma militar con el que quería transformar los Ejércitos de la victoria en unas Fuerzas Armadas parangonables con las del resto de Occidente, que se había plasmado en el proyecto de Ley Orgánica de la Defensa Nacional. La explicación que se dio a su cese fue que, durante el viaje que había efectuado ese mismo mes a Rumania para recibir tratamiento geriátrico de la doctora Aslan, había mantenido sin permiso una entrevista con el presidente rumano Nicolai Ceausescu. Hay quien asegura, sin embargo, que Arias sufrió el síndrome de la «revolución de los claveles» —el 25 de abril portugués causó un profundo impacto en los hombres del régimen— y temió que Díez Alegría pudiera convertirse en el Spínola español. Para sustituirlo se nombró al moderado Carlos Fernández Vallespín, pero la ley de Defensa Nacional cayó irremediablemente en el olvido.

Los nombramientos en la Dirección General de la Guardia Civil fueron también muy significativos. Al «duro» Carlos Iniesta Cano le sucedió, al pasar éste por razón de edad a la situación «sin mando en armas», un general más abierto, José Vega Rodríguez, el 17 de mayo de 1974, pero éste fue sustituido el 10 de octubre de 1975, dos días antes de que Franco cayera enfermo, por el «duro» Ángel Campano López. En el ámbito militar se intentó dejarlo todo «atado y bien atado». (Sebastián Serrano).

En esta página, Carrero Blanco jura como jefe del Gobierno. Por vez primera Franco cedía parte de sus poderes, lo que indicaba su visible decaimiento físico.

En la otra página, a la izquierda, Franco y Luis Carrero Blanco. A la derecha, M. Díez Alegría. Su cese fue un frenazo a la reforma militar ya en marcha.



El día 20 de diciembre de 1973, María Antonia Iglesias, redactora de INFORMACIONES de Madrid, había salido de su casa de mala gana y con la legaña pegada al cuerpo. Por eso no le hizo demasiada gracia cuando poco después de las nueve y media el redactor jefe la envió —«zumbando, como siempre»— a ver qué sucedía con una explosión de gas que había originado grandes destrozos en la calle Claudio Coello, esquina a la de Maldonado y justo detrás de la iglesia de los Jesuitas —el templo más frecuentado por la burguesía de la capital. La opinión pública española se encontraba muy preocupada por esas fechas a causa de las explosiones de gas. Una gigantesca en Barcelona, en la calle Capitán Arenas, había causado el año anterior dieciocho víctimas mortales. La noticia de Claudio Coello podía tener su interés. Pero María Antonia hubiera preferido que le encargaran cubrir la informa-

ción en torno al juicio del sumario 1.001, que comenzaba esa misma mañana en el Palacio de Justicia. Desde la madrugada, largas colas de gente se arremolinaban en torno a la plaza de las Salesas tratando de obtener un sitio en la menguada sala en la que Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y otros siete líderes y militantes del sindicato clandestino Comisiones Obreras iban a ser juzgados por sus actividades. La Policía Armada, «con numeroso material antidisturbios», según frase habitual de los periódicos, había rodeado la zona en previsión de incidentes que se temía pudieran alcanzar alguna violencia, dada la expectación que el juicio había despertado. Pero sin pedirse más explicaciones a sí misma, María Antonia salió despepitada de la redacción hacia el lugar de aquel suceso que no prometía dar de sí más de quince líneas en las páginas destinadas a la información local.



«Carrero está allá arriba»

En aquella época INFORMACIONES tenía su sede en pleno centro de Madrid, entre la plaza del Callao y la glorieta de Bilbao, por lo que no le tomó más de diez minutos acercarse en un taxi hasta las inmediaciones del lugar de la explosión. Dos manzanas antes de llegar, la circulación se hallaba cortada y un buen número de gente corría calle arriba hacia donde la columna de humo señalaba la existencia de un inmenso cráter, del que se desprendía un considerable olor a gas. Algunos cochés —no pudo contarlos bien, abriéndose paso entre los policías municipales y los bomberos— estaban sumergidos entre los escombros, el agua y el barro, de la sima abierta en mitad de la calzada. Unos individuos de edad media, con la evidencia de sus ropas y maneras de pertenecer a la policía secreta, correteaban nerviosos, mientras otro trataba desesperada-

mente de ponerse en contacto con alguien a través del radioteléfono de un vehículo negro, varado entre la pequeña muchedumbre que ya comenzaba a formarse. María Antonia se acercó a uno de los camilleros de una ambulancia mal aparcada al que conocía porque en su otro empleo resultó ser dependiente de una taberna frecuentada por la periodista. La respuesta que le dio a su interrogante la dejó tan absorta que en un primer momento prefirió no dar crédito a lo que decía:

—Carrero está allá arriba. Y parece que ha muerto —le espetó mientras señalaba con un gesto de complicidad el tejado de la iglesia.

A las diez menos diez de la mañana, Eduardo Barrenechea, redactor jefe de INFORMACIONES, entró en mi despacho con la cara desencajada.

—Oye, que parece que a Carrero le ha pasado algo en lo de la calle de Claudio Coello. En lo del gas.



El director del periódico, Jesús de la Serna, estaba en Panamá, con la mayoría del resto de los directores de diarios de Madrid y Barcelona, invitados por el general Omar Torrijos. Yo ocupaba su puesto en funciones y en realidad no atendí mucho a la alarma de Barrenechea. Mis pensamientos estaban puestos en el Palacio de Justicia, desde donde habían telefoneado diciendo que la policía ya había repartido leña en la cola y que el juicio estaba a punto de empezar. Tenía además que preparar un editorial sobre los resultados de la visita del Secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger a España —se había ido el día anterior, después de entrevistarse con Franco y Carrero Blanco—. Le pregunté a Barrenechea si efectivamente estaba confirmado lo que me decía, o era sólo un rumor.

—Bueno, es lo que la gente comenta allí. Yo no sé si creérmelo.

Con bastante escepticismo marqué el número de teléfono del Ministerio de Información. El Director General de Prensa, Manuel Blanco Tobío, no estaba aún en su despacho. Fue el Subdirector General el que pronunció aquella increíble frase:

—No podemos desmentir ni confirmar nada. Simplemente ha habido una explosión en la que parece que el Presidente del Gobierno ha podido resultar afectado.

Era el primero, sigiloso, reconocimiento oficial del rumor que se esparció rápidamente por la calle: habían matado a Carrero Blanco.

Un delfín del dictador

El almirante Luis Carrero Blanco había sido designado por Francisco Franco primer presidente del Gobierno de la dictadura hacía apenas unos me-



EFE

ses, el 9 de junio de ese mismo año en que cumplía los setenta de vida —había nacido en Santoña en 1903—. Su designación se enmarcaba en un intento de consolidar las instituciones franquistas, garantizando su supervivencia y eficacia aún después de la muerte del dictador. Carrero, un marino con más experiencia de despachos que del puente de mando, resultaba el confidente principal y más fiel servidor de los designios del Caudillo. Unido a él desde la más temprana hora del Régimen, había desempeñado desde 1941 la Subsecretaría de la Presidencia, con rango de Ministro a partir de 1951. En 1967 fue nombrado vicepresidente del Gobierno, en la época en la que el dictador seguía acaparando los cargos de Jefe del Estado y del Ejecutivo. Su integrismo intelectual, anclado en las más viejas reacciones de signo católico y militarista, le habían llevado a conectar, a mediados de los años cincuenta y a través de avatares familiares, con algunos de los personajes más conspicuos del Opus Dei. Carrero fue el gran valedor de los hombres del Opus en el poder durante la dictadura, y su defensor a ultranza en ocasión del escándalo Matesa, que puso al descubierto la corrupción administrativa de los gobiernos franquistas. Todo su pensamiento puede definirse como el con-

junto de los tópicos y prejuicios más vulgares de la reacción de nuestro siglo y del ensueño imperialista español de los pasados. Obsesionado lo mismo por el marxismo que por el judaísmo y la masonería, enemigo del liberalismo y de la democracia, Carrero parecía en realidad un hombre de una gran simpleza de ideas, apto para ser manejado por quien supiera hacer vibrar en él las efusiones tópicas de la patria y la religión. Su modestia vital le valió fama de honesto, pero a los ojos de la nueva sociedad española, que pugnaba ya a principios de la década de los setenta por liberarse de los anclajes de la guerra civil y por una democratización real, resultaba el principal enemigo de cualquier posible reforma de ese género y el más genuino valedor del franquismo después de Franco. Desde el poder había inspirado la solución monárquica en la persona de don Juan Carlos, evidenciando su disposición a hacer del Rey un pelele a la muerte o incapacidad del dictador y a convertir la sucesión en una prolongación cortesana de la dictadura. La decrepitud física y mental del Caudillo habían derivado además en el hecho de que, ya desde antes del nombramiento de Carrero como presidente, éste dirigía en gran parte la gobernación del país y detentaba la mayoría de los poderes. A él

se debía principalmente el *boicot* a todo intento del más mínimo aperturismo interior del régimen, simbolizado en los ensayos infructuosos para crear una nueva ley sindical o una ley de asociaciones políticas. Los líderes obreros que comparecían ante el tribunal juzgador en la mañana de su muerte y para los que se pedían penas superiores a los veinte años de cárcel por delitos de asociación ilícita, eran el ejemplo más fehaciente de la represión que Carrero presidía e impulsaba desde el Gobierno. Desde todos los puntos de vista, Carrero era la pieza maestra del franquismo en 1973. Resultaba incluso en muchos aspectos más importante que el propio dictador. Y en aquella heladora mañana de diciembre, las primeras especulaciones sobre su muerte se desplomaron en un alud de vértigos e interrogantes sobre la sociedad española.

Llama un testigo

Cuando Soledad Álvarez-Coto, formalmente adscrita al servicio de Documentación de INFORMACIONES, llegó al hospital provincial Francisco Franco, de la diputación de Madrid, la confusión era enorme. Aunque todo el mundo aseguraba ya que Carrero había muerto en la explosión de la calle Claudio Coello, el silencio oficial sobre



En la página anterior, estado en que quedó el lugar del atentado tras la explosión.

Sobre estas líneas, el coche del presidente en la terraza de los padres jesuitas, convertido en

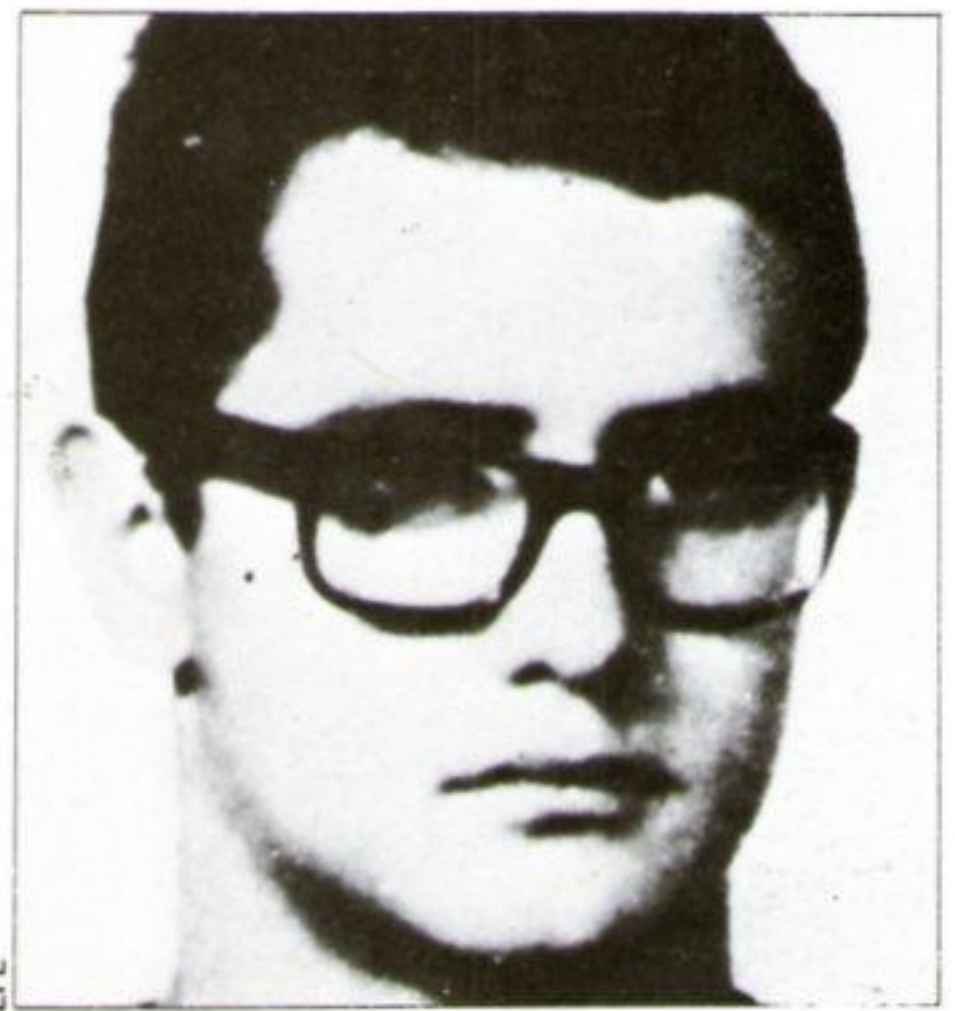
irreconocible chatarra. A la derecha, dos destacados miembros del comando de ETA que, en

diferentes etapas actuaron en el atentado: arriba el ya fallecido Argala; abajo, Wilson.

EFE



EFE



los hechos no facilitaba la confirmación necesaria de la noticia. Soledad había llegado a las diez y cuarto de la mañana a la Ciudad Sanitaria y pudo mezclarse —haciéndose pasar por pariente del conductor del coche presidencial— entre el séquito de enfermeras y policías que se confundía con algunos ministros que se precipitaron hacia el hospital al saber la noticia. En medio del ruido de los comentarios y las carreras de los médicos, la pequeña multitud de autoridades que se agolpaba en las salas de urgencia la fue empujando, casi sin ella quererlo, hacia el quirófano. Un sinfín de batas blancas rodeaban la mesa central donde, cubierto por una sábana, desprovisto ya de su uniforme azul marino, el almirante Carrero Blanco dejaba asomar su rostro cadavérico que aguardaba el trabajo de los embalsamadores. Había muerto por destrucción interna («blast-síndrome»), y nada en su cara que no fuera una pequeña herida en la comisura del labio, denotaba la brutalidad del atentado de que había sido objeto. Un minuto más tarde Soledad telefoneaba nerviosamente al periódico para confirmarlo: el presidente había muerto en la explosión. No eran rumores. Ella misma había visto su cuerpo sin vida.

Mientras tanto, llegaban las primeras fotografías y datos más pormenori-



EFE

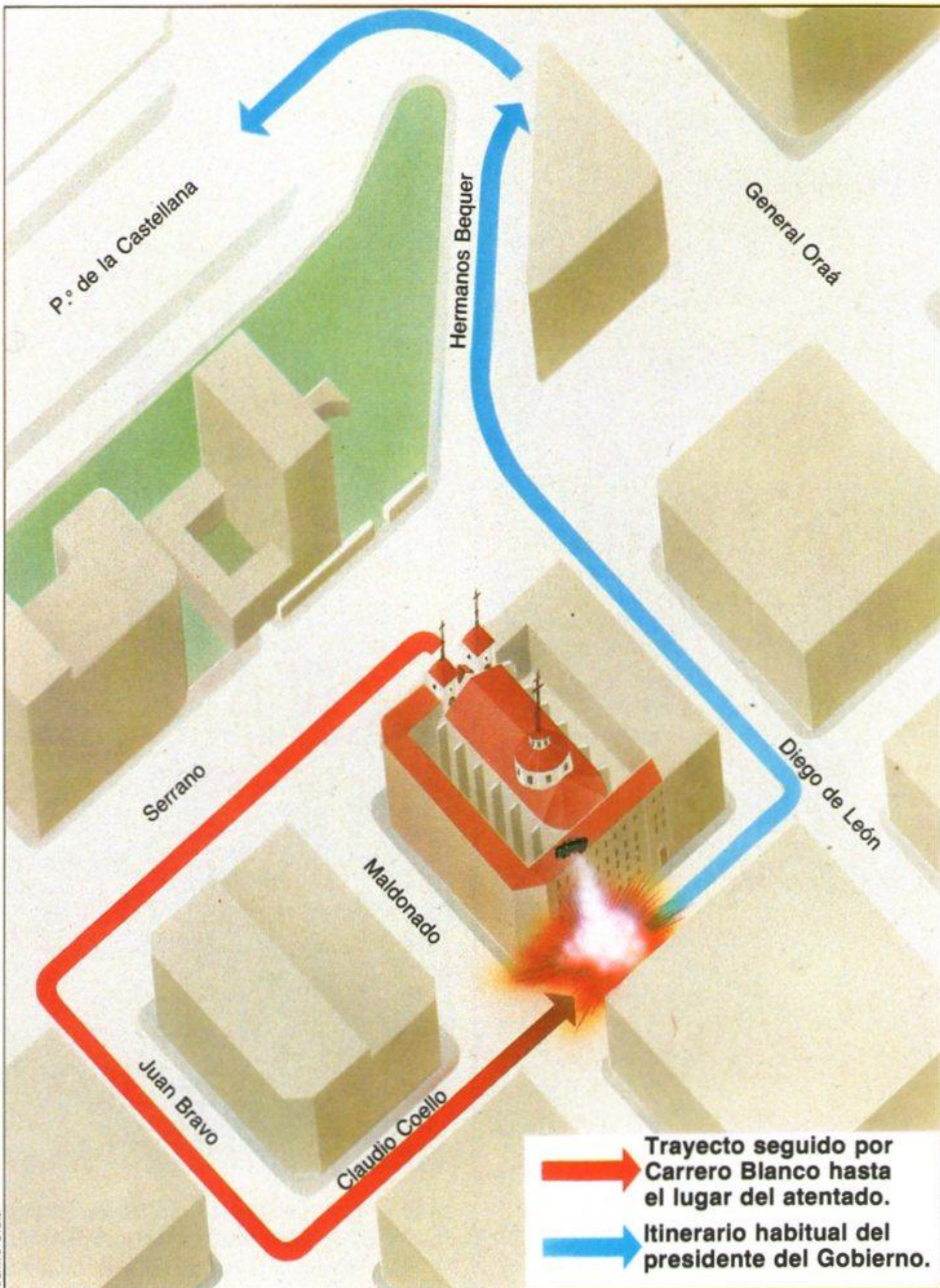
zados y depurados de comentarios desde la calle Claudio Coello, en la que servicios especiales y artificieros del Ejército habían comenzado las investigaciones. Una explosión, que podría haber sido de gas según aseguraban todavía algunos oficiales allí presentes, había alcanzado de lleno el automóvil en el que viajaba el presidente del gobierno a su salida de misa de nueve de la iglesia de los Jesuitas de Serrano. Con la violencia de la onda expansiva el vehículo había saltado por el aire y, salvando una altura de más de 30 metros, había ido a caer en una terraza interior de la propia iglesia, cuya parte trasera daba a la calle escenario de los hechos. El hermano Turpín, que estaba en su habitación a esa hora, vio con sorpresa a través de la ventana cómo un coche llovía del cielo y se estrellaba contra las baldosas de la terraza. El padre Gómez Acebo, al oír la explo-

sión, salió corriendo y se topó con los restos del destrozado vehículo. En su interior descubrió la existencia de dos cadáveres, a los que dio la absolución. Más tarde sabría que eran tres las víctimas. El conductor del Dodge Dart negro —José Luis Pérez Mogena— y el policía de escolta del presidente —José Antonio Bueno Fernández— habían muerto también en el suceso. Un pequeño grupo de personas, la mayoría compañeros de la comunidad religiosa, comenzaba a agolparse en torno al vehículo. En la calle, la cara entre asombrada y compungida de Gregorio López Bravo mostraba unos ojos cuya mirada parecía definitivamente no aceptar la realidad. López Bravo era uno de los ministros del equipo Opus que había caído en desgracia y asistía desde hacía tiempo con frecuencia a misa de nueve a la iglesia de Serrano. Esta costumbre podría calificarse

cuando menos de exótica, toda vez que el ex-ministro de Industria y de Asuntos Exteriores vivía en una casa del barrio residencial de Somosaguas, a varios kilómetros del centro de Madrid. Las malas lenguas se empeñaron en asegurar que la perspicacia del político le había hecho suponer que una asistencia asidua al mismo oficio religioso al que acudía de ordinario el presidente del Gobierno le podría bienquistar su favor.

«No sabemos si nos hallamos ante un golpe de Estado»

Las fotografías llegadas a la redacción mostraban el boquete abierto en la calle en toda su magnitud. En algunas de ellas podía apreciarse además la pequeña rotura que la cornisa de la iglesia sufrió cuando el vehículo del presidente se precipitó al otro lado del edificio. A las once y cuarto de la



Archivo Orbis



EFE

En ambas páginas, el coche de Carrero Blanco, conservado en el Museo del Ejército tal como quedó después del hecho.

En esta página, el cuerpo del jefe del Gobierno en la capilla

ardiente, durante el solemne velatorio. A la derecha, recorrido que hizo el vehículo desde la puerta del templo jesuita hasta donde estaba colocado el artefacto explosivo del comando etarra.

mañana en el Ministerio de Información ya confirmaban oficialmente la muerte del almirante Carrero Blanco. Pero nada más. Para esa hora, la versión de la explosión de gas había sido casi totalmente descartada. Aunque los artificieros del Ejército no habían informado todavía de sus hallazgos del detonador y los cables de la bomba, todo el mundo coincidía en que aquello había sido un atentado. La explosión había afectado a las conducciones de gas de la zona y por eso se podía explicar la confusión de los primeros minutos en cuanto al origen de la misma, confusión alimentada, según se supo más tarde, por los gritos de los propios terroristas. Pero nadie podía creer ya que un hecho casual de esa especie hubiera podido acertar con tal tino en el vehículo del almirante.

La mayoría de los ministros se encontraban pasadas las diez en el Pala-

cio de la Presidencia. Habían sido citados en consejo para esa misma mañana a fin de discutir entre otras cosas un nuevo proyecto de ley de Asociaciones. El ministro de la Gobernación, Carlos Arias Navarro, que había acudido al hospital Francisco Franco en compañía del director general de Seguridad, comunicó telefónicamente a la Presidencia que el presidente Carrero Blanco había muerto.

Las autoridades, en una primera instancia, intentaron prohibir todo comentario, incluso elogioso, de la figura del presidente asesinado. «No sabemos si nos hallamos ante un golpe de Estado», declararon. Una oleada de especulaciones invadió la Península. Primero dijeron que habían asesinado al gobernador civil de Valladolid. Diez minutos más tarde eran al menos cinco los gobernadores civiles que según los bulos habían sido objeto de atentados.

La primera enfermedad de Franco

Seis meses y medio después del atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco, los cimientos del régimen volvieron a temblar. El 9 de julio de 1974, el jefe del Estado Francisco Franco tuvo que ser ingresado en la residencia sanitaria que llevaba su nombre, en Madrid, aquejado de tromboflebitis en la pierna derecha. La posibilidad de que el Caudillo faltara fue a partir de ese día algo más que una hipótesis lejana y se convirtió en algo que podía pasar de un momento a otro. De hecho, sucedió sólo dieciséis meses después.

El momento más crítico de esa enfermedad se produjo el día 19. El tratamiento contra la flebitis, basado en la administración de anticoagulantes, había provocado en el anciano paciente una hematemesis que hizo temer que fuera necesario operarle. Se desestimó hacerlo, pero Franco, consciente de su grave enfermedad, pidió que se aplicara el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado y Juan Carlos accedió provisionalmente a la Jefatura del Estado ese mismo día. La interinidad del entonces Príncipe de España duró 43 días, en los que se limitó a una gestión de trámite. Franco se recuperó con relativa rapidez y el 17 de agosto fue trasladado al pazo de Meirás, su gallega residencia estival. El 2 de septiembre, por sorpresa, telefoneó a Madrid al presidente Carlos Arias Navarro y al príncipe y les anunció que reasumía el poder con esta escueta frase: «Estoy curado».

Esta vuelta a la jefatura del Estado fue acogida con división de opiniones dentro de las áreas del régimen. Algunos consideraron que Franco debería haberse quedado en un segundo plano para que Juan Carlos pudiera ir rodándose, con lo que además se le habría evitado la desagradable sensación de sentirse jefe del Estado de quita y pon. Otros ensalzaron la decisión y, al contrario que los primeros y por razones obvias, pudieron hacerlo de forma pública y notoria. El periodista y consejero nacional del Movimiento Emilio Romero lo justificó así: «La personalidad histórica y política del Generalísimo Franco, como fundador del Régimen, le confiere una situación de monarca vitalicio.» (S. S.).



Mientras tanto las noticias habían llegado a la sede del Palacio de Justicia donde los líderes sindicales comparecían a juicio. Los abogados, entre ellos el ex-ministro franquista y posterior líder de la oposición democrática Joaquín Ruiz Giménez, solicitaron el aplazamiento de la vista en virtud de los graves hechos que estaban sucediendo, y que podían alterar la serenidad de ánimo tanto de fiscales y defensores como de los propios jueces. Pero éstos sólo acordaron una suspensión momentánea y fijaron las 5.30 de esa misma tarde para reanudar la sesión.

En la redacción de INFORMACIONES se trabajaba activamente para preparar una edición extraordinaria. El consejero delegado de la empresa, Víctor de la Serna, no aceptó la sugerencia del presidente de reunir al Consejo de Administración. Lo primero era sacar el periódico a la calle. ¿Pero sacarlo cómo? El Ministro de Información y Turismo, por boca del director general de Prensa, avisó a los diarios que serían secuestrados todos los que

publicaran noticias hablando de la posibilidad de un atentado. Sólo podía decirse que el presidente del Gobierno había muerto como consecuencia de una explosión, quizá de gas. Y nada de editoriales. Las instrucciones emanaban de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que se celebraba en el palacio de la Presidencia con la silla vacía de Carrero y actuando en sus funciones el vicepresidente Fernández Miranda. Desde allí se habló con El Pardo y en la reunión se barajaron las hipótesis más peregrinas. Al parecer hubo quien sugirió que se explicara al país que el presidente del Gobierno había muerto en realidad de un infarto o un síncope producido por la impresión que le produjo la explosión de gas.

En el lugar de los hechos los bomberos achicaban el agua del foso y rescataban los restos de los automóviles que habían sido atrapados en él. Hasta el mediodía no se dio con la entrada del túnel que conducía al sótano de la finca n.º 104 de Claudio Coello. Hasta ese momento la hipótesis del atentado era

pertinazmente rechazada por el Gobierno, pese a que en el ánimo de todos sus componentes anidara el firme convencimiento de que Carrero había sido asesinado. ¿Asesinado por quién?

El poder en la calle

INFORMACIONES sacó la primera edición a la calle a las 13,30. «Ha fallecido el presidente del gobierno», era su titular de primera página. A las quince horas, millones de televisores se encendieron en España ante la mirada expectante de los ciudadanos: El Telediario ofreció una filmación de los destrozos causados por la explosión junto con la noticia de la muerte del presidente, y se anunciaba que el ministro de Información se dirigiría «en breve» al país. Tardó no obstante en hacerlo todavía una hora más. El Gobierno, reunido por segunda vez a las tres de la tarde, después de un despacho de Fernández Miranda con Franco en El Pardo, seguía en tinieblas. Ni una reivindicación, ni un detalle de quién hubiera podido colocar la bomba. Las especulaciones sobre un golpe de Estado cedían sólo con el paso del tiempo, según se desmentían rumores de nuevos atentados y de movimientos de tropas. El teniente coronel San Martín, jefe de los Servicios de Información de la Presidencia y posterior implicado en el golpe del 23 de febrero de 1981, sólo era capaz de confirmar la tranquilidad reinante en España. El general Iniesta, director de la Guardia Civil y reputado ultraderechista, tuvo que revocar por orden de Fernández Miranda un telegrama cursando instrucciones especiales a las fuerzas de la Benemérita en todo el país. A las cuatro y media de la tarde el ministro de Información compareció finalmente en TVE para leer el siguiente comunicado textual: «Con motivo de la muerte en la mañana de hoy del Presidente del Gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco, se ha celebrado reunión del gobierno, presidida por don Torcuato Fernández Miranda quien, en virtud de la Ley Orgánica del Estado, ha asumido automáticamente la presidencia del mismo. El Gobierno, al comunicar al pueblo español la pérdida dolorosa e irreparable del gran patriota, ilustre marino, prudente hombre de Estado, ejemplo de lealtad y fidelidad, cuya vida ha sido una constante entrega al servicio de España, haciéndose eco del sentir de la Nación, acuerda declarar tres días de luto y testimoniar a su viuda, a sus hijos y familiares el más emocionado pésame.» La impresión que obtuvo la opinión pública después de esta primera declaración oficial de un ejecutivo cuyo presidente ha sido asesinado siete



EFE



EFE

horas antes fue obvia: el poder estaba en la calle. Había comenzado la liquidación del Régimen.

Cómo fue

A las cinco y media de la tarde el cadáver del almirante, embalsamado, llegó a la sede de la Presidencia. Las investigaciones policiales y de expertos militares habían establecido ya el sistema como se llevó a cabo el atentado: un túnel que partía de un sótano de la finca 104 de Claudio Coello había sido excavado hasta mitad de la calle y habían alojado en él una carga que fue explosionada mediante un detonador conectado a unos cables, de los que se había hecho un pequeño tendido exterior a lo largo de varias fachadas de la propia calle de Claudio Coello. El sótano de donde partía la pequeña mina había sido adquirido semanas antes por alguien que dijo ser escultor. El portero de la finca, miembro de la Policía Armada en su otro empleo, no sospechó de los golpes que oyó dar ni del movimiento de gente en el sótano,

Los antifranquistas se preparan

La muerte de Carrero y el previsible final de la vida de Franco a corto plazo desencadenaron una febril actividad en los partidos clandestinos de oposición. Durante la primera enfermedad del dictador, el 30 de julio de 1974, el entonces secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Santiago Carrillo, presentó en París, acompañado del miembro del Opus Dei, Rafael Calvo Serer, la Junta Democrática de España. En ella se integró también el grupo socialista de Tierno Galván. Los comunistas fueron los primeros en promover una plataforma unitaria para ligar su suerte a la de los demás partidos y evitar que un proceso de democratización controlada los dejara en la ilegalidad.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consolidó en octubre de 1974 su organización en el congreso de Suresnes (Francia), en el que Felipe González fue elegido primer secretario. Los jóvenes socialistas consumaron la escisión con los «históricos», que era un hecho desde 1972, y aseguraron para sí el apoyo de la Internacional Socialista. En junio de 1975 ya se sintieron con fuerza suficiente como para crear una nueva organización interpartidaria, la Plataforma de Convergencia Democrática, en la que se integró el grupo democristiano de Joaquín Ruiz-Giménez y el núcleo socialdemócrata que hasta su muerte había encabezado Dionisio Ridruejo.

Desde 1971 funcionaba en Cataluña una instancia unitaria que abarcaba un espectro más amplio que las otras dos al incluir tanto socialistas como comunistas, además de grupos nacionalistas. Era la Asamblea de Cataluña.

Con diversos matices, todas propugnaban la ruptura con el régimen, mediante la apertura de un proceso constituyente conducido por un Gobierno provisional de amplia coalición. Sus otros objetivos fundamentales eran la amnistía general, la implantación de las libertades democráticas y la autonomía para nacionalidades y regiones. (S. S.).

En la página anterior, Francisco Franco ingresa en la residencia sanitaria que llevaba su nombre, el 9 de julio de 1974. En esta página, arriba, T. Fernández Miranda, importante figura en las

horas que siguieron al atentado contra Luis Carrero Blanco. Abajo, Arias Navarro jura como jefe del Gobierno, ante Franco y otras personalidades, el 2 de enero de 1974.

Entre el «espíritu» y el «búnker»

Los casi dos años que mediaron entre el atentado contra Carrero y la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, fueron de grandes convulsiones del régimen, que se debatió entre la apertura y el cerrojo, con triunfo de los que propiciaban esto último, los miembros de lo que vino a denominarse el «búnker».

Influido directamente por su mujer, Carmen Polo, e indirectamente por el conjunto de su familia, Franco nombró a Carlos Arias Navarro sucesor del almirante en la Presidencia.

Arias, consciente de que el franquismo sin Carrero iba a tener dificultades para perpetuarse cuando Franco faltara, intentó en un primer momento la apertura del régimen. Esas intenciones se apreciaron en la formación del nuevo Gobierno, en el que incluyó a aperturistas del momento como Pío Cabanillas, Antonio Barrera de Irimo y Antonio Carro, y se plasmaron en su discurso del 12 de febrero de 1974, que dio origen al «espíritu del 12 de febrero». En él anunció que iba a impulsar algo que lejanamente podía parecerse a los partidos: las asociaciones políticas.

Pese a esas propuestas, el 2 de marzo fueron ejecutados en Barcelona el anarquista Salvador Puig Antich y Heinz Chez. Y ya en abril, el cualificado miembro del «búnker» José Antonio Girón lanzó su «gironazo» contra el «espíritu del 12 de febrero». El aviso del líder «ultra» fue claro: «Advertimos las maniobras sinuosas que nos recuerdan la técnica disgregadora y corruptiva de sectas que tanto daño causaron a España en otros tiempos».

La política aperturista, más mal que bien, fue trampeando hasta el 29 de octubre, fecha en la que, por expreso deseo de Franco, Carlos Arias tuvo que cesar al miembro del Gobierno que más alardes liberalizadores había hecho: Pío Cabanillas, ministro de Información y Turismo. En solidaridad con él dimitió el ministro de Hacienda, Barrera de Irimo, y Francisco Fernández Ordóñez abandonó la presidencia del Instituto Nacional de Industria (INI).

El fin de toda esperanza de apertura llegó en diciembre cuando vio la luz el Estatuto de Asociaciones, que el propio Arias presentó sin entusiasmo por televisión con estas palabras: «No se ha podido hacer más. El estatuto es perfectible y su propia andadura hace camino». Lo cierto es que era un cauce tan estrecho —situaba las asociaciones dentro del marco del Movimiento-organización— que hombres como Manuel Fraga se negaron a jugar dentro de ese marco y optaron por crear una sociedad anónima para participar en el juego político.

La actuación de Arias fue endureciéndose a lo largo de 1975, un año en el que además ETA desplegó una gran ofensiva terrorista. El endurecimiento se plasmó de manera inapelable en el decreto-ley antiterrorista de 27 de agosto y culminó con los fusilamientos de dos militantes de ETA y tres del FRAP el 27 de septiembre.

A esas alturas casi nadie dudaba de que, con Franco vivo, cualquier política con propuestas lejanamente democratizadoras estaba abocada al fracaso. (S.S.).



En esta página, abajo, Juan Carlos de Borbón, Príncipe de España, junto al Gobierno de Carlos Arias Navarro. Era en el verano de 1974, y el futuro Rey ocupaba interinamente la jefatura del Estado, debido a la enfermedad de Francisco Franco. Algunas personalidades del régimen abrigaban la esperanza de que Juan Carlos fuese, tras la muerte de Franco, un monarca «manejable». El propósito resultó

fallido, puesto que el Rey se transformó en el principal artífice del tránsito hacia la nueva democracia. Arriba, el general Iniesta Cano, director general de la Guardia Civil en la fecha del atentado. Considerado un «duro», ese día impartió órdenes especiales que Fernández Miranda le obligó a anular.

En la próxima página, homenaje a Puig Antich al año de su muerte.



toda vez que ya había sido advertido de que algunas de estas molestias se producirían, pero que procurarían no disturbar a los vecinos. Aparte de estos datos, al caer la tarde del 20 de diciembre, el Gobierno español no tenía un solo indicio que le permitiera descubrir la paternidad del atentado. Fue entonces cuando se puso en circulación el rumor de que podía haber sido el FRAP, y se habló de la eventualidad de que antiguos activistas de la OAS o miembros del IRA hubieran colaborado en la acción, dada la perfección técnica con la que había sido realizada. También se comunicó a la prensa que un número de teléfono había sido hallado en un piso franco abandonado por los terroristas: resultaría ser el de otro piso donde se ocultó, por las dudas, el conocido líder comunista Simón Sánchez Montero, uno de los dirigentes del PC y de Comisiones Obreras, que sería detenido esa misma noche por miembros de la policía política. Este fue en realidad el primero de los numerosos intentos que a lo largo de aquellos días se llevaron a cabo por relacionar de algún modo el atentado con el partido comunista y con el pro-



EFE

ceso 1.001. Pero las especulaciones sobre la autoría del atentado se vinieron abajo cuando a las once de la noche del mismo día 20 Radio París interrumpía su emisión para leer un comunicado de la organización ETA*, en el que se reivindicaba la acción. Una rueda de prensa a los pocos días y un libro bajo el título de *Operación «Ogro»*, meses más tarde, explicarían los pormenores del atentado: en principio se había pensado en secuestrar a Carrero Blanco cuando era vicepresidente del Gobierno, pero al ser nombrado presidente los planes cambiaron —se le había reforzado la escolta con un coche

* Euskadi Ta Askatasuna: País vasco y libertad. Siglas de la organización terrorista vasca.

adicional— y después del verano la dirección de ETA decidió llevar a cabo el atentado. El 15 de diciembre estaba terminado el túnel donde habría de alojarse el explosivo. La perforación había resultado enormemente trabajosa y difícil, debido a las emanaciones de gas que ya se percibían y a pequeños desprendimientos. La acción, prevista en un principio para el día 18, se retrasó primero hasta el 19 y más tarde hasta el 20 a causa de la llegada de Kissinger a Madrid ese mismo día 19. Un coche Austin 1.300 estacionado en segunda fila en la calle obligaría al Dodge Dart negro del presidente a pasar por encima mismo de la bomba. En la esquina de la calle, subido a una escalera de mano que sirviera para

hacer el tendido de los cables, uno de los terroristas vestido con mono azul esperó la señal de su compañero que al pie de la escala vigilaba el momento en que el automóvil presidencial se ponía a la altura del Austin. «Ahora», gritó éste. Y luego se hizo la conexión y el automóvil saltó por los aires mientras los dos improvisados electricistas salían corriendo gritando «¡El gas, ha sido el gas!». Unos metros más arriba, en la calle Diego de León, montaron en un coche blanco con el motor en marcha, bajaron por la calle de Lagasca y enfilaron la de Juan Bravo. En el corto trayecto que les separaba de la calle Miguel Ángel se desprendieron de sus monos de trabajo y en un lugar frente por frente a la Escuela de Policía



Franco está muriendo, y se cierra la etapa iniciada por ETA con el atentado contra Carrero. El público compra los periódicos con avidez.

se cambiaron a un automóvil distinto que les llevaría hasta su refugio. Cuando ETA decidió asumir públicamente la autoría del atentado, sus responsables, integrantes del llamado comando «Txiquia», en honor de un terrorista muerto meses antes por la policía, estaban ya a salvo.

Meditación de madrugada

A la una y veinte de la madrugada del día 21 de diciembre de 1973, Madrid era una ciudad cerrada. Un silencio espeso y duro recorría las calles en las que la ausencia de tráfico resultaba casi total. Sólo en torno a la sede de la Presidencia del Gobierno podía percibirse algún dispositivo extraordinario de seguridad, pero los pasos perdidos de los inexistentes viandantes hablaban lo mismo de miedo que de estupor. Cansado de la jornada más excitante de mi vida profesional (hasta que por desgracia tuviera que tumbar este récord la noche del 23 de febrero de 1981) yo conducía mi coche por aquel oscuro desierto urbano, adivinando cuántas botellas de champán se habrían descorchado esa noche, estremecido con la idea de que un asesinato, aun siendo un tiranicidio, pudiera ser motivo de alegría para nadie. Había hablado con el director del periódico

que, casi perdido en la jungla panameña, imaginaba sin duda qué clase de crisis política se estaría gestando en esos momentos en España. Había improvisado unas declaraciones para la radio en las que repetía los conceptos de los editoriales que por fin pudieron publicarse aquel día: elogios convencionales para la figura del presidente fallecido y condenas del atentado que, con todos sus matices de brutalidad, no podía desprenderse a los ojos de la opinión pública de sus aspectos espectaculares e históricos. El presidente en funciones, Torcuato Fernández Miranda, se había dirigido al país en una alocución sobria y bien planteada que no le sirvió luego para ser designado por Franco como sucesor de Carrero. Paradojas de la historia: sería el ministro de la Gobernación, máximo responsable de la seguridad del Estado y por lo tanto del fracaso de la protección a la vida del presidente, el que sustituiría a éste. Después vendrían un intento fracasado de apertura política, la primera enfermedad de Franco, la entrega del Sahara, la creación de la Junta Democrática, los fusilamientos de otoño del 75 y la larga y terrible agonía del dictador. Pero nada de esto era sabido aquella madrugada, con las calles de Madrid evaporando a un

tiempo miedo y esperanzas, cuando tantos demócratas, enemigos de la violencia y del terrorismo etarra, reconocían ya —con cuidado, no se les fuera a confundir— que a la postre los magnificas habían cumplido con un destino histórico y su acción había liquidado cualquier posibilidad de continuismo franquista.

Aquella noche, en la que los restos de un régimen perplejo velaban el cadáver del presidente, no se había publicado todavía la foto de Franco llorando indefenso ante la viuda del almirante el día de su entierro, ni había visto la calle la impresionante estampa del Príncipe, andando erguido tras el armón del féretro de la víctima. Ni siquiera tuvo ya el viejo dictador arrestos para asistir al sepelio de su primer y más significativo presidente de gobierno en treinta y siete años de mandato. El comando Txiquia, ocho hombres jóvenes que jamás serán juzgados por su acción, pues se beneficiaron de la amnistía política de la democracia, había dado la vuelta del revés al futuro de España. Y el Estado entero, con sus instituciones, el poderoso régimen de Franco, se quedó absorto aquella madrugada fría y solitaria, perplejo en su impotencia, en su ignorancia, en su desarraigo de los españoles.

Democracia en España

De Franco al socialismo

Sebastián Serrano,
periodista

La muerte de Francisco Franco abrió un nuevo período en la historia de España, pese a que algunos pensaban que todo estaba «atado y bien atado» para facilitar, durante mucho tiempo, la continuidad del régimen. Pero la

evolución del país y la necesidad de cambio fueron comprendidas por la gran mayoría de los dirigentes políticos, que encontraron en el Rey Juan Carlos (en la fotografía, en el día de su proclamación) el más amplio y mejor respaldo.

A las 6 y 10 horas del 20 de noviembre de 1975, el entonces ministro de Información, León Herrera, leyó ante los micrófonos de Radio Nacional de España este comunicado: «Las Casas Civil y Militar informan que a las 5 y 25 horas Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por paro cardíaco, como consecuencia de un shock tóxico por peritonitis.» Era el anuncio oficial de que Franco había dejado de existir a la edad de 83 años. El dictador había muerto en la cama 39 años después de acceder a la Jefatura del Estado con todo el poder político en sus manos.



Cronología de la transición

1975

20.XI: muere Francisco Franco.

22.XI: Juan Carlos de Borbón es proclamado Rey.

3.XII: Torcuato Fernández-Miranda es designado presidente de las Cortes.

5.XII: Carlos Arias es confirmado como presidente del Gobierno.

1976

3.III: carga policial en Vitoria: cuatro muertos.

1.VII: el Rey fuerza la dimisión de Arias.

3.VII: Suárez es designado presidente del Gobierno.

30.VII: se aprueba el decreto de amnistía.

22.IX: Gutiérrez Mellado es nombrado vicepresidente del Gobierno.

18.XI: las Cortes aprueban la Ley de Reforma Política.

10.XII: aparición pública de Carrillo en Madrid.

15.XII: aprobación de la Reforma Política en un referéndum.

1977

24.I: cinco asesinatos en un despacho de abogados laboristas de CC OO en Madrid. El general Villaescusa es secuestrado por el Grapo.

9.IV: legalización del PCE.

14.V: Don Juan cede sus derechos dinásticos a su hijo.

15.VI: primeras elecciones legislativas. Gana Suárez.

29.IX: reinstauración de la Generalidad de Cataluña, a título provisional.

9.X: se firman los pactos de la Moncloa.

14.X: se aprueba la Ley de Amnistía.

30.XII: se aprueba la autonomía provisional para el País Vasco.

1978

21.VII: primer atentado de ETA contra un general, Juan Ramos Sánchez-Izquierdo, que muere a raíz de la acción.

17.XI: se descubre un intento de golpe militar denominado «Operación Galaxia».

6.XII: la Constitución es aprobada en referéndum.

1979

1.III: elecciones legislativas. Vuelve a ganar Suárez.

3.IV: la izquierda gana las elecciones municipales.

25.X: los estatutos catalán y vasco aprobados en referéndum.

1980

9.III: elecciones en el País Vasco. Gana el PNV.

20.III: elecciones en Cataluña. Gana Convergencia y Unión.

21.V: moción de censura del PSOE contra Suárez.

1981

29.I: dimisión de Suárez.

23.II: intento de golpe de Estado.

31.VII: UCD y PSOE firman los pactos autonómicos.

20.X: elecciones en Galicia. Gana Fraga.

1982

19.II: comienza el juicio por el 23-F.

23.V: elecciones en Andalucía. Gana el PSOE.

3.VI: sentencia por el 23-F.

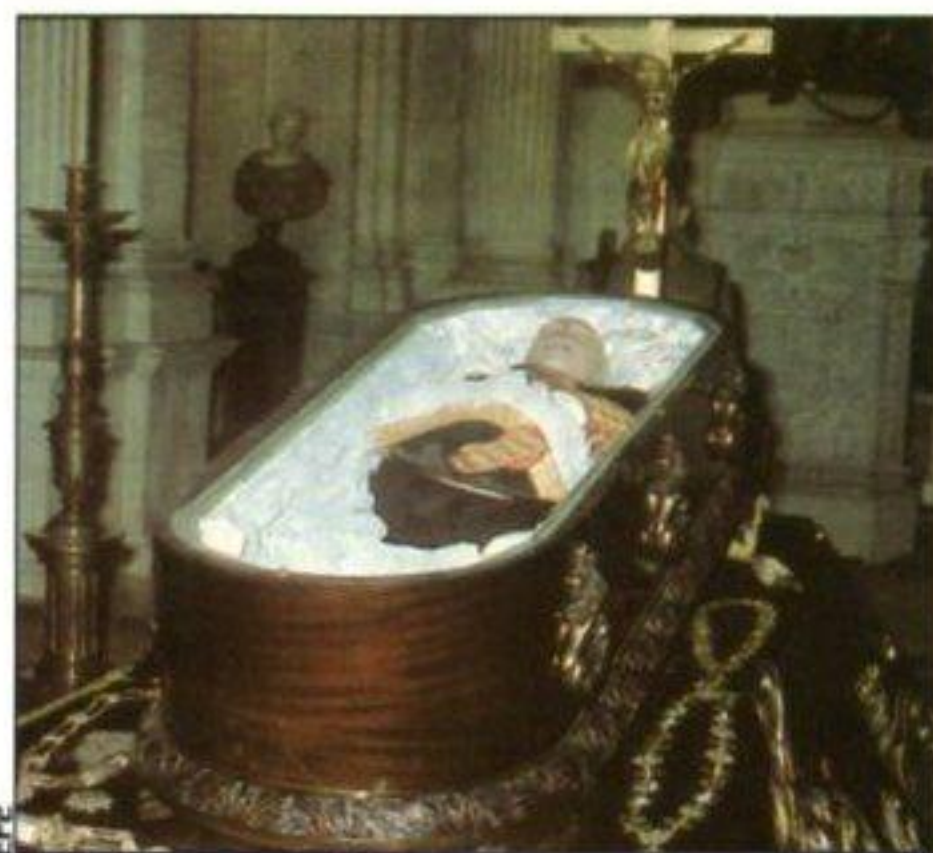
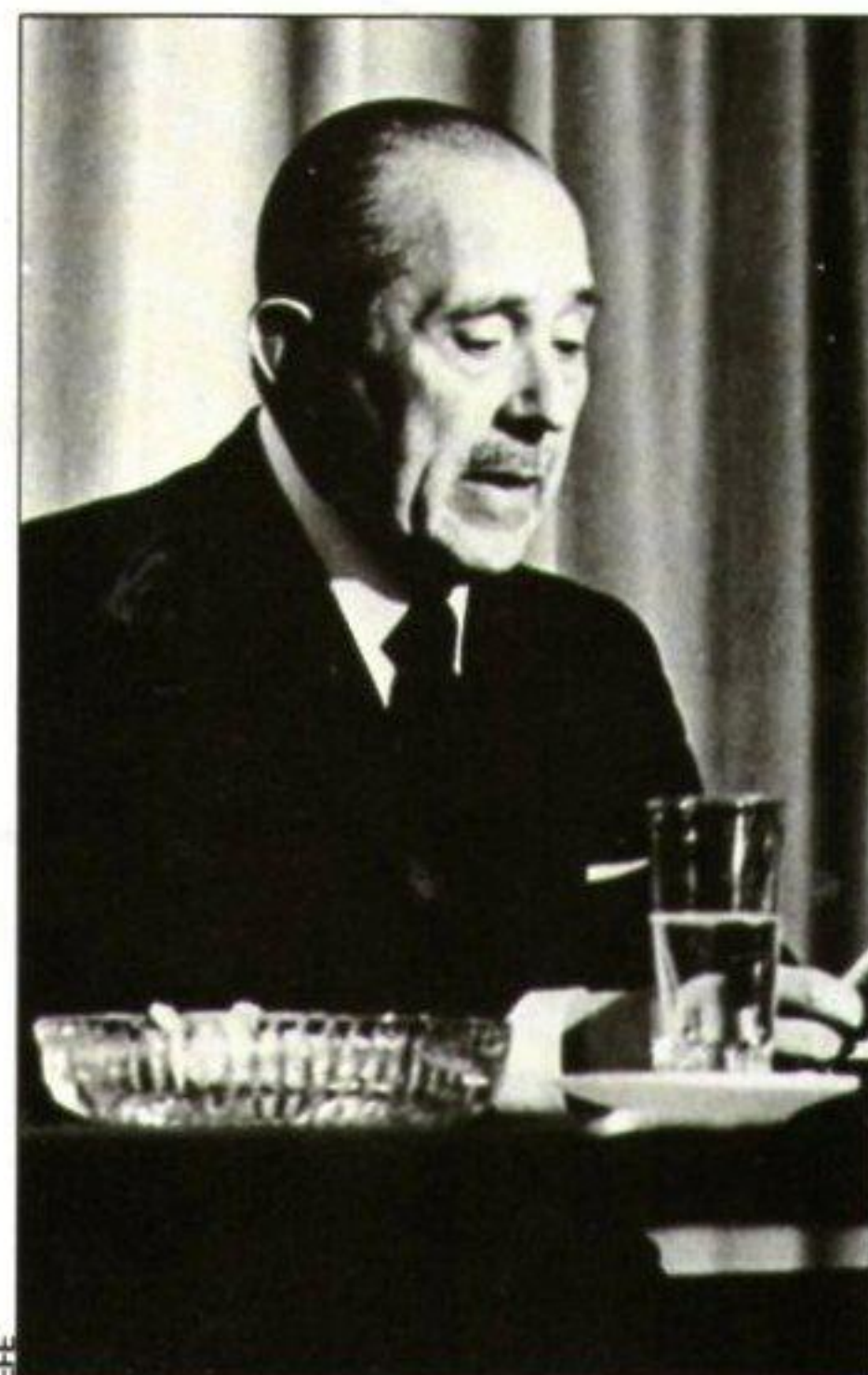
28.VII: Suárez forma un nuevo partido al margen de UCD.

28.X: elecciones legislativas. Gana el PSOE.

Franco murió creyendo, como siempre, que España y él eran fundamentalmente la misma cosa. Esto quedó claro cuando a las 10 de la mañana el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, con lágrimas en los ojos, leyó el testamento político de Franco. «Pido perdón a todos —rezaba uno de sus párrafos— y deseo no haber tenido más enemigos que los de España.» Como colofón, una advertencia: «No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización occidental están alerta.»

Acababa de terminar una larga agonía, como larga había sido la dictadura. Había empezado el 12 de octubre, el Día de la Raza, con un enfriamiento.

Franco pudo asistir al Consejo de Ministros del día 17 gracias a los adelantos de la técnica. «Le enchufamos cables conectados con un electrodo —explicó meses después el doctor Vital Aza— y desde una habitación cercana nosotros vigilábamos la marcha del corazón de Franco. Ninguno de los que estaban allí sabía lo que estaba pasando. Los cables estaban bien disimulados.» A las 11 de la noche del día 20, sufrió una crisis cardíaca y a la mañana siguiente se hizo público el primer parte médico, que corroboró el rumor de que el general estaba gravemente enfermo. Desde ese momento España vivió pendiente de los partes médicos.



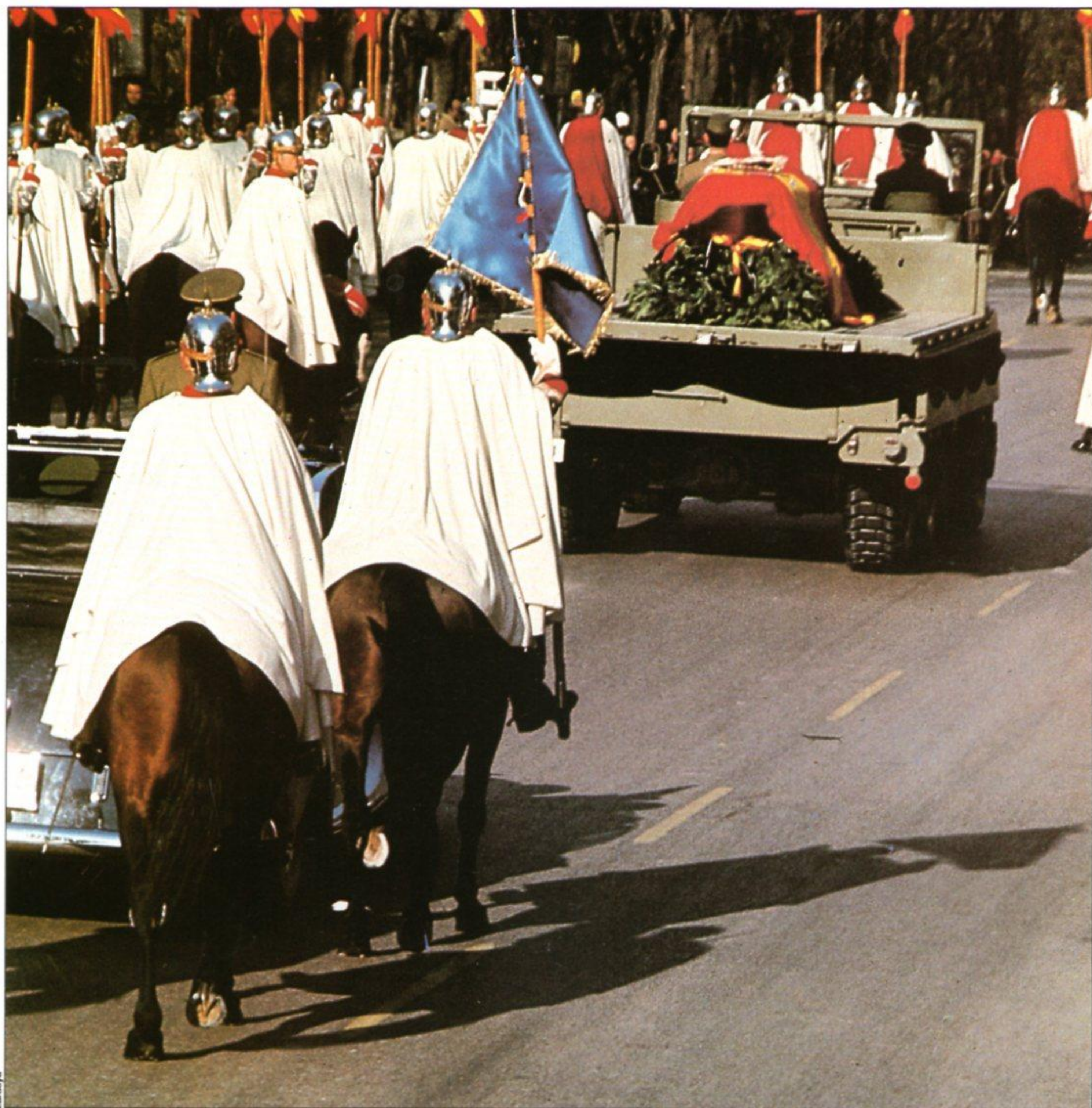
En esta página, arriba, Carlos Arias Navarro leyendo el testamento político de Franco.

Abajo, la capilla ardiente y el féretro con el cadáver del anciano jefe de Estado desaparecido. El país entero, sin distinción de ideologías, estaba conmovido por el

acontecimiento y con gran expectativa en torno al futuro.

En la página siguiente, un aspecto del entierro de Franco, en marcha hacia el Valle de los Caídos. También España iniciaba otra marcha, pero rumbo a la libertad y a la democracia.

El 29 recibió la primera transfusión de sangre y a los pies de su cama fue colocado el manto de la Virgen del Pilar. Al día siguiente, tras sufrir un infarto, consideró que no podía seguir siendo jefe del Estado. «Artículo 11, que se aplique el artículo 11», balbuceó, y Juan Carlos le sustituyó provisionalmente en la Jefatura del Estado, tal y como establecía dicho artículo de la Ley Orgánica del Estado. El 3 de noviembre hubo que operarle a la desesperada en el palacio del Pardo. Luego fue trasladado a la Residencia Sanitaria de la Paz, donde fue sometido a dos operaciones más. El 18 fue poco menos que hibernado. «Las circuns-



Zarboya

tancias clínicas —decía el parte médico— han aconsejado mantener su temperatura corporal a 33 grados centígrados.» Todo fue inútil. El día 20 murió.

La larga agonía de Franco se produjo en un momento especialmente delicado para el régimen. Varios países habían retirado temporalmente sus embajadores en Madrid en señal de protesta por los fusilamientos, el 27 de septiembre, de cinco activistas. En los últimos meses, el régimen, presintiendo el próximo final, se había endurecido, dejando a un lado las veleidades aperturistas. Por su parte, Hassan II de Marruecos había aprovechado la enfermedad de Franco para lanzar su

«marcha verde» sobre el Sahara, con lo que logró que España le cediera el 14 de noviembre la administración de la parte fundamental del territorio. La descomposición de la dictadura era palpable.

La nueva monarquía

Y llegó el Rey. Cuando todavía las larguísimas colas de ciudadanos que iban a dar su último adiós a Franco eran contempladas a través de la televisión por unos españoles que no acababan de creerse que el anciano gobernante había realmente pasado a la historia, Juan Carlos accedió de manera definitiva a la Jefatura del Estado. Era

el 22 de noviembre. Al día siguiente, presidió el entierro de su antecesor en el Valle de los Caídos y 96 horas después empezaba la transición a la democracia. En el acto de exaltación y presentación pública del monarca, al que ya acudieron algunos mandatarios de la Europa Occidental, Juan Carlos esbozó el camino: «Nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional», dijo.

Juan Carlos llegó al trono por expreso deseo de Franco, que lo designó su sucesor en julio de 1969. Era por tanto el legítimo Jefe del Estado según la legalidad franquista; si sus actuaciones se regían por lo establecido formal-



mente en esa legalidad, no iban a suponer, fueran las que fueren, una descalificación frontal de su antecesor, con lo que podría neutralizar los ataques de los puristas. En esta premisa se basó el paso de la dictadura a la democracia mediante reformas, sin ruptura. La legalidad franquista fue la única que justificó su ocupación del poder hasta que su padre, Don Juan de Borbón, renunció a sus derechos al trono el 14 de mayo de 1977, cuando los partidos eran ya legales y se habían convocado elecciones democráticas. La ratificación popular de la monarquía se produjo el 6 de diciembre de 1978 al aprobarse la Constitución mediante referéndum.

El camino hasta llegar ahí no fue de rosas. Al asumir el poder, el Rey tuvo que tomar dos decisiones de la máxima importancia: nombrar presidentes del Gobierno y de las Cortes. Para este segundo cargo, de vital importancia porque llevaba aparejada la presidencia del Consejo del Reino, nombró a uno de sus preceptores, Torcuato Fernández-Miranda, hábil y enigmático político de origen inequívocamente falangista, quien al tomar posesión del cargo anunció: «El pasado no me ata.» Para presidir el Gobierno el rey optó,

o tuvo que optar ante las presiones franquistas, por la continuidad y confirmó a Carlos Arias Navarro, el albacea del Caudillo.

El Gobierno Arias-Fraga

Arias renovó el Gabinete y colocó en él a algunas de las figuras reformistas con más nombre: Manuel Fraga en Gobernación y José María de Areilza en Asuntos Exteriores. Este primer Gobierno de la monarquía, que duró apenas siete meses, lo más que se propuso fue conceder, con limitaciones, derechos como el de reunión y asociación —creó lo que se dio en llamar la «ventanilla», por la que no pasó ningún partido de la oposición— con la intención de llegar a una democracia tutelada en la que no cupieran los partidos comunistas. Ese proyecto de reforma estuvo aderezado con una política de orden público contundente, cuya expresión más sangrienta se dio en Vitoria el 3 de marzo, donde cuatro huelguistas murieron por disparos de la policía.

Aunque hubo algunos contactos, ese Gobierno nunca llegó a negociar con la oposición, que el 26 de marzo logró un notable avance en su unidad con la formación de Coordinación Democrá-



Sobre estas líneas, Juan Carlos de Borbón presta juramento ante el Consejo del Reino. Arriba, el Rey junto a su primer gobierno, presidido por Arias Navarro. Este gabinete no colmó las esperanzas reformistas en él depositadas, y a los pocos meses se produjo una crisis política que determinó su cese.

En la página siguiente, Adolfo Suárez jura como presidente del segundo gobierno del nuevo sistema español. Suárez, contra todas las previsiones, fue la pieza clave en el tránsito hacia un régimen democrático. El Rey confió en el joven político, y éste, pese a ciertas oposiciones, impuso la democracia.



Suárez, el hombre de la reforma

Adolfo Suárez es sin duda la figura más polémica y atractiva de la transición a la democracia en España. Con un padre liberal y republicano y habiendo nacido poco antes de la guerra en un pequeño pueblo de Ávila, Cebreros, Suárez era en los años cincuenta un funcionario servicial del que nadie podía sospechar que pudiera llegar a presidente del Gobierno. Ni su familia de clase media ni sus poco brillantes estudios de Bachillerato y Derecho hacían presagiar un porvenir magnífico. Sin embargo, a los 23 años tuvo la suerte de conocer en el Gobierno Civil de Ávila a quien luego fue ministro secretario general del Movimiento y hombre muy influyente en los medios políticos controlados por el Opus Dei: Fernando Herrero Tejedor. Suárez era funcionario y Herrero Tejedor gobernador. Durante los años cincuenta y sesenta Suárez era un devoto católico de misa diaria y un fiel defensor del ideario falangista. Su escalada política se inició precisamen-

te en los más bajos peldaños del Movimiento y su ambición —hay quien dice que de pequeño había llegado a afirmar que él iba a ser el primer presidente de la tercera República— empezó a tomar cuerpo. Simpatía, habilidad y un espíritu muy servicial, tres importantes virtudes para el ascenso dentro de la burocracia franquista, no le faltaban.

En 1969 llegó a ser director general de RTVE, un puesto clave que ocupó durante casi cuatro años, y a través de los cuales trabó amistades que resultaron muy provechosas para su definitivo ascenso al poder. En 1975 llegó a ocupar la vicesecretaría general del Movimiento al acceder a la secretaría su protector Herrero Tejedor. En el primer Gobierno de la monarquía desempeñó el cargo de ministro del Movimiento, y el 3 de julio de 1976, por la voluntad del Rey y la habilidad de Torcuato Fernández-Miranda, accedió a la Presidencia del Gobierno. Tenía 43 años.

Había sido elegido para el cargo porque su pasado al servicio del régimen, su ambición política y su pragmatismo le hacían el hombre ideal para la compleja y difícil tarea de transformar la dictadura en democracia, suavizando la ruptura. En ello utilizó sus mayores virtudes: habilidad, gran encanto en las relaciones personales e innegables dotes de mando. Pero si su ambigüedad ideológica le hizo idóneo para conducir la transición, también fue la razón de fondo que condujo a su caída. Cuando la democracia comenzó a ser una realidad, la derecha necesitó hombres que fueran capaces de ofrecer programas coherentes basados en idearios inequívocamente conservadores, y en la izquierda no tenía lugar. De todas formas, y aunque en 1981 se hundió en una relativa oscuridad política, quizás esperando tiempos mejores, sus méritos como conductor de la transición son reconocidos por amplias capas de la población española.

El Estado de las autonomías

La transición de la dictadura a la democracia ha estado indisolublemente asociada a la transformación del Estado centralista en el Estado de las autonomías. Este hecho, inevitable por la potente voluntad autonómica manifestada por los pueblos vasco y catalán, ha contribuido a complicar más, si cabe, la transición misma.

Si en el proceso de reforma política general puede decirse que privó la voluntad del poder establecido sobre la presión popular, aunque ésta sirviera, eso sí, para forzar una democratización más allá de lo previsto, en la consecución de la autonomía por el País Vasco y Cataluña cabe invertir los términos y concluir que las grandes movilizaciones que desarrollaron vascos y catalanes forzaron unos regímenes autonómicos muy alejados del principio meramente descentralizador que preveía la reforma. En el artículo segundo de la Constitución de 1978 «se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones», derecho que un año más tarde quedó desarrollado en los estatutos vasco y catalán.

La consecución de estos amplios marcos autonómicos para el País Vasco y Cataluña no significó, sin embargo, que la cuestión autonómica quedara resuelta. UCD puso en práctica de inmediato una política de «café para todos», es decir, de generalización de los estatutos de autonomía, cuyo objetivo no era tanto propiciar el autogobierno de todas las regiones como tender a igualar a la baja el techo autonómico general. Esta política quedó plasmada en la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), impulsada a partir de julio de 1981 por UCD y el PSOE, que en sus aspectos sustanciales fue declarada inconstitucional por el tribunal competente y no llegó a aplicarse.

tica: una instancia unitaria que englobaba desde democristianos hasta comunistas, pasando por socialdemócratas y socialistas. Eran tiempos de manifestaciones en favor de la libertad y la amnistía —con el añadido de la demanda de aprobación de los estatutos de autonomía para Cataluña y el País Vasco—, de grandes huelgas al abrigo de una democracia que se adivinaba cercana y de tremendo dinamismo social que seguía abriéndose camino al mar-



gen del Gobierno, igual que con Franco. Para colmo, la imagen que intentaba «vender» Areilza en el exterior o las reformas controladas que Fraga propugnaba eran desmentidas por Arias, que hablaba de reformar las leyes «como Franco hubiera deseado».

En abril se produjo una seria advertencia a Arias. En el número con fecha 19-25 de ese mes, la revista norteamericana *Newsweek* publicó un artículo en el que se decía que «en opinión del

Rey, Arias es un desastre sin paliativos que se ha convertido en el soporte de los leales a Franco». A esas alturas la «operación recambio» ya estaba en marcha. Fue una filigrana política, cuyo principal ejecutor se llamó Torcuato Fernández-Miranda. El presidente de las Cortes había buscado un hombre joven, con un pasado inequívocamente franquista, para que pudiera pasar el cedazo del Consejo del Reino, y flexible, muy flexible, para que pudiera



Reunión catalanista en la plaza de San Jaime, en Barcelona, el 23 de mayo de 1978. Las demandas de autonomía y de libertades para que se manifestasen sin cortapisas todas las

características y condiciones culturales de los distintos pueblos del Estado español se acentuaron con la vigencia del régimen democrático, y fueron incontenibles.

Y llegó el 1 de julio, jueves. Carlos Arias, sin sospechar nada, entró a la una y cuarto en el Palacio Real, lugar destinado a las recepciones solemnes. Habló con el Rey y una hora después salió del majestuoso edificio como presidente dimisionario. El Consejo del Reino estaba convocado para primera hora de la tarde y, cogido por sorpresa, dio el preceptivo «oído». La paciencia de Fernández-Miranda había tenido la prevista compensación. El mismo Consejo debía entonces presentar una terna al Rey para que éste eligiera al sustituto. Fernández-Miranda volvió a hacer gala de su habilidad y a las 3 de la tarde del sábado 3 de julio ya pudo decir a la prensa: «Estoy en condiciones de llevar al Rey lo que me ha pedido.» A media tarde se hizo público que el semidesconocido Adolfo Suárez era el nuevo presidente del Gobierno.

La reforma de Suárez

El elegido no perdió tiempo en poner en práctica la reforma planeada. Rápidamente empezaron las reuniones con líderes de la oposición, incluida la encuadrada en Coordinación Democrática, que culminaron con una entrevista, el 10 de agosto, con el primer secretario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Felipe González. Ya antes, el 30 de julio, se había aprobado el decreto de amnistía, que puso en la calle a los presos políticos que quedaban, con excepción de los condenados o acusados de delitos de sangre. El plan era quitarle bazas a la oposición democrática, que proponía la ruptura con el régimen franquista a través de la creación de un gobierno de amplio consenso, la amnistía total y el restablecimiento de las libertades democráticas. Suárez lo logró con la ley de reforma política, que permitió la elección de un Congreso y un Senado por sufragio universal, directo y secreto. Esas dos cámaras elaboraron meses después la Constitución.

El 8 de septiembre de 1976, con el proyecto de reforma ya elaborado, Suárez reunió a la plana mayor de los tres ejércitos: en total, 29 generales y almirantes. El presidente dio garantías, o al menos así lo entendieron los otros asistentes, de que la reforma no iba a incluir, en un primer momento, la legalización de los comunistas. El ambiente fue de tal camaradería que el duro general Mateo Prada Canillas

concretar la reforma planeada. Lo había encontrado: era Adolfo Suárez.

Fernández-Miranda urdió con astucia renacentista la manera de lograr el cese de Arias sin dejar margen de reacción a los guardianes del purismo. Para que la dimisión del presidente fuera efectiva era preciso que el Consejo del Reino fuera «oído». Como en esa institución estaba representado lo más alambicado del franquismo —José Antonio Girón, Antonio María de

Oriol y Dionisio Martín Sanz eran algunos de sus dieciséis miembros— era necesario que entre el anuncio de la dimisión y el visto bueno del consejo no mediara tiempo para que ese sector se organizara. La sorpresa era imprescindible. Con esa finalidad, utilizando el argumento de que se tenía que dinamizar un órgano que hasta entonces sólo se había reunido en «momentos históricos», Fernández-Miranda lo venía convocando cada quince días.

Intentonas golpistas

A pesar de que dos intentonas golpistas han sido abortadas entre 1975 y 1982 en fase de preparación (una tercera, el 23-F, llegó a ser una rebelión consumada y el fantasma del golpe condicionó a los gobernantes durante esos siete años), las Fuerzas Armadas en su conjunto han aceptado con disciplina la transformación del Estado franquista en un Estado democrático. Ello ha sido así fundamentalmente porque el sucesor de Franco, el Rey Juan Carlos, lo ha exigido de manera inequívoca.

Pero las reglas de juego no han sido siempre coincidentes. El exponente más claro de ello es el caso de los militares que pertenecían a la Unión Militar Democrática (UMD). Nueve capitanes y un comandante fueron condenados en marzo de 1976 por conspiración para la rebelión. Su delito había sido formar parte de una organización clandestina que abogaba por una democracia para España. Ocho de ellos sufrieron penas superiores a los tres años y un día, que llevaban aparejadas la separación del Ejército. Todos fueron amnistiados en 1976, pero tanto el decreto de amnistía de ese año como la ley de 1977, mantuvieron en vigor la pena accesoria de separación del servicio.

En noviembre de 1978 fueron detenidos el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el entonces capitán de la Policía Armada Ricardo Sáenz de Ynestrillas por promover lo

que se dio en llamar «Operación Galaxia». Se proyectaba secuestrar al Gobierno durante la celebración de un Consejo de Ministros, aprovechando un viaje del Rey a América, para forzar la involución. Fueron condenados por el tribunal militar por el mismo delito que los de la UMD, conspiración para la rebelión, pero se les impuso poco más de medio año de arresto y siguieron en el Ejército.

Tejero logró su propósito de secuestrar al Gobierno, y de paso a todos los diputados, el 23 de febrero de 1981, al entrar en el Congreso al mando de las fuerzas de choque de un golpe planeado por él mismo y los generales Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada. La justicia militar dictó unas penas que fueron consideradas cortas por el poder civil, aunque esta vez el Gobierno pudo recurrir y el Tribunal Supremo elevó las condenas. Tras la segunda sentencia, los tres cabecillas sufrieron penas máximas de 30 años —Armada había sido condenado inicialmente a 6— y a ningún oficial de los 33 procesados se le aplicó la eximente de obediencia debida.

La última intentona conocida fue abortada en la fase de preparación el 2 de octubre de 1982. Ha sido bautizada como el 27-O porque, según los indicios, el golpe se preparaba para la víspera de las elecciones del 28 de octubre. Por primera vez iba a ser un golpe cruento, que incluía el derrocamiento del Rey.



En esta página, arriba, el teniente general Jaime Milans del Bosch. Abajo, el general Alfonso Armada. Ambos fueron condenados a severas penas por la sorpresiva y fallida intentona golpista del 23 de febrero de 1981.

En la página siguiente, pistola en mano, el teniente coronel Antonio Tejero Molina toma por asalto el Congreso de los Diputados, en uno de los operativos del 23-F. La decidida actitud del Rey salvó a la aún frágil democracia.

lanzó en un momento determinado este grito: «Presidente, ¡viva la madre que te parió!» Tres días después, hizo público el proyecto, lo sometió a las Cortes por el procedimiento de urgencia y el 18 de noviembre, bajo la dirección de Fernández-Miranda, los procuradores franquistas aceptaron su propia inmolación al aprobar la ley por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. El 15 de diciembre, los españoles dieron su «sí» en un referéndum en el que la abstención no llegó al 23 por ciento.

La maniobra había resultado un éxito. En el proceso, Suárez había tenido ya el primer topetazo con los militares al dimitir el general Fernando de Santiago de su cargo de vicepresidente del Gobierno, pero eso lo había aprovechado para sustituirlo por el general Manuel Gutiérrez Mellado, el hombre que a partir de ese momento y hasta

enero de 1981 condujo contra viento y marea la reforma militar. A la oposición, que había propugnado con escaso éxito la abstención en el referéndum, no le quedó más salida que sumarse al carro de la reforma y forzar lo que eufemísticamente se dio en llamar «ruptura pactada». Consciente de que con su presión difícilmente podía llegar mucho más allá, la oposición dejó a un lado la idea del gobierno de amplio consenso y centró sus esfuerzos en lograr que el marco de las elecciones fuera lo más limpio posible. Así, mediante negociación se suprimió la «ventanilla» por la que debían pasar los partidos para su legalización y se estableció una normativa más adecuada sobre el derecho de reunión y de sindicación. Todo ello al tiempo que iban cayendo las más hirientes instituciones del franquismo: el TOP, el sindicato vertical, el Movimiento.

Un escollo se interponía aún a la reforma: el Partido Comunista de España (PCE), la «bestia negra» del franquismo y los franquistas. El plan era, si se podía, prescindir de él. Pero parecía difícil. Su notable capacidad de movilización y su voluntad de salir a la luz, como todos los demás partidos de la oposición, forzaba a continuas detenciones que ponían en duda la honestidad del proceso. Todos los demás partidos circulaban a sus anchas en un ambiente de tolerancia y hasta los socialistas pudieron celebrar a primeros de diciembre un congreso en Madrid. Santiago Carrillo, secretario general del comunismo, decidió entonces forzar la situación para que esa tolerancia abarcara también a su partido. El 10 de diciembre montó en la capital de España una espectacular rueda de prensa, doce días después fue detenido y la Nochevieja ya la pudo celebrar como



Topham/Foto-Foto

un ciudadano normal con su carnet de identidad en el bolsillo. Era el primer paso. Pronto se daría el definitivo.

Suárez, previsivamente, venía manteniendo contactos con Carrillo desde septiembre, a través de José Mario Armero, presidente de una agencia de noticias y hombre bien relacionado con el Departamento de Estado norteamericano. Precisamente en casa de Armero mantuvo con el líder comunista una reunión secreta el 27 de febrero de 1977. Se cautivaron mutuamente y se entendieron: Suárez iba a legalizar el PCE antes de las elecciones si, a cambio, Carrillo congelaba la dinámica movilizadora de sus correligionarios, aceptaba públicamente la monarquía y asumía la bandera rojo y gualda. El 9 de abril, Sábado de Gloria, el presidente cumplió su parte. El dirigente comunista cumplió la suya pocos días después. Según ambos, ese acuerdo y la

dinámica de colaboración que generó han sido puntales básicos en la consolidación democrática.

La legalización del PCE le costó a Suárez una respuesta airada del Ejército, una pérdida de confianza de amplios sectores militares que ya no pudo recuperar nunca y la dimisión del ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga.

La nueva democracia

Pero ya nada impedía las elecciones. Suárez las organizó para el 15 de junio de 1977 y Suárez las ganó con el 31 por ciento de los votos encabezando la Unión de Centro Democrático (UCD), un conglomerado en el que se habían integrado los reformistas del franquismo y sectores socialdemócratas, liberales y democristianos que hasta pocos meses antes se hallaban en la oposición. Tras UCD, con sólo 2,5 puntos

menos, el PSOE, que a partir de ese momento absorbió a la mayoría de los grupos socialistas que habían intentado hacerle la competencia. Luego el PCE, con menos del 10 por ciento, un resultado por debajo de las expectativas. Alianza Popular (AP), un grupo creado por Fraga con ex ministros del franquismo con la intención de atraerlos hacia la democracia, se quedó con el 8,5 por ciento. Los democristianos puros no lograron ningún escaño del congreso. Los que sí entraron fueron los nacionalistas vascos y catalanes.

Con unos resultados tan ajustados y la elaboración de una Constitución por delante, Suárez optó por abandonar cualquier plan previo de construir una democracia a la medida de la derecha y entró por el camino del consenso. Los protagonistas indiscutibles de este período, que acabó con las elecciones de 1979, fueron el propio Suárez y Ca-

Una constante: el terrorismo

El terrorismo ha sido, junto con el golpismo, el telón de fondo que ha crispado la transición española al teñirla con la sangre de medio millar de muertos. En los primeros meses los golpes más desestabilizadores los dieron la extrema derecha y los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), en los que muchos observadores han querido ver un «cerebro» común: ciertos núcleos del aparato de represión franquista.

La ultraderecha hizo un alarde de fuerza el 9 de mayo de 1976 al tomar la cumbre de Montejurra, utilizando incluso ametralladoras pesadas, y disparar desde allí contra los carlistas demócratas que efectuaban su tradicional romería. Ocho meses después se produjo el más sangriento atentado fascista al asesinar un comando a cinco miembros del Partido Comunista en un despacho de abogados laboristas. Ese mismo día, el 24 de enero de 1977, los GRAPO habían secuestrado horas antes al teniente general Emilio Villaescusa y desde el 11 de diciembre mantenían en su poder a Antonio María de Oriol, uno de los máximos representantes del franquismo puro y duro. La coincidencia de ambos hechos fue lo que hizo pensar en la existencia de un complot único, aunque aparentemente los autores se situaron unos en la extrema derecha y otros en la extrema izquierda. El rocambolesco rescate de los dos secuestrados pocos días después no hizo más que reforzar esa idea.

Ambas fuerzas siguieron actuando en los años siguientes, llegando los GRAPO a batir el 26 de mayo de 1979 el récord absoluto de sangre con su bombazo contra la madrileña cafetería California, que causó ocho muertes. Pero a partir de 1978 el protagonismo en materia terrorista pasó sin lugar a dudas a manos de una vieja organización: ETA.

Euskadi ta Askatasuna (Patria vasca y Libertad), mucho más conocida por las siglas ETA, se gestó en los años cincuenta y celebró su primera asamblea en 1962. Su objetivo era y es lograr la independencia de Euskadi y su método era y es la lucha armada. Al morir Franco se encontraba dividida en dos: ETA político-militar y ETA militar. La primera, la menos activa, apoyó el Estatuto de autonomía cuando éste se aprobó en 1979 y buena parte de sus miembros acabaron abandonando las armas en septiembre de 1982. La segunda ha sido la que ha protagonizado la mayor parte de los atentados terroristas.

La actuación de ETA (militar) fue endureciéndose a medida que España avanzaba hacia la democracia y el País Vasco hacia la autonomía. En 1978, 1979 y 1980 el número de asesinados por ETA se situó cada año en torno al centenar. Su estrategia a partir de 1978 es, según muchas opiniones, muy clara: provocar al Ejército atentando contra sus altos mandos en momentos clave del proceso democrático.

En esta página, estado en que quedó el coche del teniente general Valenzuela, tras el atentado que le costó la vida, en Madrid. El terrorismo ha sido uno de los mayores y más graves problemas para la estabilidad de la joven democracia española.

En la página siguiente, arriba, Santiago Carrillo. El entonces secretario general del Partido Comunista fue

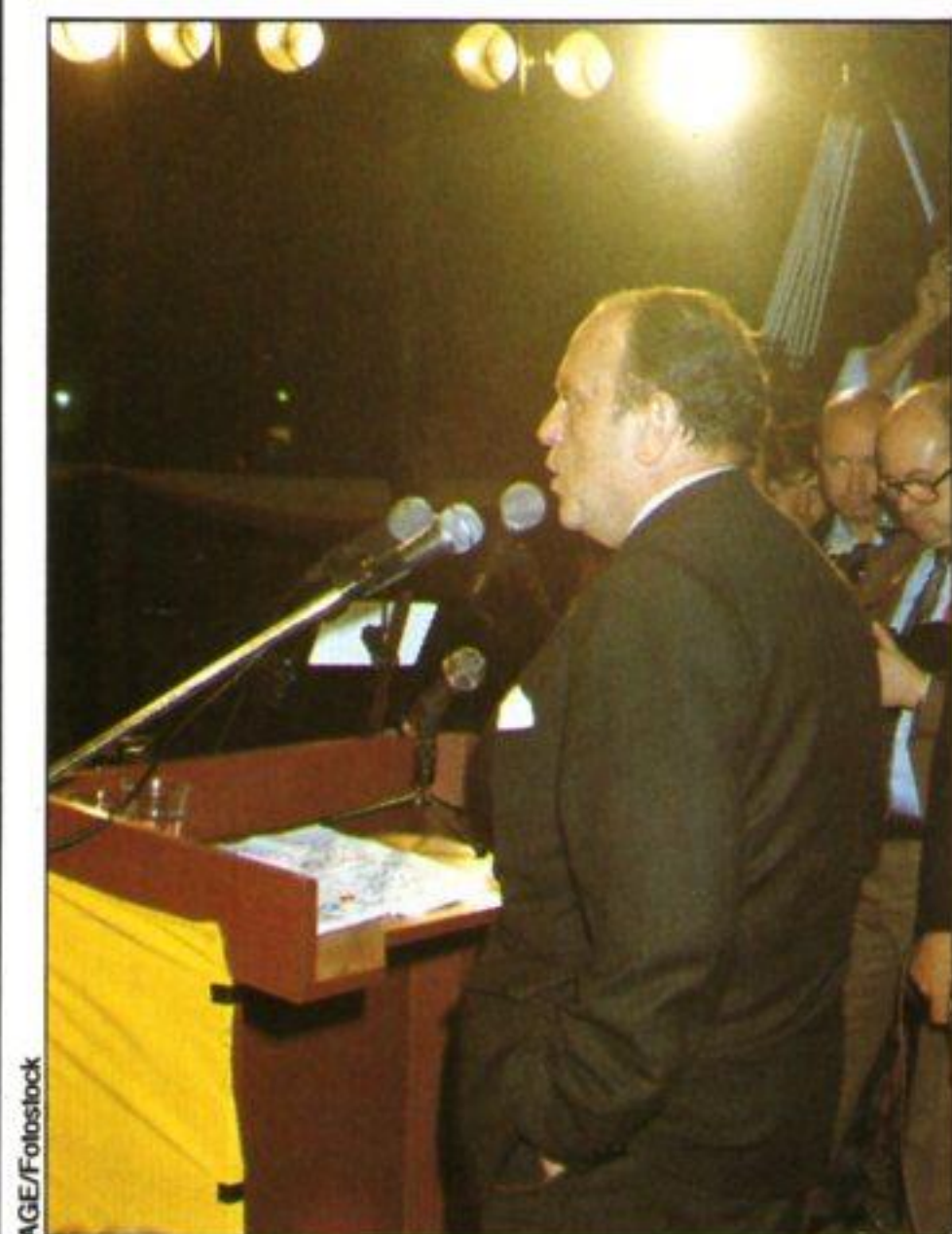
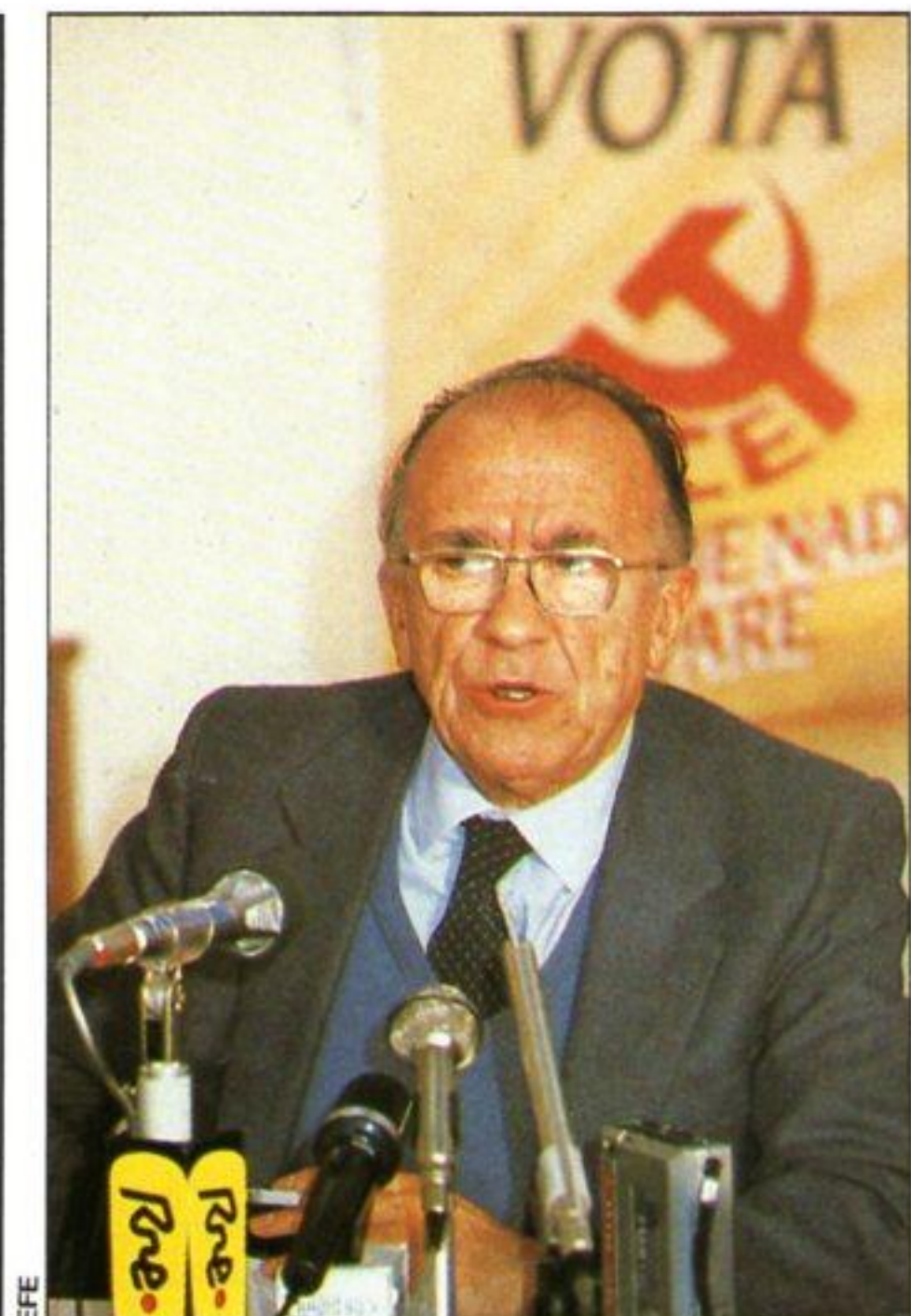
una importante pieza en los movimientos políticos destinados a consolidar el régimen democrático, al aceptar un virtual pacto social. Abajo, Manuel Fraga. Líder de las derechas y de algunos sectores nostálgicos, fue poco a poco suavizando sus posiciones más duras. A la derecha, Felipe González, primer presidente izquierdista del posfranquismo, al jurar su cargo.

rrillo. Ambos fueron los artífices políticos de los pactos de la Moncloa, en los que los comunistas aceptaron un clima de paz laboral y moderación salarial a cambio de la consolidación de un marco de libertades que dejara un campo de juego suficiente a la izquierda. La consecuencia del consenso fue una Constitución ambivalente, ajustada a los principios básicos de una democracia parlamentaria y con aspectos avanzados incluso en el marco democrático occidental, como la abolición de la pena de muerte y la mayoría de edad a los 18 años. En su elaboración, sólo los socialistas mantuvieron hasta el final su apoyo a la forma republicana de Estado.

En este período se sentaron también las bases del Estado de las autonomías. El problema autonómico no había sido en absoluto resuelto con anterioridad a las elecciones, lo que daba lugar a un clima de crispación en el País Vasco y de descontento en Cataluña. Pasar del Estado centralista del franquismo al de las autonomías ha sido una de las causas de más desgaste de los sucesivos gobiernos de la transición, cogidos entre la espada de un Ejército celoso de salvaguardar sin concesiones la unidad de España y la pared de un sentimiento nacionalista en el País Vasco y Cataluña, tanto más exacerbado cuanto más reprimido había estado durante el franquismo. A finales de 1977, Suárez concedió regímenes autonómicos provisionales a ambas nacionalidades. Al año siguiente, la constitución estableció el marco autonómico general, que satisfizo en Cataluña, pero que fue rechazado en el País Vasco por la derecha nacionalista representada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la izquierda más o menos próxima a las diferentes ramas de ETA.

En 1978 el problema que desde el principio de la reforma había representado ETA se disparó de manera espectacular. En esos doce meses triplicó el número de asesinatos en comparación con los doce anteriores y por primera vez en su historia asesinó a un alto mando del Ejército, el general Juan





Sánchez Ramos-Izquierdo. A partir de ese año y hasta 1980 las víctimas del terrorismo se situaron en torno a las cien anuales.

Este es uno de los problemas que explican el final de Suárez en 1981. Otro, quizá más importante, su tendencia a volar solo al verse respaldado por las urnas, olvidando qué fuerzas representaba cuando accedió a la presidencia. En la temprana fecha de 1978 ya vio cómo líderes empresariales y destacados banqueros recomendaban en Estados Unidos que no se invirtiera en España. Un tercer elemento fue la actitud de las Fuerzas Armadas. Suárez optó por hacer sentir su mando sobre ellas sin lograr aislar suficientemente a los grupos golpistas y ganándose una animadversión bastante generalizada. Por último, su política exterior fue otra causa de su caída. Verbal-



mente atlantista, nunca encontró el momento adecuado para concretar el ingreso en la OTAN. Por el contrario, se atrevió a visitar Cuba en 1978 y a recibir oficialmente en Madrid al líder palestino Yasser Arafat un año después. A los gobernantes de Estados Unidos no les gustaban estas actitudes cercanas al neutralismo.

Con las elecciones del 1 de marzo de 1979, Suárez intentó dar un salto adelante y consolidarse en el poder pese a las desconfianzas de la derecha social y económica, que en aquel momento aún no tenía una alternativa de recambio. La apelación a las urnas le salió bien en esa ocasión, pero fue su último triunfo electoral. El 3 de abril de 1979, en las elecciones municipales, UCD fue derrotada en las grandes ciudades, que cayeron en poder de la izquierda. El 28 de febrero de 1980 perdió el

referéndum de Andalucía. Al mes siguiente, los nacionalistas ganaron las autonómicas en Cataluña y el País Vasco. Sólo faltó, para acabar de hundirlo, que los socialistas plantearan contra él, en mayo, una moción de censura con la que se consolidaron como alternativa de poder. Suárez la superó, pero quedó muy «tocado». Además, los sectores más consecuentemente derechistas de UCD lanzaron una tremenda ofensiva para desprestigiar a Suárez, aprovechando tanto la discusión de leyes planteadas por el sector progresista —la del divorcio o la universitaria— como la imagen autocrática que había ido labrándose con su liderazgo personalista del partido. No pudo remontar la suma de estos factores adversos, y quizás de otros hasta ahora desconocidos, y dimitió irrevocablemente el 29 de enero de 1981.



Los socialistas festejan en Madrid el triunfo electoral del 28 de octubre de 1982, que significó otro vuelco en la política española.

Magnum/Zardoya

El golpe del 23-F

Suárez justificó su renuncia con estas palabras: «No quiero que el sistema democrático sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España.» Tres semanas y media después, el 23 de febrero, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso al mando de casi trescientos hombres y secuestró al Gobierno en pleno y casi a la totalidad de los diputados, que en aquel momento, las 6 y 23 de la tarde, estaban votando la investidura del sucesor de Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo. Al mismo tiempo, el entonces capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, decretó el estado de excepción en el área bajo su control y algunas fuerzas de la División Acorazada Brunete, la más potente del ejército, se dispusieron a tomar Madrid. La rápida reacción de los mandos leales a la democracia, con el Rey al frente, impidieron la salida masiva de los blindados de la Brunete. Pese a ello, la televisión y la radio del Estado estuvieron en manos de un grupo rebelde durante más de una hora. Juan Carlos y el entonces jefe del Estado Mayor del ejército, teniente general José Gabeiras, lograron que ningún otro capitán general se uniera a Milans del Bosch y en las primeras horas de la madrugada del día 24 podía ya decirse que la

situación estaba controlada. Pese a ello, los tanques que habían ocupado Valencia no volvieron a sus cuarteles hasta las seis de la mañana y Tejero no se rindió hasta el mediodía.

La rebelión militar fracasó, pero lo que se dio en llamar el 23-F marcó profundamente la política desarrollada en los dos años que le siguieron, sobre todo en los meses inmeditamente posteriores. Calvo-Sotelo hizo intervenir por primera vez al ejército en la lucha contraterroterrorista y aceleró todo lo que pudo el ingreso de España en la OTAN. Al mismo tiempo intentó desarrollar una política económica más acorde con los intereses patronales y, en otro plano, pero siempre buscando aplacar las inquietudes militares, firmó con el principal partido de la oposición, el PSOE, los acuerdos autonómicos, cuyo fruto principal fue la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Esta ley suponía una racionalización del desarrollo de las autonomías a partir de una interpretación restrictiva del título de la Constitución que contempla el tema.

Victoria socialista

En los años 1981 y 1982 el panorama político sufrió una profunda transformación. Los dos partidos que habían protagonizado las etapas del con-

senso, UCD y PCE, no fueron capaces de adaptarse a la nueva situación y entraron en crisis. El primero desapareció y los comunistas sobrevivieron más porque el sindicato sobre el que influyen, Comisiones Obreras, siguió manteniendo buena parte de su fuerza que por méritos propios. Al mismo tiempo se configuraron como partidos del futuro el PSOE y AP. El Partido Socialista supo crearse una imagen de grupo responsable apoyando a Calvo-Sotelo en los momentos difíciles del procesamiento y largo juicio a los rebeldes del 23-F, al tiempo que logró monopolizar los valores de renovación y cambio. El partido de Fraga logró una organización lo suficientemente sólida como para que las fuerzas económicas consideraran que era ya una alternativa a UCD y se volcaran en su apoyo.

En esta situación se celebraron las elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982. En ellas, la democracia española superó sin traumas la prueba que le faltaba pasar: la de la alternancia en el poder. Ganaron los socialistas, con lo que la izquierda accedió al Gobierno tras más de 43 años de control de la derecha. Con esta llegada al poder de los herederos de los perdedores de la Guerra Civil, España cerraba civilizada y definitivamente un largo capítulo de su historia.

Irán, república islámica

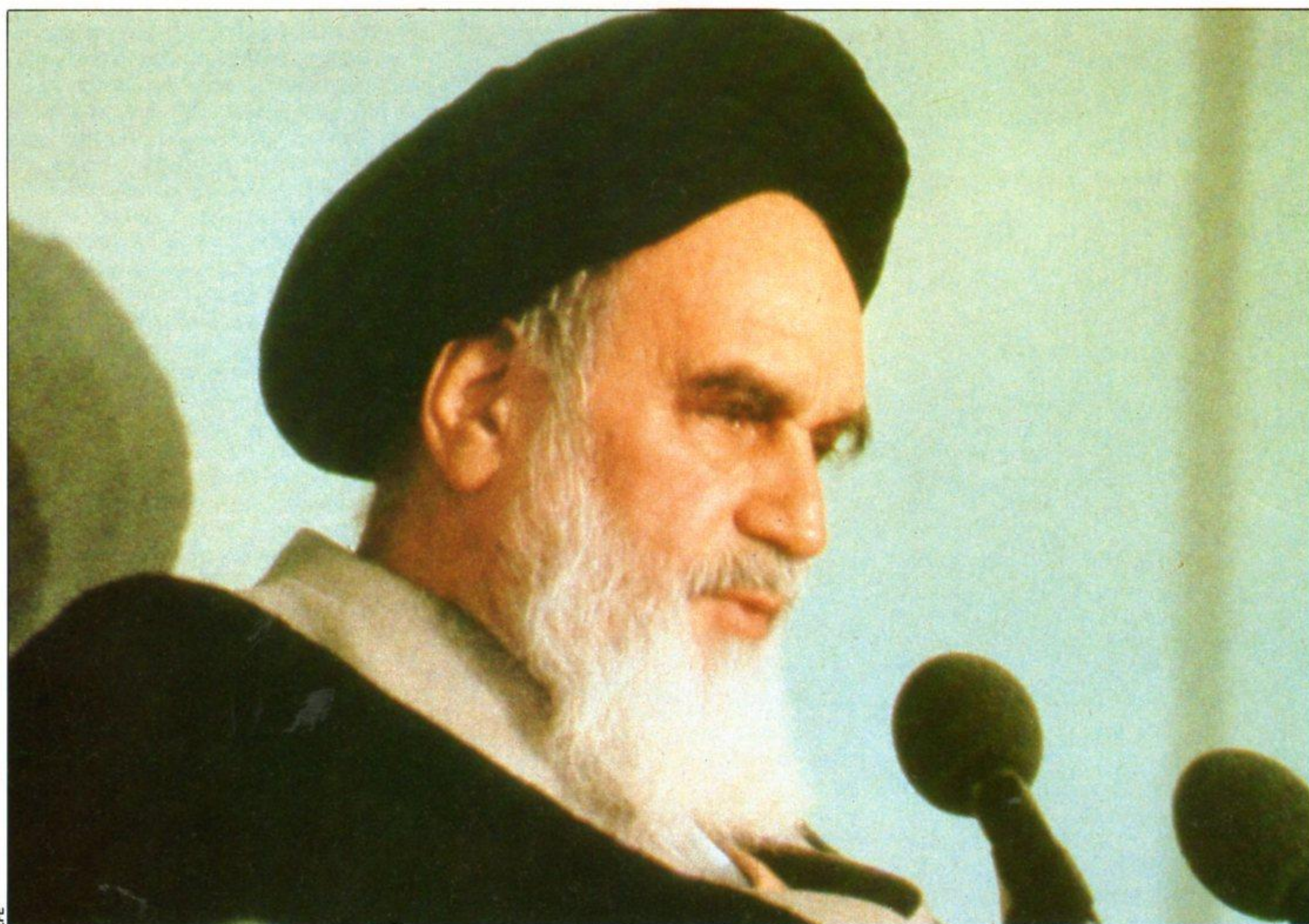
Del Šah al ayatollah

Carlos Enrique Bayo Falcón,
periodista

La revolución islámica impulsada por el imán Jomeini ha sido uno de los grandes hechos internacionales que abrieron la difícil y tensa década de los años 80. La precaria estabilidad del régimen

persa y la intolerancia y el fanatismo agregan explosivos ingredientes a una zona desde muchos años atrás agitada por infinidad de problemas. En la fotografía, el líder iraní en uno de sus clásicos discursos.

En enero de 1978, tras la publicación de una carta del Gobierno atacando al ayatollah Jomeini, la furia de Alá se desató en la ciudad santa de Qom y una ola de rebelión anti Šah se extendió por Irán como reguero de pólvora. Un año después, el 16 de enero de 1979, el Šah abandonó el país, después de fracasar en su intento de ahogar en sangre la revolución islámica, y dejó vía libre a la República encabezada por el místico Jomeini. Se iniciaba así un violento proceso que agregó más leña a la hoguera de esa zona: Jomeini fue implacable, y su largo brazo castigó más allá de las fronteras.



El drama de un pueblo

El Kurdistan —medio millón de kilómetros cuadrados repartidos entre Turquía, Irak, Irán, Siria y la URSS— es una auténtica nación ocupada por esos países mediante una prolongada y brutal represión. Unidos por una lengua, una cultura y unas costumbres nómadas-guerreras, los 16 millones de kurdos que habitan esa gran región en la que está el 50% del petróleo iraní y el 75% del iraquí, han sufrido más guerras, matanzas y represión que cualquier otro pueblo de la zona.

A pesar de la declaración de la Conferencia de San Remo, que en 1920 prometió a los kurdos un Estado autónomo en Irak, la revuelta encabezada por el general Barzani, de 1943 a 1945, fue aplastada. En Turquía, las incesantes insurrecciones de 1925 a 1940 sufrieron la muerte de casi un millón y medio de kurdos. Irán, Turquía e Irak firmaron en 1937 el Tratado de Saadabad para impedir la formación de las bandas armadas kurdas, y la sangrienta represión consiguiente llevó a la formación, en 1945, del Partido Democrático del Kurdistan en Irán (PDKI), de Kasi Mohamed, quien ya en 1941 había fundado el Chiani Kurdistan (La Vida del Kurdistan) en Mahabad. Kasi Mohamed fue proclamado presidente de la primera República Kurda, en aquella ciudad iraní, el 24 de enero de 1946, aprovechando la debilidad de la monarquía.

La República Kurda no duró ni un año. En mayo de 1946 las fuerzas norteamericanas y británicas victoriosas iniciaron las excavaciones de petróleo y confirmaron que los grandes yacimientos estaban precisamente en aquella zona, que habían declarado neutral en el reparto con Rusia, en 1907. Los aliados, por el Sur, y la URSS, por el Norte, atacaron la mal armada República y, el 17 de diciembre, las tropas inglesas y del segundo shah Pahlavi entraron en Mahabad.

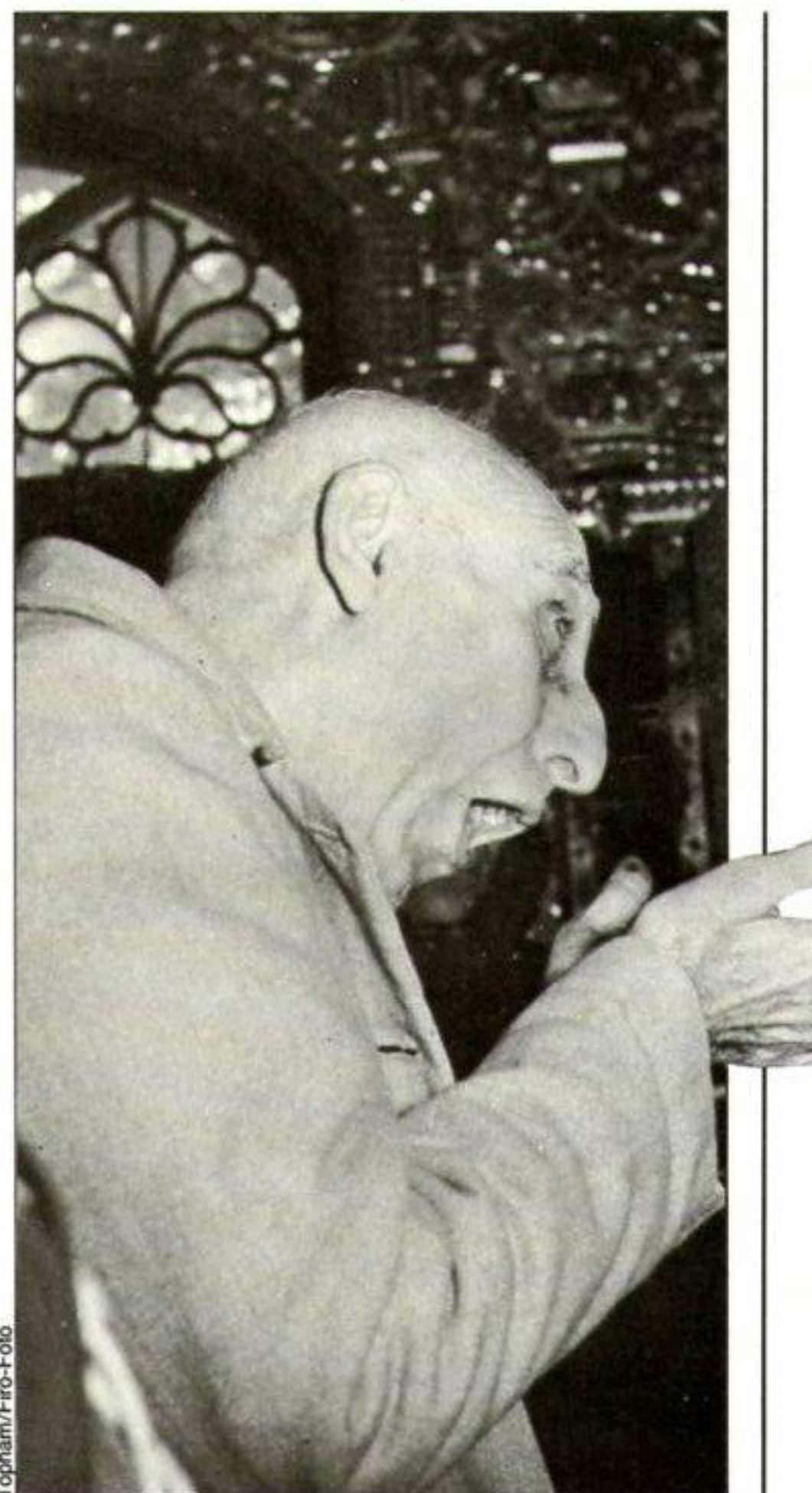
La revolución iraquí que puso fin a la monarquía hachemita (14 de julio de 1958) revivió el espíritu indepen-

dentista kurdo y Barzani regresó de su exilio en la URSS para encabezar un nuevo alzamiento, que estalló en septiembre de 1961. Su éxito inicial inflamó a los kurdos en Irán y el PDKI, encabezado por Abolramân Kulich Ghassemli, empujó una nueva rebelión. Ésta fracasó, tras año y medio de lucha.

En 1968, el VII Congreso del Baas iraquí reconoció la existencia de la nación kurda —ante la lucha de los hombres de Barzani— y el 11 de marzo de 1970 los kurdos llegaron a un acuerdo con el Baas, que concedió una autonomía sólo formal. Desesperado, una vez que la nueva Constitución iraquí (17 de julio de 1970) ni siquiera mencionaba ese precario acuerdo, en 1972 Barzani se alió definitivamente con el Shah y con Estados Unidos, para lo que se comprometió a bloquear las acciones del PDKI. No obstante, un informe de la CIA emitido ese mismo año precisaba que ni Washington ni el Shah deseaban que triunfara la causa de Barzani, sino únicamente «minar los recursos» de Irak, aliado de la URSS desde 1972.

En Argelia, el 6 de marzo de 1975, Irán e Irak acordaron colaborar contra el movimiento de Barzani. Su guerrilla fue rápidamente desmantelada. El régimen de Bagdad «quemó» y evacuó una franja de 20 kilómetros a lo largo de la frontera con Irán y Turquía, en una operación en la que participaron 30.000 soldados. Turquía e Irak sellaron otro pacto anti-kurdo y el Kurdistan iraquí «desapareció» con el éxodo de 250.000 refugiados hacia Irán y la deportación de otros 300.000 hacia el Sur de Irak.

No obstante, los guerrilleros kurdos o peshmergas (enfrentados a la muerte) participaron activamente en la revolución islámica que derrocó al Shah en febrero de 1979. Su lucha también sería olvidada por el nuevo régimen jomeinista, que rompió su promesa de respetar los derechos de las minorías, por lo que el drama de este pueblo sufrió una nueva prolongación.



Topham/Foto-Foto

Los antecedentes del drama

La Persia moderna tiene una larga historia de violencias originadas en su estratégica ubicación, en la existencia de diversas nacionalidades y en controversias religiosas, primero, y, finalmente, en sus fabulosos recursos petrolíferos y en las apetencias de las potencias imperialistas. Gran Bretaña, y sucesivamente Rusia y la Unión Soviética, constituyeron los poderes extranjeros más influyentes durante las primeras décadas del siglo actual. El Shah Reza Pahlavi, un astuto ex mulero que hizo carrera en el Ejército hasta conseguir que lo coronaran soberano en 1925, orientó las alianzas de Irán por otros derroteros: primero hacia Estados Unidos y, posteriormente, hacia la Alemania de Hitler, quien modernizó y otorgó gran poderío al Ejército persa. Pero cuando Alemania atacó a Rusia, en 1941, los aliados decidieron ocupar el territorio de Irán.

Reza Pahlavi tuvo que abdicar y fue deportado a Suráfrica, donde murió en 1944, pero su hijo Muhammad Reza Pahlavi heredó el poder y la política de su padre de entregar las riquezas del país a los imperios coloniales a cambio de ayuda para sofocar las revueltas del Kurdistan y del Azerbaidján, así como la creciente insurrección del pueblo, cada vez más oprimido por los impuestos de un Estado militarista.

En esta página, el líder nacionalista y populista Mosaddeq pronuncia un duro discurso ante los parlamentarios iraníes. Corría el año 1953, y el jefe del Gobierno se había convertido en el

principal enemigo de Reza Pahlavi, de las grandes compañías petrolíferas que operaban en la zona y de las potencias occidentales, muy sensibles a cualquier factor que alterase el

abastecimiento de energía barata. En este sentido, Mosaddeq se transformó en un mal ejemplo, y la CIA colaboró eficazmente en el golpe de Estado que, como era previsible, puso fin a su carrera.

En la página siguiente, todo el esplendor y el boato de la corte del Shah. El monarca soñó con reconstruir el imperio de Ciro el Grande con la ayuda occidental, pero olvidó el sentir de su pueblo.



EFE

Muhammad Reza Pahlavi soñó con reconstruir el imperio de Ciro el Grande a través de la tecnología de Occidente, que codiciaba su petróleo, y de la férrea represión de los movimientos políticos y sindicales, como hiciera su padre. Éste había mandado ejecutar a muchos de sus opositores y había encarcelado en 1937 a los 53 principales dirigentes marxistas; pero, en el mismo año de su abdicación, los supervivientes fueron liberados y crearon el partido comunista Tudeh.

El Šah no comprendió la magnitud de la influencia de la religión entre la gran mayoría empobrecida e ignorante, ni previó la reacción de la burguesía nacionalista (los baazaris) al expolio que suponían los acuerdos con la Anglo-Iranian Oil Company. En 1950, el Frente Nacional dirigido por el socialista Mosaddeq ganó ampliamente las elecciones al Maýlis (parlamento) y al año siguiente el primer ministro, general Alí Razmara, favorable a la petrolera, fue asesinado por un grupo fanático religioso. Mosaddeq nacionalizó el petróleo en 1951, a lo que Gran Bretaña y Estados Unidos reaccionaron con un boicót económico que arruinó al país.

Sin embargo, el Šah no pudo destituir a Mosaddeq a causa de su popularidad y, en plena efervescencia popular tradicionalista, abandonó Irán, rumbo a Roma, el 16 de agosto de 1953. Tres

días después, el coronel norteamericano Schwarzkopf, que había organizado la policía política de la monarquía, empleó fondos de la CIA para financiar un golpe de Estado que, comandado por el general Zahedi, retornó al Šah a su trono. Los partidos y sindicatos fueron prohibidos, sus líderes fueron detenidos, torturados y asesinados, y Washington envió técnicos en métodos represivos e, incluso, instrumentos de tormento.

Reza Pahlavi recibió 45 millones de dólares de Estados Unidos para levantar la maltrecha economía iraní y empezó a realizar su sueño dorado. Las inversiones de las multinacionales hicieron florecer las grandes ciudades, los centros fabriles y la industria petrolífera, adonde afluyeron los campesinos, que hasta entonces formaban la mitad de la población y vivían en condiciones miserables. Para justificar a su régimen, y bajo presión de la administración Kennedy, el Šah, con su primer ministro Alí Amini, lanzó un programa de reforma agraria y de mejoras educativas y sociales que grandilocuentemente llamó «Revolución Blanca».

El final del sueño

La creciente prosperidad económica iraní, centrada en el petróleo, permaneció, empero, en muy pocas manos y las libertades políticas disminuyeron

de hecho con la concentración del poder en el Šah, que designó directamente a los cargos gubernamentales y convirtió al Maýlis en una institución meramente figurativa que ratificara sus decisiones. Además, las reformas modernizadoras, como las que dieron el derecho de voto y de ocupar cargos oficiales a la mujer, o las que introdujeron costumbres y vicios occidentales, fueron rechazadas por gran parte de la población, analfabeta en un 50% y dominada por los mullahs integristas.

El Šah creyó asegurado su trono a través de un poderoso Ejército, que reprimió violentamente los desórdenes antigubernamentales de 1963 en Teherán, Shiraz y otras ciudades. El 5 de junio de 1964, el máximo líder religioso chiita, confesión del 90% de los iraníes, ayatollah Ruhollah Jomeini, fue acusado de conspirar para asesinar al Šah y enviado al exilio. El monarca inició una derrochadora carrera de engrandecimiento de las Fuerzas Armadas, que recibió su impulso definitivo en la entrevista de 1972 entre el presidente Nixon y el Šah.

En 1973, el boicót petrolífero árabe hizo que los ingresos de Irán por la venta de crudos saltaran de 5.000 a 19.000 millones de dólares anuales. La monarquía adquirió decenas de cazabombarderos y 800 helicópteros, así como destructores, submarinos y hasta

Las fuentes de Jomeini

Es corriente asociar la cultura iraní con las creencias religiosas de los chiitas, aunque esa religión musulmana no fue compartida por los persas hasta que se la impuso la cruel dinastía Safaví (1501-1722), auténtica unificadora del Irán moderno.

Los chiitas, a los que Legineche ha calificado de «carlistas del Islam», veneran a los imanes descendientes de Mahoma por vía de su yerno, Alí Ibn Abí Talib, a los que consideran únicos jefes de Estado legítimos, infalibles y sin pecado, intérpretes exclusivos de la Ley y del Corán. En un principio formaron algo así como un partido político, en la lucha por la sucesión del profeta de Alá, pero tras la muerte del hijo de Alí, Husayn, el fervor religioso se alió a la política. Entre la gran cantidad de sectas chiitas, la llamada ortodoxa cree en una serie de doce imanes, el último desaparecido en el año 873, y confía en que ese duodécimo imán no murió, sino que volverá como mahdi o mesías.

El chiismo tuvo gran difusión en el siglo XV entre las tribus nómadas turcomanas y azerbaijanas, en parte como reacción contra el sunismo centralizador del imperio otomano, y fue llevado a Persia a comienzos del siglo XVI por los safavíes.

Los ulama y sayyids chiitas importados por la dinastía Safaví fueron especialmente favorecidos y enriquecidos con fundaciones inalienables (waqfs) por los gobernantes, hasta que poseyeron una poderosa fuerza financiera e institucional independiente. Entonces, pasados los años brillantes de Abbas el Grande (1587-1629), comenzaron a volverse contra la dinastía que les había dado el poder religioso en interés propio y re-

cusaron la legitimidad del gobierno safaví, al recordar que sólo los imanes tienen derecho a gobernar, según la doctrina chiita. Las órdenes sufistas fueron duramente perseguidas y se adoptaron severas costumbres de la más pura ortodoxia, como el uso del chador por las mujeres, que no era habitual entre las persas. Los muytahids, jefes reconocidos pero no nombrados de los ulamas, llegaron a poseer tanto poder como la monarquía.

La dinastía Qayar (1786-1925) también apoyó su autoridad en los ulamas y éstos lograron casi exterminar a los adeptos a otras sectas chiitas, como los ismailíes (septimanos) y, sobre todo, los bahais. Estos últimos procedían de los sayjies, quienes insistían en que siempre había en el mundo un hombre que estaba en comunicación con el Duodécimo Imán Escondido y que podía interpretar su doctrina. En 1844, en Shiraz, Sayyid Alí Muhammad se declaró a sí mismo Bab, o puerta que conducía al Imán Escondido, iniciando la doctrina Bahá, que más tarde se llamaría Bahá. Los bahais denunciaron la corrupción y venalidad de los ulamas y apelaron por una mayor igualdad social, mejor trato a mujeres y niños, así como garantías para la propiedad privada y el libre comercio. La revuelta de los bahais fue aplastada entre 1850 y 1852 —mediante torturas y ejecuciones en masa— y el propio Bab fue fusilado en Tabriz, aunque la primera descarga, extrañamente, cortó sus ligaduras sin darle muerte.

Con la revolución industrial, los ulama iraníes permanecieron como guardianes de la ortodoxia islámica y de las tradiciones ancestrales, en contra de la modernización.



y torturaba salvajemente a los opositores políticos y sindicales. Unas 100.000 personas fueron encarceladas y 10.000 sufrieron tormentos ideados por los criminales de guerra nazis.

Con un 10% de la población en posesión de la mitad de la riqueza del país, los mullahs atizaron la ira popular contra los que vivían en las lujosas villas del norte de Teherán y contra los extranjeros «infieles» que nutrían los nuevos burdeles de la capital. Los Pahlavi hicieron ostentación de su inmensa fortuna, estimada en unos 30.000 millones de dólares, dilapidaron parte de los recursos del Estado en fastos impresionantes, como la celebración en Persépolis, el 15 de octubre de 1977, de los 2.500 años del Imperio Persa, y emprendieron gigantescas obras públicas para las que el país no contaba con infraestructura.

En pocos años, la bonanza se esfumó. El campo, abandonado por los emigrantes que buscaban sueldos seis veces mayores en las ciudades y campos petrolíferos, del que Irán había siempre exportado productos, fue insuficiente para abastecer las necesidades internas y hubo que importar grandes cantidades de alimentos. El nuevo proletariado se reorganizó en torno a los grupos armados radicales, como los Fedayin-e-Jalq y los Muyahidin-e-Jalq, pues la antigua federación sindical (CCFTU) había sido desmantelada tras el derrocamiento de Mosaddeq. El desempleo se disparó con el fracaso de los ambiciosos planes de modernización y la inflación llegó al 50%.

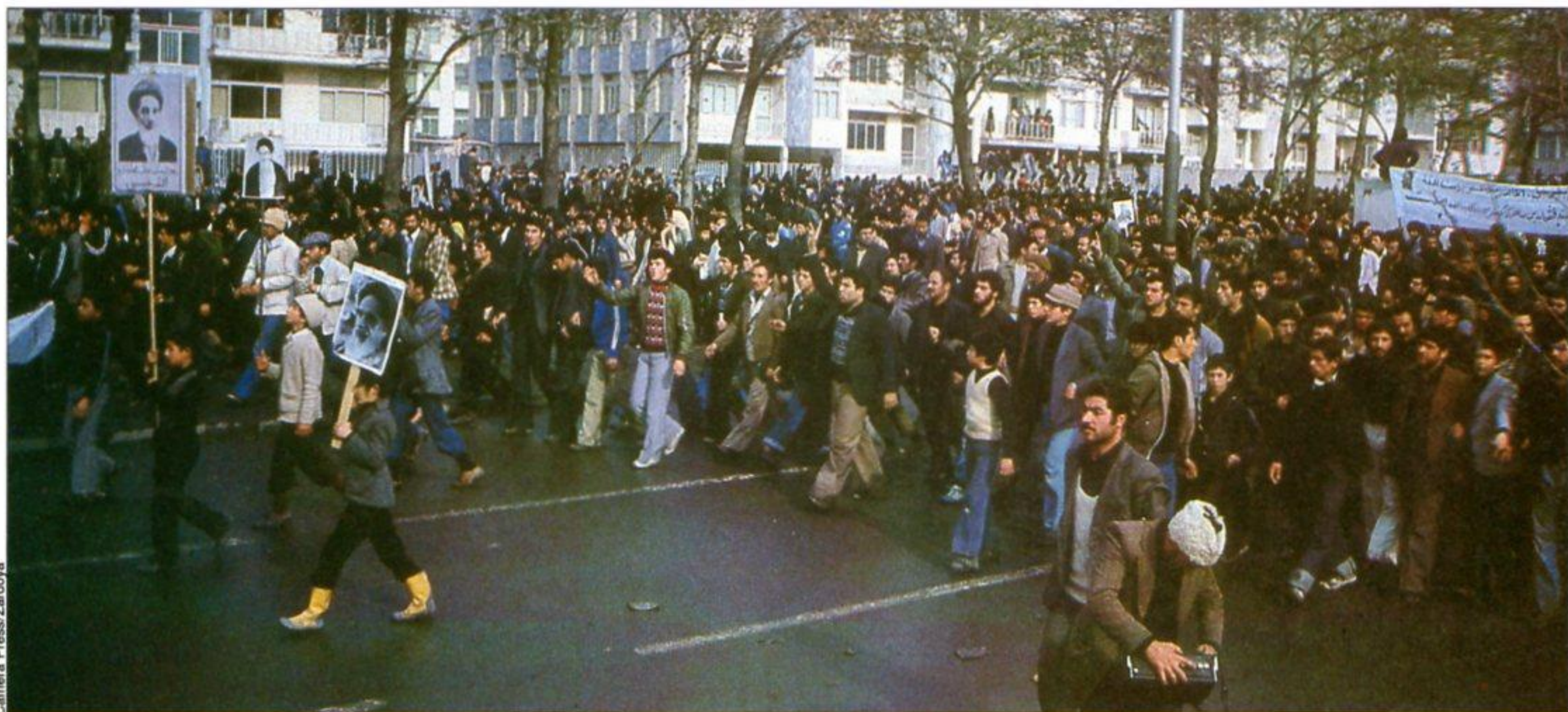
La furia de Alá

El abierto apoyo de Washington a tal estado de cosas (en 1977 el presidente Carter afirmó que «el Šah comparte

«hovercrafts» a los Estados Unidos, 2.000 tanques a Gran Bretaña y todo tipo de misiles a Alemania Federal. También financió la instalación de avanzados centros de espionaje electrónico norteamericano en los 2.000 kilómetros de frontera con la URSS e hizo el papel de gendarme del golfo Pérsico, interviniendo militarmente contra los movimientos guerrilleros del área en beneficio de Washington, a cuyo gobierno incluso ayudó logísticamente en la retirada del Vietnam. Unos 20.000 estadounidenses llegaron a Irán para enseñar el empleo de los 14.000 millones de dólares de arma-

mento que habían ya convertido al Ejército iraní en el más poderoso de la región.

Mientras los extranjeros y los favoritos de la Corte acumulaban fortunas —el director de la CIA, Allen Dulles, el embajador norteamericano en Teherán, Loy Henderson, y muchas personalidades de los Estados Unidos, como el propio Rockefeller, recibieron millones de dólares de la Fundación Pahlavi, en teoría humanitaria y dirigida por la cruel hermana del Šah, Ashraf, «madrina» del tráfico de drogas—, la temida SAVAK, policía política entrenada por la CIA y por Israel, detenía



En la página anterior, Shapur Bajtiar, llamado el Kerensky iraní.

En esta página, arriba, una manifestación contra el régimen del Šah.

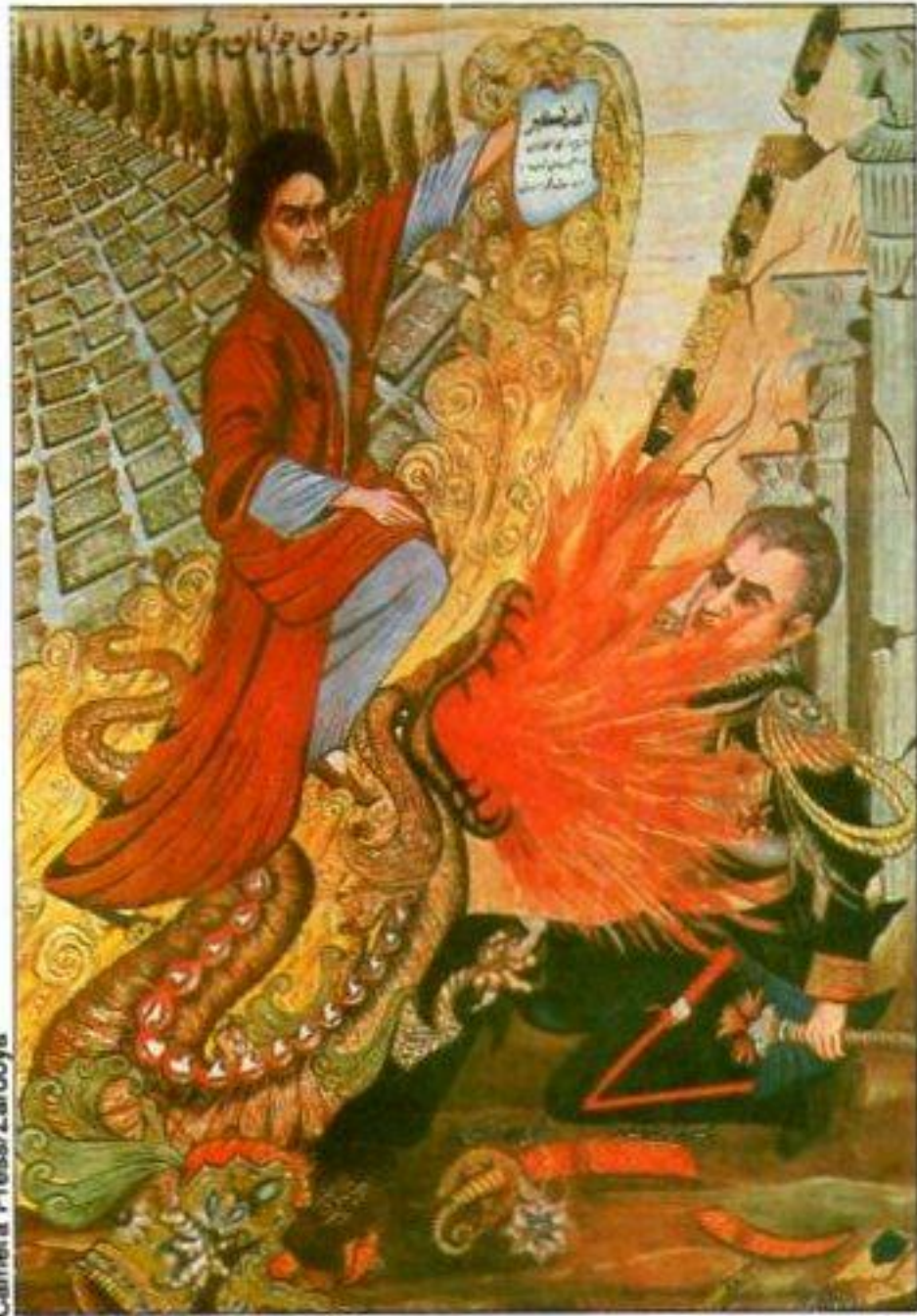
Abajo, un soldado besa los pies del monarca cuando éste partía

hacia el exilio. Era el 16 de enero de 1979, y comenzaba una nueva era.

nuestro criterio sobre los derechos humanos») generó un odio popular a Estados Unidos que los religiosos exacerbaban señalando al «gran Satán» como causa de todos los males de Irán y como responsable de las infieles costumbres occidentales impuestas por el monarca.

El estado insurreccional latente se inflamó por un estúpido error del Gobierno de Djamchid Amuzegar, que hizo publicar en la prensa una carta atacando a Jomeini, aunque la situación hubiera explotado igualmente por cualquier otra causa. La primera revuelta de 1978 se produjo en la ciudad santa de Qom del 7 al 9 de Enero y se saldó con 70 muertos. La rebelión se extendió como un reguero de pólvora y el 18 de febrero perecían cien personas en los disturbios de Tabriz. Para calmar los ánimos, el Šah ordenó el 7 de junio el cese del jefe de la SAVAK, general Nematollah Nassiri, responsable de la habitual tortura a los presos políticos.

Pero el descontento popular tenía raíces profundas. A finales de julio, 200 personas murieron y, en Mashad, el 12 de agosto el régimen decretó la ley marcial en Isfahán por otra insurrección que costó un centenar de muertos. El Ejército trató de restablecer el orden a sangre y fuego, el Bazar fue cerrado, las tropas entraron en domicilios de religiosos y mataron a diez mullahs; los muertos se contaron por decenas en diversas ciudades y Amuzegar entregó su cargo a Sharif Emami el 27 de agosto. El incendio provocado, el 19 de agosto, de un cine de Abadán (377 víctimas) no hizo más que avivar el fuego revolucionario y el 8 de septiembre el pueblo se lanzó a las calles, azuzado por la glorificación chiita del martirio, exponiéndose a las



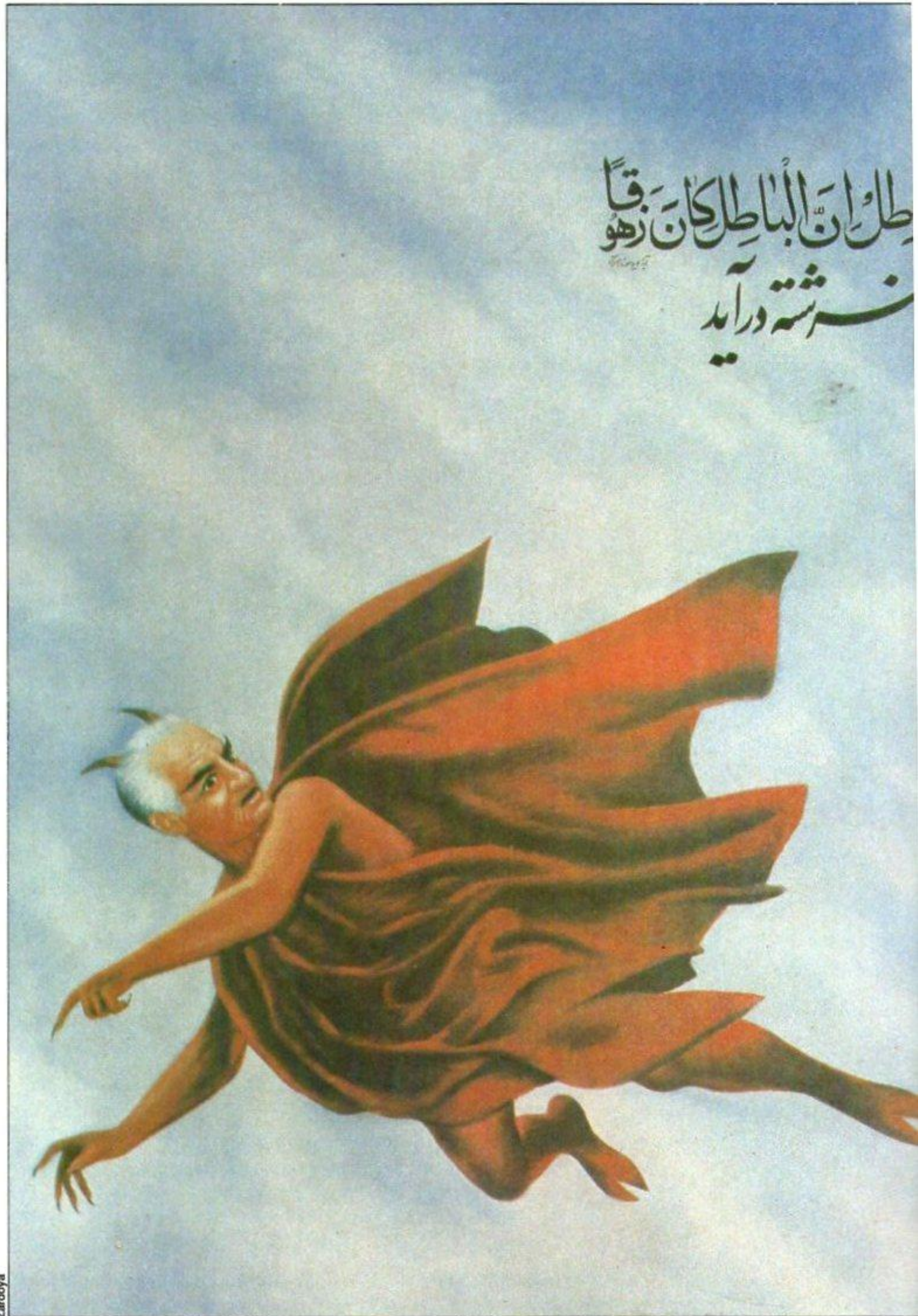
Arriba, un cartel en el que está Jomeini dominando un dragón que, en su furia representativa de la ira de Alá, ataca y

vence al Šah. La dura revolución islámica es muy rica en símbolos de este tipo, fácilmente comprensibles para el fanatizado pueblo.

balas con túnicas blancas que indicaban su disposición al sacrificio. Setecientas personas perecieron bajo las balas y el Šah impuso la ley marcial en todo el país, a cargo del general Alí Gholam Oveissy, en el curso de una violenta y sangrienta jornada que sería conocida y recordada como el «viernes negro».

Asustado, el 7 de noviembre, dos días después de que Charif Emami dimitiera tras una nueva matanza que se llamaría la del «domingo rojo», el Šah decidió arrestar al general Nassiri, a seis ex ministros, incluido el ex jefe de Gobierno (1965-1977) Amir Abbas Hoveyda, y a otras siete altas personalidades de su régimen. La expulsión de Jomeini de Irak, país que estaba alarmado por la oleada fundamentalista, el 6 de octubre, había llevado al clímax el fanatismo de los manifestantes. Desde su nuevo centro de operaciones en Neuphle-le-Chatéau, a las afueras de París, rodeado por eminentes asesores, como el economista francófilo Abol Hassan Bani-Sadr, el anciano ayatollah (espejo de Alá) dirigió la revolución aunando la infraestructura de los mullahs, única institución opositora altamente organizada y con santuarios casi inviolables, y las tácticas proselitistas modernas conocidas por los partidos de izquierda como el Frente Nacional de Karim Sandjabi y los Fedayin-e-Jalq (combatientes del pueblo).

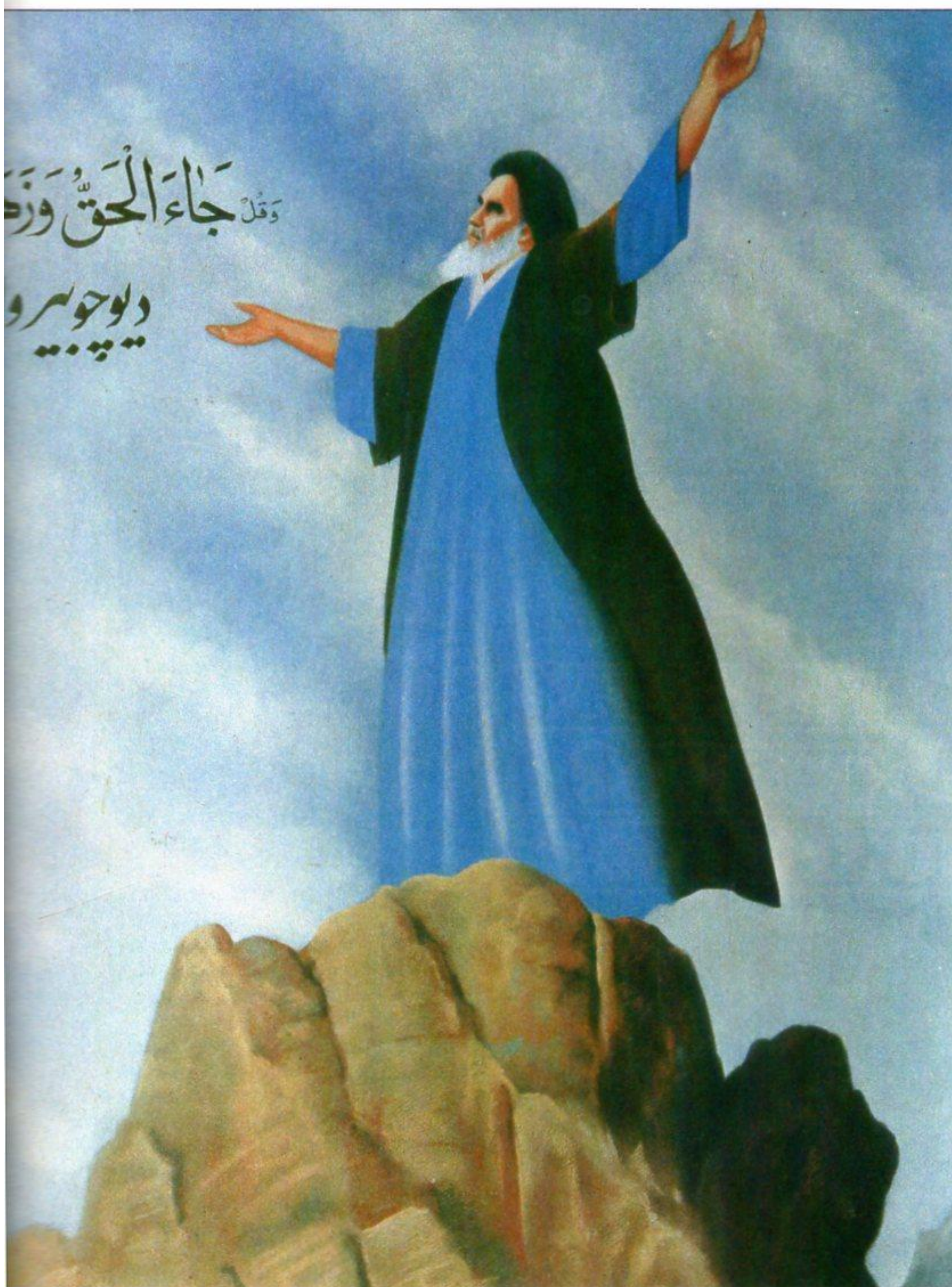
El ayatollah de 78 años, asceta y puritano, se convirtió en un ejemplo de santidad para los iraníes y sus encendi-



dos discursos circularon, grabados en cassettes, por todas las mezquitas. El nuevo gobierno militar del general Gholam Reza Azahari era el símbolo de la ancestral opresión y de 27 años de tiranía imperial, y el 11 de diciembre millones de manifestantes inundaron los grandes centros urbanos pidiendo la dimisión del Šah y la creación de una República Islámica. Para entonces, Iraj Eskandari, líder del Tudeh prosoviético —desprestigiado por el acercamiento Moscú-Teherán de los años 60—, ya no podía convencer a la dirección del partido acerca del peligro de instauración de un estado teocrático, oscurantista y reaccionario.

Los soldados habían abierto fuego hasta contra los domicilios particulares, habían irrumpido en los hospitales y rematado a los heridos. Desde el 29 de octubre, una huelga general de los obreros del petróleo y la industria paralizaba la producción. La exportación de crudo se interrumpió el 27 de diciembre y cuatro días después dimitió el general Azahari. La ocupación de las redacciones de prensa, el cierre de las universidades, los asesinatos de líderes carismáticos, como Abu Ashuri y Nejatollahi, sólo atizaron las llamas.

Con los tanques en la calle y miles de manifestantes muertos, el dirigente de la oposición moderada Shapur Bajtiar



aceptó formar un gobierno, el 3 de enero de 1979, encargado de preparar la salida del Šah del país, que por fin apoyaba Carter ante su desprestigio internacional, y de ceder a las demandas de la oposición en cuanto fuera posible, sin que cayera la monarquía. Con lágrimas en los ojos, el Šah abandonó Irán, el 16 de Enero, a un Gobierno sólo apoyado por un Maýlis totalmente falto de representatividad. Bajtíar se convirtió en el Kerensky iraní, alabando la santidad de Jomeini pero rogándole que no regresara a Irán, a cambio de lo cual ofreció su dimisión y un referéndum que decidiera el futuro de la monarquía.

La caótica República Islámica

Jomeini regresó a Irán, rodeado de sus asesores y de numerosos periodistas, el 1 de febrero. La acogida popular a su llegada a Teherán sólo fue comparable al estallido de alegría callejera que siguió a la partida del Šah hacia Marruecos. El ayatollah designó un Consejo de la Revolución Islámica y el 5 de febrero formó un Gobierno provisional encabezado por el ingeniero petrolífero y líder del Partido Liberal Mehdi Bazargán, de 73 años y artífice de la huelga del petróleo. Cinco días más tarde, los tanques se volvieron inútiles contra la revolución, al ser arrastrados los soldados por el fervor



En ambas páginas, otro cartel: Jomeini hace huir al demonio, que aparece representado con la asustada cara del Šah Reza Pahlavi.

En la fotografía de arriba, el ayatollah Jomeini aparece rodeado de enfervorizados jóvenes que esperan sus orientaciones.

islámico. Las unidades entregaron sus armas, los cuarteles fueron ocupados por fedayines y muyahidines, el alto mando anunció su alineación con la República Islámica y Bajtíar huyó a Francia, vía Turquía.

El nuevo régimen, dominado por los religiosos, depuró, encarceló o fusiló a doscientos oficiales y se crearon tribunales revolucionarios presididos por mullahs que dictaron decenas de condenas a muerte, tanto contra los antiguos torturadores como contra los infieles. En el Tudeh, la corriente favorable a Jomeini había triunfado y Eskandari fue sustituido por Nuredin Kianuri, quien decidió pasar por alto los excesos de la nueva teocracia.

Los abusos de los mullahs y ayatollahs en nombre de Alá provocaron las protestas de Bazargán y la dimisión del ayatollah Taleghani —el religioso más progresista, que pasó diez años en las cárceles del Šah y que había fundado con el jefe del Gobierno el Movimiento por la Liberación de Irán— del Consejo de la Revolución. El fanatismo islámico impuesto por Jomeini continuó tragándose a sus propios hijos. Bazargán, por ejemplo, se reunió con el consejero de Seguridad Nacional de Carter, Zbigniew Brzezinski, para negociar la extradición del Šah, y Jomeini le acusó de «estar en pecado». Su carrera política terminaría en noviembre, al oponerse al asalto de la embajada de Estados Unidos y a la toma de rehenes. Al tiempo que la purga de intelectuales, políticos, militares y em-

El ayatollah contra todos

El fanatismo islámico exaltado por el régimen jomeinista dio pie al más largo y espectacular secuestro colectivo que se haya conocido. La toma de la embajada norteamericana en Teherán, el 4 de noviembre de 1979, generó más de un año de crisis con Estados Unidos y la humillación de esta superpotencia, y sentenció el fracaso de la reelección de Carter.

Los «estudiantes favorables a la línea del imán» exigieron, a cambio de la vida de sus rehenes, la entrega inmediata a Irán por el Gobierno de Estados Unidos del Shah y su esposa. El presidente Carter envió a Teherán al ex secretario de Defensa Ramsey Clark y al secretario del Tesoro, William Miller, pero las autoridades iraníes les negaron la entrada en el país.

Del 10 al 14 de Noviembre, Carter ordenó la expulsión de Estados Unidos de todos los iraníes en situación ilegal, la suspensión de las importaciones norteamericanas de petróleo iraní y la congelación de los fondos de Teherán depositados en bancos estadounidenses (8.000 millones de dólares). En diciembre, Washington expulsó a 183 diplomáticos iraníes y el Tribunal de la Haya ordenó la liberación de los rehenes, dictamen inútil para los ayatollahs, satisfechos de la exaltación popular durante la crisis con el «gran Satán», que les permitía llamar traidores a los kurdos, fedayines, sindicalistas o cualquiera que se opusiera al integrismo.

Los estudiantes saquearon la embajada, encontrando documentos que mostraban la pertenencia a la CIA de algunos de los cautivos. Las siete mujeres y tres negros norteamericanos secuestrados fueron puestos en libertad, pero se amenazó con juzgar y ejecutar a los cincuenta que permanecieron presos en la sede diplomática.

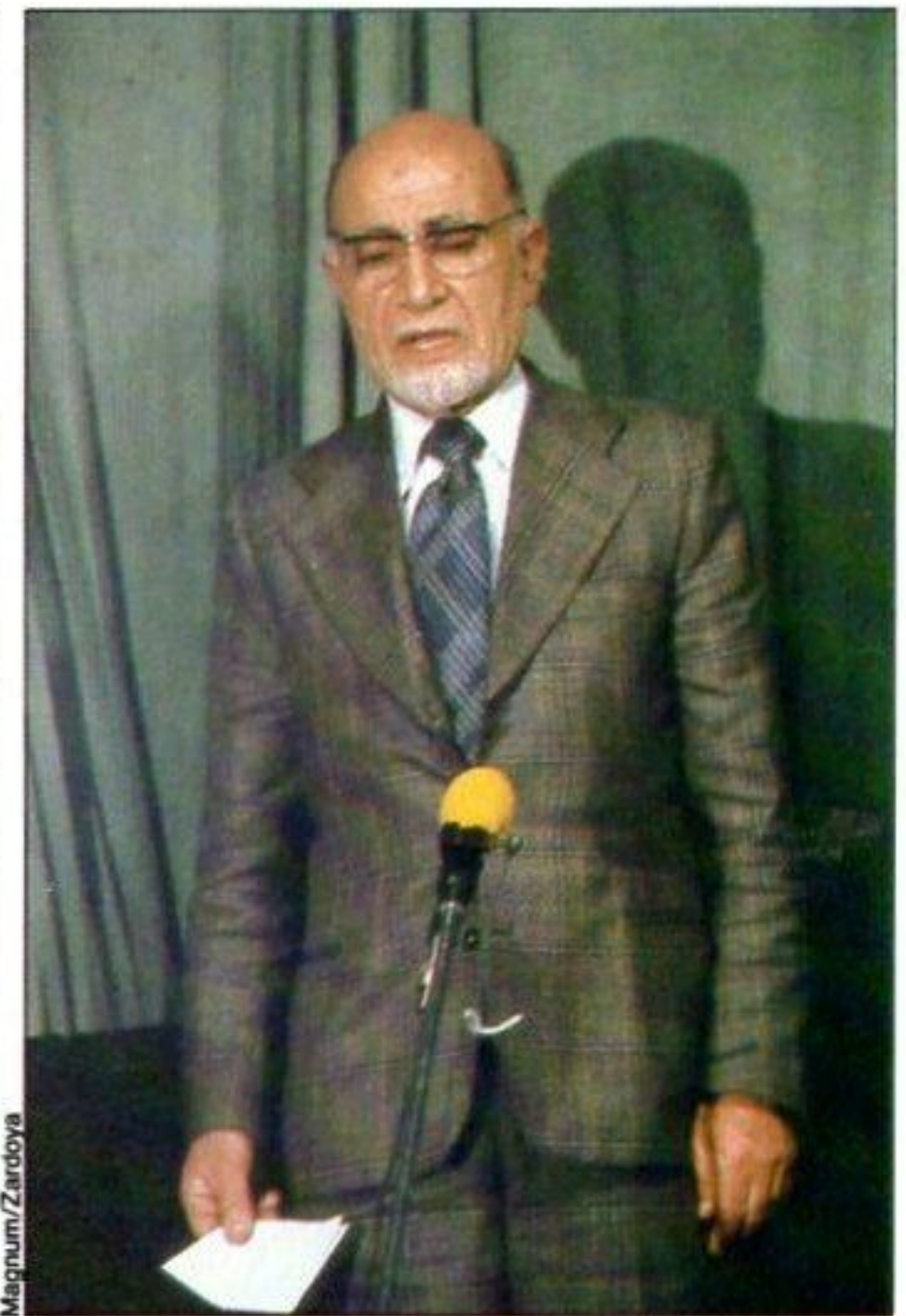
El último día de 1979, el Consejo de Seguridad de la ONU dio a Irán, que había rehusado comparecer ante el organismo, plazo hasta el 7 de enero

para liberar a los rehenes; pero, cuando la exigencia fue incumplida, la URSS vetó, el 13 de enero, la resolución que imponía sanciones a la República Islámica. El secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, viajó a Teherán al comenzar el año y regresó impresionado por su encuentro con los mutilados supervivientes de las cámaras de tortura de la SAVAK, único tema que le plantearon las autoridades iraníes.

Bani Sadr trataría de devolver a los rehenes a cambio del fin de las onerosas sanciones occidentales, sin doblegar a Jomeini, quien anunció que el Parlamento aún no formado decidiría sobre ellos. Carter rompió las relaciones diplomáticas el 7 de abril y aumentó las inútiles sanciones.

En la madrugada del 25 de abril, seis aviones de transporte norteamericanos C-130 y ocho helicópteros RH-53, procedentes de Egipto y del portaviones Nimitz, respectivamente, entraron en el desierto iraní hacia una misión de rescate. Entre tormentas de arena, averías, ametrallamiento de un camión de contrabandistas y una colisión entre un avión y un helicóptero en el momento de la retirada (con un saldo de ocho muertos), los comandos se cubrieron de ridículo. Carter quedó electoralmente hundido y los rehenes fueron distribuidos entre varias ciudades iraníes para dificultar otros intentos de rescate.

Sólo después de la muerte del Shah en Egipto, donde se había retirado tras ser prácticamente expulsado de Panamá, el 27 de julio, aceptarían negociar los ayatollahs gracias a la insistencia del presidente Bani Sadr y de Gotbza-deh. La invasión iraquí de Irán en septiembre agudizó el aislamiento y penuria de Irán, con lo que el 3 de noviembre los rehenes fueron entregados al Gobierno por los estudiantes y el 20 de enero de 1981, pocas horas antes de la toma de posesión de Reagan, Jomeini ordenó su liberación.



presarios vinculados o no a la monarquía proseguía con ferocidad, surgía la figura de Bani Sadr, quien se hacía cargo de los ministerios de Economía y de Asuntos Exteriores.

El 3 de agosto se habían celebrado elecciones generales para la formación de una Asamblea Constituyente, pese a las protestas del Frente Nacional, del Partido Republicano del Pueblo Musulmán, recién creado por el ayatollah azerbaijano progresista Sayed Kazem Chariat-Madari, y de los fedayines, que denunciaban la falta de condiciones para unos comicios limpios. Las demandas kurdas de autonomía acababan de ser rechazadas y el Ejército había bombardeado Mahabad, Sanadaj y Saqqez para frenar a los peshmergas, que junto a las organizaciones marxistas Kumela y Fedayin-e-Jalq habían tomado las armas bajo la dirección del jeque Ezzadein Hoseini, líder religioso sunita del Kurdistan, y del PDKI de Ghassemlu.

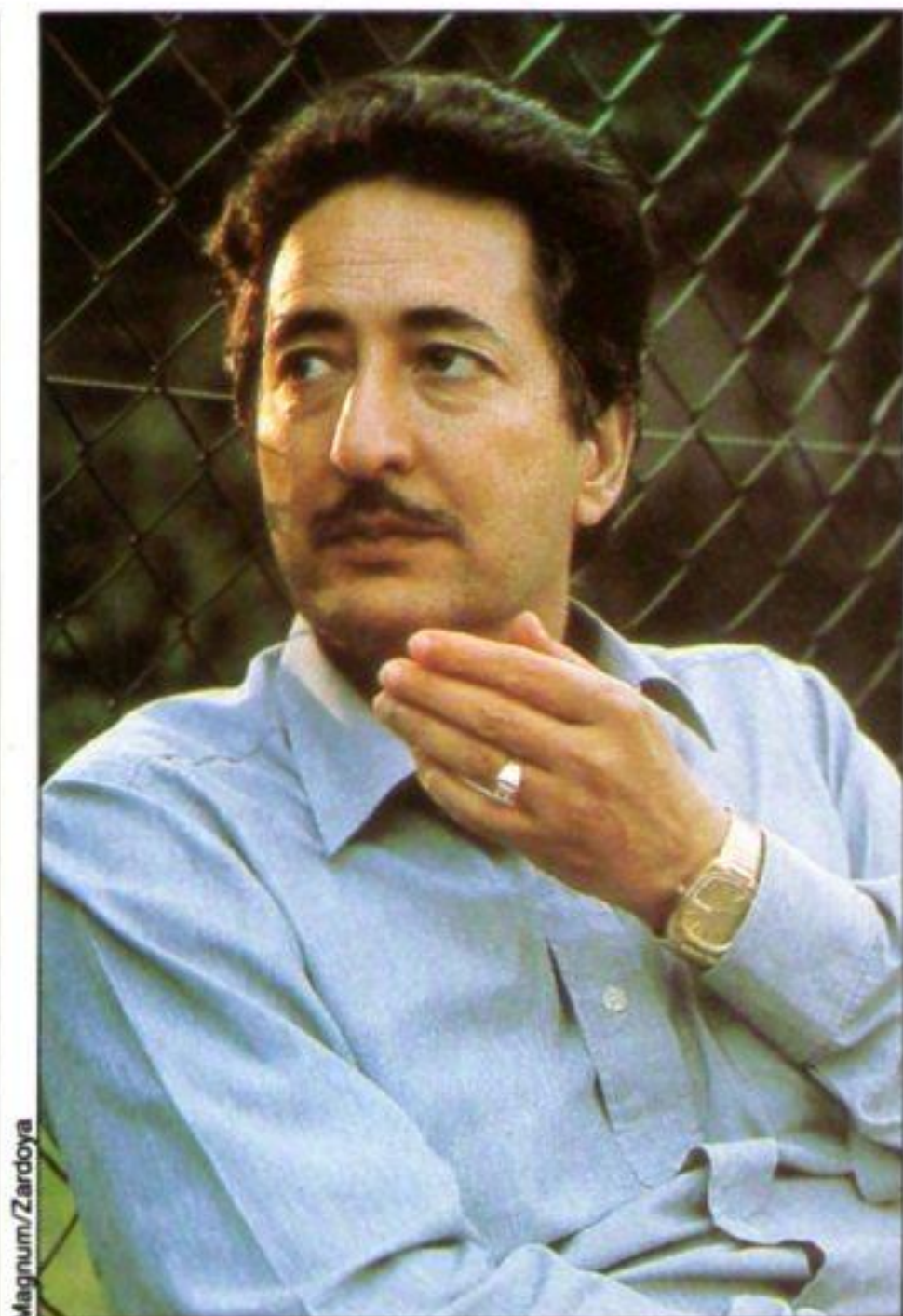
Los líderes del integrista Partido de la Revolución Islámica (PRI) en el poder, ayatollahs Mohamed Beheshti y Ali Montazeri, segundo en la jerarquía chiita tras la extraña muerte de Taleghani, proclamaron que el Kurdistan debía ser depurado. El ayatollah Sadeq Jalali acudió a la zona y ordenó innumerables ejecuciones, incluso de niños de 13 años sacados del hospital para ser fusilados. Cuando el empuje bélico del Ejército iraní había causado cientos de víctimas civiles, los peshmergas comprendieron su exposición a los bombardeos en las ciudades —algunas fueron casi arrasadas—, abandonaron Mahabad el 3 de septiembre y se retiraron a las montañas para proseguir la lucha.

En esta página, Mehdi Bazargán, primer jefe de Gobierno del régimen de Jomeini. Reconocido opositor al Shah, fue el organizador de una huelga del petróleo que afectó al régimen. Pero también se opuso al fanatismo religioso y a los excesos, y pronto fue destituido.

En la página siguiente, arriba a la izquierda, Bani Sadr, fugaz y moderado presidente de la república islámica. Fue responsabilizado, con pocas razones, de la mala marcha de la guerra contra Irak, y el Parlamento lo despojó de sus poderes. Fue otro hijo de la revolución,

que la revolución se tragó implacablemente. A la derecha, vista del patio de la gran mezquita de Qom, el día del referéndum que proclamó la República Islámica en Irán, en marzo de 1979. Abajo, un joven monta guardia en el tejado de la embajada de Estados

Unidos en Teherán, después del asalto perpetrado contra la sede diplomática. Este episodio y la toma de rehenes, prolongada durante más de un año, pese a las presiones, generaron uno de los conflictos más espectaculares de los últimos tiempos.



Magnum/Zardoya

El 3 de diciembre, un referéndum consagró una constitución teocrática, basada en las leyes coránicas y que otorgó todo el poder a los dirigentes religiosos, encabezados por Jomeini, a quien ya se empezaba a llamar imán.

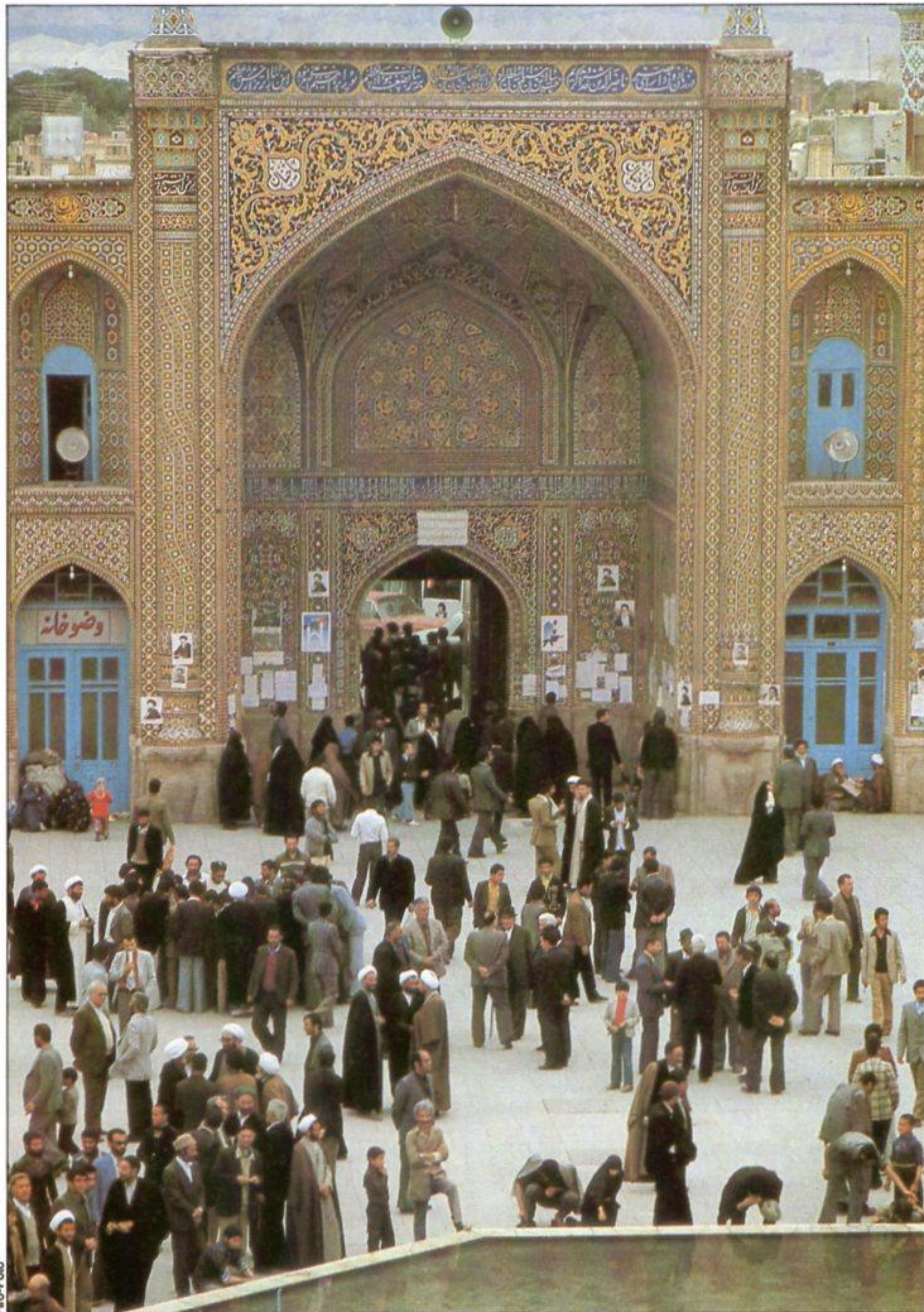
Crisis tras crisis

Mientras tanto, el Šah había realizado un largo periplo con su séquito, a pesar de la deserción en Marruecos de la tripulación de su «Boeing», que volvió con el aparato a Irán. El 15 de febrero viajó de Egipto a Marruecos, el 30 de marzo llegó a las Bahamas, el 10 de junio se instaló en una gran mansión de Cuernavaca (México) y, cuando ya estaban aposentados él y su cohorte de guardaespaldas y sirvientes, acudió apresuradamente a Nueva York, el 22 de octubre, para tratarse de un linfoma.

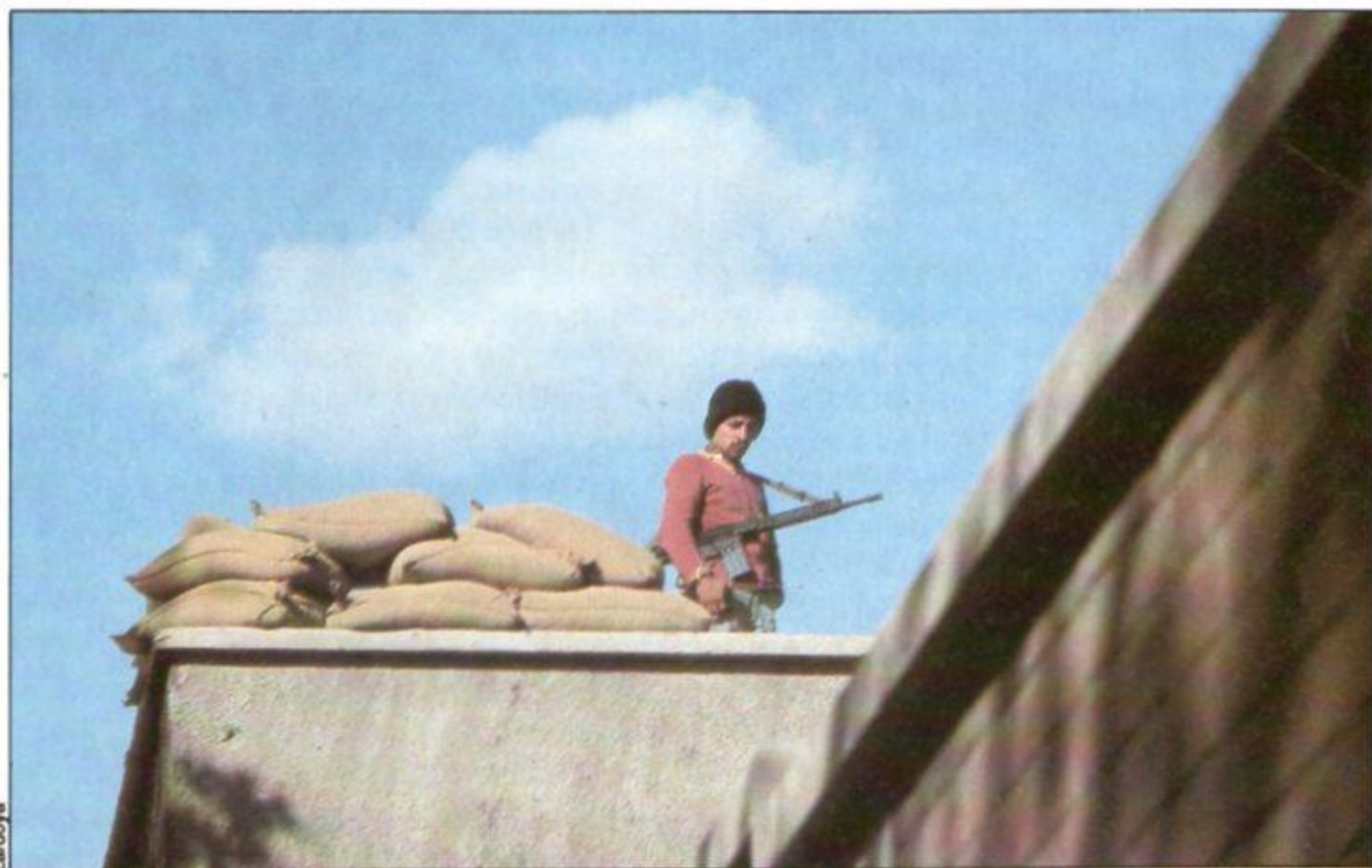
Este hecho creó enormes problemas al presidente Jimmy Carter, quien desde este momento comenzó a perder terreno en la carrera presidencial, ante su oponente Ronald Reagan.

El 4 de noviembre, estudiantes fanáticos «seguidores de la Línea del imán» asaltaron la embajada norteamericana de Teherán y tomaron como rehenes a los cien ocupantes. Cincuenta de los sesenta estadounidenses que permanecían allí (el resto de la colonia de Estados Unidos en Irán había huido durante la revolución) fueron retenidos en la sede diplomática y, sin que el Gobierno islámico actuara para evitarlo, los captores amenazaron con asesinar a los rehenes si no se concedía la extradición del Šah a Irán.

Contra la teocrática Constitución Islámica, el Azerbaijón se sublevó en Tabriz a primeros de diciembre, pero la



Firo-Foto



Zardoya



guerra entre los partidarios de Jomeini y de Madari pronto terminó con la neutralización del último, que residía en Qom, por los pasdaran (guardianes de la revolución) jomeinistas. El 11 de enero de 1980, un año exacto después del triunfo de la revolución islámica, la revuelta de Tabriz fue aplastada (veinte muertos y cientos de heridos) y al día siguiente fueron ejecutados los once líderes principales pro Madari.

La crisis de los rehenes se prolongó en beneficio de los integristas, que consiguieron reagrupar de nuevo a las masas en torno a otra reclamación de la «justicia divina»: la de ejecutar al Šah. Los esfuerzos de Bani Sadr por salvar la revolución del despotismo se vieron recompensados al triunfar en las elecciones del 25 al 28 de enero de 1980. Pero todo fue en vano: jamás logró superar la fanática oposición del PRI, mayoritario en el Maýlis, que le impidió formar gobierno durante meses al tratar de imponerle figuras como el viceministro del Interior y jefe de la Policía, Mostafá Amir Salim, el ayatollah Jaljali, llamado el «juez de

sangre» y que había condenado a muerte al Šah y ofrecido una recompensa a cualquiera que lo asesinase, o Jalaledin Farsi, uno de los más reaccionarios líderes religiosos, especialmente odiado por las mujeres que, poco después de la revolución, vieron asaltadas sus manifestaciones de protesta por la reimplantación obligatoria del chador y de otras costumbres islámicas que perpetuaban el dominio masculino.

El terror jomeinista se cobró adúlteras lapidadas, drogadictos y homosexuales ahorcados y rematados si no morían (el Korán afirma que si un ahorcado sobrevive es porque Alá le ha declarado inocente), personalidades ejecutadas tras «juicios» en los que no tuvieron derecho a defensa, y líderes de la revolución fusilados por «traición» al imán. Bani Sadr, que había asumido la guerra con Irak y dirigido las operaciones militares, y que también había aceptado su impotencia para llegar a un necesario acuerdo sobre los rehenes a causa de la intransigencia del PRI, fue destituido por Jomeini (su

antiguo mentor) el 9 de junio de 1981 —una vez resuelta la crisis gracias a su perseverancia— y tuvo que refugiarse en la clandestinidad. Las consiguientes manifestaciones en favor de Bani Sadr —elegido presidente por mayoría absoluta— fueron dispersadas y una nueva ola de detenciones sacudió el país.

El 21 de junio, el Maýlis despojó a Bani Sadr del mandato (en teoría por su supuesto fracaso en la guerra contra Irak), en plena tragedia del terremoto de Kermán (1.500 muertos y más de 2.000 heridos). Sadq Gotbzadeh, el ministro de Asuntos Exteriores acérrimo partidario de Jomeini que Bani Sadr había elegido, quedó como máximo dirigente del Gobierno.

Y el infierno se hizo realidad. Una semana después, una tremenda explosión demolió la sede del PRI con todos sus líderes dentro. Entre los 74 muertos estuvieron el máximo dirigente del partido, ayatollah Beheshti, cuatro ministros, seis viceministros y veinte diputados del Partido de la República Islámica. El régimen jomeinista, que mantenía la cohesión nacional gracias



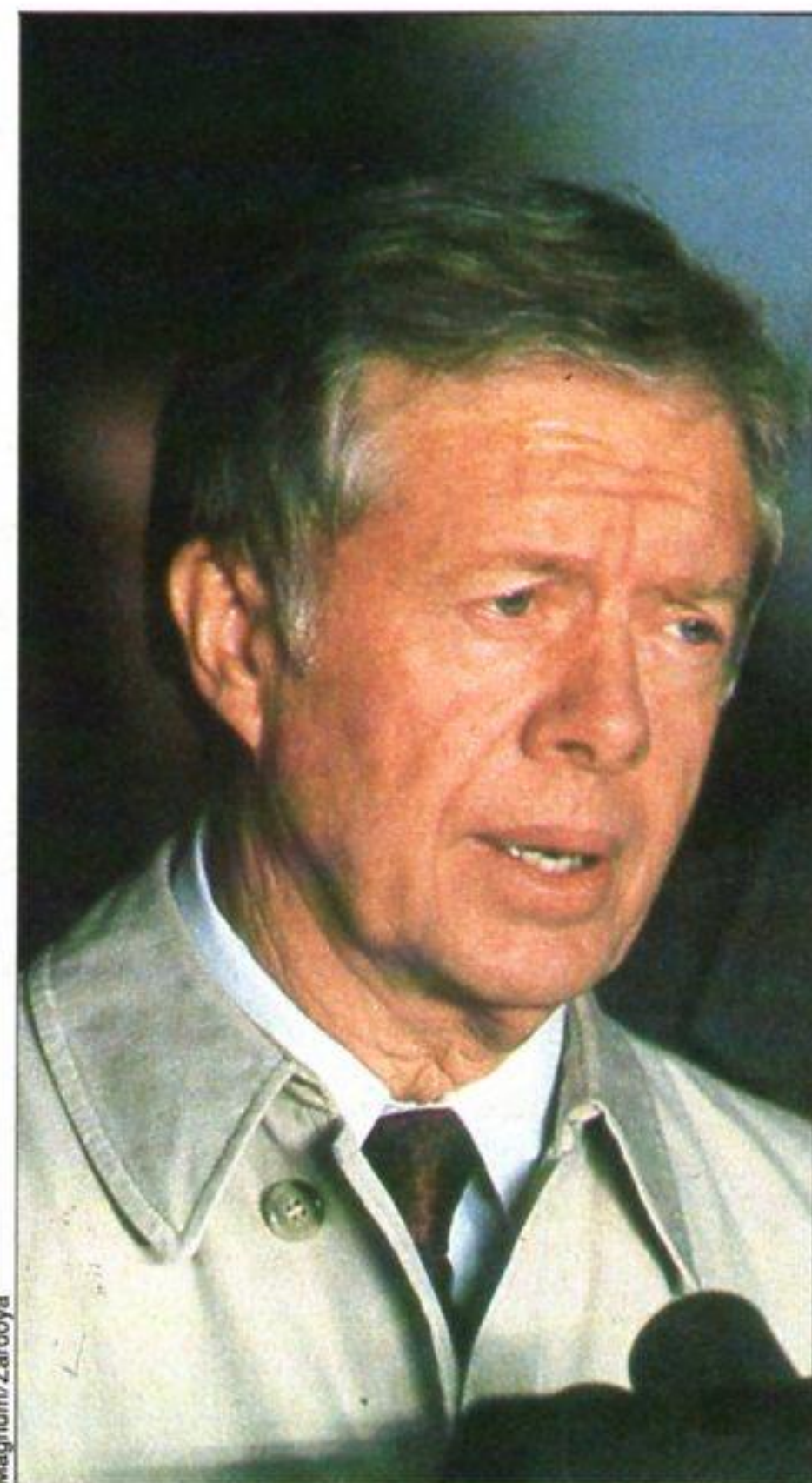
EFE

al factor unificador que constituía la guerra con Irak (que neutralizaba momentáneamente a los movimientos kurdo, azerbaijano y beluchistano), se lanzó al exterminio de los fedayines y muyahidines de izquierda y organizó una farsa electoral que dio como vencedor, el 24 de julio, al candidato del «sistema chiita»: Mohamed Alí Radjai.

Dos días después, Kermán fue sacudido por un nuevo seísmo que enterró a 5.000 víctimas. Tres días más tarde, Bani Sadr hallaba asilo en Francia con el líder de los fedayines, Massud Radjavi, una vez diezmada la guerrilla revolucionaria que cuando luchaba contra el Šah llegó a contar con 10.000 combatientes. Mientras la oposición monárquica se dedicaba a secuestrar una de las lanchas guardacostas que Francia envió a Irán a mediados de agosto, los últimos fedayines eliminaron a Radjai y al primer ministro designado sólo tres semanas antes, Mohamed Bahonar, en un espectacular atentado contra la sede del Gobierno cometido el 30 de agosto.

Mohamed Kani, sólo cuatro días después, y Husein Musavi (el 29 de septiembre) ocuparon sucesivamente la vacante jefatura del Gobierno, pelele de la teocracia. Los fedayines fueron aniquilados y el estado mayor de los muyahidines, con Mussa Jiahani a la cabeza, fue exterminado el 8 de febrero de 1982. El propio Gotbzadeh, que tanta propaganda de la revolución islámica había difundido en el mundo entero, fue detenido el 10 de abril, acusado de preparar un complot contra Jomeini inspirado por la CIA, y ejecutado —sin que nadie oyera hablar de juicio— el 15 de septiembre.

Los terribles atentados de la oposición armada (varios centenares de muertos en la explosión de un camión cargado de explosivos en Teherán el 1 de octubre) continuaron, pero la tiranía integrista se consolidó sobre toda esa sangre. El 10 de diciembre fue elegida una asamblea de 83 expertos chiitas que debería reemplazar a Jomeini una vez fallecido. Bajo la tutela del nuevo presidente, Alí Jamenei, el núcleo religioso más reaccionario



Magnum/Zaróya

En la página anterior, mujeres armadas, con el tradicional chador, desfilan ante la sede de la embajada de Estados Unidos durante la grave crisis causada por el secuestro de los rehenes. El problema volvió a enfrentar a las dos grandes potencias, puesto que

la URSS apoyó a Irán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En esta página, a la izquierda, quema de un muñeco que representa al odiado Tío Sam. A la derecha, Carter en Alemania, el día que llegaron los rehenes a este país europeo.

y motor de la represión de los bahais (llamado Hodjatieh) obtuvo finalmente el poder, una vez controlado Chariat Madari, al que se acusó de participar en el complot de Sadeq Gotbzadeh y que salvó la vida por su cargo religioso, su carisma y su confesión y arrepentimiento falsos.

Todos los líderes del hasta entonces complaciente Tudeh, incluido Kianuri, fueron detenidos en febrero del 83 y forzados a admitir su traición en favor de la URSS, que tras inútiles coqueteos con la república islámica volvía a tomar partido por Irak. Irán era de nuevo el país más inestable del explosivo Oriente Medio, como si el haber reavivado el belicismo norteamericano, haber echado combustible a la nueva guerra fría que ya se insinuaba entre las superpotencias, haber vapuleado las «reglas del juego» internacional y haber impulsado una ola integrista revolucionaria, que incendió el mundo árabe de Arabia Saudí a Marruecos, fomentó un mortífero terrorismo suicida y desenterró el hacha de la Jihad (guerra santa), no hubiera sido bastante.

Arde una plataforma petrolífera iraní a raíz de un bombardeo irakí,

durante la terrible guerra mantenida por los dos países vecinos.

Magnum/Zardoya



La guerra de nunca acabar

La más larga y sangrienta guerra que haya conocido Oriente Medio comenzó porque el presidente iraquí, Saddam Hussein, creyó que la revuelta de kurdos, azerbaijanos y beluchistanos iraníes, la resistencia armada fedayin y muyahidin al terror jomeinista y el aislamiento de Irán a causa de la crisis de los rehenes era el preludio del hundimiento de la República Islámica. Tan seguro estaba el alto mando iraquí, asesorado por generales del depuesto Šah, de obtener una rápida victoria contra el diezmado, desabastecido, desorganizado y dividido Ejército iraní, que lanzó a sus tropas con avituallamiento para unos pocos días, organizó «tours» por el frente para 300 periodistas extranjeros y anunció de inmediato la conquista de Abadán, Dezful y Jorramchar.

Cuando, el 18 de septiembre de 1980, Bagdad bombardeó por sorpresa los diez principales aeropuertos iraníes e hizo penetrar en Irán ocho divisiones a lo largo de un frente de 500 kilómetros, Hussein soñaba con recuperar el estuario de Chatt-el-Arab y las tres islas del estrecho de Ormuz, así como provocar la independencia del Juzestán árabe iraní. Pero sus blindados se bloquearon en las marismas

iraníes, los defensores se batieron con ferocidad inaudita, Teherán lanzó devastadores ataques aéreos contra la industria petrolífera y las ciudades de Irak, y las fuerzas invasoras sólo lograron ocupar unas calcinadas Jorramchar y Mehran.

Un año después del ataque iraquí, la economía de ambos países estaba desangrada, cien mil cadáveres yacían putrefactos en el campo de batalla y dos millones de refugiados habían huido de los centros urbanos del Juzestán, arrasados por bombas y misiles. Diez días después del cruento aniversario, las mal pertrechadas fuerzas iraníes lanzaron su primer contrataque victorioso.

El Ejército iraquí se retiró a través del río Karun, y Bagdad trató de detener el conflicto mediante mediaciones árabes, islámicas, no alineadas y de la ONU, que fueron rechazadas por Irán. Teherán lanzó sucesivas oleadas de «bassidj» (adolescentes educados por los mullahs que llegaron a caminar sobre los campos de minas, con el nombre de Alá en los labios, para abrir camino a los tanques), que avanzaron en Susangerd y en Bostán. A finales de marzo de 1982, los iraníes recuperaron los últimos 2.000 km² que ocupaba Irak en el Juzestán.

La inútil guerra prosiguió a favor de Irán a pesar de la ayuda árabe a Irak (unos 30.000 millones de dólares), de la adquisición por Bagdad de Mirages y Super-Etendards a Francia, y de la renovación del apoyo soviético a Saddam Hussein, quien, en su desesperación, también buscaba una aproximación a Estados Unidos. Teherán exigió indemnizaciones de guerra, la condena de la agresión iraquí por una comisión internacional y el regreso a Irak de 100.000 chiitas expulsados, una vez suficientemente entrenados y fanatizados por el régimen jomeinista, que no cesaba de prometer que derribaría a Saddam Hussein, como primer paso del avance de dos millones de «desheredados» que llegarían al mismo Jerusalén.

Parte de los peshmergas kurdos combatían al régimen de Bagdad y en esa montañosa región nortea comenzó, en abril de 1983, el avance iraní dentro de Irak, sobre Panjwin y Sulemanyeh, camino de Kirkuk y Mosul (Nínive). Pese al más de medio millón de muertos y heridos, los cuatro millones de parados en el caos iraní parecían suficientes para continuar el conflicto, y el fanatismo era bastante para mantener la espantosa economía de una guerra de nunca acabar.

La invasión de Afganistán

Otra vez la guerra fría

Carlos López Matteo,
periodista

La invasión soviética a Afganistán, en 1979, significó un notable incremento en la tensión internacional y un retorno a las peores épocas de la guerra fría. La estratégica situación

del país, la oposición interna y la inquietud del mundo islámico empujaron a la URSS a correr los riesgos de la intervención. En la fotografía, soldados soviéticos sobre un blindado, en Kabul.

Los últimos meses de 1979 pasarán a la historia como el período que puso fin a casi veinte años de «distensión» y «coexistencia pacífica», iniciados por Nikita Jruschov y los presidentes norteamericanos Eisenhower y Kennedy. La revolución islámica, los movimientos contestatarios en el este europeo, las exigencias electorales de Carter y un verdadero vacío de poder en la URSS fueron algunos de los elementos que abrieron una nueva etapa de «guerra fría», espectacularmente inaugurada con la intervención soviética en Afganistán, en diciembre de 1979.



El comunismo afgano

Nur Mohamed Taraki y Babrak Karmal fundaron en 1965 el partido Democrático del Pueblo, comunista prosoviético. El 27 de abril de 1978 ambos políticos dirigieron el golpe de Estado que depuso al presidente Daud. Taraki fue designado presidente de la República y primer ministro, y Karmal recibió el nombramiento de viceprimer ministro y vicepresidente del Consejo Revolucionario. En agosto se produjo un intento de golpe de Estado, y Karmal fue «purgado» de sus dos cargos y enviado a Praga como embajador. Indirectamente, a través de un tribunal judicial, Taraki lo acusó de estar vinculado a la intencional golpista. Estos hechos dividieron al partido en dos fracciones: la Khal, nacionalista y liderada por Hafizullah Amín, y la Parcham (Bandera) de orientación prosoviética, dirigida desde su disfrazado exilio por Karmal. Taraki navegaba entre las dos corrientes, sosteniendo que «sin menoscabo de nuestra alianza con la URSS, no veo mal un cierto distanciamiento del gran vecino del norte». En marzo de 1979 Taraki mantuvo la presidencia pero cedió la jefatura del Gobierno a Amín. En septiembre, éste acumuló los dos cargos. A su falta de competencia para dominar la rebelión musulmana añadió su orientación nacionalista, o al menos no tan prosoviética como la de sus antecesores. La invasión estaba servida...

Los malos vientos del 79

Un observador atento de los sucesos internacionales habría advertido los vientos de fronda que barrían al año 1979, y hubiese podido deducir los peligros que comenzaban a planear sobre la década a punto de comenzar. A los problemas internos y externos que enfrentaban las dos grandes potencias se agregaban las inquietudes que surgían desde Irán, a raíz de la revolución islámica impulsada por el imán Jomeini. En noviembre, un grupo de chiitas asaltó la Gran Mezquita de la Meca y la mantuvo en su poder durante dos semanas: 135 muertos fue el saldo de la acción militar destinada a desalojar el sagrado templo de los musulmanes. Casi al mismo tiempo, los estudiantes inspirados por Jomeini ocuparon la embajada norteamericana y tomaron a varias decenas de rehenes. Una oleada de violentas manifestaciones antinorteamericanas y proiraníes

sacudió en esos días a los países árabes, desde Arabia Saudí, donde se registraron nuevos muertos, hasta Argelia, en apariencia impermeable a los conflictos religiosos, pasando por Libia donde la multitud enfurecida incendió la embajada estadounidense.

El 2 y el 3 de diciembre los iraníes votaron una nueva constitución de carácter teocrático que, si bien estableció un «consejo de líderes» considerado como «el sucesor del duodécimo y último imán de los chiitas, Mehdi, desaparecido en 873», en realidad otorgó todo el poder a Jomeini. Pero éste también tenía graves problemas internos, capaces de crear otros focos de tensión internacional; así, en ese diciembre preñado de importantes acontecimientos, ordenó la intervención de su ejército contra la mayoritaria población sunita de la provincia de Beluchistán, fronteriza con Pakistán y Afganistán. En este último país, a su vez, el

En esta página, el presidente Daud, a quien depuso Karmal el 27 de abril de 1978.

En la página siguiente, una manifestación de partidarios del golpe de Estado de 1978.



presidente Hafizullah Amín hacía desesperados esfuerzos por controlar una situación que se le escapaba de las manos ante la creciente actividad de las guerrillas musulmanas.

Estados Unidos comprendió lo explosivo de la situación en esa estratégica región, abastecedora de petróleo al mundo occidental: el 18 de diciembre envió a Kenia, Somalia, Omán y Arabia Saudí una delegación militar encabezada por Robert Murray, subsecretario para Oriente Próximo del Departamento de Defensa, con el objeto de obtener bases en el golfo Pérsico, o cerca de él, para la «fuerza de rápido despliegue», cuya formación acababa de decidir el gobierno Carter: contaría con cien mil hombres (de ellos cincuenta mil serían «marines»), y para su constitución se previeron diez mil millones de dólares. Aunque poco se ha informado sobre este imponente destacamento para intervenir fulminante-



mente en el extranjero, aparentemente está en condiciones de actuar desde fines de 1983.

También fue en esa dramática segunda quincena de diciembre de 1979 cuando la OTAN decidió la instalación de los misiles en Europa, que serían operativos desde comienzos de 1984 si antes no se lograba un acuerdo con la URSS en torno a la reducción de armamentos. Andrei Gromiko, ministro de Asuntos Exteriores soviético, advirtió que su país no negociaría «desde posiciones de fuerza», y las relaciones entre ambas superpotencias comenzaron a ponerse al rojo vivo. Por el lado norteamericano prácticamente había empezado la campaña electoral, y Carter, que buscaba la reelección, sufría una verdadera lluvia de ataques desde el partido Republicano, que le reprochaba la «debilidad» de su política exterior y el permitir grandes avances a la diplomacia moscovita.

Pero los dirigentes soviéticos también tenían un complicado e intranquilo frente interno. En esos días Polonia sufría las primeras convulsiones políticas y sindicales que culminarían, en agosto de 1980, con la creación del sindicato Solidaridad. La represión de esas iniciales manifestaciones callejeras fue muy severa. En Checoslovaquia, al mismo tiempo, las autoridades detenían a decenas de disidentes que reclamaban la vigencia de los derechos humanos.

Pero el frente asiático también ofrecía múltiples quebraderos de cabeza a los soviéticos. A comienzos de diciembre se suspendió, entre mutuas acusaciones, un nuevo intento por normalizar las relaciones con China. La revolución islámica, por su parte, era otra fuente de problemas, pese a que moral y verbalmente la URSS respaldaba a Jomeini en su disputa con Estados Unidos. La efervescencia musul-

mana amenazaba con extenderse a los lugares más insospechados, y podía tener una doble consecuencia: provocar la intervención norteamericana en la zona del golfo Pérsico y contagiar a los musulmanes soviéticos, que constituyen un nada despreciable veinte por ciento de la población total del inmenso país. Y Afganistán se estaba convirtiendo, en sus propias fronteras, en un peligroso puente para la expansión islámica. No sólo se trataba de la debilidad del régimen de Amín ante los guerrilleros musulmanes, sino que hasta la misma influencia comunista en Afganistán estaba siendo contestada: el 15 de diciembre dos ciudadanos soviéticos fueron asesinados en el *bazar* de Kabul cuando estaban comprando. Miles de octavillas inundaron la ciudad, reivindicando las muertes para *Nasr Islami* (*Victoria Islámica*), una organización hasta entonces desconocida. El impreso prometía «dar una

La guerrilla musulmana

En marzo de 1979 diversos grupos guerrilleros musulmanes fundaron el Frente Nacional de Liberación Afgano, pero éste no fue operativo por la curiosa mezcla de aparentes diferencias ideológicas y de falta de programas políticos concretos. Por lo tanto, cada grupo continuó operando con una gran autonomía. Cuando se produjo la intervención soviética, los dos sectores guerrilleros verdaderamente importantes tenían sus sedes en húmedas y miserables casuchas de Peshawar, una ciudad situada en la frontera de Pakistán, a sólo 200 kilómetros de Kabul. Las autoridades pakistaníes eran tolerantes con sus actividades contra el país vecino.

A comienzos de 1980 muchos periodistas occidentales visitaron los pobres locales del Jamiat Islamie Afganistan (Partido Islámico de Afganistán) y del Hizbe Islamie Afganistan (Movimiento Islámico de Afganistán).

Las versiones coinciden en que sólo tenían viejas escopetas y algunas armas conquistadas al enemigo, ya sea en combates o mediante deserciones. Poca cosa para enfrentar a los MIG, helicópteros y tanques de uno de los mejores ejércitos del mundo. La situación cambió en pocas semanas: a las miles y miles de deserciones del Ejército afgano se sumaron una efectiva unión de los siete principales movimientos guerrilleros, el constante ir y venir de agentes de la CIA y de traficantes de armas, apoyos financieros llegados por oscuros caminos, y diversos tipos de ayudas inspiradas más en el antisovietismo que en el deseo de una verdadera autodeterminación afgana.

Sea como sea, en enero de 1980 las posibilidades guerrilleras parecían muy precarias. Los rebeldes reconocían su inferioridad militar, pero la compensaban «con el arma de la fe» y «la movilización popular», con el nacionalismo y con la repetición de las numerosas frases del Corán que se leían en las descascaradas paredes de los ruinosos edificios que los albergaban.

En esta página, arriba, un grupo de rebeldes afganos se entrena en un campamento situado en Hasarajat, con una batería antiaérea.

Abajo, guerrilleros con moderno material antitanque en una zona montañosa. La oposición islámica armada fue muy superior a la esperada.



En la página siguiente, arriba, un camión con soldados soviéticos en pleno desierto afgano. La guerra de guerrillas ha costado centenares

de vidas a las fuerzas de intervención. Abajo, Babrak Karmal, personalidad fiel a la URSS y que aceptó su intervención.

lección a los invasores soviéticos», como ya lo hicieron «nuestros antepasados con los ingleses en 1919». La intervención soviética directa y formal todavía no se había producido, pero en Kabul era un secreto a voces que los días 3, 4 y 7 de diciembre habían llegado varios aviones militares.

Si un conjunto de situaciones similares suele poner a prueba la estabilidad y la serenidad de cualquier gobierno, mucho más grave puede ser el problema cuando se padece un virtual vacío de poder o la responsabilidad de decisión cae sobre desconocidos personajes u organismos. Y esa era una de las dificultades que sufría la URSS en esos días: Leonidas Breznev, jefe de Estado y secretario general del Partido Comunista, había «desaparecido» aquejado por una fuerte gripe y por uno de los numerosos problemas cardíacos que marcaron sus últimos años; Alexei Kossiguin, el primer ministro, estaba internado en un hospital, casi inconsciente a raíz de una afección circulatoria. El poder de decisión se difuminaba en numerosos centros que carecían de las habituales y precisas directivas, y en las peligrosas y tensas jornadas siguientes se impondría la voluntad del llamado «sector militarista» de la URSS.

La intervención soviética

Entre marzo y septiembre de 1979 Hafizullah Amín, líder de la corriente *Khalq* (nacionalista) del partido De-



mocrático del Pueblo (comunista), obtuvo una impresionante suma de poder al acumular los cargos de presidente o secretario general de la República, del Gobierno, del Partido, del Politburó, del Consejo Revolucionario del Alto Comisariado para la Defensa de la Patria, de la poderosa Organización Nacional de Defensa de la Revolución y de la comisión redactora de la nueva constitución.

Pero los problemas internos del partido, la desconfianza de los influyentes vecinos soviéticos y la guerrilla islámica le impidieron estabilizar su régimen. El gobierno de Moscú, basándose en los tratados de cooperación y asistencia firmados entre ambos países, mueve sus piezas y discretamente apoya a la fracción *Parcham* (*Bandera*) del partido Democrático del Pueblo, de tendencia prosoviética, y dirigida desde su «destierro» como embajador en Praga por Babrak Karmal. Así, en esas semanas aumentó notablemente el número de asesores rusos que, según las distintas versiones, oscilaban entre 8.000 y 30.000 hombres. La gran base aérea de Begram, a 60 kilómetros de Kabul, se había convertido en «una instalación completamente soviética», conforme a la opinión de fuentes diplomáticas y periodísticas occidentales. La preocupación moscovita por la situación del país y las tensiones de la región se manifestaba en la acelerada modernización de la base de Fahrads, al sur del

territorio afgano, y en la construcción de seis nuevos aeropuertos estratégicamente distribuidos.

Los servicios de espionaje norteamericanos informaron el 22 de diciembre que el día anterior la URSS había movilizado treinta mil hombres sobre el fronterizo río Oxus, en una operación que recordaba los prolegómenos de la invasión a Checoslovaquia en 1968. Pero los estadounidenses, preocupados por los rehenes en su embajada de Teherán, atribuyeron este despliegue a una medida precautoria ante una posible intervención de sus propias fuerzas en Irán.

Mientras tanto, Amín no descansaba en sus esfuerzos por mantener el poder y por unir y dar disciplina a su Ejército, sacudido por los motines y las deserciones. Sus discursos, inflamados y violentos, contenían terribles amenazas contra los guerrilleros musulmanes. Pero todo era en vano: se vio obligado a integrar en las fuerzas armadas a los *jalquis*, jóvenes afiliados al partido, instruidos militarmente en la URSS, y a permitir que fuesen soldados soviéticos los que ametrallasen a los rebeldes desde helicópteros también soviéticos.

El 26 de diciembre, finalmente, los norteamericanos cayeron en la cuenta de lo que estaba pasando: Hodding Carter, portavoz del Departamento de Estado, denunció que los días 24 y 25 se había establecido un puente aéreo



de carácter militar entre Moscú y Kabul, y condenó «la flagrante intervención soviética en Afganistán». «Da la impresión —agregó— que la URSS ha franqueado un nuevo paso en el proceso de su intervención militar en Afganistán.» Sostuvo que por lo menos 159 aviones volaron continuamente entre los dos países durante esos días, añadiendo que «la URSS ha movilizado cinco divisiones en la frontera norte de Afganistán, en su intento de ayudar al régimen en el poder a resistir la agresión de los rebeldes musulmanes».

La intervención soviética en Afganistán, por lo tanto, no tuvo las características de las clásicas invasiones norteamericanas en América Latina o de las similares acciones del Pacto de Var-

La derrota del amo

El 9 de enero de 1980 fuentes soviéticas cercanas a Leonidas Breznev, seguramente preocupadas por la situación interna del país y por la crisis internacional, dejaron filtrar la noticia de que el líder moscovita se había opuesto a la intervención en Afganistán, pero que su posición fue derrotada en el Politburó. Breznev, enfermo, no había podido ocuparse intensamente del tema. Su aliado natural, el primer ministro Alexei Kosiguin, estaba al borde de la muerte. Se impuso en la votación lo que en esos días dio en llamarse la «línea militarista», que habría considerado que la intervención en Afganistán era, tarde o temprano, inevitable. Influyó en esta opinión la inestabilidad del régimen afgano y el miedo al «contagio» islámico en territorio soviético. La previsiblemente pronta muerte de Breznev determinó la fecha, puesto que los «militaristas» estimaron que era mejor concretar la invasión en vida del líder, para que no pareciese que era su desaparición la que provocaba un cambio de política. Como dirigentes de esta tendencia fueron señalados Dimitri Ustinov (ministro de Defensa), Andrei Gromiko (ministro de Asuntos Exteriores), Mijail Suslov (máximo ideólogo del Gobierno soviético), Andrei Kirilenko (entonces firme candidato a sustituir a Breznev) y Yuri Andropov (jefe de la KGB). De esta lista de «duros», dos nombres han llamado la atención a los observadores: el de Gromiko, siempre fiel servidor de la política soviética pero también siempre proclive a negociar, y, posteriormente, el de Andropov, puesto que los «trascendidos» que ofrecieron a la prensa las fuentes del Kremlin a la muerte de Breznev lo situaban como contrario a la intervención. Quizás una combinación de las necesidades de reflejar una política exterior coherente (y entonces Gromiko aparece apoyando la intervención en 1979) y un rostro dispuesto a la «distensión» (y en 1982 Andropov es mostrado como adversario de la invasión) esté en el origen de las versiones. De ser así, Gromiko habría sido anti-intervencionista en 1979, y Andropov lo fue de nuevo cuño en 1982, en pos de una difícil mejoría de las relaciones con Occidente.

La muerte de Andropov y la campaña electoral norteamericana abrieron otro período de incertidumbre.



Camera Press/Zardoya

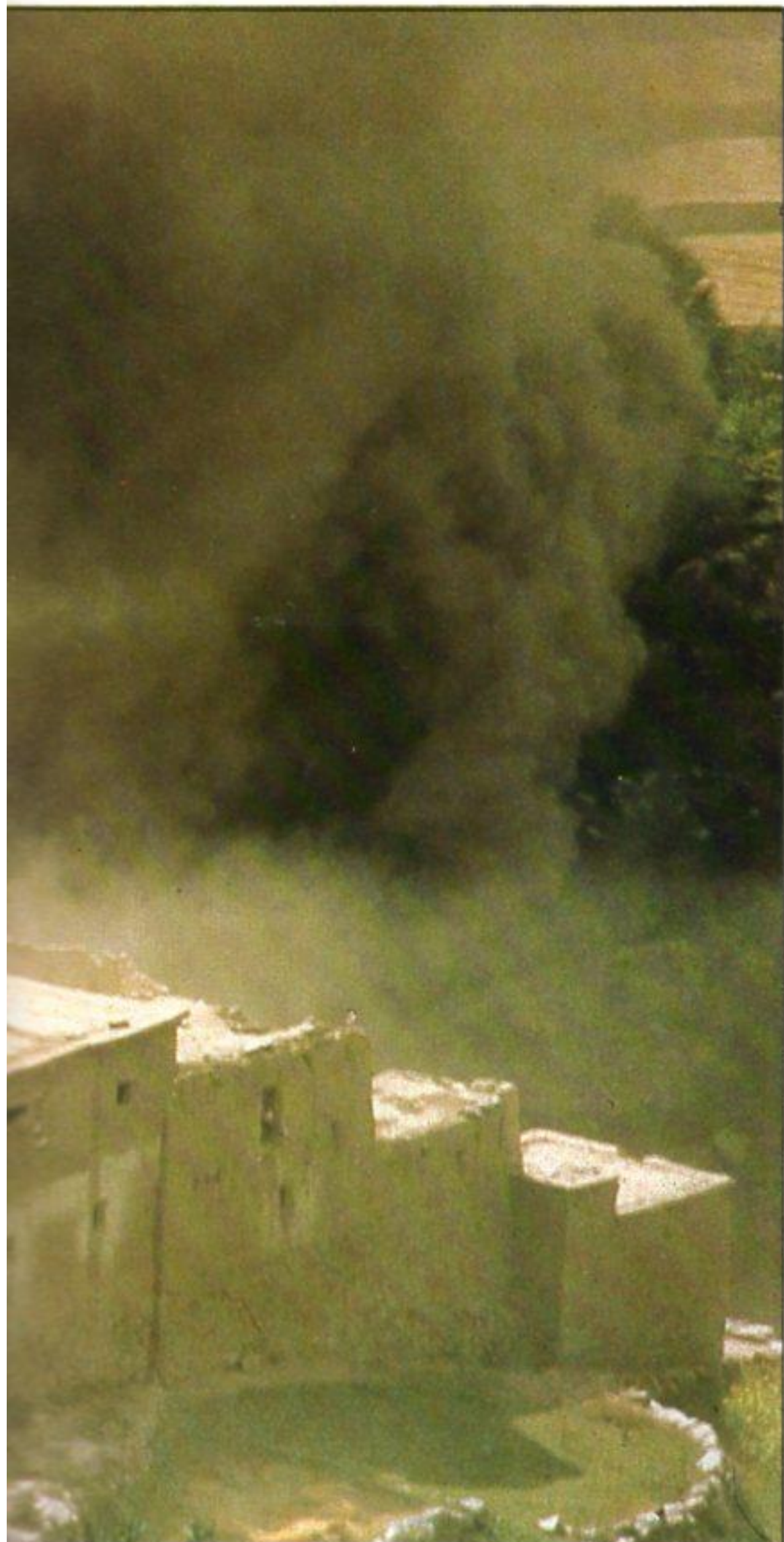
sovia contra Hungría y Checoslovaquia. Los desplazamientos de tropas y equipos se realizaron con gran discreción, y sólo pudieron ser detectados por los sofisticados métodos de espionaje estadounidenses. Casi de la noche a la mañana, sin violencia aparente y sin espectacularidad, los afganos se encontraron con un ejército extranjero que ocupaba su territorio.

Karmal, nuevo hombre fuerte

El 27 de diciembre se produjo el golpe de Estado contra Amín, y Karmal asumió el poder respaldado por las fuerzas soviéticas. Se implantó el toque de queda y carros blindados patrullaban intensamente la capital, mientras que se oían disparos en varios puntos de la ciudad. Amín fue sometido a un juicio en el que se le acusó de «crímenes contra el pueblo afgano», y fue ejecutado. Igual destino tuvieron su hermano Abdullah Amín, jefe del ejército del norte, y su sobrino Assadullah Amín, jefe de la policía secreta.

Karmal dirigió un mensaje al país, en el que afirmó que Amín era «un demagogo y un espía de Estados Unidos, que

presidía un régimen fascista». Sin duda buscando atraerse la buena voluntad de los rebeldes musulmanes, anunció que Afganistán se uniría «a los pueblos que luchan contra el imperialismo y el sionismo», y, con un lenguaje completamente distinto al de su antecesor, demandó el apoyo «de todos los musulmanes de cualquier secta, de los clérigos, soldados, tribus, funcionarios, intelectuales y trabajadores en general». Conciliador, prometió «el restablecimiento de las libertades democráticas para los pueblos afganos, excarcelación de los presos políticos, trabajo para todos los parados y buenas relaciones con todos los países vecinos». En un segundo mensaje radiofónico, Karmal expresó su deseo de negociar con los dirigentes rebeldes con el objetivo de «encontrar cauces políticos para solucionar problemas militares»; y con adjetivos sin duda gratos a los musulmanes, calificó de «pecador y satánico» al gobierno de Amín. Pero este nuevo tono no fue suficiente: el nacionalismo de los rebeldes provocó el rechazo del nuevo régimen como consecuencia de la intervención extranje-



ra, y un portavoz guerrillero definió a Karmal como «un agente directo de la Unión Soviética». Desde Teherán, el imán Jomeini también condenaba duramente la intervención de Moscú, pese a necesitar el veto soviético en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se aprestaba a considerar sanciones contra Irán por el asalto a la embajada norteamericana.

La versión de Moscú

A través de un comunicado oficial difundido por la radio y por la agencia de noticias Tass, el 28 de diciembre la Unión Soviética reconoció expresamente su participación en los sucesos de Afganistán, ante la solicitud de su gobierno de «ayuda urgente, tanto moral como material e incluso militar», para «defender la revolución afgana de abril de 1979, la integridad territorial y la independencia del territorio nacional». «La Unión Soviética —finalizaba el documento— ha satisfecho esta petición.» El mismo día, radio Kabul informaba de esta demanda de ayuda y sostenía que la URSS brindaba a Afganistán «su apoyo moral, financiero y mili-



EFE



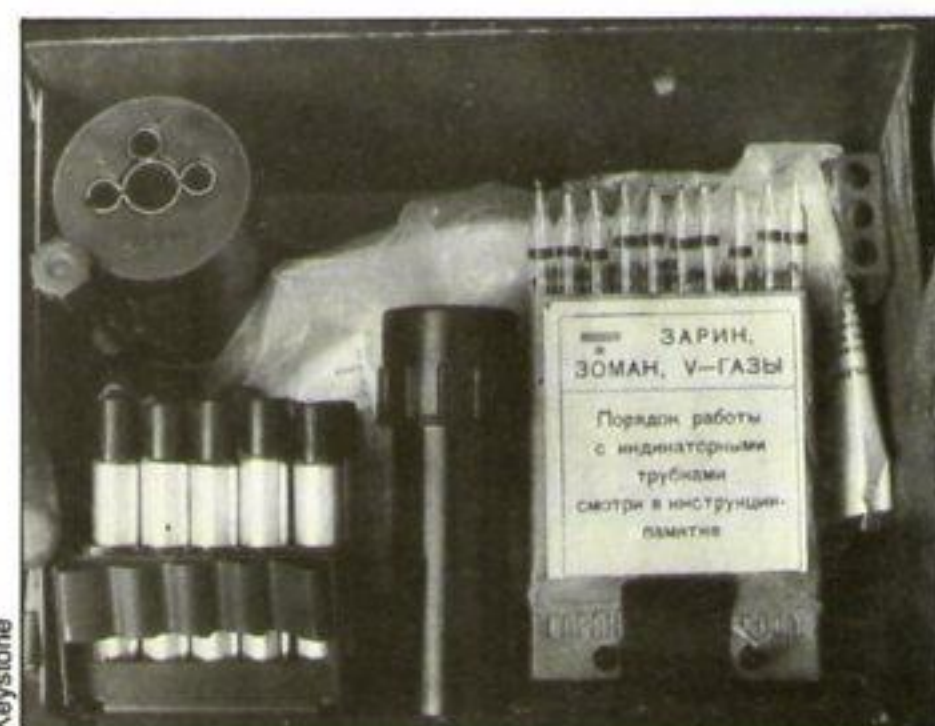
Camera Press/Zardoya

tar», en virtud del tratado de amistad de diciembre de 1978. Ninguno de los dos países ha contestado, hasta ahora, una pregunta de difícil y peligrosa respuesta, puesto que cualquiera que fuese la contestación saldrían muy mal parados el principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado y todo el débil andamiaje del derecho internacional: ¿Quién pidió la intervención soviética? ¿Amín o Karmal?

Mientras tanto, muchos periodistas occidentales y de los países no alineados se dieron a la tarea de quitar el polvo a sus archivos para descubrir, entre irónicos y asombrados, que los términos de la petición de ayuda afgana casi coincidían con la de intervención formulada por personalidades checoslovacas, en 1968, contra el gobierno de Alexander Dubcek.

La reacción internacional

Los estrategas del Pentágono comprobaron, temerosos, que, al ocupar Afganistán, la URSS no sólo había puesto un tapón a la expansión islámica, sino que además podía bloquear las rutas del mar de Arabia y las salidas



Keystone

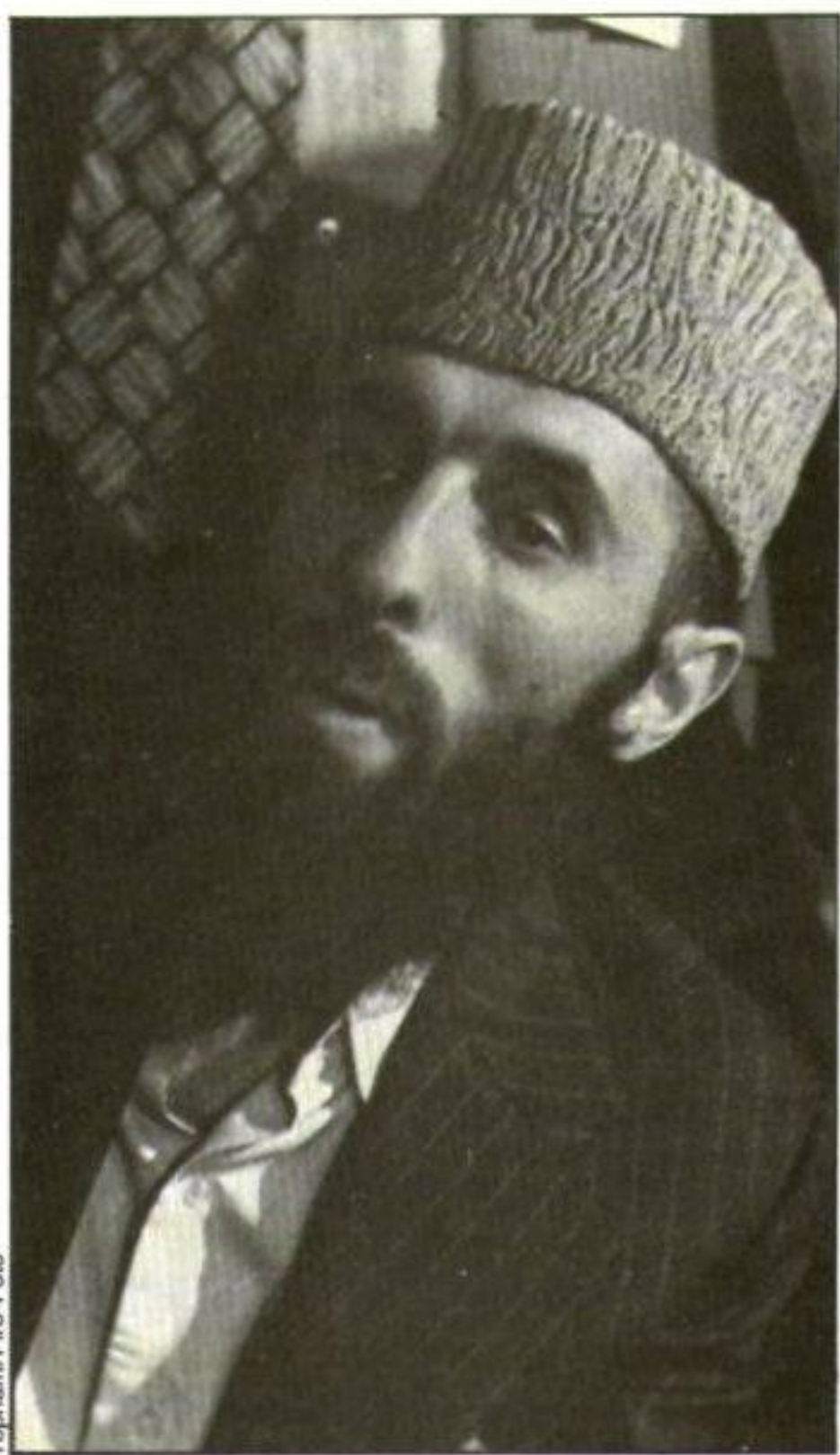
En ambas páginas, una impresionante imagen de un ataque soviético contra un pequeño pueblo afgano. Muchas veces los invasores atacaron núcleos sin relación con los insurgentes, sólo con fines intimidatorios y para evitar el contagio de la rebeldía islámica.

En esta página, arriba, Breznev y Andropov pocos días antes de la muerte del primero. La participación y la actitud de ambos

líderes en el caso Afganistán han sido objeto de controversias. Al centro, el presidente Carter y sus asesores discuten sobre la situación creada por la invasión soviética al país asiático. La crisis afgana fue uno de los elementos que minaron la campaña electoral del jefe de Estado norteamericano. Abajo, cargamento de armas químicas y sus antídotos capturados al invasor por la guerrilla musulmana.



Topham/Firo-Foto



Topham/Firo-Foto

En esta página, arriba a la izquierda, Mahmood Ali Jan, jefe de una tribu de 25.000 personas que se refugiaron en Pakistán a raíz de la invasión soviética. Abajo, el conocido líder guerrillero Gulbiddin Hekmetyar, de ideas fundamentalistas. Hekmetyar dirigía uno de los grupos rebeldes mejor organizados, y que oponía mayor resistencia

al ejército soviético. A la derecha, musulmanes con equipos antigases soviéticos obtenidos tras una emboscada. El uso de armas químicas ha sido uno de los aspectos más criticados a los invasores.

En la página siguiente, campamento donde los insurgentes musulmanes reciben una intensa instrucción militar.



Keystone

desde el golfo Pérsico hasta el estrecho de Ormuz, con la misma facilidad que si sus bases estuviesen en Teherán. En este sentido, la ocupación de Afganistán implicaba un cambio cualitativo muy importante en la situación geopolítica de la región, en la medida que el poderío militar de Moscú se había acercado peligrosamente a una zona vital para los intereses de las potencias occidentales.

En consecuencia con la gravedad de la situación, ese mismo 28 de diciembre el presidente Carter suspendió sus vacaciones navideñas y retornó a Washington para consultas urgentes con sus colaboradores más inmediatos. Pero además usó el «teléfono rojo» para exigir a Breznev que «suspenda el envío de tropas a Afganistán o se atenga a las graves consecuencias para las relaciones entre Moscú y Washington». La respuesta del líder soviético, aparentemente repuesto de su enfermedad, fue, obviamente, negativa.

La administración norteamericana comenzó a estudiar posibles represalias contra la URSS, y ese mismo 28 de diciembre, tan lleno de acontecimientos trascendentes, viajó a Europa Warren Christopher, subsecretario de Estado, para proponer a los países de la OTAN el análisis de medidas conjuntas. En esos últimos días de 1979 se sucedieron las condenas antisoviéticas, al menos en el plano verbal: Francia, Gran Bretaña, Alemania Federal, Japón, Arabia Saudí, China, etc. China pidió «una alianza global contra el hegemonismo soviético», y de inmediato Estados Unidos prometió proporcionarle alta tecnología militar.

Durante la primera quincena de 1980 Carter fue dosificando medidas sancionatorias: pidió al Senado que postergase el estudio del tratado SALT II, canceló la venta de 17 millones de toneladas de cereales contratada con la URSS, decidió vender moderno armamento a Pakistán, suspendió los privi-



Camera Press/Zarboya

legios pesqueros que los barcos soviéticos tenían en aguas norteamericanas, cesó la venta de alta tecnología a Moscú y congeló los intercambios económicos y culturales.

Como era previsible, el veto soviético impidió que el Consejo de Seguridad aprobase una moción condenatoria. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que no existe el derecho de veto, sí aprobó por 104 votos, entre ellos los de muchos países no alineados, una resolución por la que «deplora profundamente la ocupación y pide la retirada inmediata, incondicional y total de tropas extranjeras en Afganistán». Pero esta decisión sólo tiene valor moral y sólo representa una mera recomendación sin efectos jurídicos.

El 21 de enero, Carter propuso oficialmente boicotear los Juegos Olímpicos de verano, que debían realizarse en Moscú entre julio y agosto de 1980. La idea no fue bien recibida entre los

aliados occidentales, puesto que se recordó la inconveniencia de mezclar deporte y política, al tiempo que se consideró que esta medida podría significar echar más leña a la ya peligrosa hoguera de los conflictos internacionales. Sin embargo, al día siguiente el gobierno soviético ordenó el destierro a una lejana localidad del académico Andrei Sajarov, premio Nobel de la paz y disidente político, lo que intensificó los sentimientos contra Moscú y reforzó la idea de Carter respecto al boicot. Gran Bretaña, Bélgica y los Países Bajos, por su parte, adoptaron medidas para reducir las relaciones comerciales con la URSS, mientras que el gobierno francés asumía una prudente y moderada actitud, buscando espacio político para mediar.

Boicot a las Olimpiadas

Los Juegos Olímpicos de 1980 fueron pensados como los más brillantes, mejor organizados y con la mayor par-

ticipación de atletas de todos los tiempos. La URSS abordó su celebración como la máxima fiesta deportiva realizada hasta entonces, aunque sin duda este impresionante despliegue tenía también objetivos propagandísticos. Casi mil millones de dólares se gastaron en la construcción de instalaciones, remozamiento de estadios y ciudades, coordinación de los servicios de seguridad, contratos con proveedores, etc. Fuera de este presupuesto, habría que sumar el lanzamiento de dos satélites para facilitar las transmisiones radiofónicas y por televisión a todo el mundo.

Lo grandioso del proyecto y la eventualidad de su fracaso hizo pasar a primer plano la campaña a favor del boicot, casi relegando a segundo término la causa argumentada para provocarlo: la presencia soviética en Afganistán. Los meses siguientes fueron de febril actividad, ya fuese para evitar o impulsar el boicot. Lord Killanin, presidente del Comité Olímpico Internacional, hi-

JJ. OO. de 1980

Países que apoyaron el boicot y no concurrieron a Moscú: Albania, Arabia Saudí, Argentina, Antigua, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Bermudas, Bolivia, Canadá, Centroáfrica, Chile, China, Egipto, Fiji, Gabón, Gambia, Ghana, Islas Caimán, Haití, Honduras, Hong-Kong, Indonesia, Israel, Costa de Marfil, Japón, Kenia, Islas Vírgenes, Liberia, Liechtenstein, Malasia, Malawi, Mauritania, Mónaco, Marruecos, Antillas Neerlandesas, Noruega, Pakistán, Papuasía y Nueva Guinea, Paraguay, Filipinas, Singapur, Somalia, Corea del Sur, El Salvador, Sudán, Swazilandia, Tailandia, Togo, Tunicia, Turquía, Chad, Uruguay, Alemania Federal, Zaire y EE. UU.

Países que participaron en los JJ. OO., pero no lo hicieron en la ceremonia inaugural: Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Italia, Luxemburgo, Holanda, San Marino y Suiza. Los atletas portugueses tampoco participaron en la ceremonia, pero estuvo presente en el desfile la bandera de su comité olímpico.

Países que participaron en los JJ.OO., pero expresaron su protesta por la intervención soviética en Afganistán durante la ceremonia inaugural al desfilar sin sus banderas nacionales: Andorra, Australia, Austria, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador y Puerto Rico, que desfilaron con la bandera del Comité Olímpico Internacional, y España que lo hizo con la bandera de su comité.

Países que concurrieron a Moscú y no expresaron ningún tipo de protesta, participando en la ceremonia inaugural con sus banderas nacionales: Afganistán, Angola, Argelia, Benin, Botswana, Brasil, Bulgaria, Birmania, Camerún, Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Chipre, Alemania Democrática, Etiopía, Finlandia, Grecia, Guyana, Hungría, India, Irak, Islandia, Alto Volta, Jamacia, Jordania, Kuwait, Laos, Lesoto, Líbano, Libia, Madagascar, Malí, Malta, Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, Nepal, Nueva Zelanda, Nicaragua, Níger, Nigeria, Corea del Norte, Perú, Polonia, Rumania, Senegal, Islas Seychelles, Sierra Leona, Sri Lanka, Suecia, Siria, Tanzania, Trinidad y Tobago, Uganda, Venezuela, Vietnam, Yugoslavia, Zambia, Zimbabue y URSS.



Al Sport/Foto Foto

zo desesperados esfuerzos por mediar entre Carter y Breznev. Una última posibilidad de aliviar la tensión internacional y de salvar los Juegos Olímpicos la emprendió el canciller alemán Helmut Schmidt, quien el 30 de junio se convirtió en el primer jefe de Gobierno occidental que visitaba la URSS después de los sucesos de Afganistán. El dirigente germano demandó a Breznev la retirada de las tropas soviéticas del país asiático, pero la respuesta fue negativa: «Mientras permanezcan las causas que motivaron nuestra intervención, no podremos retirarnos». Más aún: hábil político, Breznev contraatacó y repartió culpas entre los occidentales por la creciente tensión internacional, unificando el problema afgano con la amenaza atlántica de instalar nuevos misiles. Con este plan-

teamiento la discusión entre las grandes potencias adquirió un carácter global, amplísimo, que hacía imposible el retorno a la «distensión» en un plazo inmediato.

Por otro lado, los observadores coinciden en que los acontecimientos desbordaron las previsiones de la URSS. Cuando el sector «militarista» logró imponer la intervención en Afganistán, los soviéticos pensaron que en pocas semanas, después de instalar un «gobierno amigo», sus tropas podrían regresar a casa. Pero no fue así. Los siete principales movimientos guerrilleros musulmanes unieron sus fuerzas y presentaron una resistencia inesperada. Las tropas de Moscú debieron desplegarse por todo el territorio afgano, sufrir sangrientas emboscadas y reprimir duramente a la población civil.

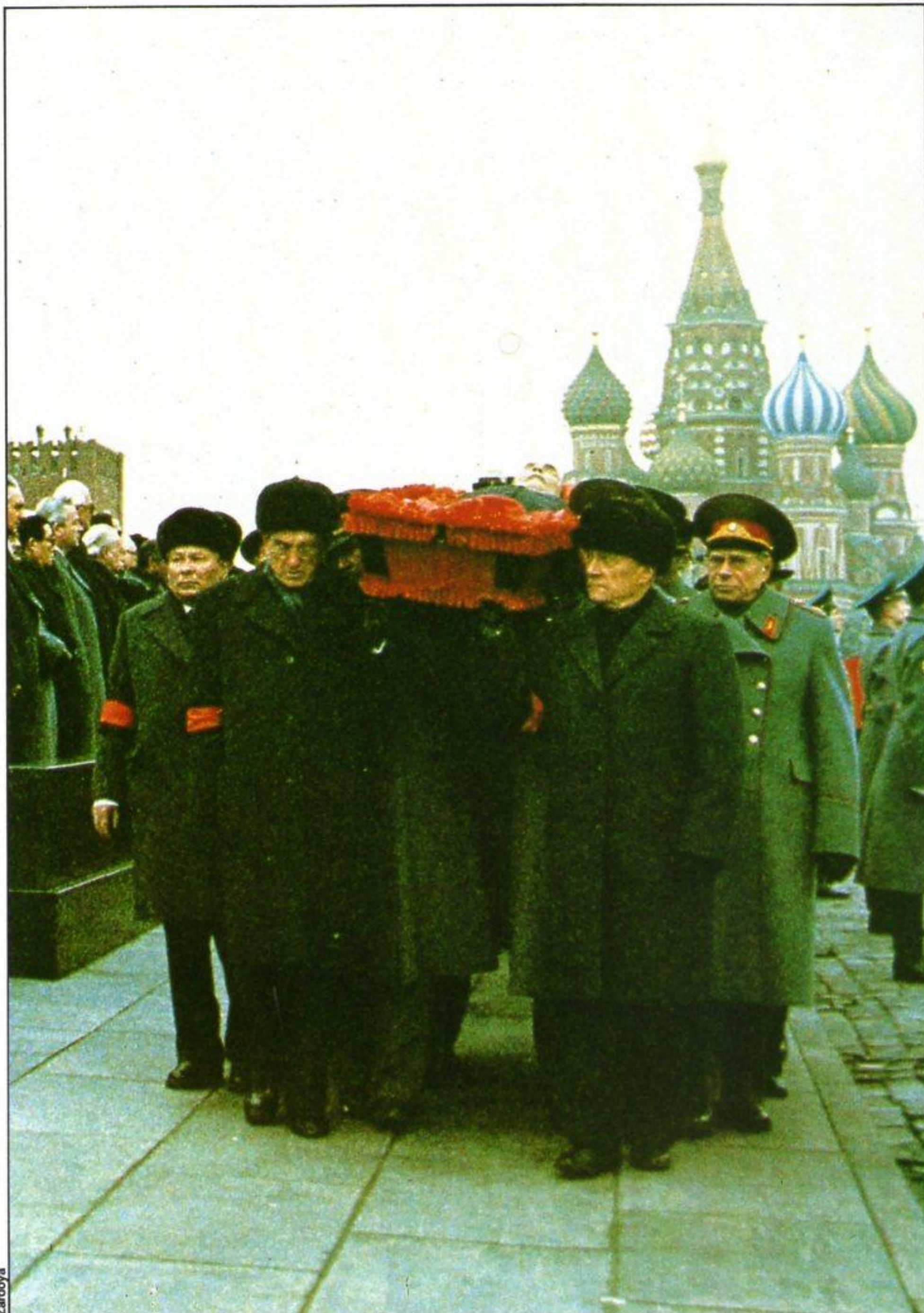
La «era Breznev»

La muerte de Breznev se produjo, según el certificado médico, «después de un súbito paro cardíaco provocado por la arteriosclerosis de la aorta, con desarrollo de un aneurisma al nivel del segmento abdominal de esta arteria, con lesiones de arteriosclerosis estenosante a la altura de las arterias coronarias, así como una enfermedad esquemica cardíaca con trastorno del ritmo y lesiones miocárdicas, después de sufrir varios infartos». Los tecnicismos médicos de los atribulados doctores que atendieron al paciente en sus últimos momentos marcaban el fin de una era. Una era que significó la continuación de la apertura hacia Occidente, iniciada por Nikita Jruschov, y que se concretó en las doctrinas de la coexistencia pacífica y del reparto del mundo en zonas de influencia, en los tratados de limitación de armas nucleares, en la apertura hacia la Alemania Federal, en los acuerdos de Helsinki sobre seguridad y cooperación en Europa, etc. Este rostro negociante y componedor se endurecía cuando miraba hacia la URSS o hacia los países socialistas. La doctrina de la soberanía limitada terminó con la «primavera de Praga» y alentó la represión militar en Polonia. En su propio país, Breznev fue implacable con los disidentes, expulsó a Soljenitsin (haciéndole un favor, por cierto, y provocando la alegría de los antisoviéticos), confinó a Sajarov y reprimió duramente cualquier «desviación» de las minorías étnicas y religiosas. No pudo o no supo abordar con éxito la modernización del aparato productivo soviético, a tal punto que pocos meses después de su muerte su sucesor Andropov no sólo cambiaba a los cuadros dirigentes, sino que también denunciaba la ineficacia, la burocracia y la corrupción que imperaban en sectores clave de la economía nacional, desde la agricultura hasta la industria pesada.

En la página anterior, aspecto de la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos de 1980, en Moscú. Las Olimpiadas se desarrollaron bajo el signo del boicot por parte de varios países que, de esta manera, protestaban contra la intervención soviética en Afganistán. De todas formas, los Juegos tuvieron un normal

desarrollo y fueron un éxito desde el punto de vista organizativo.

En la página siguiente, el sepelio de Breznev. Los dos primeros de la izquierda, portando el féretro, son Andropov y Chernenko, sus sucesores inmediatos. La URSS vivía una etapa de transición basada en la vejez de sus líderes.



Durante la primera quincena de julio se denunciaron ataques soviéticos indiscriminados, «con fines intimidatorios», contra núcleos poblados sin vinculaciones conocidas con los guerrilleros. Se produjeron miles de muertos entre los civiles, y las perspectivas de una larga e incierta guerra determinaron a muchos periodistas occidentales a definir a Afganistán como «el Vietnam soviético».

El fracaso de los intentos mediadores y la cada día mayor participación de Moscú en el país vecino (entonces se estimaba que la URSS tenía casi cien mil hombres en Afganistán) determinaron un cierto éxito del boicot a los Juegos Olímpicos. De todas formas, potencias deportivas de primera línea que desistieron de concurrir a la cita olímpica sólo fueron Estados Unidos,

Canadá y Alemania Federal. Los restantes países europeos se limitaron a protestas simbólicas (no participar en la ceremonia inaugural, no usar la respectiva bandera nacional, etc.) o a un boicot parcial, como en el caso de Italia: el gobierno de este país impidió la concurrencia a Moscú de los atletas que eran militares profesionales o que estaban haciendo el servicio militar. Otros países no asistieron porque sus gobiernos no les brindaron respaldo económico, aunque sus respectivos comités olímpicos hubiesen rechazado el boicot. Hasta el «estado libre asociado» de Puerto Rico envió una pequeña delegación de pugilistas, «para demostrar que somos un país libre», según declaró en numerosas oportunidades Choco Álvarez, jefe de la minúscula embajada deportiva.



Andropov junto a Fidel Castro y K. Rusakov, secretario del Comité Central del PCUS. Era en el comienzo del breve período de gobierno del ex-jefe de la KGB.

El reino de la gerontocracia

Pese a las tres notables ausencias anotadas, las intenciones de Carter de hacer fracasar las Olimpiadas no se concretaron en la medida que él esperaba. Por el contrario, la URSS demostró su capacidad organizativa y hasta recogió las simpatías de quienes vieron con malos ojos la mezcla de los temas políticos con los deportivos.

En noviembre de 1980, Ronald Reagan derrotó a Carter en la lucha por la presidencia de Estados Unidos. La tensión internacional creció por esta circunstancia, por el surgimiento del problema polaco, por la ampliación de los conflictos en los países árabes y por la persistencia de la crisis afgana. Transcurrieron dos años difíciles, en los que la amenaza atómica parecía planear cada día a más baja altura. El 7 de noviembre de 1982, Breznev aparece por última vez en público, en los actos celebratorios de un nuevo aniversario de la Revolución Rusa. Se le ve muy desmejorado, y dos asistentes deben ayudarlo a subir y bajar las escaleras. Queda muy poco del entusiasta coleccionista y conductor de Mercedes Benz, Rolls y Masserattis, buen bebedor, gran fumador y galanteador de mujeres. No obstante, y con el eco de

las huelgas y disturbios que se repiten en Polonia como fondo, pronunció un enérgico discurso. «Aquellos que pretendan emprender aventuras militares —dijo— nunca se apoderarán de la tierra de los soviets, ya que no podrán evitar una respuesta aplastante. (...) El poder y la vigilancia de la URSS terminarán enfriando las cabezas calientes de algunos políticos imperialistas.»

Quizá nunca se enteró de que dos días después, el 9, 700 de sus soldados y casi 2.000 civiles afganos morían en el túnel que une Kabul con el norte de Afganistán: un camión cisterna se incrustó contra la cabeza de un convoy militar soviético, se produjo un incendio, los soldados creyeron que se trataba de un atentado y cerraron las bocas del túnel; las víctimas murieron asfixiadas. En efecto, a las 11 de la mañana del 11 de noviembre, la radio y la televisión soviéticas anunciaron que «el partido Comunista de la Unión Soviética y todo el pueblo soviético han sufrido una gran pérdida. Dejó de existir un fiel continuador de la gran causa de Lenin, ardiente patriota, eminente revolucionario y luchador por la paz, por el comunismo, gran personalidad política y de Estado de nuestro tiempo, Leónidas Ilich Breznev».

El deceso se había producido el día anterior, el 10, por un paro cardíaco. El 12, Yuri Andropov fue designado secretario general del partido Comunista, y en pocos meses, al menos formalmente, acumuló todo el poder que había tenido Breznev. Sus ancianos compañeros de la dirección le facilitaron el ascenso, pero su propia salud estaba resentida, y durante largos períodos desapareció de la escena. La tensión internacional subió a niveles insospechados a finales de 1983, cuando los misiles anunciados en 1979 comenzaron a apuntar hacia la URSS. Pero ésta parecía descabezada, hundida en un vacío de poder provocado por la gerontocracia del partido. Tras varios meses de rumores, en febrero de 1984, falleció Andropov. Le sucedió Konstantin Chernenko, otro anciano enfermo. Era un vacío que se asemejaba a una invitación para que lo llenase el sector militarista. Al otro lado del mapa, en el mismo mes, Reagan cumplió 73 años y anunció que se postulaba a la reelección. La suerte del mundo oscilaba entre ancianos enfermos y ancianos parlanchines que se pintaban el pelo y se creían dueños del destino de la humanidad. Y el mundo tenía miedo...

Golpe militar en Polonia

Walesa resquebraja el sistema

Carlos Enrique Bayo Falcón,
periodista

El movimiento sindical polaco ha constituido una de las experiencias políticas y sociales más importantes del siglo. No sólo por la extensión y profundidad de su arraigo en las masas obreras, que reclamaban libertad y una mayor

participación en los asuntos del país, sino porque también, por primera vez, un régimen comunista aceptó la formación de un sindicato autónomo. Abajo, Lev Walesa es llevado en triunfo por sus partidarios.

En 1956 Nikita Jruschov comenzó la desestalinización, y algunos pueblos pensaron que se iniciaba un proceso de «socialismos nacionales» en Europa. Húngaros y polacos lo creyeron inmediatamente. Los checoslovacos doce años después. Los tanques soviéticos, sin embargo, siempre recordaban la dura realidad. Pese a ellos, los polacos mantuvieron permanentemente su ilusión. Y así protagonizaron la insólita experiencia de Solidaridad, dirigida por Lev Walesa, que se truncó bruscamente tras el golpe militar del 13 de diciembre de 1981.





La rebelión permanente

La población polaca, fervientemente católica en más de un 90%, había visto como era encarcelado el carismático cardenal Stefan Wyszyński, en septiembre de 1953, y como el único líder comunista popular, Władysław Gomułka, había sido sancionado por su nacionalismo. La situación social infrahumana de la posguerra se les hacía insostenible bajo la ocupación de los odiados rusos, representados por el mariscal soviético Konstantin Rokossovski, y ante el surgimiento de una privilegiada burocracia estaliniana. Unas semanas después de la «autocrítica» de Jrušov, la Polonia tradicional y anticomunista se sublevó y «el pueblo de mayor fe de toda Europa» emprendió una nueva serie de insurrecciones fracasadas contra un dominio que otra vez venía de Moscú y además arrastraba la carga del ateísmo marxista-leninista.

El 28 de junio de 1956, los obreros de Poznań, azotados por la escasez de alimentos, se rebelaron contra las autoridades, que llamaron en su apoyo a las tropas soviéticas aún presentes en Polonia. Ciento trece trabajadores perecieron a tiros y más de trescientos resultaron heridos, pero las huelgas persistieron durante un mes y de la fábrica de automóviles Zeran de Varsovia partió el primer llamamiento a la

formación de Consejos Obreros desde que Rosa Luxemburgo y Julián Marchlewski fundaran en 1918 el Partido Comunista de Polonia.

En octubre, el Kremlin comprendió que no podía controlar por la fuerza a los indómitos polacos, que jamás olvidarían las tres particiones de su país ni la traición soviética durante la insurrección de Varsovia contra los nazis, y decidió «recuperar» a Gomułka. Éste, encarcelado como el héroe polaco Pilsudski —que pasó tres años en el presidio de Magdeburgo por negarse a jurar fidelidad a los Imperios Centrales y que combatió a las tropas del zar—, fue rehabilitado. La débil estructura del POUP de Bierut se derrumbó el 19 de octubre. Dos días después, Gomułka fue elegido primer secretario del partido. Rokossovski dimitió y regresó a la URSS.

Gomułka, con las tropas soviéticas a dos kilómetros de Varsovia, reconoció a los Consejos Obreros, que ya estaban creando milicias para las que pedían armas, liquidó la censura política, prometió sindicatos libres y anunció el fin del estalinismo. La intervención de los tanques soviéticos en Hungría convenció a muchos polacos, que participaban en mítines de solidaridad con los húngaros, de que Gomułka había sabido evitar la invasión. Lo primero

que dispuso el nuevo líder fue la liberación de Wyszyński y la devolución a los pequeños propietarios del 87 % de las tierras que habían sido colectivizadas, aunque el Estado conservaba el monopolio de la comercialización de los productos agrícolas y ganaderos.

El año siguiente, Gomułka disolvió los Consejos Obreros, tras obtener una contundente victoria en el POUP contra los estalinistas, y cerró las publicaciones trotskistas. También obtuvo créditos de Estados Unidos, deseoso de fomentar su independencia con relación a la URSS, y logró formar un régimen comunista aliado de Moscú que mantenía una «autonomía» económica e ideológica, especialmente en lo que atañe a la Iglesia, a la que trataba de emplear como elemento moderador y a la que el Estado respetaría en adelante.

Gomułka potenció la producción industrial, para aumentar su independencia económica, pero descuidó el campo que estaba en manos de un campesinado pequeño-burgués experto en hacer acopio de alimentos durante las continuas revueltas nacionalistas, a las que siempre había apoyado. Asentado en un poder ya burocratizado, Gomułka liquidó las conquistas del «octubre polaco» y detuvo, en 1964, a los dirigentes estudiantiles de 1956,



En la página anterior, Adam Gotnev, un obrero que vivió intensamente los sucesos polacos de 1970, explica a la prensa el contenido de una exhibición de fotografías en torno a esos incidentes que provocaron la caída de Gomulka. El caso del pueblo polaco es casi único en la historia de la humanidad, en tanto ejemplo de lucha para salvaguardar su propia esencia nacional.

En esta página, arriba, el antiguo jefe del comunismo polaco, Wladislaw Gomulka. Defenestrado en la posguerra, por sus ideas nacionalistas, la URSS lo «rehabilitó» en 1956 para que tratase de controlar una difícil situación. En 1970 cayó otra vez en desgracia a raíz de las grandes protestas populares. A la derecha, homenaje a las víctimas de ese año, en Gdynia.

Kuron y Modzelewski, que llamaban en una «carta abierta al Partido» a reconstruir los Consejos Obreros.

La era de Gierek

En la primavera de 1968, de nuevo adelantándose a otra insurrección en el Este, esta vez la checoslovaca, los estudiantes polacos salieron a las calles y las manifestaciones fueron reprimidas con violencia. Los problemas económicos de los trabajadores, sometidos a un gran esfuerzo industrial, se acrecentaron con el constante aumento del coste de la vida, el desabastecimiento de alimentos y otros productos, que sólo se encontraban en abundancia en el carísimo mercado negro.

Las dificultades provocaron un endurecimiento del régimen, sin duda bajo presión de Moscú, y Gomulka cometió el error de decretar, pocos días antes de la Navidad de 1970, un aumento del 30 % en los precios de los alimentos. Del 15 al 19 de diciembre se produjeron huelgas insurreccionales en los astilleros de Gdansk, Gdynia y Szczecin, en el Báltico. En la que fuera ciudad libre de Dantzing para los alemanes, a pesar de la firme oposición del joven ministro de Defensa, Wojciech Jaruzelski, el Ejército disparó contra los estibadores, mató a 45 e hirió a más de mil; Gomulka dimitió.



Edvard Gierek, un hombre surgido del proletariado, cuyos padre, abuelo y tío habían perecido en accidentes de minas, que había trabajado como minero desde los 13 años en Francia y Bélgica, que había participado en la resistencia contra los nazis y que, de regreso a Polonia como bregado militante comunista, había ascendido en el POUP y había batallado con las autoridades de Varsovia hasta conseguir beneficios para los mineros de Alta Silesia, se convirtió en el nuevo y popular líder del POUP. Su estilo abierto y sencillo, sus entrevistas con los comités obreros para atender las reivindicaciones, su liberalismo francófilo, que abría Polonia a la cultura occidental, cautivaron a los polacos, encantados de que la madre del nuevo máximo dirigente fuese una ferviente católica.

Gierek, un incompetente bien intencionado, que exigía que su esposa Stanislawna fuese la que le lavase la ropa, abrazó la política de pedir créditos a Oriente y Occidente para crear una industria con cuyas futuras ventas contaba para devolver los préstamos. Al mismo tiempo, aplacó a la clase obrera ofreciéndole un mejor nivel de vida y contentó a la burocracia dando manga ancha a la corrupción de los altos cargos y a las supercomisiones del «import-export». Mientras esa gestión

económica elevaba brutalmente la deuda exterior polaca (que se quintuplicó de 1970 a 1974) y provocaba penuria alimenticia al ser precisas las exportaciones agrícolas y cárnicas para pagar los intereses crediticios, el Kremlin impuso la revisión de la Constitución comunista de 1952, para que incluyese, a partir de febrero de 1976, la obligatoriedad del papel dirigente del POUP y de la amistad con la URSS. El cardenal Wyszynski y otras 59 personalidades, en el único país del bloque soviético en que los católicos tenían representación parlamentaria (en el «Sejm»), criticaron el texto legislativo y el control estatal de las elecciones de marzo.

El 25 de junio de 1976, al amanecer del día siguiente a un aumento del 60 % de los precios de los alimentos subvencionados, las grandes industrias automotrices de los suburbios de Varsovia, encabezadas por Ursus y Zeran, declararon una huelga que se extendió como un incendio. A mediodía los obreros de Radom se enfrentaron a los policías antidisturbios, y se produjeron varios heridos graves. Por la noche, Gierek anuló los aumentos de precios. Jacek Kuron, Adam Michnik, Lev Walesa y otros intelectuales y obreros despedidos por su participación en la dirección de las huelgas formaron,

El acuerdo de Gdansk

El acuerdo firmado el 31 de agosto de 1980 entre la Comisión Gubernamental y el Comité de Huelga contenía 21 puntos, de los cuales los diez primeros eran los esenciales.

1) Creación de nuevos sindicatos autogestionarios que representarán auténticamente a la clase obrera. Los nuevos sindicatos independientes respetarán los principios definidos por la Constitución, no tienen la intención de desempeñar el papel de un partido político, respetarán el principio de la propiedad colectiva de los medios de producción, reconocen el papel dirigente del POUP en el Estado y no pondrán en tela de juicio las alianzas internacionales de Polonia. Podrán expresar públicamente su opinión sobre las decisiones fundamentales que determinan la vida de los trabajadores: reparto del presupuesto nacional, presupuesto de asuntos sociales, política salarial, planificación económica a largo plazo.

2) El derecho de huelga quedará garantizado por la ley para los nuevos sindicatos.

3) Se respetará la libertad de expresión que marca la Constitución y el Gobierno presentará en el plazo de tres meses un proyecto de ley sobre el control de la prensa, publicaciones y espectáculos en base a los siguientes criterios: la censura protege el secreto del Estado, el secreto económico, la seguridad del Estado y sus intereses internacionales, el sentimiento religioso y el de los no creyentes e impide todo atentado a las buenas costumbres. Sus decisiones podrán ser anuladas por el Tribunal Administrativo Supremo.

4) Liberación de los presos políticos y reexamen inmediato de todos los casos de despido ocurridos después de las huelgas de 1970 y 1976 y de los casos de expulsión de estudiantes.

5) Elaboración acelerada de un plan de reforma económica. Sus líneas fundamentales serán definidas por las autoridades en los próximos meses en el marco de una amplia participación pública. La reforma otorgará una amplia autonomía a las empresas y una participación real de las células de autogestión en las decisiones que afectan a su funcionamiento.

6) Las jornadas de huelgas serán pagadas al ciento por ciento.

7) Aumento de los salarios, que afectará progresivamente a todas las categorías de trabajadores empezando por los ingresos más bajos. Los empleados de la Administración ascenderán automáticamente a la categoría superior en la escala salarial.

8) El Gobierno elaborará de aquí a finales de año un programa que intente compensar los aumentos del coste de la vida con respecto a los salarios. Se intensificará el control de los precios de los productos de primera necesidad.

9) Se aumentará la rentabilidad de la producción agrícola pagando mejores precios al productor, al tiempo que se reducirán las exportaciones de carne y aumentarán las importaciones para garantizar el abastecimiento del mercado.

10) El principio de elección de cuadros dirigentes, según sus aptitudes y competencias, será estrictamente aplicado con los miembros del partido.



EFE

En esta página, arriba, Edvard Gierk, quien corrió la misma suerte de Gomulka a causa de las protestas obreras.

Abajo, reunión de representantes del gobierno y de los trabajadores, al

iniciarse el difícil año de 1980. De espaldas, Lev Walesa, fundador del sindicato Solidaridad.

En la página siguiente, concentración ante los astilleros Lenin, en la ciudad de Gdansk.

durante la ola de detenciones y condenas del siguiente otoño, el Comité de Autodefensa de los Obreros (KOR). El KOR pronto dejó de ser una organización clandestina de ayuda a los perseguidos para convertirse en el centro de reunión y conspiración de las personalidades de la oposición socialista antisoviética.

En 1977, el Sejm promulgó una amnistía, aprobó leyes que permitían el alquiler de comercios estatales por empresarios privados que empleasen tres o más personas y que facilitaban la venta de tierras del Estado a particulares. Esa tardía y tímida descentralización económica llegó cuando la crisis ya era extremadamente grave. Durante los dos años siguientes proliferaron los grupos en defensa de los derechos democráticos. Walesa, despedido de su puesto de electricista en los astilleros Lenin de Gdansk por su labor como delegado sindical durante las huelgas de 1970 y privado de empleo de nuevo tras la movilización de 1976, fundó la clandestina Unión de Sindicatos Libres del Báltico, en abril de 1978. Kazimierz Switon hizo lo propio en Silesia. Aparecieron numerosas revistas obreras, como *Robotnik*.

Dios tomó partido

La chispa del movimiento sindical polaco fue la elección del cardenal Karol Wojtyla, arzobispo de Cracovia, como primer Papa polaco, y su visita



Magnum/Zardoya



EFE

a Polonia, en junio de 1979. Los polacos, que acudieron por millones a recibir a Juan Pablo II, pensaban que Dios parecía estar, al fin, de su parte. Las primeras huelgas de los astilleros Lenin de Gdansk comenzaron en febrero de 1980; la nueva oleada obrera no amainó pese a la sustitución, en el VII Congreso del POUP, del primer ministro Piotr Jaroszewicz por Edvard Babiuch. Jaroszewicz había prometido, en las negociaciones de diciembre de 1970 y enero de 1971 con los comités obreros de los astilleros Lenin y de los Warski de Szczecin, cuando el 60 % de las fábricas polacas estaba en huelga, elecciones libres en el POUP, los sindicatos y la administración, la liberación

de los presos políticos y el castigo de los responsables de la matanza de Gdansk. Esas promesas supusieron un margen de confianza de «dos o tres años» de los trabajadores a Gierek, quien dirigió personalmente la negociación, pero fueron incumplidas.

Un breve anuncio oficial sobre próximos aumentos de precios desencadenó, el 1 de julio de 1980, el empuje huelguístico definitivo. Durante la primera quincena del mes permanecieron en paro Ursus y otras grandes empresas del país. A lo largo de la segunda quincena, las huelgas se extendieron a los servicios públicos de Lublin y a las empresas de Wroclaw, Ostrow, Wielkopolski, Lubartow y Chelm. El régi-

men de Gierek había fomentado unas expectativas de consumo que se habían visto frustradas y había elevado la deuda externa de 5.000 a 25.000 millones de dólares, dejando al país prácticamente en bancarrota. La economía polaca «respira» del carbón, pero el inadecuado sistema ferroviario y la corrupción e incompetencia de los dirigentes que ascendieron con Gierek habían hecho descender la producción de ese mineral.

Un ejemplo del despropósito de la gestión del equipo Gierek fue la compra de un costosísimo sistema occidental para la descarga de carbón a temperaturas bajo cero diseñado para vagones de metal. Como el parque móvil

Las consignas de Solidaridad

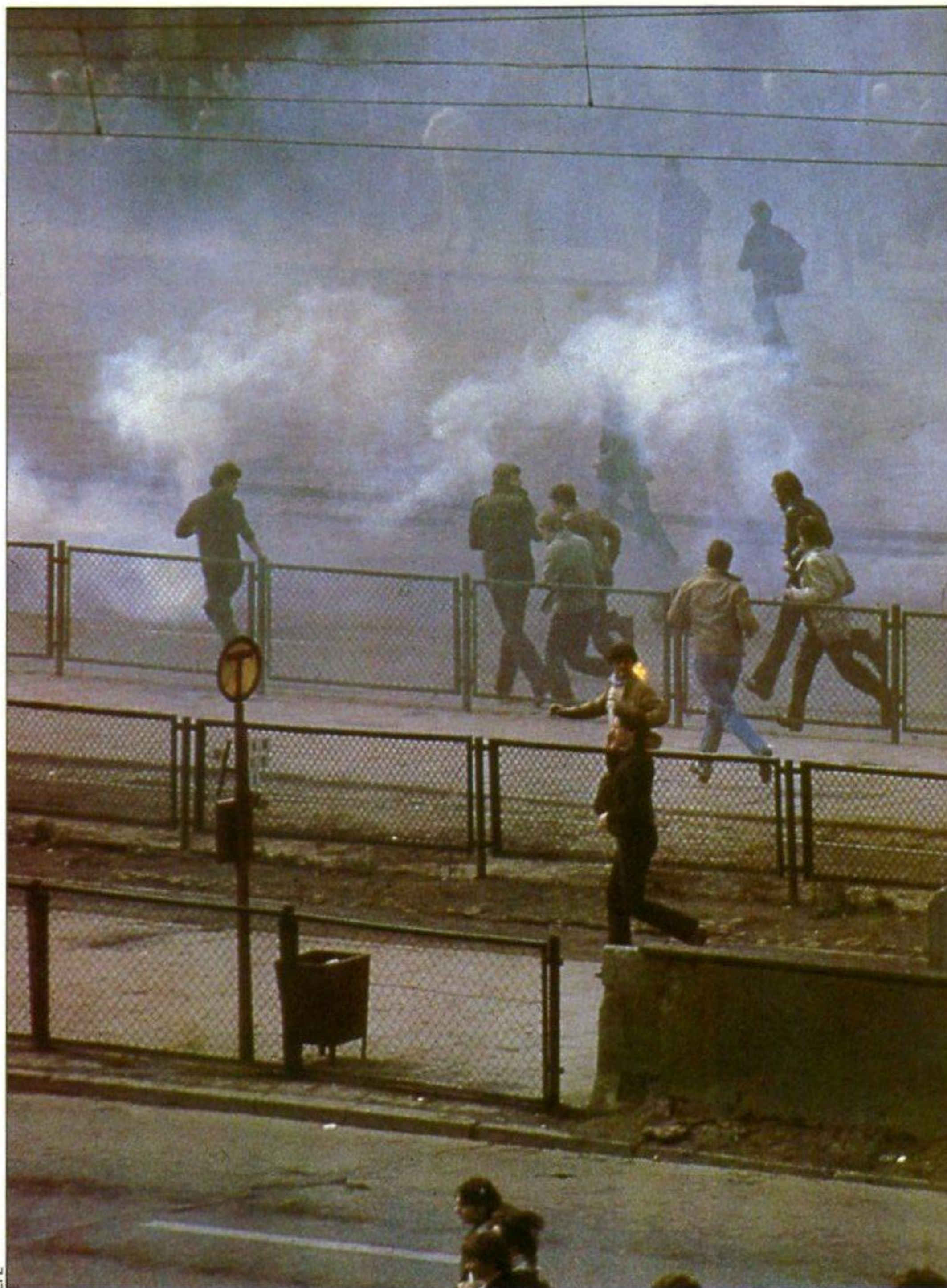
Las principales instrucciones emitidas por Solidaridad, en marzo de 1981, para el caso de un golpe de Estado eran las siguientes:

«Para impedir el exterminio del sindicato y el aislamiento de sus líderes, que están en la lista negra, el medio más eficaz de la sociedad es proclamar la huelga general, que deberá tomar dos formas paralelas: la de ocupación, que seguirán los trabajadores de las grandes ramas y empresas industriales, y la de ayuda mutua, que llevarán las otras empresas, en las que no se acudirá al puesto de trabajo, y los centros de enseñanza. El punto crucial del combate de la huelga general estará en las empresas ocupadas, que constituirán fortalezas a las que deberán ir los militantes expuestos a la represión.»

En las empresas ocupadas por los trabajadores, «las entradas y salidas estarán regidas por autorización del comité de huelga y el servicio de orden vigilará los locales 24 horas al día mediante patrullas que deberán mantener contacto visual y auditivo. El comité nacional de huelga podrá pedir a una u otra empresa que trabaje, por motivos humanitarios o sociales. Si tratan de emplear la fuerza contra los huelguistas, hay que resistir de forma pasiva.»

«Si os obligan a trabajar, hay que quebrantar el ritmo de trabajo, retardar la producción, aplicar celosamente todas las reglas burocráticas.»

A los campesinos, Solidaridad les aconsejaba: «proteged los alimentos de las incautaciones; intercambiarlos en las ciudades por productos industriales necesarios para el campo. La huelga la dirigirá el comité de la mayor empresa de la región». A los soldados y miembros de las fuerzas de seguridad, el sindicato les pedía que, como deber patriótico, «se opongan a las órdenes por todos los medios posibles y destruyan todos los documentos que puedan facilitar el exterminio de los polacos».



EFE

ferroviario polaco sólo contaba con vagones de madera, éstos ardían antes de que se descongelase el carbón. En consecuencia, en los puertos del Báltico los buques debían esperar hasta ochenta días para cargar, a pesar de que Polonia pagaba fuertes multas en dólares por cada día de retraso.

El tenso y largo 1980

Durante los primeros meses de 1980, la poderosa Iglesia (que cuenta con cinco arzobispados, veintitrés obispados, 6.560 parroquias, 48 seminarios, una universidad, un diario, 42 publicaciones y once editoriales) apoyó las reivindicaciones obreras, siguiendo la táctica de Wyszynski de aprovechar la conflictividad social para

defender las parcelas de libertad que le otorgaba el Estado hegemónico. De pronto, la huelga iniciada en Ursus se expandió a los astilleros de Gdansk (14 de agosto) y los estibadores ocuparon las instalaciones, a las que acudían los sacerdotes radicales de la zona para decir misa y alentarles en su lucha.

Los astilleros Lenin obtuvieron la readmisión de Walesa, despedido siete meses antes, exigieron la reincorporación de otra dirigente histórica, la conductora de grúas Anna Walentinowicz, atrajeron a la huelga a otros astilleros y crearon el Comité de Huelga Interempresas (MKS). Los huelguistas ya no confiaban en promesas ni en las fuerzas de seguridad. Se atrincheraron en las fábricas y complejos portuarios,

En ambas páginas, un ejemplo del grado de violencia a que recurrió el gobierno polaco para controlar el movimiento sindical surgido en 1980. Durante muchos meses, los gobernantes oscilaron entre el diálogo y la dureza.

En la página siguiente, arriba, Stanislaw Kania, fracasado sustituto del cuestionado Gierek. Abajo, el Papa y el arzobispo de Varsovia, Monseñor Josep Glomp. Desde siempre, la Iglesia ha tenido gran importancia en Polonia.



donde los familiares les llevaban alimentos, mientras la revuelta iba prendiendo en todo el país. El MKS presentaba dieciséis exigencias en las que las demandas económicas y sociales ya no eran el núcleo de la lucha.

Una comisión gubernamental dirigida por Tadeus Pyka acudió a Gdansk el 17 de agosto y regresó urgentemente a Varsovia al comprender que la insurrección sólo se detendría con la autorización para el funcionamiento de sindicatos libres y la garantía de libertad de expresión y derecho de huelga. El 18 por la noche, Gierek se dirigió por TV al país, desencajado, para advertir de los riesgos que suponía la politización de las huelgas y mostrarse dispuesto a hacer concesiones. A la maña-

na siguiente, los trabajadores de los astilleros de Szczecin y Gdynia, de decenas de grandes empresas en las ciudades industriales, de los altos hornos de Nowa Hutta y de las minas de Silesia se declararon en huelga.

En realidad, cada uno de los paros obreros respondía a reivindicaciones locales de tipo laboral o salarial, pero la larga trayectoria de lucha de los trabajadores polacos había consolidado una solidaridad y coordinación nacionales con el apoyo de la Iglesia. La insurrección espontánea prendió al tratar Gierek de paliar el movimiento, aceptando todas las exigencias localizadas que no tuvieran carácter político. Lo único que logró fue que las huelgas se multiplicasen ante el éxito de las primeras.



El vicepresidente del Gobierno, Mieczyslaw Jagielski, sustituyó a Pyka al frente de la comisión especial, que aceptó la representatividad del MKS de Walesa y se sentó a negociar con él en Gdansk el 23 de agosto. Un día después, el Comité Central del POUP reemplazó a varios de los cargos centrales del Politburó, «quemados» y desprestigiados; Babiuch dimitió y Jozef Pinkowski ocupó su puesto.

Las huelgas se extendieron y a finales de agosto el país estaba semiparado. El MKS de Gdansk, adonde habían acudido delegados de los comités de toda Polonia, amenazó a Gierek con una huelga general nacional si no eran legalizados los sindicatos autogestionarios. Aterrado ante la posibilidad

Guía de la resistencia

Durante los días siguientes a la implantación de la ley marcial, la dirección clandestina de Solidaridad divulgó una «guía de la resistencia» en la que recomendaba:

«En caso de huelga no debe haber líderes ni comités».

«Si te interrogan debes ser ingenuo. No sabes nada y estás desorientado».

«No te hagas eliminar estúpidamente a causa de actos de coraje desconsiderados».

«Tu enemigo es el miliciano, el empleado demasiado celoso, el colaboracionista».

«Trabaja lentamente, critica el desorden y la ineficacia de los jefes. Deja toda decisión a los comisarios militares y a los colaboracionistas, sumérgeles con preguntas, descarga sobre ellos las dudas, no pienses por ellos, hazte el estúpido. Sigue al pie de la letra incluso las instrucciones más locas, porque la estupidez de los reglamentos es tu aliado más seguro.»

«Toca a los militares y a los colaboracionistas realizar todo el trabajo sucio. Si creas el vacío en torno a esos carroñas, provocarás una desintegración de la maquinaria militar y política, al inundarla de pequeños problemas».

«Si un carroña te ordena pasar por encima de los reglamentos, pide una orden escrita, da largas al asunto, lamentate y antes o después el comisario militar querrá que le dejes en paz. Será el principio del fin de la dictadura».



Sobre estas líneas, un aspecto del congreso de Solidaridad, en 1981. Sus demandas radicales, opuestas a la actitud más prudente de Walesa, motivaron la drástica reacción del gobierno. Arriba, un portavoz oficial del Ejército anuncia, el 13 de diciembre de 1981, la implantación de la ley

marcial, que implicó un verdadero golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas asumieron todo el poder, creando otra situación inédita en un régimen comunista.

En la página siguiente, tanques en las calles de Gdansk, después del golpe de Estado, listos para intervenir.

Magnum/Zardoya



de una revuelta nacionalista que provocase la intervención militar soviética, Gierek ordenó a Jagielski que cediese y el 30 de agosto accedió a los 21 puntos del MKS, que suponían la primera autorización para la existencia de sindicatos autónomos, libertad de expresión, reunión y asociación, y derecho de huelga y de intervención en los asuntos gubernamentales que concedería un régimen comunista a sus trabajadores.

El acuerdo también supuso el fin de la era Gierek y una profunda depuración del POUP, que además perdió 800.000 militantes en los siguientes tres años, hasta quedar con 2.200.000 miembros en 1984, frente a una población de 38 millones de personas.

Los acuerdos de Gdansk fueron ratificados por el Comité Central y se firmaron el 31 de agosto, fecha histórica en la que empezó el «verano polaco». Stanislaw Kania, un dirigente comunista anodino que moderaba a los que, como Stefan Olszowski, deseaban pararles los pies a los sindicalistas, se convirtió el 5 de septiembre en primer secretario del POUP, desplazando a Gierek, que había optado por abandonar el cargo «por motivos de salud» poco antes de la firma de los acuerdos de Gdansk, que fueron rubricados de nuevo en Szczecin y en las minas de Katowice.

Solidaridad

El 22 de septiembre, reunidos bajo la presidencia de Walesa, más de cien delegados de 35 sindicatos independientes creados en toda Polonia formaron una «unión de carácter federal» que bautizaron Solidaridad (Solidarnosc), con sede en Gdansk. Al día siguiente, presentaban la solicitud de legalización de la central al tribunal de Varsovia. La brisa de democratización acariciaba toda la sociedad polaca, que hervía con iniciativas para crear asociaciones culturales, religiosas y sociales. A finales de octubre, el juez correspondiente aceptó registrar a Solidaridad, pero ordenó que los sindicalistas modificasen los estatutos en lo que respecta al papel dirigente del POUP, que no estaba específicamente mencionado. Hicieron falta dos semanas de negociaciones bajo la amenaza de una huelga general para que el Tribunal Supremo anulase la decisión judicial y registrase a Solidaridad, el 10 de noviembre.

Kania y Pinkowski viajaron a Moscú el 30 de octubre y recibieron órdenes de normalizar la situación, pero ni ellos sabían cómo hacerlo ni el Kremlin se atrevía a emplear la fuerza en Polonia, cuyo Ejército muy bien podía volverse contra las tropas invasoras con mucha más decisión que la de los soldados húngaros o checoslovacos. Jaruzelski, el más joven general del Ejército pola-



co y el militar con más prestigio, no quiso ocupar el puesto de Gierk cuando le fue ofrecido, y había asegurado que «los soldados polacos no dispararán contra los obreros polacos».

Walesa, un líder y organizador nato, con un instinto especial para saber la medida de las acciones y sus límites, convertido en un héroe nacional e internacional y admirado por la habilidad con la que evitó que sus compañeros se lanzaran a acciones violentas durante las huelgas de agosto, se entrevistó con Kania el 14 de noviembre y no cedió un ápice en su posición, a pesar de que el propio Jaruzelski había amenazado con la intervención del Ejército ante la creciente conflictividad laboral. Moscú abrió una campaña contra las amenazas antisocialistas y la intervención occidental en Polonia, e interfirió, por primera vez en 17 años, las emisiones francesas, alemanas, británicas y de Estados Unidos en ruso.

En enero de 1981, Solidaridad tenía diez millones de afiliados, recibía el apoyo económico y político de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de los sindicatos europeos y norteamericanos, y contaba con decenas de publicaciones, locales y redes de coordinación de la resistencia. Sus dirigentes cobraban sueldos del Estado. Los sindicatos oficiales de rama estaban desmantelados.

La nueva ola de huelgas, con motivo de la reivindicación de la fiesta de los sábados, concedida por los acuerdos de Gdansk, duró un mes y culminó con el compromiso de que tres sábados de cada cuatro serían festivos, a pesar de la insostenible situación económica, agravada por los paros laborales, los aumentos de sueldo y ventajas sociales —que rebajaban la productividad— concedidos, así como por las rebajas de precios aceptadas.

El 10 de febrero, Jaruzelski ocupó el puesto de Pinkowski como jefe del Gobierno. Kania sorteó a duras penas la presión de los «halcones» del POUP y defendió su política de «renovación controlada» en el Congreso del PCUS, ante la «cumbre» del Pacto de Varsovia y frente a Olszowski y el Kremlin, que insistían en que la situación polaca era insurreccional y había que frenarla por la fuerza. El Pacto de Varsovia proclamó, en diciembre de 1980, que Polonia «ha sido, es y será un país socialista».

La primavera de 1981 fue escenario de violentos incidentes especialmente en Bydgoszcz, por parte de los campesinos, que exigían el reconocimiento de una Solidaridad agrícola y eran apoyados por los sindicatos obreros. El gobierno de Varsovia, opuesto a la confederación de los agricultores, que eran considerados el germen de la bur-

guesía y de la oposición a la colectivización de la propiedad, resistía el empuje social hasta que, el 6 de mayo, el Parlamento accedió a legalizar la central campesina.

En junio, el Comité Central del POUP, reunido para discutir una carta del Politburó de la URSS que ponía en cuestión a Kania, no logró desbancar al secretario general, que también impulsó su línea centrista en julio en el IX Congreso del POUP. Pero a finales de ese mes se desencadenaron «marchas del hambre» en muchas ciudades contra la escasez de alimentos, cuyos precios subieron a pesar del movimiento obrero. La carne, de la que el 50 % de la producción se vendía en el mercado negro a precios desorbitados, estaba racionada. Jagielski abandonó el Gobierno, en el que entraron tres generales en activo junto a Jaruzelski.

Wyszynski murió el 28 de mayo, y su sucesor, el obispo de Warmia Jozef Glemp, no tenía la talla política para controlar la situación. El verano caliente de 1981 llevó a Breznev a dar un ultimátum a Kania y a Jaruzelski. En medio de semejante caos, Solidaridad realizó la fase inicial de su primer Congreso, en Gdansk, del 5 al 10 de septiembre, y Walesa no logró contener esta vez a los más radicales como Jan Rulewski o Karol Modzelewski, presidente del sindicato regional de Wro-

Lev Walesa, un símbolo

El líder indiscutible de los trabajadores polacos es un hombre sencillo, valiente y firme como una roca que nació el 29 de septiembre de 1943 en Popowo, una pequeña localidad en el centro de Polonia. Lev Walesa estudió para electricista y a los 24 años comenzó a trabajar en los astilleros Lenin de Gdansk, al tiempo que se lanzaba con entusiasmo a la lucha sindical que marcaría su país durante la segunda mitad del siglo.

Ya en 1970 demostró su capacidad innata para influir y arrastrar a las masas. Las sucesivas represalias que padeció por su actividad sindical acrecentaron su prestigio hasta que, diez años más tarde, era una auténtica leyenda entre los obreros. Bajo y sólido, de pelo y ojos marrones, inconfundible por sus grandes bigotes y su pipa siempre en la boca, Walesa es decidido pero moderado. Tras la victoria obrera de 1980, trató de evitar la creciente influencia de ideólogos radicales como Rulewski, Jurczyk y Gwiazda. Los triunfos de Solidaridad, que logró imponer durante 1981 una auténtica autogestión parcial en las fábricas y que forzó el cese de los burócratas corruptos como el célebre Szczepanski, se subieron, sin embargo, a las cabezas de aquellos dirigentes. A mediados de 1981 Solidaridad reclamó el poder económico y se lanzó a una campaña de agitación que era un verdadero suicidio político. Walesa viajó por toda Polonia y, auténtico apaga-fuegos, discutió con los mineros, con las obreras textiles, con los campesinos y con todo tipo de autoridades, incansablemente, hasta lograr uno u otro acuerdo. Cuando finalizaba el año, el Congreso de Solidaridad acusó a Walesa de protagonismo y autoritarismo.

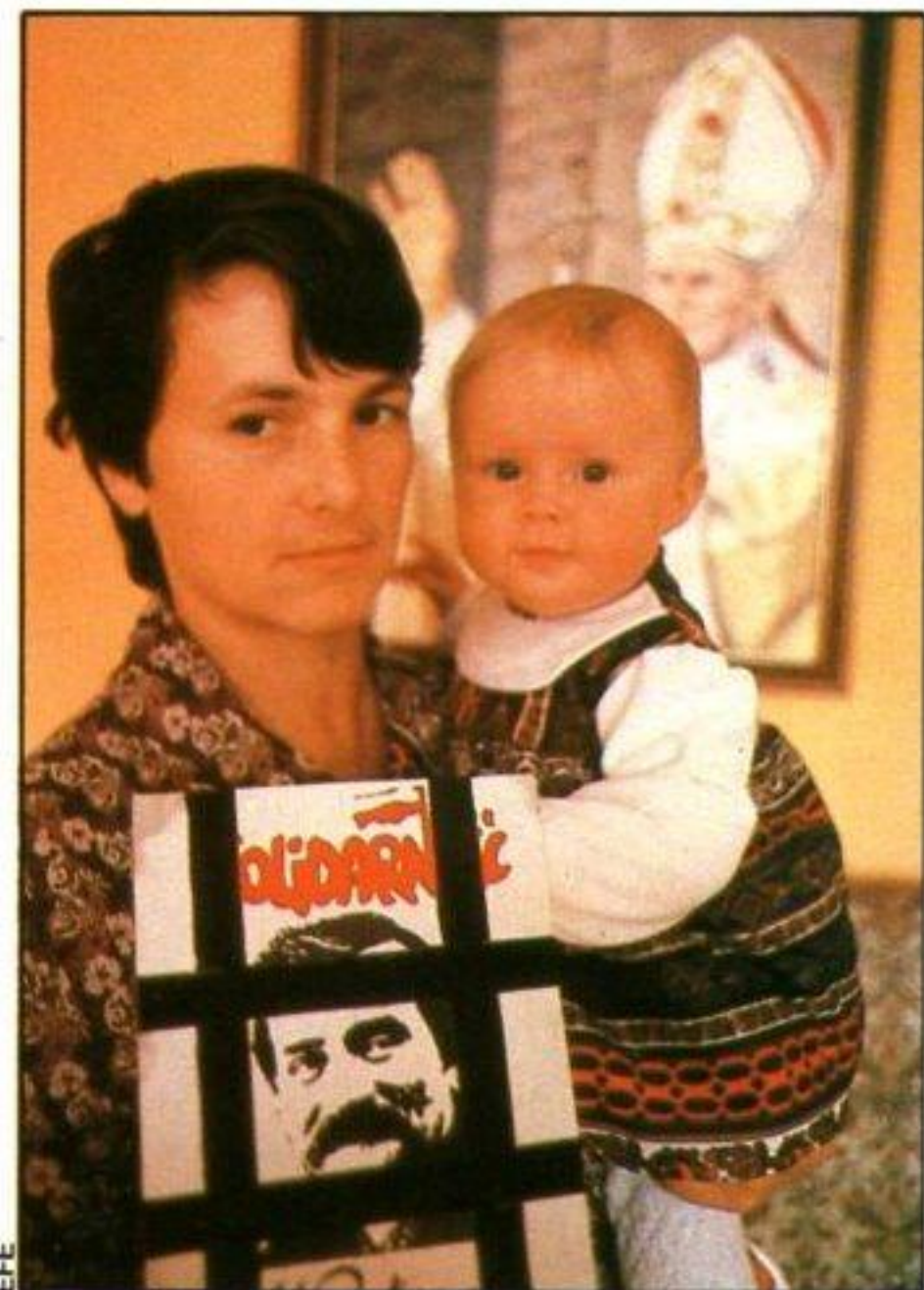
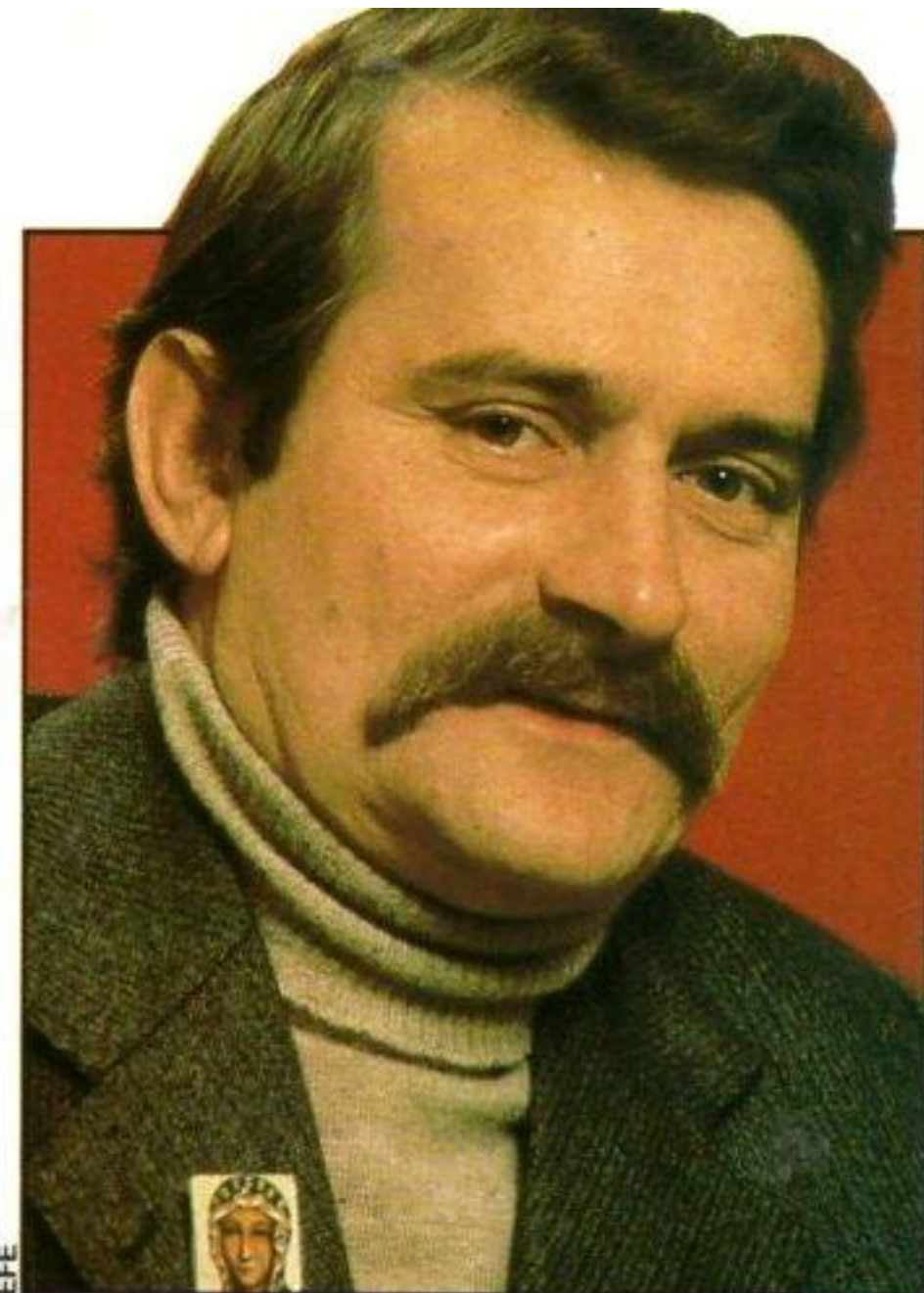
Walesa demostró que, aunque no había consultado con la dirección nacional del sindicato, había actuado honestamente para evitar la abrogación de las conquistas de 1980. Jaruzelski había ocupado todo el poder en octubre y se proponía aprobar leyes que limitaran las huelgas. Sin embargo, Solidaridad tenía acceso a los medios de comunicación y a la gestión de las empresas; era reconocida y apo-

yada por los organismos internacionales y los países occidentales; contaba con la poderosa Iglesia, con un Papa polaco que había recibido a Walesa en el Vaticano en enero; agrupaba a doce millones de polacos. Y Walesa perdió la partida con los radicales y aceptó la decisión de la mayoría. Aunque opuesto a esta línea, también fue arrestado cuando cayó la dirección del sindicato. Durante su reclusión mantuvo una digna actitud, sin aceptar las presiones ni las tentaciones gubernamentales, que buscaban aprovechar las discrepancias existentes en la organización.

Tras su liberación, Walesa no cesó de repetir que Solidaridad no renunciaba a los acuerdos de 1980, a pesar de las presiones policiales y de que el gobierno lo acusó de «traidor a sueldo de los yanquis».

Recibido por el Papa en 1983 y respaldado por amplios sectores occidentales —muchas veces por anticomunismo más que por solidaridad con la lucha del pueblo polaco— Walesa emplazó al Gobierno a restablecer las libertades civiles y sindicales, y se negó a prestar declaración contra los miembros del KOR. Reingresó en la plantilla de los astilleros Lenin, una vez superados varios obstáculos burocráticos, y continuó proclamando su fe en los 21 puntos de Gdansk.

En 1983 se le concedió el premio Nobel de la paz y consiguió la suavización de las sanciones de Reagan. Los observadores dijeron que había adquirido aires de estadista. Pero no ha cambiado. Sigue presumiendo de no haber leído ningún libro, lo cual es falso, y reivindicando su condición de obrero y sindicalista. En el 13 aniversario de la revuelta de Gdansk, divulgó una declaración denunciando las alzas de precios de los alimentos previstos para enero de 1984, proclamando su fidelidad a los acuerdos de 1980 y a la lucha pacífica por los derechos sociales: «Estamos inspirados por ideas cristianas, somos fieles a las tradiciones del movimiento obrero, que exige realizar la justicia social, la igualdad y la liquidación de los privilegios de grupos.» Lev Walesa es ya un símbolo.



claw. Los delegados votaron a favor de exigir un referéndum sobre la autogestión y elecciones libres. También, en un auténtico suicidio político, hicieron un llamamiento a todos los trabajadores de los países del Este para que formasen, a su vez, sindicatos libres.

El último intento del POUP por evitar la confrontación dio lugar a un pacto para formar un «frente nacional» entre Solidaridad, la Iglesia y el POUP, el 22 de septiembre, que fue seguido tres días después por un acuerdo entre el Parlamento y el sindicato sobre la autogestión. A fin de mes, la moderación se impuso en la segunda fase del Congreso de Solidaridad y Walesa fue reelegido presidente, aunque hubo de dar largas explicaciones sobre sus últimos acuerdos con el régimen.

El golpe de Estado

No obstante, la suerte ya estaba echada y Jaruzelski inició una doble estrategia. Por un lado llegó a un acuerdo con Solidaridad para la conge-

En esta página, arriba, Lev Walesa. En su solapa, una imagen de la Virgen. Buena parte de la fuerza y del

carisma del líder se basan en su gran fe. Abajo, la mujer del sindicalista con su hijo menor y un

cartel de Solidaridad en el que se pide la libertad de su marido, arrestado por orden del gobierno.

En la página siguiente, Walesa llega a su casa el día que quedó en libertad. Lo rodean la prensa y admiradores.



EFE

lación de los precios de los alimentos y se entrevistó, el 4 de noviembre, con Walesa y Glemp. Por el otro, envió grupos operativos de soldados a todos los rincones del país para que se informasen «directamente, de todos los fenómenos negativos», emprendió una campaña contra Solidaridad y ordenó, el 2 de diciembre, el desalojo por las fuerzas de seguridad de la Escuela de Bomberos de Varsovia, ocupada por los alumnos, que exigían dejar de pertenecer al Ministerio del Interior. El general vio rechazada por el Sejm su solicitud de una prohibición momentánea de las huelgas y Solidaridad advirtió sobre la posibilidad de huelga general en todas sus secciones. Walesa cometió el tremendo error de declarar en Radom que «ningún cambio del sistema se conseguirá sin lucha... Lo esencial es ser el vencedor». Glemp pidió al Sejm que no aprobase el proyecto de ley de excepción presentado por Jaruzelski y la Comisión Nacional de Solidaridad se reunió en Gdansk en su

última sesión de emergencia. La operación Canario (golpe de Estado) estaba ya en marcha.

Solidaridad había convocado una huelga general para el 17 de diciembre y había llamado a todos sus afiliados a salir ese día a la calle para mostrar la fuerza de la central y exigir un referéndum nacional. Los dirigentes del POUP en las provincias pidieron a Jaruzelski que les entregase armas para defenderse si eran atacados. El general actuó decididamente el domingo 13 de diciembre, cogiendo desprevenido al sindicato, que ya contaba con 12.000.000 de afiliados, a pesar de que la Comisión Nacional, que fue detenida de un golpe, concentrada en su sede de Gdansk, había sido advertida de la inminencia del «cuartelazo».

Jaruzelski, que ya concentraba los cargos de primer secretario del POUP, jefe del Gobierno y ministro de Defensa, declaró el estado de guerra y proclamó la creación de un Consejo Militar de Salvación Nacional, formado por 15

generales y cinco coroneles y presidido por él mismo. El primado Glemp, tal como hiciera su antecesor Wyszynski en la cúspide de las huelgas de agosto de 1980, formuló un llamamiento a la calma pidiendo, «de rodillas: no iniciéis una lucha entre polacos». La mayoría de las fábricas vacías fueron rápidamente tomadas por el Ejército, 100.000 personas sufrieron interrogatorios y 5.096, incluidos Walesa y toda la dirección de Solidaridad, detenidos.

Sólo en las minas de Silesia se había previsto el golpe. Los mineros se atrincheraron en las galerías y 3.000 obreros ocuparon la gigantesca siderurgia Hutta Katowice. En Gdansk, la represión de las manifestaciones en favor de Solidaridad se saldó con un muerto y 324 heridos. Polonia había sido aislada del mundo mediante un corte sin precedentes de todas las comunicaciones telefónicas y de télex. Los policías se encargaron del trabajo sucio de asaltar las minas y en Wujek perecieron siete mineros. El día 23, Ejército y Po-

Represión policial de una manifestación en Gdansk, en mayo de

1982. Pese al estado de guerra, los polacos continuaban su lucha.



EFE

licia evacuaron a los encerrados en Hutta Katowice. El lunes, 29 de diciembre, se rindió el último reducto minero: el pozo Piast, en Tichy, a 16 kilómetros de Katowice, cuyos trabajadores habían tenido en jaque a las tropas amenazando con volar la mina con dinamita y autoinmolarse.

Miles de detenidos fueron internados en cincuenta campos de concentración y sólo se mantuvo un núcleo clandestino de la dirección de Solidaridad (TKK), al principio dirigido por Mirosław Kuprinski y, a su caída en manos de la Policía, por Zbigniew Bujak. La resistencia, que pudo comenzar a emitir mensajes regularmente a partir de abril de 1982, a través de Radio Solidaridad afirmó que hubo 200 muertos en Silesia. La oposición de los trabajadores al régimen persistió en la forma de traba-

jo lento y manifestaciones: enfrentamientos en mayo (1.327 detenidos y toque de queda en Szczecin y otras ciudades), en junio (barricadas en Wrocław y huelga parcial en Gdansk), en el aniversario de los acuerdos de Gdansk (sublevación en 66 ciudades, más de 5.000 detenidos y cinco muertos) y en septiembre (Lublin).

Walesa, a quien sólo podían visitar sus confesores, se aferraba a su profunda religiosidad, plasmada en la imagen de la virgen de Chestochowa que siempre lleva en la solapa, y se negaba a dialogar con el régimen si no participaba la cúpula de Solidaridad, encarcelada. El golpe había sido exclusivamente militar, al margen de los órganos de decisión del POUP, y los nuevos hombres fuertes que escogió Jaruzelski, como el periodista Myeczyslaw Ra-

kowski, eran totalmente ajenos a la anterior dirección del partido. El zloty fue devaluado en un 71 % y los precios aumentaron en el 300 %.

El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, impuso inmediatas sanciones unilaterales a Polonia que, seguidas después por otros de sus reacios aliados, mantuvieron al país en bancarrota y obligaron a la URSS a dar 5.000 millones de dólares a Varsovia. Walesa fue liberado en noviembre de 1982 (en 1983 se le otorgó el premio Nobel de la Paz) y la ley marcial fue levantada parcialmente en diciembre. Jaruzelski había evitado la intervención militar soviética, pero el sueño sindical polaco estaba de nuevo enterrado y las relaciones Este-Oeste se habían envenenado por el caso de Polonia.

La Guerra de las Malvinas

Norte-Sur frente a frente

Luis Ignacio López,
periodista

La guerra de las Malvinas ofrece aspectos que permiten análisis desde varios ángulos: el anticolonialismo, el respaldo que recibió la Junta Militar del pueblo y de las democracias del continente sudamericano, las experiencias con

nuevas armas, la información militar a través de satélites y, a causa del fracaso, la caída de la dictadura y la recuperación de las libertades en Argentina. En la fotografía, unos soldados británicos instalando un cañón.

El 2 de abril de 1982, unidades del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea argentina desembarcaron en el archipiélago de las Malvinas y, tras derrotar a las exiguas fuerzas británicas que protegían las islas, consiguieron el viejo sueño de la nación rioplatense de arriar la bandera de la Union Jack e izar el pabellón nacional. Fracasadas las negociaciones diplomáticas, la Royal Navy zarpó con una poderosa flota dispuesta a reparar el herido orgullo del viejo león imperial. La guerra era ya inevitable y su desenlace significó el definitivo derrumbamiento de la dictadura militar argentina.



Amenazante imagen de las piezas de artillería de un barco argentino en el puerto de la capital de las Malvinas, pocos días

después de la ocupación de las islas. La ciudad parece tranquila, pero se trata de la calma que precede a la tormenta.



Magnum/Zardoya

Las islas disputadas

Las islas Malvinas, llamadas Falkland por Gran Bretaña, figuraron por primera vez en una carta geográfica en 1527, en un mapa dibujado por el cartógrafo español Diego Rivero, de la corte de Carlos V y fueron bautizadas entonces como islas de San Antón. De acuerdo al Tratado de Tordesillas, firmado en 1494 por España y Portugal, las islas estaban dentro del espacio geográfico adjudicado a la soberanía española.

En el siglo XVIII, sin embargo, se discutió la paternidad del descubrimiento y primera ocupación del archipiélago, que ya antes, en 1600, fuera explorado por el navegante holandés Sebald de Weert, quien lo bautizó con el nombre de islas Sebaldinas. Un inglés, John Davis, pretendió haber desembarcado ocho años antes, en 1592, lo que dio pie a posteriores reclamaciones de derechos por parte de Gran Bretaña. En 1764, el navegante francés Louis de Bougainville desembarcó en las islas y fundó Port Louis, cambiando el nombre del archipiélago por el de Malouines, de

donde procede la denominación actual de islas Malvinas. Dos años después, el británico John Strong rebautizaba el archipiélago como Falkland y otro inglés, John Mac Bride, fundaba el puerto de Egmont, lo que provocó una expedición de respuesta por parte de España, que expulsó a los ingleses y finalmente negoció una retirada británica que se concretó en 1774 en forma definitiva. La soberanía española se hizo efectiva, mientras negociaba la presencia de la factoría inglesa de Puerto Egmont, en 1767, con el primer gobernador Felipe Ruiz y Puente, dependiente del virreinato del Río de la Plata. Desde esa fecha, ocho gobernadores españoles mantuvieron la soberanía de las islas hasta 1811, al establecerse en Buenos Aires el primer gobierno argentino independiente. En 1820, Argentina tomó posesión de las islas y nombró gobernador al capitán Pablo Areguati. En 1829, el territorio pasó a depender de la recién creada Comandancia Política y Militar de las islas Malvinas y el Cabo de Hornos.

Gran Bretaña, en plena expansión de su segundo imperio, envió en 1833 la corbeta Cleo, al mando del capitán John Oslow y tomó posesión del archipiélago, expulsando a los escasos pobladores argentinos y rechazando durante siglo y medio las reclamaciones de soberanía del gobierno de Buenos Aires.

El archipiélago está situado a unos 500 kilómetros de las costas argentinas y comprende unos 11.961 kilómetros cuadrados, repartidos en dos grandes islas, Soledad y Gran Malвина, y unos doscientos islotes. Su población, de origen inglés y galés, alcanza a unas 1.800 personas, conocidas como «kelpers». Su actividad económica principal es la ganadería ovina —más de 600.000 cabezas—, la pesca y la agricultura. Algunos estudios científicos revelan que existe en torno a las islas una plataforma rica en petróleo. Otra riqueza potencial es el crustáceo krill, rico en valores proteínicos y considerado por científicos como Cousteau como el «alimento del futuro».

La expedición británica a las Malvinas parte de Portsmouth, con el portaviones Hermes al frente, con la misión de

recuperar las islas. Miles de fanáticos nacionalistas le brindan aliento y una calurosa y entusiasta despedida.



Camara Press/Zarboya

Una fórmula para salvar el régimen

Al iniciarse el año 1982, la dictadura militar instaurada en la República Argentina el 24 de marzo de 1976 tocaba fondo. La dura represión de los primeros años del Proceso iniciado por el general Jorge Rafael Videla y el feroz flagelo de la política económica impuesta por el equipo del ministro Martínez de la Hoz habían devastado físicamente a la clase intelectual, desaparecida o exiliada, y hundido el nivel económico de todo el país. El nuevo presidente del régimen, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri había asumido el poder en diciembre de 1981, después de sordas luchas en la cúpula castrense y sostenía, con cierto mesianismo, que la única salida al hundimiento de la dictadura era algún gesto espectacular, que reivindicase un papel histórico para la clase militar y, secretamente, para sí mismo.

El 30 de marzo de 1982, Galtieri habría de comprobar frente a los mismos balcones de la Casa Rosada, sede del Gobierno, el peligroso grado que había alcanzado la ira popular silenciada por años de guerra sucia y represión despiadada. Una multitud de decenas de miles de bonaerenses habían perdido súbitamente el miedo para manifestar su rabia contra la dictadura y sus dramáticas consecuencias económicas.

Aquella noche, las calles céntricas de Buenos Aires conocieron de nuevo la violencia de las carreras policiales, los balazos no siempre al aire, las detenciones masivas, el ataque a mansalva a los transeúntes por parte de los «agentes del orden».

Galtieri vio entonces que se precipitaba su «hora histórica». Ya al hacerse cargo de la presidencia, el 22 de diciembre anterior, había dado a conocer a sus colegas de armas que la fórmula para la salvación del honor del régimen sólo podía ser una: la recuperación argentina de las islas Malvinas, ocupadas desde 1833 por el Imperio Británico, rebautizadas por Londres como las Falkland y reivindicadas secularmente por Buenos Aires.

El general Galtieri dio el golpe de efecto la madrugada del 2 de abril. Unos cinco mil hombres del Ejército, la Marina y la Aviación desembarcaron en las dos grandes islas del archipiélago, Soledad y Gran Malvina, y sofocaron, tras unas horas de escaramuzas con una dotación de 68 «marines» británicos, la última resistencia de la autoridad colonial representada por el gobernador Rex Hunt y el entonces jefe de la guarnición, comandante Mike Norman. A las 9.25 de la mañana, Hunt ordenaba la rendición; pocos minutos después se arriaba la bandera de la Union Jack, por primera vez desde el

3 de enero de 1833. La desigual batalla produjo, según fuentes británicas, quince bajas argentinas. Buenos Aires sólo admitió un muerto, el capitán de corbeta Pedro Giachino, y dos heridos.

Fervor patriótico

Aquel 2 de abril, el general Galtieri vivió horas de gloria en la plaza de Mayo de Buenos Aires. Otra vez, miles de porteños se reunieron ante los mismos balcones de la Casa Rosada donde sólo días antes se escucharon gritos contra el régimen y contra el propio presidente. Miles de voces se alzaron esa tarde en apoyo de un régimen odiado. La inesperada ocupación de las Malvinas electrizó el nacionalismo popular y trazó una tregua que parecía imposible. El abucheado Galtieri era ahora indirectamente aclamado. El lema «Malvinas, argentinas» recorrió la multitud junto a los eslóganes nacionalistas del peronismo proscrito. La mayor parte de la oposición salió de las catacumbas para respaldar, con o sin matices, la decisión de recuperar la soberanía de las islas perdidas y añoradas por cada argentino desde sus primeros años de escuela.

En esa jornada de euforia patriótica, las voces escépticas quedaron en silencio. Irónicamente, una dictadura militar, cuya política económica se había caracterizado por el entreguismo a las

Las fuerzas sobre el terreno

ARGENTINA

Hombres: 6.000

Fuerzas navales: 1 portaviones (con 14 aviones Skyhawks, misiles Alouette y helicópteros Sea King), 9 destructores (con misiles Exocet MM 38 y Sea Dart), 3 fragatas tipo A-69, 3 submarinos (con 5.000 toneladas de torpedos) y un crucero (con misiles Sea Cat y helicópteros Lynx).

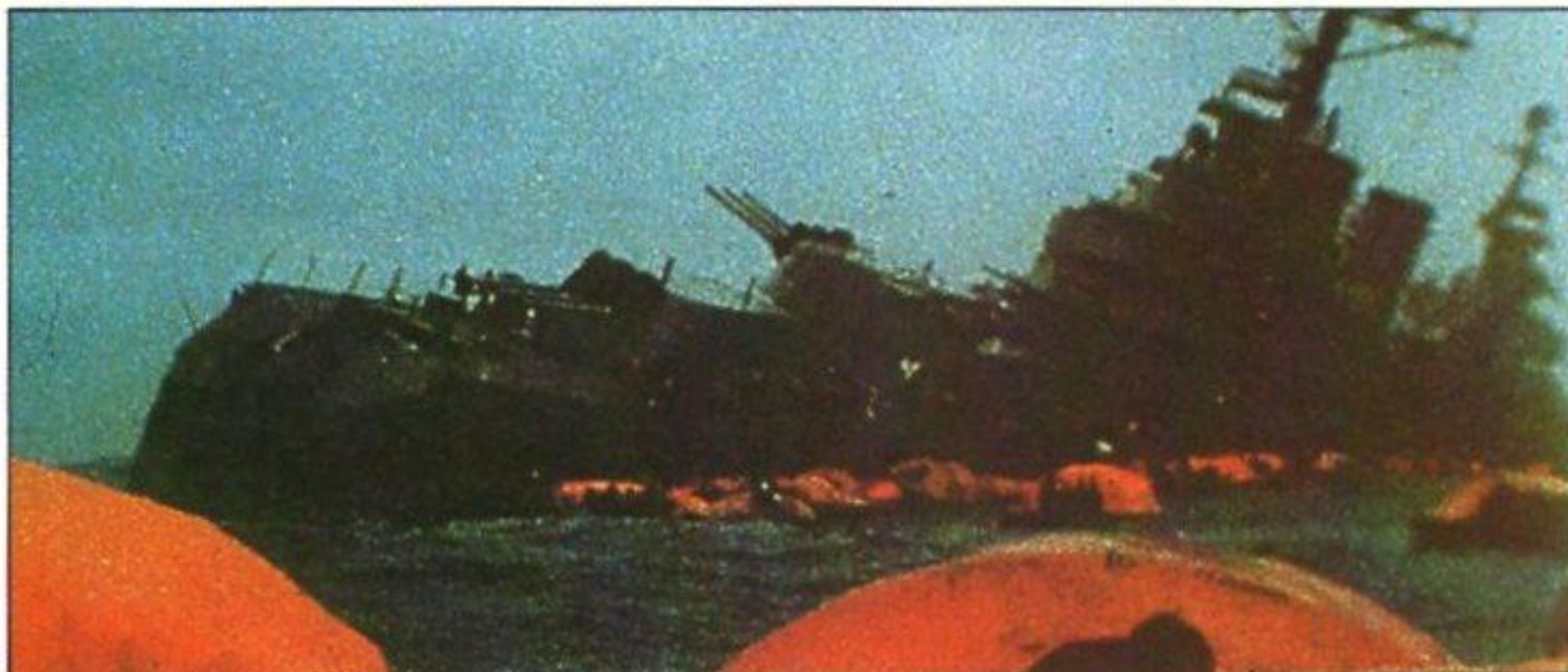
Fuerza aérea: 68 cazabombarderos Skyhawks, 18 Mirage III, 26 Dagger, 11 bombarderos Canberra, 45 Pucará, 6 aviones antisubmarinos Tracker S-2 A, 5 aviones Super Étendard (con misiles Exocet AM 39) y varios helicópteros Puma, Chinook y Augusta.

GRAN BRETAÑA

Hombres: de 5.000 a 7.000

Fuerzas navales: 2 portaviones (con helicópteros Sea King, aviones Sea Harrier y misiles Sea Dart), 2 cruceros ligeros (con misiles Exocet, Swacat y Sea Slug), 6 destructores, 7 fragatas, 2 transportes adaptados, de 1 a 3 submarinos nucleares y varios buques de asalto y auxiliares.

Fuerza aérea: 40 Sea Harrier, igual número de helicópteros Sea King, Wessex y Chinook, 2 escuadrones de aviones bombarderos Vulcan (unos 10 en total), 2 escuadrones de aviones de observación y búsqueda Nimrod. Gran Bretaña tuvo, además, el apoyo de satélites norteamericanos.



EFE

finanzas multinacionales, asumía el papel de adalid del antiimperialismo. El canciller Nicanor Costa Méndez, diplomático conservador y vinculado a intereses comerciales británicos, defendía, el 3 de abril, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, los derechos de Argentina contra «una usurpación ilícita» y catalogaba el problema como una «clásica cuestión colonial».

El envío de la Royal Navy

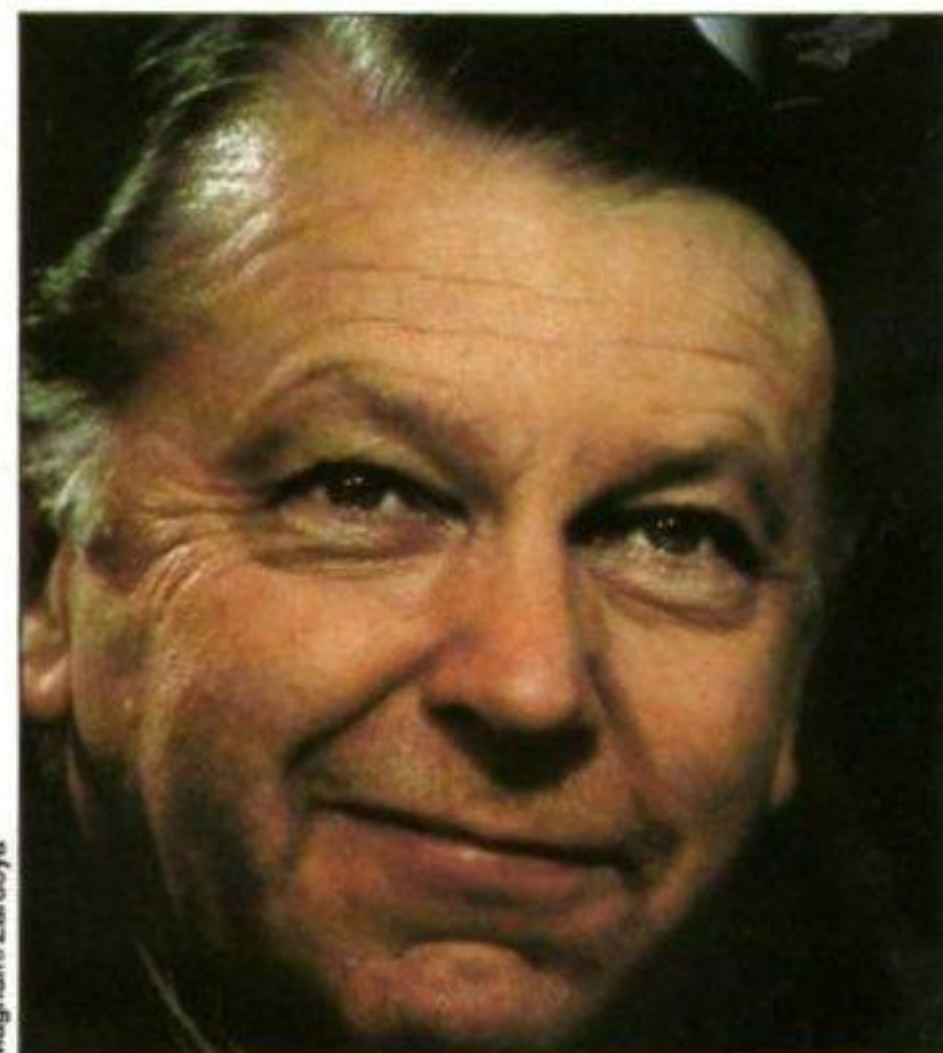
La reacción británica no se hizo esperar. El mismo día 3, el gobierno conservador de Margaret Thatcher acusó el golpe con rasgos de orgullo imperial herido y anunció, sin desechar los caminos diplomáticos, el inmediato envío de una flota destinada a reponer la bandera británica en las lejanas islas del Atlántico sur. La diplomacia británica se movió con rapidez, mientras crecían en el Parlamento de Londres las protestas por la indefensión de las islas, lo que provocó, el 5 de abril, la

sustitución del ministro de Asuntos Exteriores Lord Carrington por un nuevo jefe del Foreign Office, Francis Pym. El mismo 3 de abril, Londres lograba en el Consejo de Seguridad reunir los nueve votos suficientes para aprobar una resolución que ordenaba la inmediata retirada de las fuerzas argentinas del archipiélago austral. En Westminster, Margaret Thatcher definía sin ambigüedades la misión de la escuadra de la Royal Navy que debería partir dos días después: «Las islas Falkland (Malvinas) siguen siendo territorio británico y el objetivo de mi gobierno es liberarlas de la ocupación argentina y devolverlas a la administración británica».

En el terreno diplomático comenzaba, no obstante, un fluido proceso de negociaciones indirectas y esbozos de propuestas que constituyeron un trasfondo permanente en los 73 días que duró el conflicto. En el mismo momento en que la flota expedicionaria britá-



Magnum/Zardoya



Magnum/Zardoya

En esta página, a la izquierda, hundimiento del crucero argentino General Belgrano por un torpedo británico. Arriba, Lord Carrington, ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de la señora Thatcher en el momento de la acción argentina. Acusado de

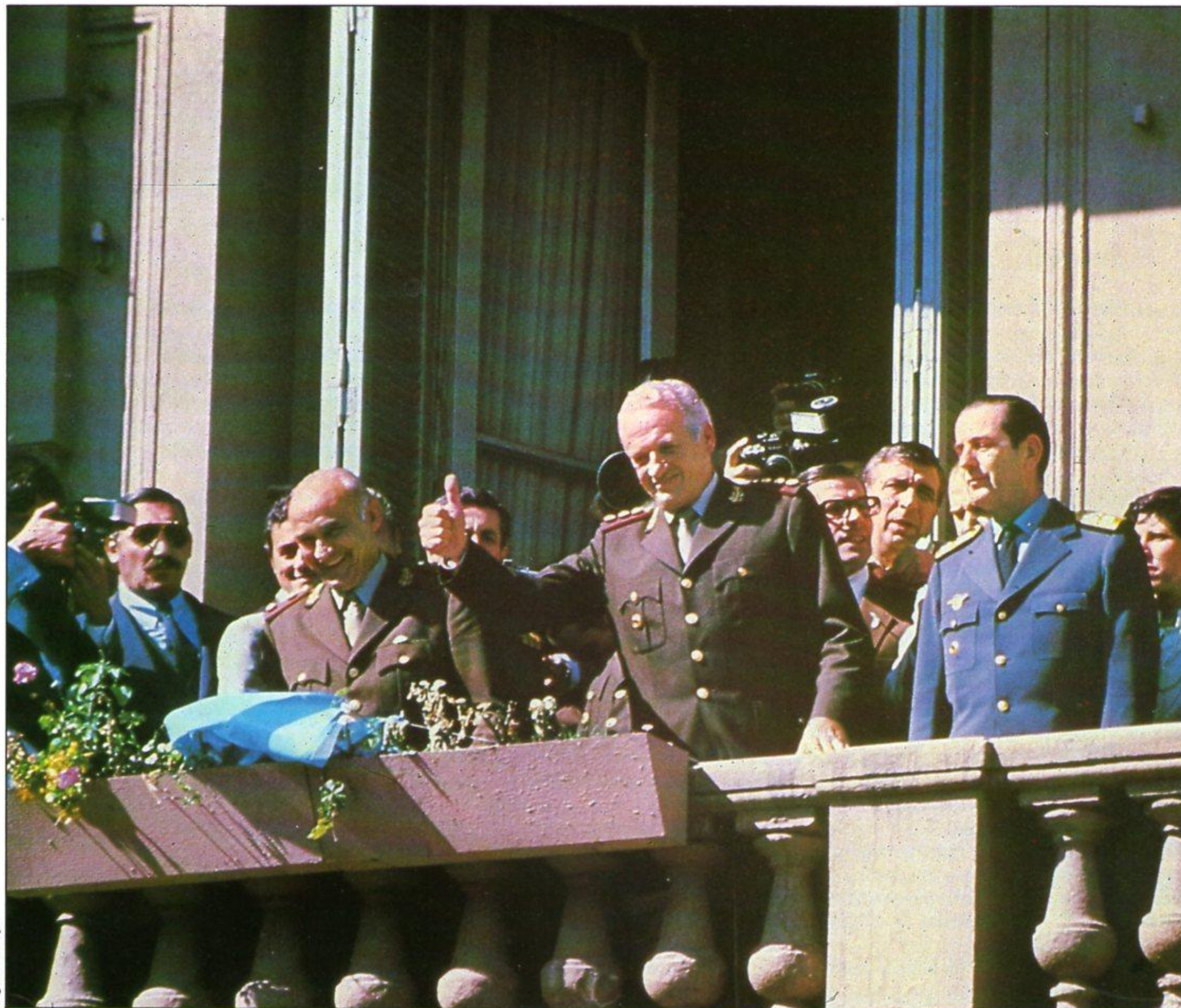
imprevisión, dimitió. Abajo, Francis Pym, sustituto del anterior.

En la página siguiente, el general Galtieri saluda a la multitud reunida en la plaza de Mayo. Es su hora más gloriosa. Días después llegaría la derrota.

nica se disponía a salir de Portsmouth, el propio ministro de Defensa John Nott advertía que pese a «estar la fuerza naval preparada y dispuesta para la guerra, se intentará una solución diplomática de la crisis».

El 5 de abril, salió de Portsmouth la anunciada flota, la *Task Force* (fuerza de intervención) de la Royal Navy que, con sus cerca de cuarenta navíos, formaba la escuadra naval más grande organizada desde la Segunda Guerra Mundial. Comenzaba la cuenta atrás del conflicto. Al final quedaba el acuerdo o la guerra.

En Buenos Aires, Galtieri animaba una gigantesca campaña publicitaria en favor de la causa persuasivamente identificada con las Fuerzas Armadas. En esos primeros días de la crisis, el régimen militar atrajo hábilmente a los principales partidos de la oposición, incluidos el radical y el peronista, y logró un apoyo condicionado. Por una parte, respaldo absoluto a las acciones



Magnum/Zardoya

en pro de la recuperación de la soberanía de las islas y por otra, una exigencia, débil en esos momentos de protagonismo militar: «La unidad nacional se fortalecería con un cambio en la política económica y con hechos concretos para el retorno a la democracia».

Contradicciones entre aliados

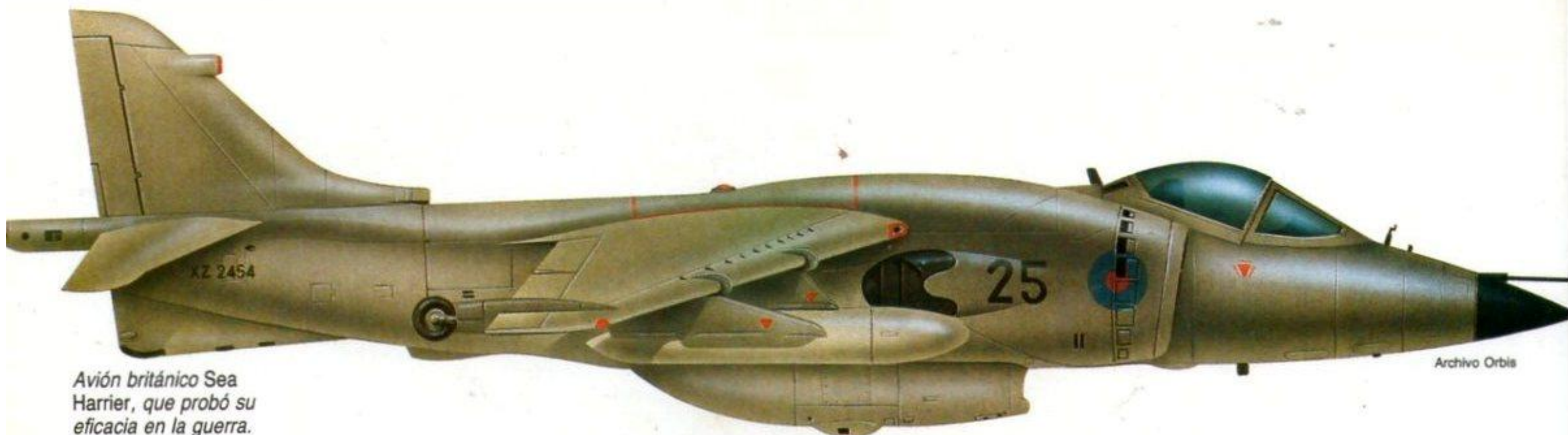
Entre tanto, en el frente exterior, Buenos Aires sufría sorpresas que ponían en evidencia la incongruencia política de la postura del régimen militar. Encuadrada activamente en el área de influencia norteamericana, la dictadura militar apoyaba con hombres y armas la política de Washington en Centroamérica y exhibía, no sin soberbia, un ideario «occidentalista» que el propio Costa Méndez defendió en más de alguna oportunidad, antes del conflicto, dando la espalda al Movimiento de No Alineados y a los demás países de América Latina. Tanto la Cancillería como el propio Galtieri confiaban en el

apoyo negociador de Washington y al menos en la neutralidad, si no simpatía, europea. Los contactos establecidos por Galtieri en Washington, a los pocos días de jurar como presidente, en diciembre, habían alentado esperanzas en una acción proargentina de Estados Unidos que obligaría a Londres a negociar.

Para Washington se planteaba un aparente dilema entre dos aliados, según la óptica de Buenos Aires, que no demoró en advertir que su estrategia diplomática se basaba en cálculos erróneos. En primer lugar, los diez países de la Comunidad Económica Europea no vacilaron, el 10 de abril, en bloquear las importaciones argentinas, al mismo tiempo que cinco gobiernos europeos suspendían categóricamente las entregas de armas a Buenos Aires. Durante diez días, el propio secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, voló entre Buenos Aires, Londres y Washington para buscar una

salida tolerable para ambos bandos, pero basada en la misma exigencia británica de retirada de las fuerzas argentinas de las Malvinas. El 12 de abril, Londres declaraba unilateralmente un bloqueo naval en un área de 200 millas en torno a las Malvinas y siete días después rechazaba una propuesta *in extremis* de Alexander Haig, formulada tras una segunda visita a Buenos Aires.

El régimen argentino, empujado hacia una frontera diplomática que le era extraña, descubría «de pronto» la «solidaridad latinoamericana» y el canciller Costa Méndez pedía en brillante discurso en la Organización de Estados Americanos (OEA) la aplicación del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en caso de una agresión británica «colonial». El TIAR, urdido por Washington en los inicios de la guerra fría, tenía como blancos otros enemigos —el comunismo— y no una potencia occidental alia-



Avión británico Sea Harrier, que probó su eficacia en la guerra.

Archivo Orbis

da de Estados Unidos. Nicaragua y Cuba se habían apresurado en los primeros momentos de la crisis a expresar su apoyo a la causa «anticolonial» argentina y Buenos Aires se veía de pronto inmersa en una guerra de bloques Norte-Sur, que descolocaba el planteamiento prooccidental de un régimen sensibilizado para la oposición Este-Oeste.

Reagan apoya a Londres

La diplomacia itinerante de Alexander Haig naufragó en los últimos días de abril. La avanzadilla de la Royal Navy llegaba el día 23 a la zona de bloqueo y la guerra parecía inevitable, pese a la incomodidad de Washington. En Buenos Aires, el general Galtieri desafiaba abiertamente a los británicos, en un encendido discurso ante la multitud reunida nuevamente frente a la Casa Rosada, en pleno éxtasis nacionalista. En Londres, se imponía igualmente la línea de acción dura y no faltaba cierta expectación en círculos de la OTAN, a ambos lados del Atlántico, para aprovechar el conflicto en una doble vertiente: por una parte, apreciar el uso de armas modernas en una guerra naval para deducir nuevos principios estratégicos y, por otra, quizá más determinante en el desarrollo de la crisis, asegurar sin cortapisas el

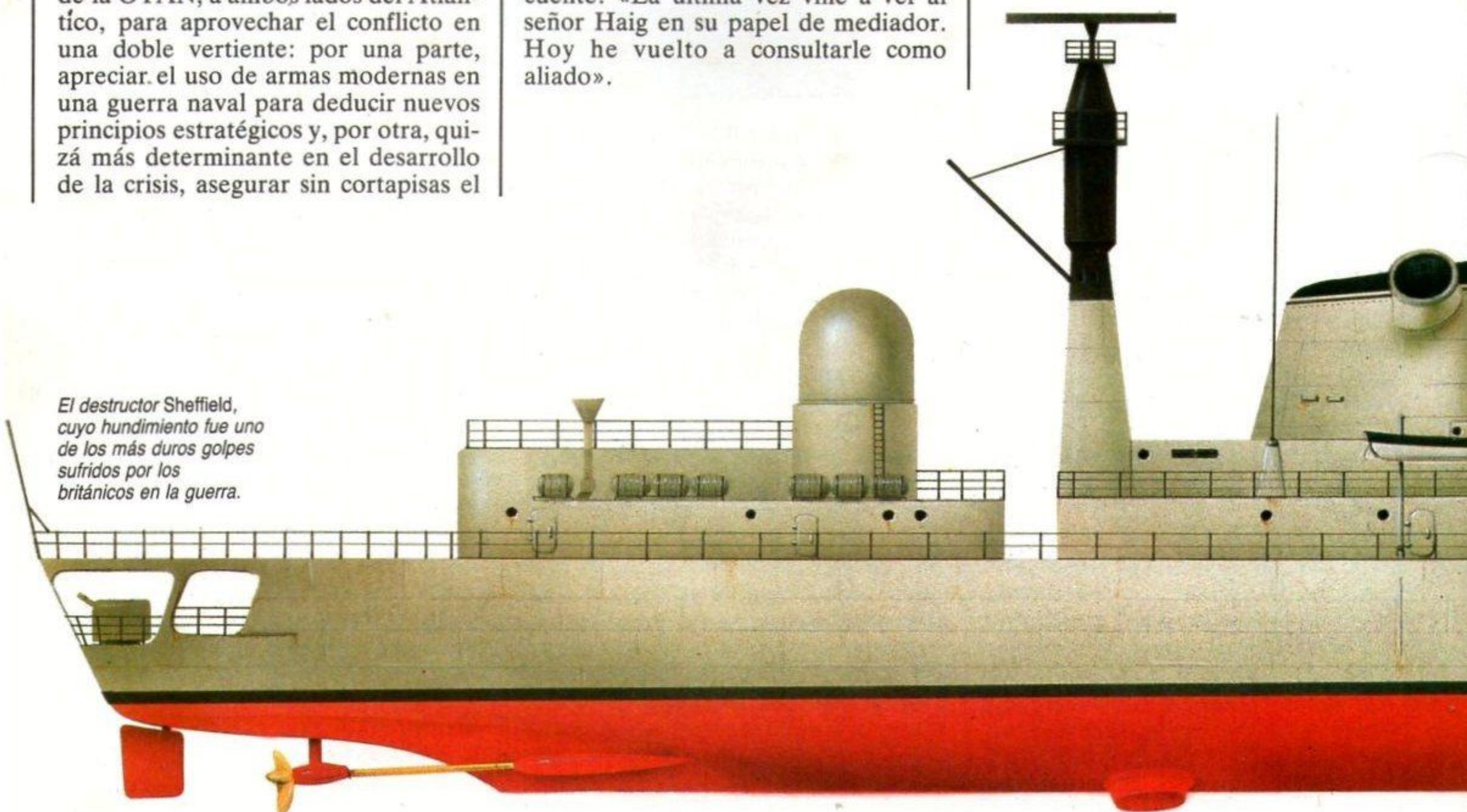
control de la Alianza Atlántica en el mar austral y en una zona que algunos analistas han calificado como un sector clave en la geopolítica del siglo XXI.

La primera acción de la *Task Force* fue desembarcar en las lejanas Georgias del Sur, ocupadas sin resistencia por Argentina el 22 de marzo, poco antes de la invasión de las Malvinas. Era ya el día 25 de abril y los negociadores reconocían su impotencia. Según el *Washington Post*, el presidente Reagan ofrecía a Londres, en un último intento de flexibilidad, la «concesión» de que la Navy hundiese un barco argentino para «salvar así la cara» y sentarse posteriormente a negociar. Gran Bretaña rechazó la oferta y, el 30 de abril, Reagan anunciaba su respaldo formal a la postura de Londres, al tiempo que imponía sanciones militares y económicas a Argentina. Al día siguiente, 1 de mayo, el ministro británico Francis Pym llegaba a Washington para entrevistarse con su colega Alexander Haig. Su comentario fue elocuente: «La última vez vine a ver al señor Haig en su papel de mediador. Hoy he vuelto a consultarle como aliado».

El primer ataque

Ese mismo día comenzó la guerra real. Desde el 28 de abril cuatro aviones *Vulcan*, bombarderos de gran potencia, aunque ya obsoletos para el transporte de armas nucleares, estaban estacionados en la isla Ascensión, en el Atlántico central, en espera de participar en la operación «Ciervo negro». El objetivo era el aeropuerto de Puerto Argentino (Port Stanley), sobre el que cayeron la madrugada del 1 de mayo diez toneladas de explosivos arrojadas por un bombardero que logró volver ileso a la base de isla Ascensión, facilitada por Estados Unidos. Horas más tarde, una escuadrilla de *Sea Harrier*, aviones de despegue vertical —doce del

El destructor Sheffield, cuyo hundimiento fue uno de los más duros golpes sufridos por los británicos en la guerra.





Archivo Orbis

Avión argentino Super Étendard, portador del moderno y mortífero misil francés Exocet.

portaviones *Invincible* y ocho del *Hermes*— realizaban una incursión sobre las islas, tropezando con una nutrida barrera de fuego y misiles antiaéreos. El balance contrastado de la primera batalla registraba un *Harrier* tocado y dos *Mirage* y un *Camberra 82* argentinos abatidos.

El primer drama de la guerra ocurrió el 3 de mayo. El submarino nuclear *Conqueror*, equipado fundamentalmente para la detección de buques soviéticos, tomó contacto con el crucero argentino *General Belgrano* en las cercanías de la isla de los Estados, cerca del continente y fuera de la zona de exclusión proclamada por los británicos. Sin aviso previo, el submarino

disparó dos torpedos *Mark 8* que hicieron blanco en babor y en la popa del vetusto crucero argentino, tripulado por más de 1.000 hombres. El hundimiento fue casi inmediato y un total de 368 hombres perdieron la vida. El dramático ataque cayó como una bomba en Buenos Aires y en el propio Parlamento británico se escucharon palabras duras contra las poco convincentes explicaciones que dio ante los diputados el ministro de Defensa John Nott.

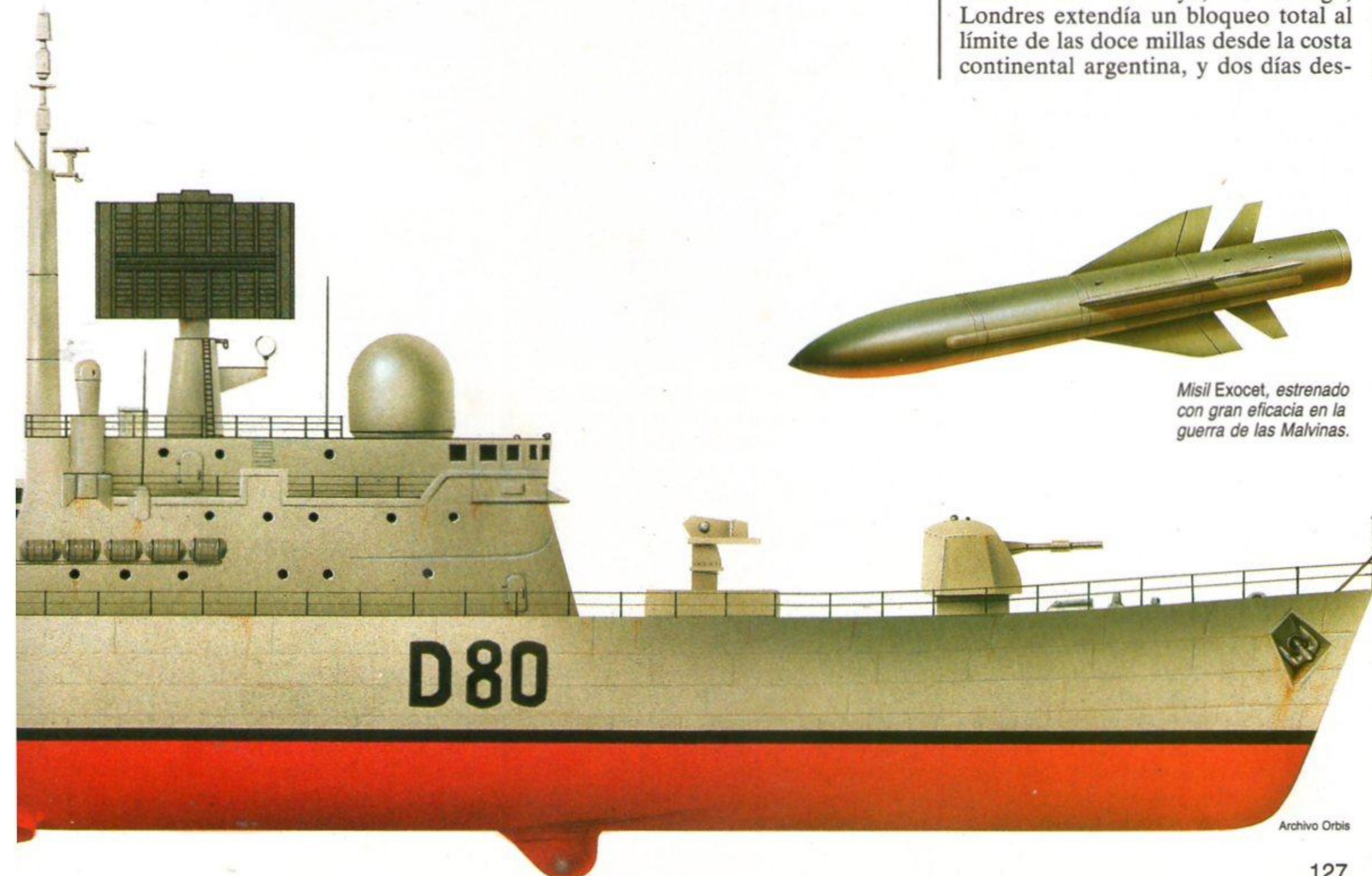
El estreno del Exocet

Para Argentina, tal como lo habían previsto los estrategas norteamericanos y británicos, la pérdida del *General Belgrano* significó la pasividad de un alto porcentaje de sus unidades. Desde ese momento, la guerra se convirtió

en una sucesión de batallas aeronavales, en las que la Fuerza Aérea y la Aviación naval argentina tuvieron un papel protagónico, con sus cazas *Super Étendard*, provistos del famoso misil francés *Exocet*, la verdadera «estrella» de la guerra de las Malvinas.

El 4 de mayo, el primer *Exocet* disparado por la fuerza aeronaval argentina vengó al *General Belgrano* al hacer blanco en la fragata destructor *Sheffield*, mientras hacía guardia al suroeste de las islas. El golpe descontroló al gobierno británico, cuyo mayor temor era precisamente perder alguna nave. «Es un acontecimiento espantoso», diría el ministro Nott, tenso y trastornado, ante la Cámara de los Comunes.

El hundimiento del *Sheffield* permitió un leve intermedio diplomático, protagonizado esta vez por el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. El 7 de mayo, sin embargo, Londres extendió un bloqueo total al límite de las doce millas desde la costa continental argentina, y dos días des-



Misil Exocet, estrenado con gran eficacia en la guerra de las Malvinas.

Archivo Orbis

Cronología

Marzo de 1982

Jueves, 18: trabajadores argentinos izan la bandera de su país en las islas Georgias del sur. Cuatro días después, desembarca un grupo de comandos.

Abril

Viernes, 2: desembarco de 5.000 soldados argentinos en las Malvinas. Control de Port Stanley, rebautizado Puerto Argentino.

Sábado, 3: el Consejo de Seguridad exige la retirada de tropas.

Lunes, 5: sale de Portsmouth una fuerza expedicionaria británica.

Miércoles, 7: bloqueo europeo de armas a Argentina.

Jueves, 8: Alexander Haig inicia negociaciones en Buenos Aires y Londres.

Lunes, 12: Gran Bretaña decreta el bloqueo naval a las islas.

Viernes, 30: tras el fracaso de la mediación de Haig, el presidente Ronald Reagan anuncia el apoyo de Estados Unidos a Londres.

Mayo:

Sábado, 1: aviones británicos Vulcan bombardean Puerto Argentino. Desembarcan comandos en las islas.

Lunes, 3: un submarino británico hunde el crucero General Belgrano.

Martes, 4: un misil disparado desde un avión argentino alcanza al destructor británico Sheffield.

Miércoles, 5: el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, da esperanzas a una solución negociada.

Domingo, 9: bombardeos británicos en Puerto Argentino y Puerto Darwin. Prosiguen las conversaciones en las Naciones Unidas.

Sábado, 15: primer ataque terrestre británico en la isla Borbón. Bombardeo del aeropuerto de Puerto Argentino y destrucción de aviones.

Jueves, 20: Pérez de Cuéllar reconoce el fracaso de sus gestiones diplomáticas.

Viernes, 21: fuerzas británicas ocupan una cabeza de playa al noroeste de isla Soledad, sobre el estrecho de San Carlos.

Sábado, 22: se inicia el combate aeronaval en el estrecho de San Carlos. Destruídas las fragatas Ardent y Antelope. Pérdidas de aviones argentinos.

Martes, 25: hundida la fragata Coventry, el transporte Atlantic Conveyor, con helicópteros a bordo.

Viernes, 28: batalla de Goose Green. Los británicos controlan el oeste de isla Soledad.

Junio

Martes, 1: se inicia el avance terrestre británico hacia Puerto Argentino. Ataques aéreos argentinos.

Martes, 8: destruidos los barcos británicos Sir Galahad y Sir Tristan.

Miércoles, 9: se registran intensos combates en torno a Puerto Argentino, que se extienden hasta el final del conflicto.

Viernes, 11: el Papa visita Argentina y pide la paz.

Lunes, 14: el general Benjamín Menéndez, gobernador argentino de las islas, se rinde al general británico Moore.

Martes, 15: manifestaciones en Buenos Aires contra Galtieri.

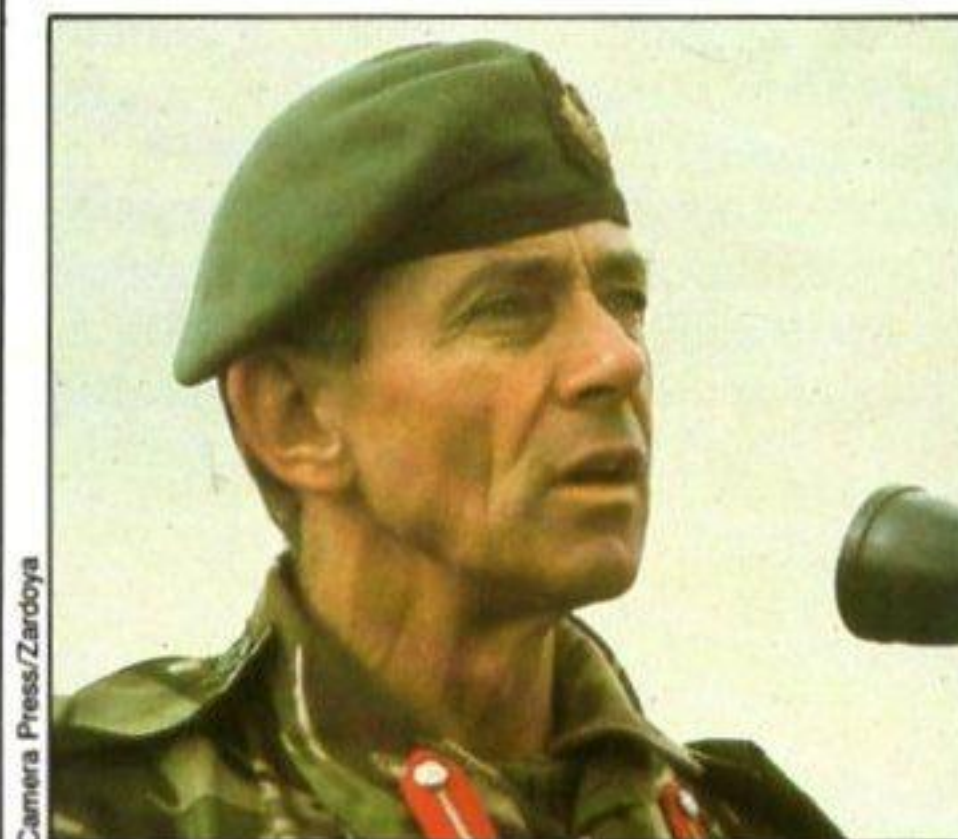
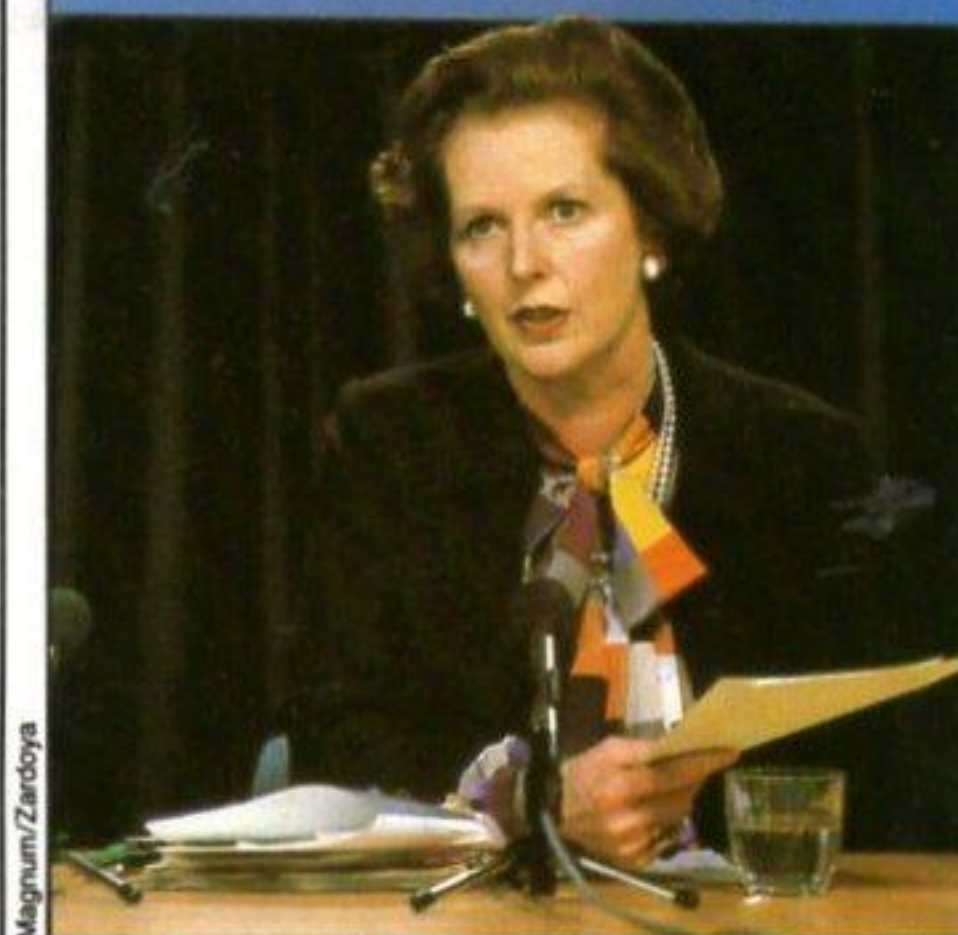
Jueves, 17: el general Galtieri pasa a retiro y dimite como Jefe de Estado.

pués los Harrier bombardeaban posiciones de Puerto Argentino y Puerto Darwin, en isla Soledad. Entre el 5 y el 20 de mayo se activaron a fondo los dos frentes del conflicto: el político y el diplomático. En Nueva York, se sucedían las reuniones entre el secretario general de la ONU, el peruano Pérez de Cuéllar y los representantes británico, Anthony Parsons y argentino, Enrique Ross.

En el lejano frente de batalla, se precipitaban entre tanto los fugaces combates que parecían, inicialmente, volcarse de momento en favor del potencial defensivo de la Fuerza Aérea y la aviación naval argentinas. Las fuerzas argentinas sólo podían en ese

momento apoyarse en su aviación, cuantitativamente superior, pero con desventajas en cuanto a velocidad y a distancias, pese a disponer de bases en la costa. El 12 de mayo, la Fuerza Aérea lanzó su primer ataque masivo contra la Task Force con grupos de aviones Skyhawk, perdiendo dos aparatos y produciendo averías en dos naves británicas. Pese al hostigamiento aéreo, la avanzadilla de la flota británica había logrado estrechar el cerco sobre el archipiélago y hundir —en una acción que fue muy criticada— a un pesquero argentino —el Narwall— y atacar otro buque auxiliar estacionado cerca de Puerto Argentino, el Isla de los Estados.

Britain Strong



En esta página, arriba, y delante de un cartel alusivo al poderío británico, Margaret Thatcher comparece ante las cámaras para informar a su país acerca del desarrollo de las duras batallas. El prestigio de la «dama de hierro» salió fortalecido ante sus electores, a raíz del triunfo en la guerra.

Abajo, el general Jeremy Moore, quien fue el comandante de las fuerzas de desembarco en la bahía de San Carlos. Esta acción decidió la suerte del conflicto.

En la página siguiente, aspecto del ataque británico a la isla Borbón. Al fondo arde un navío, alcanzado por las bombas argentinas.

Desembarco en la isla Borbón

El Alto Mando de la Task Force había deliberado ya el día 10 de mayo sobre las posibilidades de soportar la situación. La flota, según pudo saberse después, sólo hubiera podido sostenerse un mes sin lanzar un intento de desembarco. Los estudios habían determinado que el estrecho de San Carlos, que separa las islas Soledad y Gran Malvina, era el punto adecuado. Las exploraciones hechas los días siguientes así lo demostraron. El 15 de mayo, un grupo de comandos desembarcaba en la isla Borbón, al norte del estrecho de San Carlos y se libraba el primer combate terrestre de la guerra del Atlántico sur. El desembarco coincidió

con una incursión de *Harrier* sobre Puerto Argentino que desembocó en un ataque masivo contra aviones posados en tierra. Las versiones comenzaron entonces a ostentar grandes diferencias. Londres informó que once aparatos habían sido destruidos. Buenos Aires confirmó sólo dos.

El 20 de mayo, Pérez de Cuéllar reconocía el fracaso de su gestión diplomática. Era la víspera del día D y el inicio de la fase final de la guerra. En el lado argentino se acentuó entonces el control de la información a extremos increíbles, al mismo tiempo que se intentaba dar garantías psicológicas de una victoria que parecía escaparse si se llegaba a producir el desembarco.

Los comandos británicos del *Special Boat Squadron* (SBS), que habían logrado infiltrarse en el estrecho de San Carlos, habían descubierto con sorpresa que no había minas en las aguas y que las entradas al estrecho no estaban defendidas. La prensa de Londres ya comentaba las posibilidades de la invasión en áreas cercanas al estrecho y la flota ya había embarcado en isla Ascensión refuerzos de helicópteros, mientras navegaban hacia el sur mercantes cargados con tropas, entre ellas un batallón de mercenarios gurkas, de sanguinaria fama.

El día D

A las 0.30 horas del 21 de mayo, tres mil hombres, a bordo del mercante *Canberra* y de naves de transporte, estaban preparados para iniciar, unas horas después, el desembarco en la bahía de San Carlos, al noroeste de isla Soledad. El súbito mal tiempo, algunos fallos técnicos y la inesperada presencia de soldados argentinos retrasó la operación. Ya era de día cuando el Batallón 40 y el 2.º de Paracaidistas tomaban tierra firme en el poblado de San Carlos, más adentro que el lugar previsto y primer punto donde volvería a flamear el pabellón británico arriado el 2 de abril.

A las 8.48 minutos, menos de una hora después de instalada la primera cabeza de playa, comenzó el contraataque aéreo argentino. La primera oleada fue una nube de pequeños *Pucará*, aviones argentinos diseñados especialmente para lucha contraguerrillera. La fragata *Aeronaut* fue tocada y veintiún minutos después comenzaba la oleada incesante de los *Skyhawk*, *Mirage* y *Dagger* de la Fuerza Aérea argentina, único factor importante en la defensa de las islas, como pudo comprobarse en los días siguientes.

Durante todo el día 21, un total de 72 aviones hostigaron sin descanso a la flotilla que se había estacionado en las



afueras y en el interior del estrecho, bautizado por los británicos como el «callejón de las bombas». Dos artefactos de 450 kilos cayeron esa tarde sobre la fragata *Ardent*, una de las más modernas de la Royal Navy, dejándola fuera de combate y con un saldo trágico de 24 muertos. Otros tres navíos, el *Antrim*, el *Brillant* y el *Broadsword* resultaron alcanzados por bombas que no estallaron por deterioro o por errores de técnica de vuelo que los pilotos argentinos solventaron en las jornadas siguientes.

Una leve tregua aérea, la mañana del sábado 22 de mayo, permitió a los británicos desembarcar pertrechos y situar baterías de misiles *Rapier*, uno de

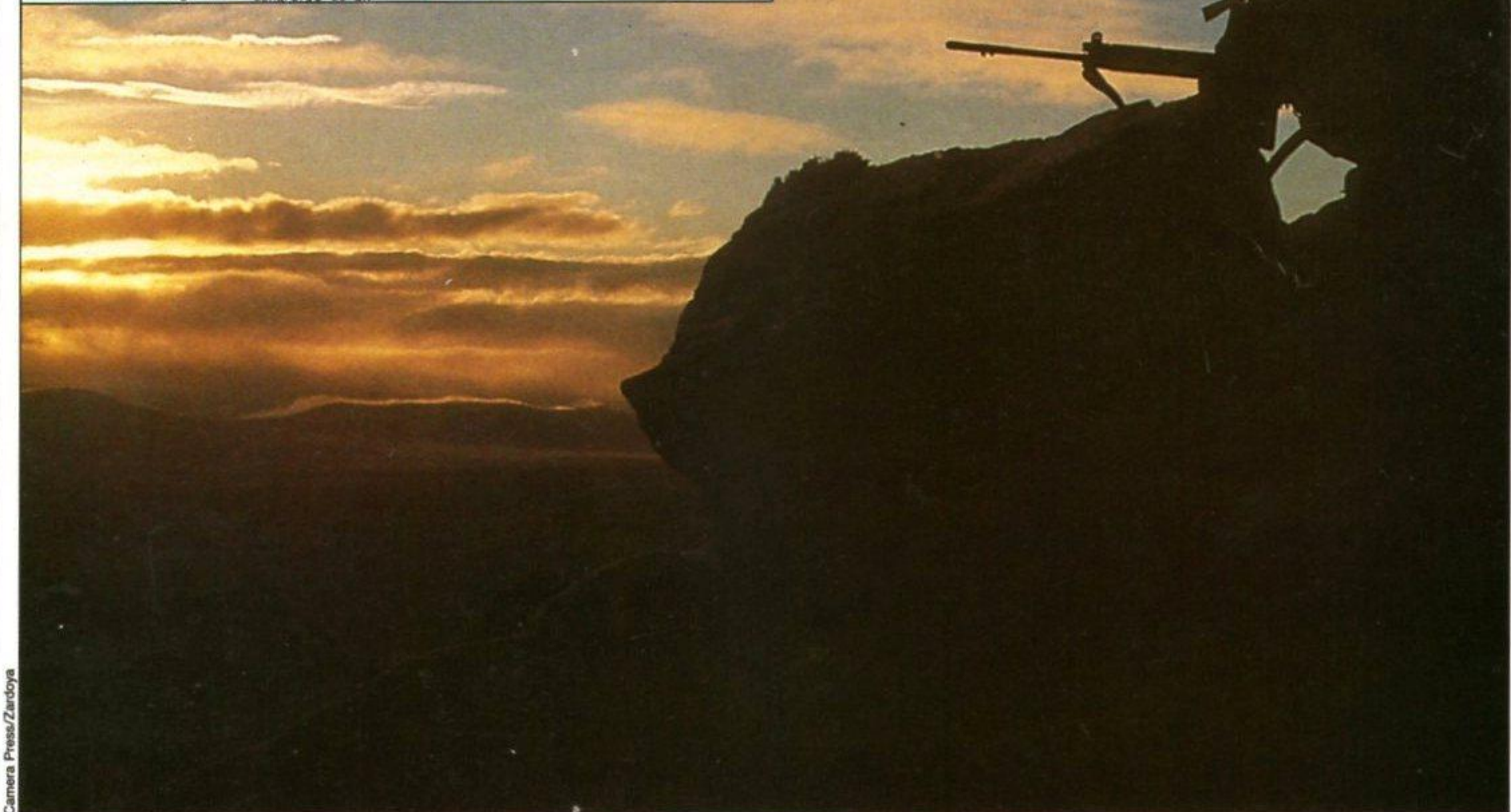
los cuales derribó a las dos de la tarde el primer *Skyhawk*, que apareció tras el horizonte de la Gran Malвина. Un nuevo ataque masivo permitió alcanzar con dos bombas de 215 kilos al *Antelope*, gemelo del *Ardent*, que estalló y se hundió al día siguiente. El 24 de mayo, unos 24 aparatos iniciaron otro ataque, esta vez los *Mirage* o *Dagger* en la vanguardia y los *Skyhawks* detrás. Durante todo el día los aparatos bombardearon las unidades de la *Task Force* y las posiciones de la cabeza de playa, al tiempo que se enfrentaban en el aire a los *Harrier* de los portaviones *Hermes* e *Invincible*. Dos naves, el *Sir Galahad* y su gemelo, el *Sir Lancelot*, fueron alcanzadas. Desde que había comen-



En esta página, soldado británico de guardia en el marco de un poco frecuente hermoso atardecer del otoño austral, tras la cruenta victoria en las islas.

En la página siguiente, soldados argentinos hechos prisioneros por los británicos durante las batallas, esperan para ser embarcados en el Canberra y devueltos

a su patria. El alto mando bonaerense calculó mal la reacción del gobierno de Londres, y envió fuerzas con poco adiestramiento y a las que dio escaso apoyo.



zado el desembarco, diez buques habían sido hundidos, o alcanzados. Los argentinos habían perdido, estimativamente, unos 26 aviones.

«El día más aciago»

El 25 de mayo, día nacional de la Argentina, fue para los británicos «el día más aciago de la campaña», según describió el teniente coronel Malcolm Hunt, del Comando 40. La primera oleada matinal de *Skyhawks* tropezó con los misiles *Sea Wolf* de la fragata *Broadsword* y fueron abatidos cinco aviones. Horas después, sin embargo, una escuadrilla de *Mirage* y *Skyhawks* surgieron desde las colinas de la Gran Malvina y alcanzaron al *Coventry*, que tardó sólo veinticinco minutos en hundirse, con una pérdida de 19 hombres. Poco después, dos *Super Étendard*

de la aviación naval despegaron desde el continente con su mortífera carga de misiles *Exocet* (uno cada uno), en busca de los portaviones. Lanzados los misiles, el objetivo alcanzado fue el gran carguero *Atlantic Conveyor*, transformado en portahelicópteros y de valor logístico vital debido a su carga de aparatos. La pérdida de nueve helicópteros retrasó los planes británicos. A Argentina, sin embargo, sólo le quedaba un *Exocet*, que se incrustaría por error en el casco del ya abatido *Conveyor*, el 29 de mayo, pensándose que se había tocado al *Invincible*, tal como lo proclamó la prensa argentina.

La batalla de Goose Green

Las fuerzas desembarcadas se desplegaron lentamente hacia el sur y, el día 28 de mayo, a las 2.30 de la madru-

gada, iniciaron el primer ataque a un objetivo terrestre: la pista de Goose Green, en el istmo que estrangula a la accidentada isla Soledad. Diversas compañías del 2.º de Paracaidistas, provistas de ametralladoras, granadas de fósforo y lanzacohetes, se desplegaron hacia tres posiciones donde estaban fortificadas las fuerzas argentinas, compuestas fundamentalmente por jóvenes conscriptos de infantería y algunos soldados de la Fuerza Aérea. La batalla se desplegó en estos tres frentes en forma diversa. Una compañía quedó atascada frente a la aldea de Puerto Darwin y otra frente a las trincheras de Boca House, donde se libró la lucha más encarnizada. El tercer objetivo cayó sin excesiva dificultad, después de que los *Harrier* inutilizaran a la artillería radiodirigida de las defensas argen-



tinias. En un día y medio de combate los paracaidistas (450) lograron abatir a 1.600 defensores sin moral de lucha y sin experiencia bélica. En las trincheras de School House, otra posición argentina, no quedó ningún sobreviviente después de un feroz ataque con ametralladoras y bombas de fósforo blanco.

En los días siguientes, efectivos del 2.º de Paracaidistas avanzaron velozmente, por tierra y aire, desde Puerto Darwin hacia el este y ocuparon, el 4 de junio, los caseríos de Fitzroy y Bluff Cove, camino hacia Puerto Argentino. Las naves de desembarco se dirigían entre tanto desde el sur, tras cruzar el estrecho de San Carlos, hacia la capital donde permanecía el grueso de las tropas argentinas dirigidas por el gobernador de la isla, el general Benja-

mín Menéndez, en cuya hoja de servicios destacaba la dureza de su campaña contra la guerrilla de Tucumán, poco antes del golpe militar de 1976. Menéndez, aficionado a las arengas y a las formalidades castrenses, no había logrado sin embargo articular una defensa coordinada entre las distintas fuerzas ni una distribución adecuada en toda la isla, como pudo verse en el caso del pésimamente defendido estrecho de San Carlos.

La rendición

En Buenos Aires, pese al ocultamiento riguroso de la información, cundía ya el pesimismo. La iglesia había variado su actitud patriótica y la visita del Papa, el día 11 de junio, hacía prever que su misión real era la de poner como fuese, fin a la guerra. En

términos militares, la guerra estaba ya perdida y los últimos escarceos diplomáticos en Washington y en la ONU no ocultaban la realidad bélica. La Fuerza Aérea había perdido ya una parte importante de su capacidad de ataque y el bloqueo europeo se dejaba sentir a la hora de obtener más *Exocet* y aparatos. Entre el 5 y el 12 de junio, mientras los británicos avanzaban hacia las colinas que rodean Puerto Argentino, se registraron los últimos combates, pero sin la intensidad ni el *suspense* bélico de los encuentros aeronavales anteriores a la batalla de Goose Green. La aviación y la artillería argentinas, pese a todos los problemas, aún lograron abatir a dos naves, el *Sir Galahad* y el *Sir Tristan*, buques gemelos de desembarco, y un *Exocet* lanzado desde tierra, averiaba al buque *Glamorgan*.



Raúl Alfonsín asume la presidencia argentina después del descalabro gubernamental y bélico de los militares. El

país recuperaba las libertades. La guerra era un mal recuerdo, y las islas Malvinas una esperanza postergada.

La victoria de la posguerra

El 12 de junio, paracaidistas, guardias escoceses y galeses, infantes de marina y gurkas, emprendieron el avance final sobre Puerto Argentino, después de tenaces batallas localizadas para ocupar una tras una las colinas que rodeaban la capital malvinense. En algunos puntos, marinos argentinos mantuvieron una resistencia férrea; en otros, los jóvenes reclutas, mal pertrechados y poco instruidos, según pudo revelarse después de la guerra, se rendían sin luchar. El día 14, a las 9 de la noche, el general Menéndez se rendía ante el jefe de la fuerza británica, el general Moore, aunque pedía borrar del documento el calificativo «incondicional» tras la palabra «rendición».

La Union Jack volvía, sin embargo, a flamear en las islas australes y ahora protegida por una fuerza formidable. Al día siguiente, 15 de junio, la multitud ocupaba otra vez la plaza de Mayo de Buenos Aires para gritar furiosa contra el «traidor» Galtieri. Nuevamente la policía entró en acción. Todo parecía volver al 30 de marzo, aquella noche de terror en las principales calles porteñas, pero la derrota rebasó la ira popular. Tres días después, el general Galtieri era cesado como jefe de Estado y pasado a retiro. Comenzaba el declive definitivo de la dictadura.

Pese al dramático golpe que supuso la derrota bélica para Argentina y a la trágica secuela sufrida por los jóvenes reclutas que sin mayor preparación fueron destinados al archipiélago durante el conflicto, el pueblo argentino obtuvo, aunque a un alto precio, una victoria ulterior. La caída estrepitosa del teniente general Leopoldo Galtieri, pocos días después de concluir la acción armada, fue el primer síntoma de la erosión del régimen dictatorial. El nuevo presidente, el general Reynaldo Bignone asumió el cargo el 22 de junio de 1982 y su primera promesa fue la de acelerar un proceso de democratización, inevitable ya ante el hondo desprestigio del régimen militar. Durante más de un año, pese a la resistencia de los sectores inmovilistas de las Fuerzas Armadas, el deterioro se acentuó, al tiempo que cobraba protagonismo la acción de las fuerzas políticas en receso, especialmente los dos grandes partidos: la Unión Cívica Radical y el Justicialismo (peronismo).

El 30 de octubre de 1983, las primeras elecciones democráticas desde 1976 dieron el triunfo al candidato radical, doctor Raúl Alfonsín, quien proponía en su programa una morali-

zación drástica de los hábitos cívicos, la institucionalización del país en cauces constitucionales y legales, una política de emergencia para reconstruir la economía destruida en siete años de dictadura y de desnacionalización financiera y, finalmente, medidas para esclarecer los casos de las 30.000 personas que desaparecieron durante los peores años de la «guerra sucia» contra la «subversión». El candidato radical pudo encabezar un amplio movimiento de opinión en torno a estas ideas fundamentales, logrando aventajar al popular partido justicialista o peronista, mayoritario durante décadas en Argentina, aunque afectado por el desprestigio que supuso el último gobierno encabezado por Isabel, viuda de Perón.

Raúl Alfonsín juró como presidente de la República en diciembre de 1983 y comenzó de inmediato a aplicar sus prometidas reformas del aparato militar, al mismo tiempo que la Justicia civil reclamaba a Videla, Camps, Galtieri y otros muchos generales que ocuparon puestos en las juntas de Gobierno militar, acusados de responsabilidades directas en la aplicación de torturas y desaparición de detenidos durante la «guerra sucia».

Ronald Reagan

Un «halcón» en la Casa Blanca

Carlos Tarsitano,
periodista

La llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca significó un retorno a las más típicas formas del conservadurismo norteamericano, que se manifestó en una gran reducción de los fondos destinados a los problemas sociales y en la aplicación de una

rígida política de corte monetario. En el plano internacional su presidencia representó un retorno a la guerra fría y su crispación. En la fotografía, Reagan hace campaña electoral en Alabama, un estado dominado por el racismo y la intransigencia.

Cuando asumió el cargo como cuadragésimo presidente de Estados Unidos, a comienzos de 1981, el ex actor y antiguo gobernador del Estado de California, el republicano Ronald Reagan, se disponía a realizar una restauración conservadora en su país y a recuperar, con gestos de firmeza, el papel de Estados Unidos en el mundo. Este propósito devolvió la Tierra a los peores años de la «guerra fría», a días de tensión e inseguridad, y a una desmesurada elevación de los gastos militares. Con espectacular e inédita crudeza, Reagan extendía los intereses nacionales norteamericanos a casi todos los confines del mundo. Y el mundo, naturalmente, se resistía.



La última película del conservador de Tampico

Cuando ganó las elecciones presidenciales de 1980 como candidato del Partido Republicano, la carrera cinematográfica de Ronald Wilson Reagan y numerosos signos de su estilo y de su ideología hicieron que sus críticos lo asimilaran a la imagen del «cowboy». Conocedor de la importancia del personaje, él mismo no se esmeraba en desmentir esa peligrosa identificación, y parecía muy satisfecho de ella.

Sin embargo, bastó un corto tiempo de mandato presidencial para que la historia se encargara de envejecer aquella imagen del lejano Oeste, tan ligada a las películas de la serie B y a los años 40. En los comienzos de los 80, Reagan continuaba siendo deudor de un mundo de imágenes, pero que entonces apuntaban a las estrellas y a una nada ilusoria «guerra de las galaxias». Había actualizado su papel, con la ayuda de la televisión y los satélites, inquietando a amigos y «forasteros».

Muy otra era la época en que nació, el 6 de febrero de 1911, en un pequeño pueblo de Tampico (Illinois), el segundo hijo del irlandés John Edward Reagan y Nelle Wilson al que llamaron Ronald. Su origen humilde —el padre era un modesto vendedor de zapatos—, el hecho de haber atravesado la época de la Gran Depresión en plena juventud, su posterior conocimiento del mundo de Hollywood, le fueron otorgando el convencimiento, compartido por el electorado norteamericano medio, de que la conservación de los valores más tradicionales podía y debía estar asociado al «sueño americano» y a la conquista del futuro.

Finalmente, su habilidad como comunicador de mensajes (más tarde serían electorales) se había probado en más de cincuenta películas de segundo orden, entre 1937 y 1942, y en su gestión como presidente del sindicato de actores (que en 1952 participó en la «caza de brujas» iniciada por el macarthismo), donde fraguó su adscripción a la cruzada del anticomunismo visceral. Decisivo fue tam-

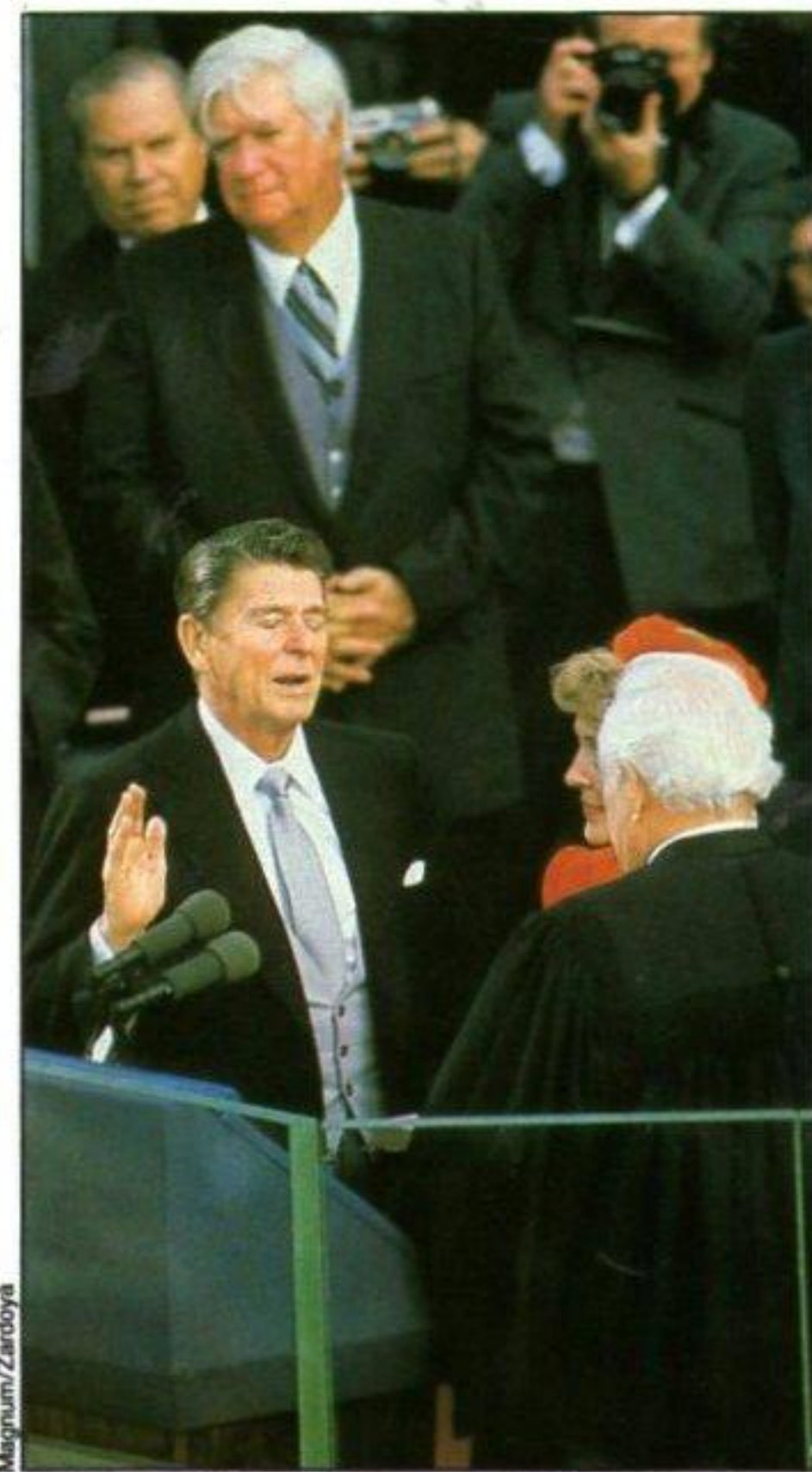
bién el curioso apostolado por radio y televisión desarrollado en los años 50, con el auspicio de la firma General Electric, que lo convirtió en un hombre rico, relativamente influyente y conocido en toda la nación. Por esa época, Reagan se había divorciado de su primera esposa, Jane Wyman, con la que tuvo dos hijos, Maureen y Michael. Y había iniciado, en 1957, su segundo matrimonio, con la también actriz Nancy Davis, de la que tuvo sus otros dos hijos, Patricia y Ronald Prescott.

Tras defender en 1962 la candidatura del ultraconservador Barry Goldwater, y ya en las filas del Partido Republicano, Ronald Reagan sorprendió al mundo político norteamericano al ganar, a finales de 1966, la gobernación del estado de California, el más populoso de la nación. Los ocho años que se mantuvo en ese cargo (renovó una vez el mandato) fueron claves para su carrera hacia la presidencia de Estados Unidos, conseguida en 1980 tras haberse postulado para la nominación presidencial del Partido Republicano en 1968 y 1976.

La gestión de gobierno en California fue importante no sólo para reforzar el círculo de poderosas amistades que respaldaron su ascenso político. Lo fue también para modular el pragmatismo conservador, alimentado en unas pocas convicciones esenciales, que permitió y permite a Reagan transmitir a su audiencia política un mensaje aparentemente coherente sobre un mar de contradicciones, por el simple procedimiento de ignorarlas, o invertir fantasmagóricamente su sentido.

En 1983 algo mejoró, para algunos sectores, la economía norteamericana. Granada fue invadida y Nicaragua asediada. Del Líbano regresaron, nuevamente, marines muertos lejos de Estados Unidos. Los riesgos de guerra nuclear eran menos hipotéticos. Y pronto los idílicos satélites espaciales llevarán misiles para una posible guerra de las galaxias.

Demasiado para un «cowboy».



En enero de 1984, pocos días antes de que Ronald Reagan cumpliera sus 73 años, los norteamericanos y el mundo entero se enteraron de que el presidente de Estados Unidos se presentaría a la reelección a finales del mismo año. En un mensaje de cinco minutos, difundido por las tres principales cadenas de la televisión de Estados Unidos y que costó a sus patrocinadores medio millón de dólares, Reagan aludió a la necesidad de continuar su gestión para lograr los objetivos de seguridad, fortaleza y restauración de los valores tradicionales de la nación.

Días antes, en su mensaje al Congreso sobre el estado de la Unión, Reagan había subrayado los éxitos conseguidos en el control de la inflación y la contención del paro, anunciando su decisión de reducir el déficit presupuestario, verdadera prueba de fuego de su gestión económica. También había considerado que su política de rearme ofrecía una mayor seguridad para Estados Unidos y sus aliados, y se manifestaba partidario de una actitud «realista» ante la Unión Soviética. Finalmente, se mostraba partidario de continuar su política en las crisis de Oriente Medio y de Centroamérica, claramente agravadas durante su mandato, y de proseguir la investigación de nuevas tecnologías para la conquista militar del espacio, lo que se dio en llamar «la guerra de las galaxias».

Ante una situación nacional e internacional cada vez más compleja, Reagan no dudó en simplificar, ofrecien-

En esta página, Ronald Reagan jura su cargo como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 1981. En los comicios de noviembre de 1980 había derrotado

ampliamente a Jimmy Carter, candidato demócrata para un segundo mandato pero muy desprestigiado por la crisis económica que sufría el país y por

distintos problemas internacionales. Reagan triunfó prometiendo una drástica reducción en los impuestos, el control de la inflación y una severa actitud

ante la Unión Soviética. Si bien logró una pequeña e inestable recuperación económica interna, en el plano externo los problemas se agravaron enormemente.

A prueba de balas

El 30 de marzo de 1981, apenas dos meses después de haberse hecho cargo de la presidencia de Estados Unidos, Ronald Reagan pronunciaba un discurso de 18 minutos, ante una audiencia de 3.500 personas, en el Hotel Internacional Hilton de Washington. En una parte de su mensaje, no especialmente significativo, decía el presidente: «El crimen violento ha aumentado en un 10 por ciento, haciendo que las calles sean inseguras y las familias sientan temor en sus propias casas».

Fue muy aplaudido. Cuando se disponía a salir del hotel, acompañado de su secretario de Prensa, Jim Brady, y de los miembros del equipo de seguridad, todo parecía normal. En la calle, la puerta de la «limousine» presidencial ya estaba abierta, esperando. Sonriente y saludando con el brazo izquierdo en alto a las personas que le aguardaban, Reagan se disponía a entrar en el coche que debía llevarlo a la Casa Blanca.

Inesperadamente, se oyeron seis disparos dirigidos, desde un costado, hacia la comitiva presidencial. Uno hirió de gravedad a Reagan, debajo de la axila y cerca del corazón. Brady y otros acompañantes también fueron alcanzados por la ráfaga. ¿Qué había pasado?

El autor de los disparos, inmediatamente detenido, era un joven de 25 años, John Warnock Hinckley, que según su confesión había obrado para llamar la atención de la actriz Jodie Foster, de la que se había enamorado secretamente. La obsesión de Hinckley, quien ya había enviado numerosos mensajes y cartas a la actriz, lo llevó a intentar el magnicidio, según dijo, como prueba de aquel desesperado e imposible amor.

Efectivamente, esa calle de Washington no era segura para Reagan. Sin embargo, tras un período de hospitalización, el presidente se repuso y el atentado no tuvo secuelas que alteraran su personal dinamismo. Fue una sorpresa para todos, con un final cinematográfico. Reagan: a prueba de balas.

Arriba, confusa escena registrada pocos segundos después del atentado contra Reagan, el 30 de marzo de 1981. Los policías, entre fotógrafos y operadores

de televisión, tratan de proteger y auxiliar al presidente, así como de arrestar al atacante. El atentado fue obra de un desequilibrado y no tuvo fines políticos.



do un mensaje esquemático pero eficaz dentro de la lógica de sus relaciones con el electorado norteamericano. Ofreció una certeza y un desafío. La certeza (precaria pero real en aquel momento) de un dólar fuerte, de una reactivación económica perceptible, de una inflación y un desempleo que habían sufrido una curva descendente. El desafío (desmesurado pero atrayente) de la conquista de las estrellas, un objetivo nada inocente en la era de los misiles.

Por último, el 6 de febrero, día de su cumpleaños, aprovechó la ocasión para mostrar su buen estado físico y anímico, y proponerse como paladín de ese proceso de recuperación de la mística norteamericana, que él mismo potenciara desde que sucedió en la Casa Blanca, en enero de 1981, al atribulado Jimmy Carter. Naturalmente, Reagan omitía que, en los primeros tres años, encabezó una administración que no supo atenuar el temor a una guerra nuclear, en buena parte alimentado por su peculiar sentido de la disuasión militar frente a la Unión Soviética, ni armonizar sus intereses con los de sus aliados occidentales, ni desmentir su imagen de gendarme en las zonas conflictivas del mundo subdesarrollado.

El «presidente de los ricos», según la calificación de algunos adversarios del Partido Demócrata, no mostraba en 1984 signos de amilanarse ante esas y otras críticas a su gestión ni ante el enorme déficit presupuestario de los Estados Unidos.

La batalla de la reactivación

Uno de los primeros desafíos que debió afrontar Reagan al llegar a la Casa Blanca fue el de aplicar las fórmulas económicas preconizadas durante la campaña electoral para sacar al país de la recesión. Sin detenerse en los costes sociales de la operación, Reagan cumplió con decisión una de sus primeras estrategias —la reducción de impuestos— que, mientras restaba fondos al Estado para sus programas sociales, inyectaba en el mercado una masa importante de dólares, factor determinante para la reactivación.

El mantenimiento de una estricta política monetaria, los altos tipos de interés bancario y la potenciación del dólar fueron acompañados por un alza del 11 % del Producto Nacional Bruto. Otro índice decisivo del cuadro económico fue la evolución de la inflación, que descendió desde el 12,4 por ciento en 1980 al 3,8 por ciento a finales de 1983. La estabilidad de los precios de los alimentos y la reducción de los costes del petróleo registrados ese año contribuyeron a mantener este bajo nivel inflacionario.

Aunque desigualmente repartido (en zonas tradicionalmente industriales del país el desempleo duplicaba la media nacional), el índice global del paro también disminuyó, acompañando los efectos de la reactivación económica. Pero su comportamiento no fue lineal: durante los primeros dos años del mandato de Reagan su ritmo fue ascendente, del 7,3 % al 10,8 %, por-



Keystone/Rafols

centaje récord registrado en diciembre de 1982. Un año más tarde, con la inflación controlada y la actividad económica generando puestos de trabajo, el desempleo descendió hasta el 8 por ciento. Siguió siendo, no obstante, uno de los índices más altos (alrededor de 9 millones de desempleados) registrados en la reciente historia norteamericana.

Al comenzar el último año del primer mandato presidencial de Reagan, los elevados tipos de interés —que en 1981 llegaron a superar el 20 por ciento— también sufrieron los efectos de una relativa liberalización de la política monetaria, aunque a comienzos de 1984 no habían bajado del 11 % de promedio. Estos altos tipos de interés, destinados a reducir la inflación en Estados Unidos, incrementaron el valor del dólar en los mercados exteriores, contribuyendo a alimentar la inflación en los países desarrollados de Europa occidental, y disparándola en otras áreas, subdesarrolladas o en desarrollo, como Latinoamérica.

Con un promedio de crecimiento económico muy superior al de sus aliados del mundo capitalista (en torno al

4,6 %), Reagan disponía en 1984 de un considerable margen de maniobra, a pesar de las fuertes críticas a su gestión, como para solicitar al electorado un nuevo período de Gobierno para continuar una tarea que, según sus propias palabras, «no está finalizada».

La gran amenaza: el déficit

La sombra principal de la gestión de Reagan, además de las acechanzas en política exterior, residía en el enorme déficit presupuestario federal, que prácticamente se había triplicado desde que asumiera el cargo, alcanzando a comienzos de 1984 los 200.000 millones de dólares. Los críticos de la estrategia económica seguida por el equipo republicano señalaban que este factor podía frenar la recuperación económica incipiente, e incluso generar un nuevo cuadro de recesión.

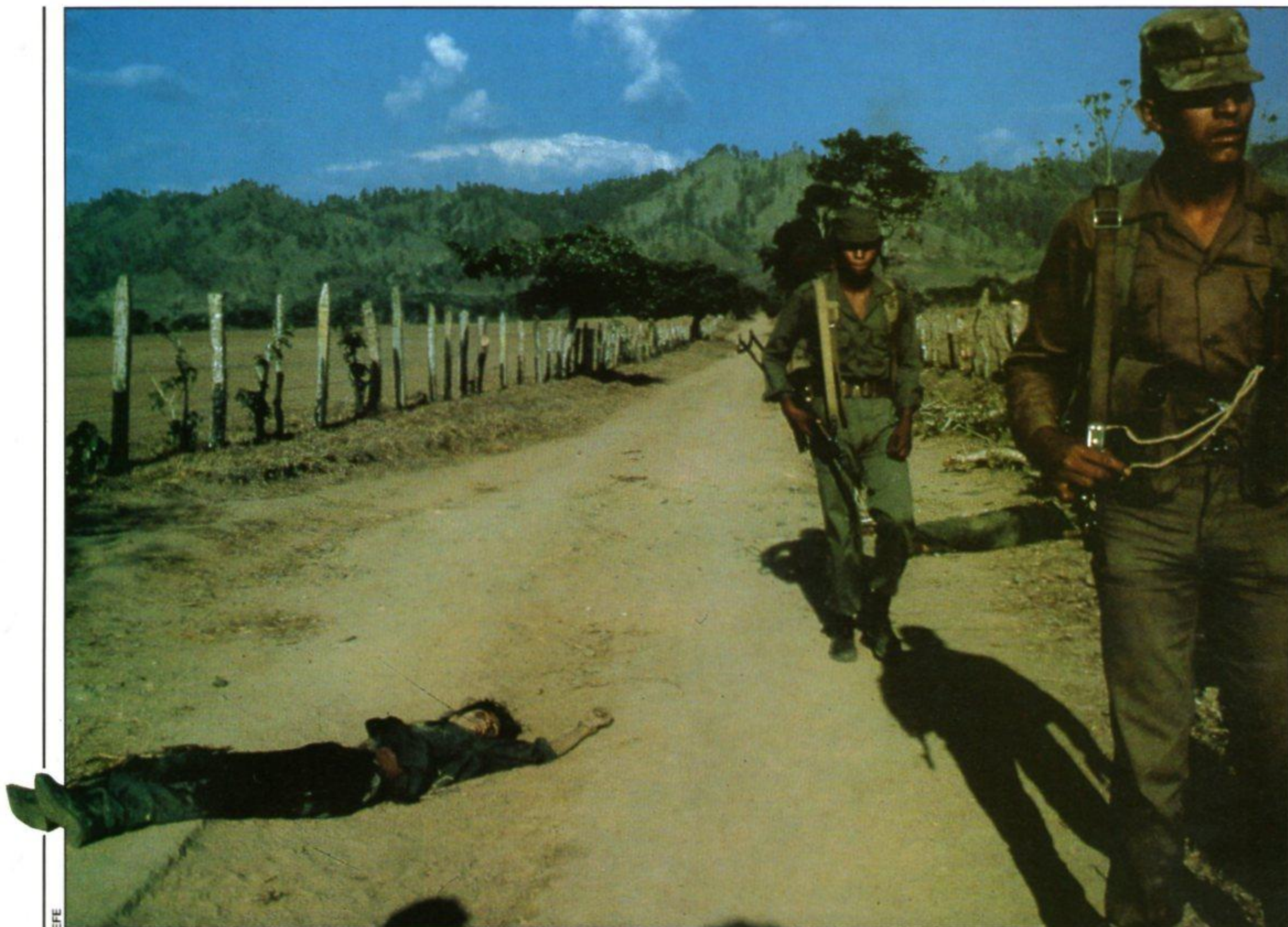
En este sentido, el plan propuesto por Reagan al Congreso, en el que se planteaba como objetivo reducir en tres años 100.000 millones de ese déficit, fue considerado como insuficiente por los medios financieros de Wall Street y por el Banco Central (Federal Reserve) de Estados Unidos. Las auto-

ridades de este último hicieron saber a Reagan, a comienzos de 1984, que no contaba con su acuerdo para financiar un déficit presupuestario «que es cada vez más peligroso para la economía norteamericana, las tasas de interés y la balanza comercial». Por otra parte, crisis de sectores tan importantes como el de la industria automotriz o del acero fueron neutralizadas, en la confianza de que otras actividades productivas generarían los puestos de trabajo perdidos.

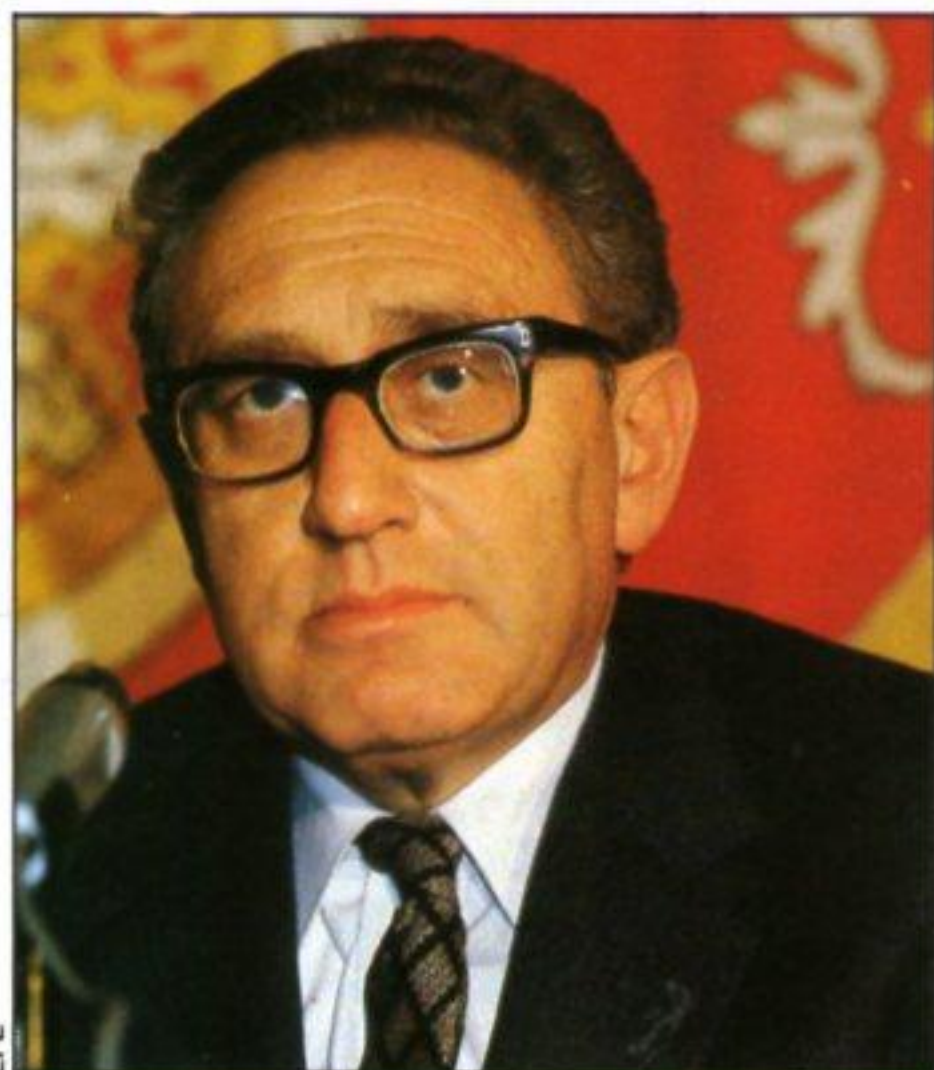
Todas las encuestas situaban a Reagan, al comenzar la batalla preelectoral de 1984, como ganador del *test* de la política interior; aunque las distancias entre ricos y pobres en Estados Unidos hubiese aumentado durante su mandato, menguando el aún poderoso soporte de la extensa clase media norteamericana. El otro *test*, en cambio, el de la política exterior, sólo auguraba inquietud e incertidumbre.

Los misiles de la discordia

Aunque también en sus relaciones exteriores la administración Reagan se había mostrado más pragmática que lo que hacían suponer las proclamas de la



EFE



EFE

En la página anterior, un grupo de soldados patrulla una calle de un modesto pueblo de El Salvador, en busca de rebeldes izquierdistas.

En esta página, arriba, varios guerrilleros antisandinistas marchan indiferentes entre campesinos muertos, al norte de Nicaragua.

Sobre estas líneas, Henry Kissinger, quien presidió una comisión encargada de estudiar los problemas de América Central. La política del presidente Reagan se basó en la hostilidad hacia Nicaragua y en el apoyo brindado a los gobiernos leales a Estados Unidos en esa conflictiva región.

campana electoral de 1980, lo cierto es que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética no habían dejado de enfriarse desde que el presidente republicano ocupase la Casa Blanca. Ni con Leonidas Breznev como hombre fuerte del Kremlin ni con su efímero sucesor Yuri Andropov las relaciones entre las superpotencias alcanzaron un nivel de diálogo aceptable, sobre todo en el terreno de los armamentos.

La ruptura de las conversaciones, a finales de 1983, en los tres foros en que se discutía el equilibrio armamentístico, señalaban a las claras el fracaso de una política que, si bien no era atribuible en su integridad a Reagan, había tenido en sus planteamientos el carácter más intransigente y agresivo. Las conversaciones sobre armamento clásico (desarrolladas en Viena) como las referidas a las armas estratégicas (START, celebradas en Ginebra) se vieron interrumpidas por la retirada soviética; pero fue el conflicto sobre los misiles nucleares de alcance medio (los «euromisiles») el que marcó el punto más álgido de la tensión, tanto en la mesa negociadora de Ginebra como en

los variados encuentros bilaterales entre representantes soviéticos y norteamericanos.

La doble decisión, adoptada en 1979 por la OTAN, de instalar 572 misiles nucleares de alcance medio si a finales de 1983 no se lograba un acuerdo en las negociaciones soviético-norteamericanas de Ginebra, fue el condicionamiento encontrado por la Administración Reagan a su llegada a la Casa Blanca. Esos euromisiles (108 Pershing-2 y 464 de crucero) debían instalarse en cinco países de Europa occidental: República Federal de Alemania, Gran Bretaña, Italia, Bélgica y Holanda.

La resolución de la OTAN, adoptada por considerar que la renovación de los misiles de alcance medio soviéticos (la instalación de 360 modernos SS-20 apuntando hacia Europa occidental) alteraba el equilibrio nuclear, fijaba una fecha tope: fines de 1983. Esto hizo coincidir los tres años previos de negociaciones con Reagan en la presidencia norteamericana.

En las conversaciones de Ginebra sobre los euromisiles, y centrando el terreno de la confrontación Este-Oeste

Las cifras del equilibrio del terror

La polémica sobre el equilibrio atómico entre las dos superpotencias ha estado presente en el mandato de Reagan de forma protagónica. En cuanto a los datos que cada parte ofrece a ese debate, no siempre son coincidentes.

Armas de alcance intermedio (euromisiles). Son las que tienen un alcance superior a los 1.000 kilómetros, la distancia aproximada para alcanzar territorio soviético desde Europa occidental. Hasta que se instalaron los primeros Pershing-2 en la República Federal de Alemania, Estados Unidos no poseía este tipo de misiles basados en tierra. La Unión Soviética tenía 514 apuntando hacia Europa, entre ellos 243 del tipo SS-20. Moscú consideraba que en este cómputo debe incluirse las fuerzas nucleares independientes de Francia y de Gran Bretaña (aliados de Estados Unidos en la OTAN), que cifra en 162 misiles con 263 vectores nucleares. Teniendo en cuenta el potencial nuclear desde aviones, de ambos países, e incluyendo las fuerzas francesa y británica, los soviéticos argumentan que existe un equilibrio aproximado en este tipo de armas: 975 contra 986 vectores nucleares. Los aliados occidentales, que no incluyen el arsenal francés y el británico, estiman en cambio que la desigualdad en favor de Moscú es de 560 a 3.825 vectores nucleares.

El plan de despliegue de euromisiles para equilibrarla contemplaba la instalación, entre 1983 y 1988, de 108 misiles Pershing-2 en la República Federal de Alemania y 464 misiles de crucero, distribuidos de este modo: en Gran Bretaña 160, en Italia 112, en Alemania 96, en Bélgica 48 y en Holanda 48.

Los SS-20 fueron instalados, sumándose a los SS-4 y SS-5 en servicio desde finales de la década de los 50,

a partir de 1977 en el territorio soviético. Son misiles de tres cabezas nucleares cada uno, de trayectoria independiente una de otra, de una potencia de 150 a 300 kilotones. El alcance de los SS-20 es de 4.000 a 5.000 kilómetros y tardarían unos 15 minutos en llegar a Europa occidental. El margen de error es de unos 300 metros.

Los Pershing-2 tienen un alcance máximo de 1.800 kilómetros y llegarían a su blanco en la Unión Soviética unos 10 minutos después de su lanzamiento. Su potencia oscila entre 10 ó 20 kilotones y los 600 kilotones, según el objetivo. Su margen de error oscila entre 30 y 50 metros.

Los misiles de crucero G.L.C.M. (Ground Launch Cruise Missile) derivan del misil «Tomahawk» basado en un navío de guerra. Su versión tierra-tierra se lanza desde un vehículo. Se los ha comparado con un pequeño avión sin piloto. Transporta una carga de 200 kilotones a 2.500 kilómetros de distancia, y volando a baja altura, entre 80 y 100 metros del suelo. Esto lo hace difícilmente detectable a las pantallas de radar.

Armas estratégicas. Se trata de misiles o aviones con un radio de acción superior a los 5.500 kilómetros, con los que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética pueden alcanzar desde sus respectivos territorios el de su oponente. También pueden ser operativas a través de submarinos con cargas nucleares. Su limitación fue negociada en las SALT y su reducción en las START (interrumpidas en 1983).

Armas tácticas. Son aquellas que tienen un alcance inferior a los 1.000 kilómetros. Se calcula en unas 6.000 las ya instaladas en Europa occidental, en su mayoría en los años 50. En la Unión Soviética están instaladas en las distintas divisiones del Ejército.

en el territorio europeo, Reagan puso de manifiesto una inquietante tendencia a considerar (aunque más tarde afirmara lo contrario) la posibilidad de una guerra nuclear localizada en el teatro europeo, argumento que reforzaba sus tesis en favor del rearme preventivo. Efectivamente, los ingentes recursos destinados por la Administración republicana al presupuesto militar, y el desarrollo de costosos planes de reequipamiento, evidenciaron el convencimiento de los sectores más belicistas del complejo militar-indus-

trial norteamericano de la necesidad de conseguir la supremacía nuclear.

La posibilidad de que se llegara a un acuerdo en Ginebra se vio frustrada no sólo por la incompatibilidad de las propuestas técnicas de ambos bloques (y su particular enfoque del equilibrio estratégico) sino por un clima general de confrontación al que contribuyó decisivamente la simplista y a menudo temible política exterior de Reagan. Los gestos del presidente republicano, solicitando partidas suplementarias para el desarrollo del super bombarde-

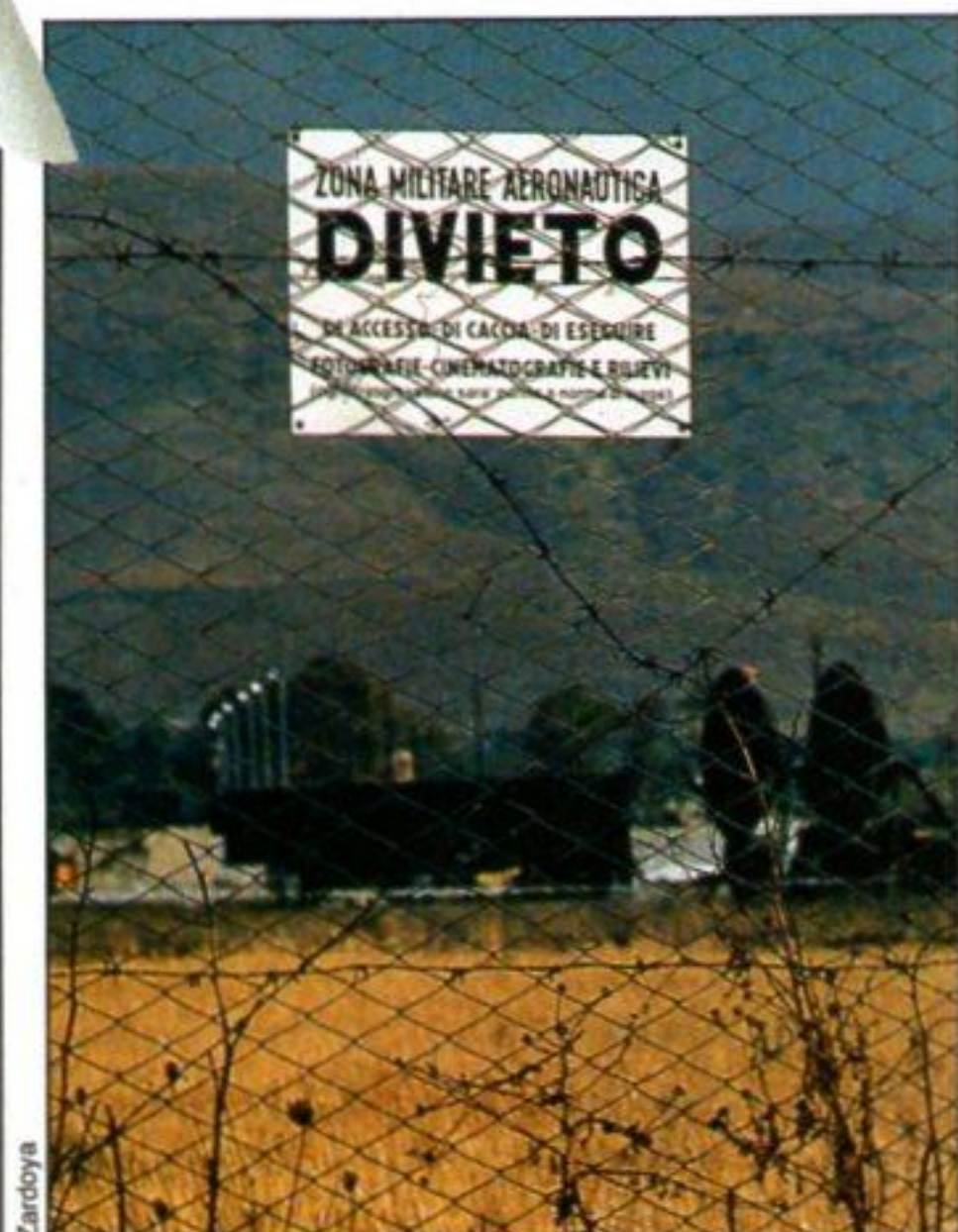


En esta página, a la izquierda, el misil Pershing-2, y a la derecha un SS-20. En ambas páginas, imagen de un misil de crucero (Cruise).

El despliegue de estas mortíferas armas por parte de ambos bloques elevó a límites insospechados la tensión internacional, y la paz corrió un grave riesgo.

ro B-1 o del misil intercontinental MX, por ejemplo, y el poco tacto político de algunas de sus diatribas, lograron incentivar —por reacción— un amplio movimiento contra el rearme, tanto en Estados Unidos como en varios países de Europa occidental, en especial la República Federal de Alemania y Gran Bretaña.

Asimismo, en el seno de la OTAN, se registraron tensiones entre los aliados europeos y el socio mayor norteamericano por la tendencia de éste a la confrontación con la URSS y a la sim-



Zardoya

En esta página, arriba, base de misiles de la OTAN en Comiso, Italia. El cartel restrictivo tiene suficiente elocuencia como para alejar a los curiosos.

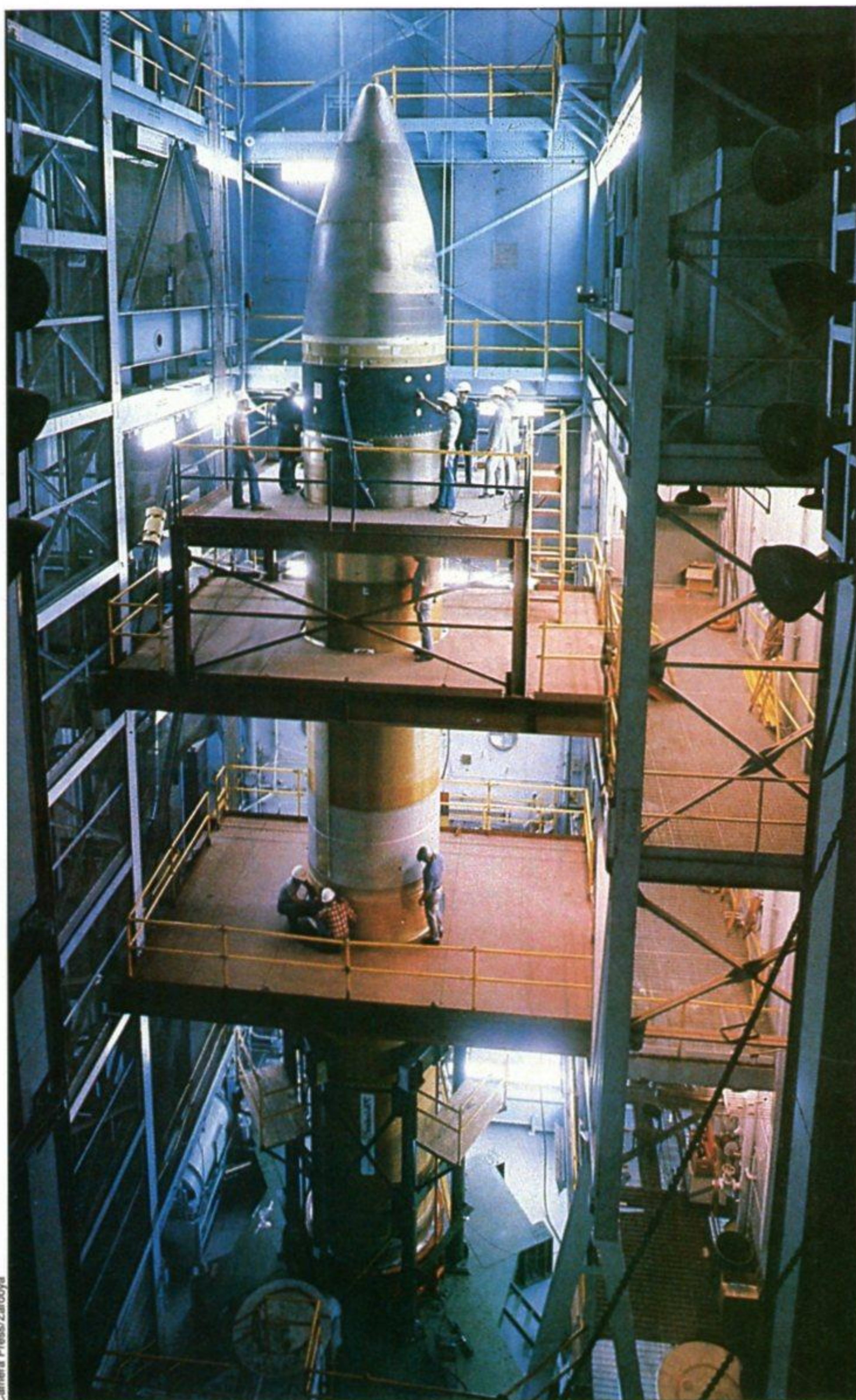
A la derecha, la fábrica Martin Marietta, en Denver, Estados Unidos, donde se construye el misil MX. El desarrollo de estas armas creó gran tensión internacional.

plificación en la estrategia negociadora. Washington tuvo, en más de una ocasión, que enviar emisarios de alto rango que calmaran la inquietud de los países de Europa occidental; en especial de Alemania Occidental, que por su historia y ubicación necesita un tipo de equilibrio especial con la Unión Soviética.

«Opción cero» y pacifismo

Las sucesivas propuestas de uno y otro bloque no lograron el punto de equilibrio que evitase el comienzo del despliegue de los euromisiles, cosa que ocurrió a finales de 1983, con la llegada de los primeros Pershing-2 a la República Federal de Alemania. Tras un primer momento negociador, en el que los términos del desacuerdo sobre el equilibrio eran similares a los del momento en que se adoptó la doble decisión de la OTAN, Reagan preconizó la «opción cero», consistente en suspender el previsto despliegue de los Pershing-2 y de los misiles de crucero a cambio del desmantelamiento de los SS-20 instalados por la URSS en la parte europea de su territorio.

Esta postura respondía a una propuesta previa formulada por Moscú, consistente en congelar el número de ojivas nucleares, de uno y otro bloque, existentes en el teatro europeo; esto



Camera Press/Zardoya

hubiese representado —según los miembros de la OTAN— perpetuar un desequilibrio. Moscú, por su parte, rechazaba la «opción cero» de Reagan alegando que dos de los aliados occidentales —Francia y Gran Bretaña— poseían una fuerza nuclear independiente que, en caso de confrontación, no sería neutral. La presencia de esa fuerza crearía una situación de desventaja para la Unión Soviética, motivo por el cual este país consideraba que debía ser incluida en el cómputo y en las negociaciones de Ginebra.

Tras un nuevo paréntesis, se produjo una propuesta soviética de reducción de un cierto número de SS-20, siempre que se incluyeran los arsenales británico y francés en la negociación. Sin embargo, la convicción de la Casa Blanca, de que hasta que no hubiera despliegue de misiles Moscú no negociaría seriamente, determinó el comienzo efectivo de ese despliegue. Entonces los soviéticos se retiraron de los tres ámbitos de negociación sobre armamentos, aumentando el clima de tensión que ya sufría el mundo.

El espacio, nueva frontera

«El Espacio es la nueva frontera de Estados Unidos», dijo Ronald Reagan a finales de enero de 1984, al pronunciar su discurso sobre el estado de la Unión. Antes, había prometido «paz y prosperidad» y abogado por el retorno de «los valores tradicionales» a las escuelas, prometiendo intensificar la lucha contra la pornografía, el aborto, las drogas y la criminalidad.

Propagador de la mística conquistadora, Reagan recordó el desafío del presidente John Kennedy, formulado en 1961, de colocar a un hombre en la Luna antes que la Unión Soviética. Ahora se trata de lograr en 1991 la creación de una estación orbital permanente, con implicaciones militares de primer orden.

El coste del proyecto (estimado entre 8.000 y 20.000 millones de dólares) da una idea aproximada de su envergadura: la estación funcionará como fábrica y laboratorio espacial, taller de reparación de satélites en vuelo y estación de salida y de llegada de las misiones espaciales con destino a la Luna, Venus y Marte. En la futura base extraterrestre, que estará ensamblada como un «meccano» espacial, vivirán, a unos 400 kilómetros de altura, alrededor de ocho astronautas y científicos, que serán relevados, cada dos o tres meses, por nuevas tripulaciones.

La base será construida y reparada en el espacio por cosmonautas provistos de costosos trajes autopropulsados, probados en febrero de 1984, durante un vuelo del Challenger.

Los ingentes recursos que serán destinados al proyecto no permiten dilucidar de qué manera se podrá reducir el déficit presupuestario norteamericano, gigantesco durante la presidencia de Reagan, o se podrá frenar el avance de nueva tecnología militar espacial, que aumenta el riesgo de autodestrucción mundial. Los sistemas antimisiles que podrían operar desde el espacio —mediante el láser y los cañones de partículas— también serán ensayados en esta década, según las previsiones de Reagan.

En esta página, ruinas de la sede diplomática norteamericana en Beirut tras un atentado.

En la página siguiente, funeral por dos soldados estadounidenses

muerdos en el Líbano. La intervención en este país, ordenada por Reagan, fue otro aspecto del enfrentamiento entre ambos bloques, aunque no sirvió para pacificar a la atormentada nación.



Con los «euromisiles» a pocos minutos de sus blancos en la Unión Soviética y los SS-20 apuntando a amplias zonas de Europa occidental, el Viejo Continente se convirtió en un auténtico polvorín de efectos devastadores. Lo cierto es que esta nueva vuelta de tuerca, que alejó al menos momentáneamente las posibilidades de una reducción pactada de armamento nuclear entre las superpotencias, generó una enorme inseguridad, ante la posibilidad de un holocausto nuclear, y permitió que en los países occidentales se desarrollase un masivo movimiento pacifista de protesta contra la lógica del rearme y de la disuasión nuclear, representada en el campo occidental —con perfiles belicistas— por Ronald Reagan.

Un síntoma de la tensión internacional acentuada durante el mandato del presidente republicano fue el desarrollo de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), celebrada en Madrid; las estrategias desarrolladas por Washington y Moscú hicieron que en la reunión brillara permanentemente el fracaso, justamente en los meses previos al anunciado despliegue de los euromisiles. Sólo la intervención de un grupo de terceros países, entre ellos España, permitió que la CSCE llegara a su término con la firma de un documento final, cuyo principal logro inmediato fue la celebración de una Conferencia sobre Desarme en Europa (CDE), que comenzó en Estocolmo, en enero de 1984. Pero



Magnum/Zardoya

entre el final de la CSCE y el comienzo de la CDE se había producido la ruptura de negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética sobre armas intercontinentales, de alcance intermedio y clásicas.

Marines en Oriente Medio

Reagan afrontó los conflictos más calientes —Oriente Medio y Centroamérica— bajo el prisma de la confrontación Este-Oeste y en el marco de su cruzada para disputar zonas de influencia a los soviéticos. La sangre propia (varios centenares de marines norteamericanos muertos fuera de sus fronteras, la mayoría de ellos en el Líbano) y la ajena (producto, entre otras, de la guerra larvada desatada por la Casa

Blanca contra la Junta de Gobierno sandinista de Nicaragua) pusieron en evidencia el desgaste de la política de Reagan en esas áreas. Fuente principal de las críticas a su gestión, la acción norteamericana en el Líbano y en América Central había logrado reanimar en la sociedad norteamericana el dormido síndrome de la guerra de Vietnam, alertando sobre los nuevos compromisos bélicos adoptados por el presidente norteamericano.

Sin duda por la complejidad racial, religiosa, política, económica y estratégica de Oriente Medio, fue en esa región donde los fracasos relativos de Reagan se evidenciaron con mayor profundidad. Los adversarios norteamericanos de la gestión del presidente

no dejaban de subrayar la torpeza del jefe de Estado y sus asesores en asuntos que requerían una actitud matizada y sutil, que partiera de las explosivas realidades del área.

El primer movimiento de fuerza significativo lo consumó el principal aliado de Estados Unidos en la zona —Israel—, lanzando la cruenta invasión del Líbano en junio de 1982, que bajo el argumento de asegurar su frontera norte de la acción de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ocupó militarmente medio país, llegando hasta su capital, Beirut. Washington no empleó a fondo sus poderosos medios de convicción sobre el aliado israelí para detener la acción bélica, en la creencia de que la operación de limpie-

La invasión de Granada

En octubre de 1983, la administración Reagan decidió emprender una acción militar en el Caribe, sin riesgos importantes para sus fuerzas militares y de un claro significado político para Cuba y, en especial, para Nicaragua: la invasión de la pequeña isla caribeña de Granada. Gobernada hasta pocos días antes por el líder izquierdista Maurice Bishop, quien acababa de ser derrocado y posteriormente asesinado por una facción de su régimen.

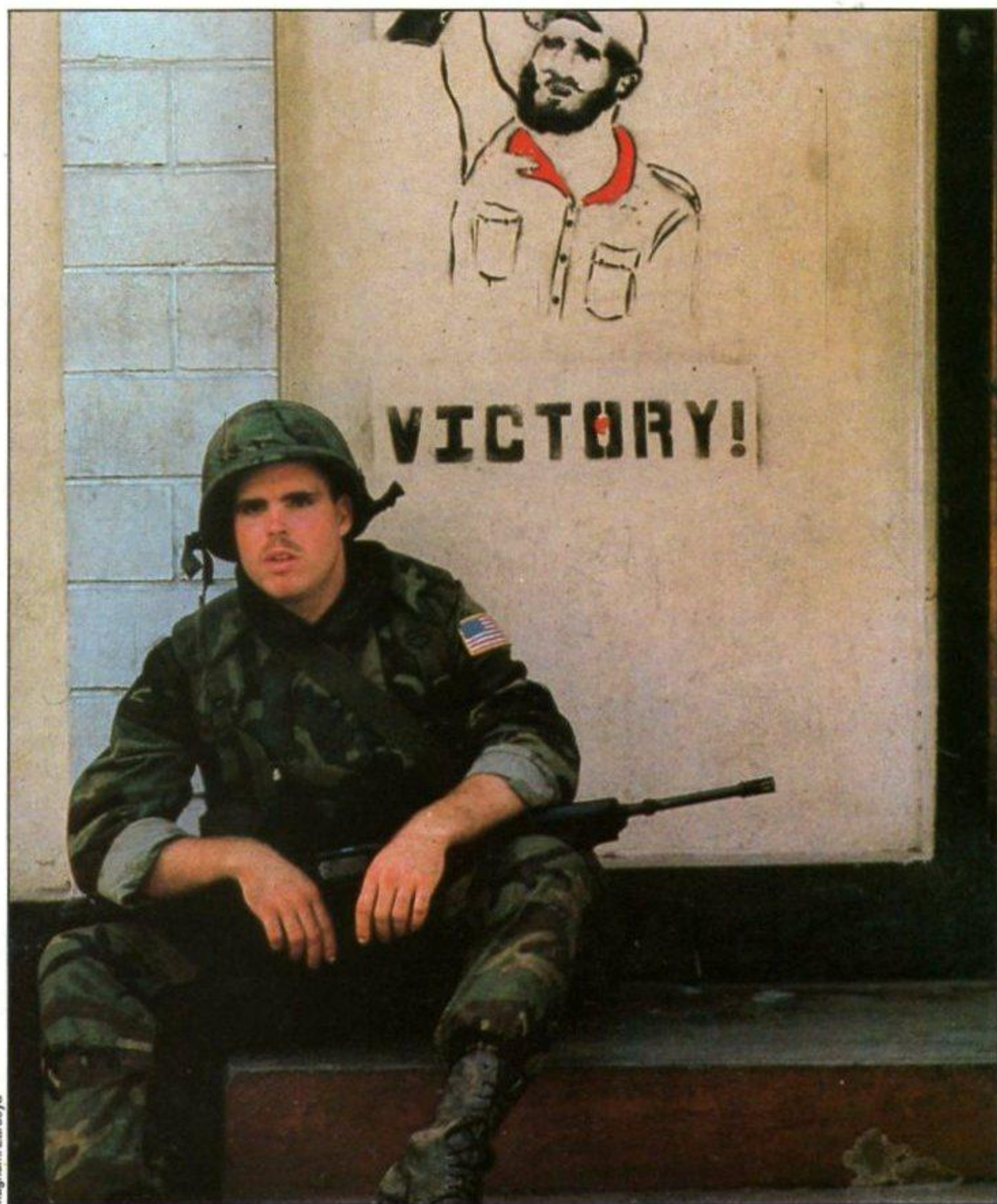
Con la excusa oficial de proteger las vidas de algunos estudiantes norteamericanos residentes en la isla —pequeño estado anglófono de 344 kilómetros cuadrados, poblado por 110.000 habitantes— Reagan decidió aprobar la operación. En sucesivos contingentes, 2.000 marines, rangers del ejército y paracaidistas, que más tarde sumaron 6.000 hombres, ocuparon Granada, donde trabajadores cubanos estaban construyendo una pista de aterrizaje que Washington consideró peligrosa para la seguridad nacional de Estados Unidos: en ella podría descargarse material militar soviético o cubano.

Tras algunas jornadas de resistencia del precario ejército de Granada, en distintos puntos de la isla, y ante la evidente superioridad militar de la fuerza invasora (que llegó a tener 15.000 hombres en el terreno), los marines se hicieron con el control de la situación, ante la condena generalizada por la acción, en las Naciones Unidas, y el desconcierto de los aliados occidentales.

Para el Pentágono, sin embargo, lo que muchos definieron como «ensayo general» para una intervención militar directa en Nicaragua, formaba parte de una acción coherente con el dispositivo militar del área del Caribe y de Centroamérica. En el caso de Granada, Estados Unidos utilizó como arma legal un tratado defensivo de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS), que agrupa a seis pequeños estados isleños.

En esta página, un soldado descansa en Granada, delante de un cartel de propaganda del gobierno derrocado por la fulminante acción norteamericana, producida tras morir Maurice Bishop y los incidentes posteriores.

En la página siguiente, soldados invasores ante las ruinas del hospital de Granada, bombardeado por los norteamericanos. El suceso causó honda impresión y no recibió una clara explicación por parte del gobierno de Ronald Reagan.



za de guerrilleros palestinos en el Líbano obraría como disuasión para Siria, aliado de la Unión Soviética y con parte de su ejército instalado en territorio libanés.

El respaldo de la administración Reagan al presidente Amin Gemayel y al acuerdo firmado entre los Gobiernos de Beirut y de Jerusalén en mayo de 1983, que consagró para Israel un importante rédito tras la invasión del año anterior, constituyó un nuevo paso en falso. La desfasada distribución del poder en el Líbano, con claro predominio cristiano, estimuló la reacción de los mayoritarios sectores musulmanes y agravó la crónica inestabilidad del país, arrastrando en su sangría cotidiana a parte de la Fuerza Multinacional de Interposición.

Dicha fuerza, desplegada con el objeto de pacificar a las facciones en lucha y de facilitar el control de la situación por parte del precario ejército regular libanés, fue articulada alrededor de la presencia norteamericana (1.800 marines, más la proximidad de la Sexta Flota a las costas de Beirut)

y estuvo integrada asimismo por tropas francesas, británicas e italianas. Muy pronto los marines se convirtieron en blanco de cruentos atentados de grupos musulmanes radicales, generando bombardeos de réplica de la Fuerza Aérea estadounidense y del acorazado *New Jersey* contra las bases fundamentalistas en la montaña libanesa, zonas bajo control sirio.

En febrero de 1984, tras continuos éxitos militares musulmanes, con una explosiva situación casi fuera de control, y cuando el presidente Gemayel había perdido todo su poder, Reagan se vio obligado a ordenar la retirada de los marines y se enfrentó a uno de sus más sonados fracasos.

Cerco a Nicaragua

En Centroamérica, por su parte, la gestión de Reagan respondió con creces a las previsiones de su programa. Apoyado en una larga tradición de intervencionismo en el continente, y convencido de que la política en el área está destinada a garantizar «la seguridad nacional de Estados Uni-



Magnum/Zardoya

dos», Reagan no dudó en reforzar militar y políticamente a los gobiernos dictatoriales de Guatemala, El Salvador y Honduras, creando un cerco sobre el proceso sandinista en Nicaragua.

En esta tarea, que convirtió a Centroamérica en un permanente foco de tensión bélica, privó la dinámica del conflicto Este-Oeste más que el reconocimiento de la situación específica, tanto económica, como política y militar, que había llevado a los países de la zona a su tradicional nivel de subdesarrollo y conflicto interior. Obsesionado por la idea del triunfo de la guerrilla izquierdista en El Salvador y por la consolidación de la revolución nicaragüense, Reagan promovió una ayuda militar masiva (asesores, recursos, armamento) al Gobierno salvadoreño y asistencia bélica directa e indirecta (a través de la Agencia Central de Inteligencia, CIA) a las fuerzas antisandinistas que habían comenzado a operar desde Honduras y Costa Rica.

Reagan libró una verdadera batalla contra la oposición demócrata en el Congreso, renuente a autorizar el des-

pliegue de medios bélicos en acciones encubiertas contra el Gobierno de Managua y a garantizar el rearme de regímenes del área caracterizados por sus constantes y masivas violaciones de los derechos humanos, aunque fuesen el escudo, la frontera real, de los intereses norteamericanos en la zona.

Aceptada, de mala gana, la existencia de Cuba, aunque algunas escaramuzas hicieron pensar en un retorno al hostigamiento sistemático hacia la isla por parte de Estados Unidos, el empeño central de Reagan estuvo centrado en evitar la «caída» de El Salvador y la estabilización del régimen sandinista en Nicaragua. Como muestra de la contundencia de sus métodos, el jefe de la Casa Blanca ordenó la invasión de la pequeña isla caribeña de Granada, y el posterior desalojo del poder de la fracción izquierdista que se había adueñado de él. Con el argumento de la presencia cubana en dicha isla, y esgrimiendo el ejemplo de los *marines* en acción ante los dirigentes sandinistas, Reagan jugó esta baza guerrera para mostrar, ante propios y extraños, su

determinación de mantener bajo control la conflictiva «frontera» norteamericana.

Los esfuerzos del grupo de Contadora (Panamá, Colombia, Venezuela y México), apoyados por la socialdemocracia europea, por evitar la generalización de la guerra en el istmo centroamericano han encontrado escaso eco en la administración Reagan, cuyos apoyos verbales a esa gestión mediadora no tuvieron en los hechos respuesta positiva.

Después de la invasión de Granada, y de haber alimentado su guerra particular en Centroamérica, Reagan envió —a finales de 1983— una misión norteamericana al área, presidida por el ex secretario de Estado Henry Kissinger. El informe de la citada comisión recomendó un plan de masiva ayuda económica y militar a los países centroamericanos (en especial a El Salvador, y excluyendo a Nicaragua), después de ratificar, en lo esencial, la política seguida por la Casa Blanca hasta entonces. Conclusión: la guerra no es inevitable, pero es muy difícil de evitar.

